

PAPELES

DE CUESTIONES INTERNACIONALES

Contra la guerra en Irak

Entrevista a Joseph Stiglitz

Lula y la democracia

Ruptura en Costa de Marfil

Informe anual de
Human Rights Watch



PAPELES *n*^o 81 - 2003

De cuestiones internacionales

Director

Mariano Aguirre

Consejo de Redacción

Julián C. Carranza, Teresa Filesi, Vicenç Fisas, Manuela Mesa, Alberto Piris, Francisco Rey, José María Tortosa

Coordinación

Nieves Zúñiga García-Falces

Edición

Nieves Zúñiga García-Falces y Mabel González Bustelo

Distribución

Latorre Literaria, S.A. (Tel.: 91 871 93 79)

Atención al cliente

Rosa Vaquero

Colaboradores habituales y asesores

Jesús M. Alemany, Ana Alonso, Lucía Alonso, Patrick Costello, Javier Díaz Malledo, Alfonso Dubois, Johan Galtung, Vicente Garrido, Susan George, Xabier Gorostiaga, Fred Halliday, Michael T. Klare, Saul Landau, Robert Matthews, Maxine Molyneux, José M. M. Medem, Roberto Montoya, Ignacio Ramonet, Francisco Rojas Aravena, Pedro Sáez, José A. Sanahuja, Dan Smith, Joe Stork, Berna Wang

Papeles es una publicación trimestral del Centro de Investigación para la Paz (CIP), que forma parte de la Fundación Hogar del Empleado

El CIP realiza diversas actividades sobre paz, seguridad y desarrollo.

Información sobre las actividades de la Fundación Hogar del Empleado y el CIP pueden solicitarse a Duque de Sesto, 40, 28009 Madrid.

Tel.: (91) 576 32 99. Fax: (91) 577 47 26.

Correo electrónico: cip@fuhem.es

Web: www.cip.fuhem.es

Documentación: cd@fuhem.es

Diseño de portada: Pedro Arjona

Diseño interior: Marian Cao

I.S.S.N.: 0214-8072

Depósito legal: M- 30.281 - 1993

Foto de portada: Reuters. Manifestación contra la guerra en Irak en Londres (15 de febrero de 2003).

Las opiniones de los artículos publicados no reflejan necesariamente las del Centro de Investigación para la Paz y son responsabilidad de los autores.

Impresa en papel ecológico.

Copyright: Fundación Hogar del Empleado. Todos los derechos reservados. Para solicitar autorización de reproducción de artículos, escribir al Centro de Investigación para la Paz.

INTRODUCCIÓN	5
<hr/>	
TEORÍA	
El desarrollo no sólo es crecimiento del PIB	11
<i>Joseph Stiglitz</i>	
Prevención de conflictos en el marco euro-mediterráneo	27
<i>Roberto Aliboni</i>	
<hr/>	
ACTUALIDAD	
Los peligros de un ataque nuclear	37
<i>Edward M. Kennedy</i>	
El fin de una ilusión	39
<i>José Luis Gómez del Prado</i>	
Brasil: las perspectivas de Lula	45
<i>Kenneth Maxwell</i>	
Costa de Marfil: el fin de la excepción	57
<i>César Docampo</i>	
Demasiado sofisticada para la guerra	63
<i>Thalia Griffiths</i>	
Retos y oportunidades para la paz en Sri Lanka	67
<i>Raquel Rico Bernabé</i>	
Argelia: inmovilismo político, dependencia económica y tensiones sociales	73
<i>Laurence Thieux</i>	
Mafia y crimen organizado transnacional	81
<i>Didier Ruilhe</i>	
<hr/>	
OBSERVATORIO DE CONFLICTOS	
Honduras: violencia, pobreza y corrupción	93
<i>Carolina María Rudas Gómez</i>	
<hr/>	
IDENTIDADES	
Justicia kichwa como práctica de identidad étnica	111
<i>Fernando García</i>	
<hr/>	
DERECHOS HUMANOS	
La política estadounidense y el desafío del terrorismo	121
<i>Human Rights Watch</i>	

TESTIMONIO

Crónica de una Palestina ocupada 133

Alejandro Pozo

Las maquilas de Juárez: una nueva revolución industrial

Saul Landau 143

RESEÑAS DE LIBROS

A problem from hell, de Samantha Power / The responsibility to protect, de Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty 153

María José Salvador Rubert

Políticas sociales y Estado de bienestar en España: las migraciones. Informe 2002, de Claudia Clavijo y Mariano Aguirre (Eds.) / España ante el desafío multicultural, de Luis Seguí 159

Alberto Piris

Seguridad humana, prevención de conflictos y paz, de Francisco Rojas Aravena y Moufida Goucha (Eds.) 162

Hernando Perdomo Blanco

África Subsahariana ante el nuevo milenio, de Mbuyi Kabunda (Coord.) 170

Lucía Alonso Ollacarizqueta

The emotion and the truth. Studies in mass communication and conflict, de Mariano Aguirre y Francisco Ferrándiz (Eds.) / Medios periodísticos, cooperación y acción humanitaria. ¿Relaciones imposibles?, de Eloísa Nos Aldás (Ed.) 173

Eric Jalaín

BIBLIOGRAFÍA

Responsabilidad social corporativa 177

Susana Fernández Herrero

Cuando este número esté publicado quizá haya comenzado la guerra. Quizá el Gobierno de EEUU, con la colaboración del británico y del español, haya decidido no esperar a una nueva resolución de la ONU, o haya logrado comprar votos y, quizá, hasta Francia haya cambiado de posición para no quedar aislada y no haya ejercido su derecho a veto. Otro escenario probable es que la crítica a la posible guerra en las calles de numerosos países, especialmente en EEUU, Gran Bretaña, España e Italia, retrase la decisión, o la revierta. Un tercer escenario posible es que Sadam Husein haya renunciado, como le piden algunos países árabes.

Ocurra lo que ocurra, la crisis sobre Irak ha dejado en claro varias cosas. La primera, que el Gobierno de EEUU está dispuesto a usar su poder militar, económico y diplomático para imponer y recordar su hegemonía. Los grupos de presión en Washington hablan de recuperar el liderazgo que se perdió durante la era Clinton. Unos analistas indican que EEUU es el único país que entiende los peligros que acechan a Occidente, en particular el islam radical (Francis Fukuyama, Robert Kagan, por ejemplo). Otros creen que entramos en una nueva fase imperial, pero que se trata de un imperio democrático, que exalta y promociona los valores republicanos, y que intenta expandirlos con una actitud moral (Michael Ignatieff, Thomas Friedman).

En las dos explicaciones desaparece la economía y el comercio mundial, dos aspectos claves de la forma de dominio de EEUU. En las dos visiones, en cambio, se admite que la elite que gobierna ese país no puede y no quiere estar sometido a un sistema de régimen multilateral, sea Naciones Unidas u otras organizaciones.

Esta es la segunda cuestión. La crisis de Irak es un ataque al sistema multilateral. EEUU, con la ayuda de Londres y Madrid, intenta acabar con Naciones Unidas, con los acuerdos sobre desarme y control de armas, con los pactos sobre protección y gestión del medio ambiente, con las normas acerca de los derechos humanos, entre otras cuestiones transnacionales y cruciales para la gobernabilidad del sistema internacional. Washington no quiere ataduras, y sus aliados le ayudan sin reflexionar sobre las graves consecuencias que tendrá el mundo sin reglas.

La tercera cuestión es sobre la idea de cambiar gobiernos y la legitimidad que esa política puede tener. A medida que el debate sobre Irak ha avanzado Washington, Londres y Madrid han modificado el discurso. Por una parte ha sido una reacción al no conseguir lo que buscaban. Querían una resolución favorable a la guerra en el verano de 2002, y no la lograron. Quieren una resolución definitiva y de ultimátum en 2003 y hasta principios de marzo no parece fácil conseguirla, pese a los pagos, chantajes y extorsiones en Naciones Unidas y fuera de ella, como lo indica el caso turco.

Por otro lado, el cambio de discurso debería expresar con claridad la nueva política imperial: si por razones económicas o ideológicas un gobierno no es aceptable, entonces se puede lanzar una campaña internacional para “cambiar el régimen”, como se dice con eufemismos.

Esta idea y práctica no es nueva. De hecho, las grandes potencias han cambiado regímenes en numerosas ocasiones desde le era colonial y durante la Guerra Fría. Pero ahora se propone la idea como parte de la naturaleza de una nueva época. Si antes se cambiaba un gobierno para acceder libremente a sus recursos o revertir una política (en Chile en 1973, por ejemplo), ahora Bush explica que hay que cambiar el régimen en Bagdad y acabar con Yaser Arafat en la deteriorada Autoridad Nacional Palestina (ANP) para iniciar la reforma democrática de Oriente Medio. O sea, que si bien antes se hacía pero se ocultaba, ahora se explica en términos racionales. Antes se ocultaba la realidad de la intervención, ahora se vende como una política necesaria y moralmente útil.

El objetivo final es, sin duda, importante: democratizar una zona del mundo en la que rigen gobiernos autoritarios, pero los medios que se quieren usar —guerra, mentiras, destrucción de la sociedad civil palestina por parte de Israel en nombre del antiterrorismo— arrojan muchas dudas y, más bien, un profundo escepticismo sobre las verdaderas intenciones.

La cuarta cuestión es si esta guerra, la haya o no, es por petróleo o por otras razones. El petróleo, sin duda, es un componente importante. Pero EEUU no necesita la guerra para ello. Podría levantar las sanciones a Sadam Husein y comprarle todo el petróleo que quisiera. De hecho, le compra crudo a través del programa Petróleo por Alimentos de la ONU.

La cuestión clave es la ideología. Irak es la excusa para debilitar el orden internacional, someter a la ONU, indicar, a través del ejemplo, que estamos en una especie de Estado de Sitio internacional, situación de emergencia en la que hay que asumir la autoridad, recortar la democracia; momento en el que los que se sienten elegidos ejercen su supuesta responsabilidad de gobierno por encima de unos ciudadanos que, si están en contra, es por error, desconocimiento, emocionalidad o simple electoralismo. Este es el argumento de José M. Aznar.

Irak es la excusa para decirles a los aliados de la OTAN y a los europeos quién manda, para enviar un mensaje a los movimientos emancipatorios — más o menos radicales, estén en la calle o en los gobiernos— estilo Porto Alegre o Lula en la presidencia, de que nos encontramos en estado de excepción. Se acercan tiempos autoritarios y difíciles.

Por todo esto es preciso que el movimiento por la paz, los defensores de los derechos humanos, los partidos políticos y sindicatos, los movimientos por la justicia económica y social y críticos de la globalización, coordinen sus acciones y discursos porque, haya o no haya guerra, esta es una larga contienda política, con múltiples caras, por la democracia y por la paz en el sentido amplio del concepto que se ha revisado desde los años ochenta.

Mariano Aguirre
Director



CRISIS
IRAK



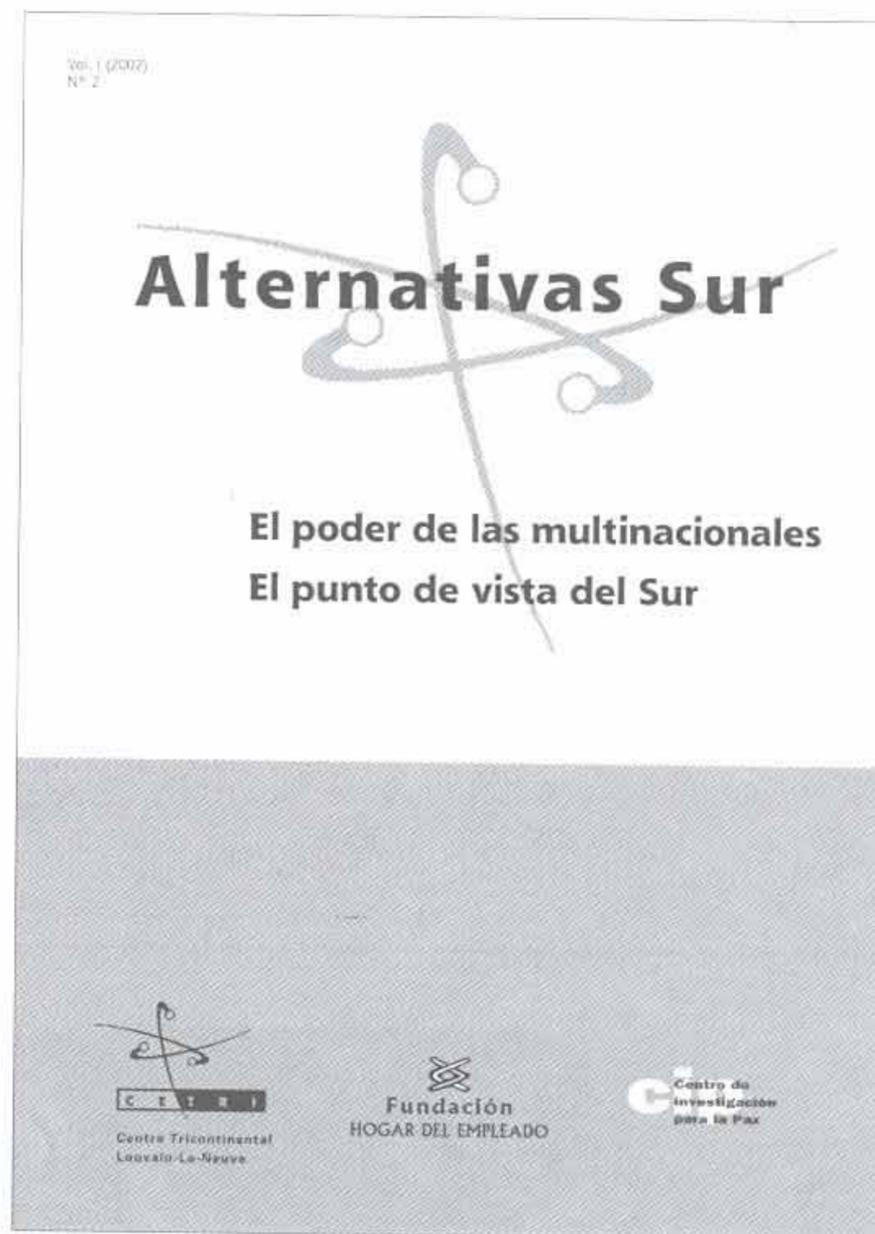
Actualmente, la crisis acerca de Irak puede conducir a la guerra. Estados Unidos y el Reino Unido se muestran decididos a iniciarla. Las tensiones son múltiples: en Naciones Unidas, en Europa, entre Estados europeos y Washington, y potencialmente entre los Estados árabes y los Estados occidentales. A la vez, millones de ciudadanos se manifiestan contra el uso de la fuerza y a favor de los instrumentos del sistema multilateral.

El Centro de Investigación para la Paz (CIP-FUHEM), con este boletín electrónico y con los materiales facilitados en esta Web, quiere fomentar un debate en profundidad sobre este conflicto desde el compromiso con la paz.

www.fuhem.es/crisis_irak/
crisisirak.cip@fuhem.es



Nuevo número de la revista **Alternativas Sur**



SUMARIO

- Introducción. *Manuela Mesa*
- Editorial

ANÁLISIS

- El capitalismo, las transnacionales, la guerra y el movimiento social por una alternativa. *Wim Dierckxsens*
- Inversión extranjera directa, empresas transnacionales y globalización, *Mario L. Fernández Font*
- Las transnacionales, actores contemporáneos de la explotación globalizada. *A. Lazar*
- ¿Hay que abolir el Fondo Monetario Internacional?. *Walden Bello*
- OMC: una amenaza para los campesinos. *Vandana Shiva*

CASOS PARTICULARES

- Las estrategias de las empresas transnacionales en Argentina y Brasil. *Daniel Chudnovsky y Andrés López*
- Las inversiones españolas en América Latina. *Matías Kulfas*
- La apuesta geopolítica de las transnacionales mineras en el Congo. *Pierre Baracyetse*
- El Gobierno indio y las transnacionales. *Sudip Chaudhuri*
- Multinacionales y globalización. El caso de la British American Tobacco en India. *V. Janardhan*
- Una alternativa al proteccionismo empresarial en la India y en todas partes. *Vandana Shiva*

DOCUMENTOS

La naturaleza financiera y económica de las transnacionales y el ordenamiento jurídico global. *Dimitri Uzunidis*

Pedidos a: Fundación Hogar del Empleado, c/ Duque de Sesto, 40, 28009 Madrid
Tel. 91 431 03 46 - Fax: 91 576 32 71 - E-mail: rvaquero@fuhem.es

Precio: Ejemplar: 9 € Suscripción (dos números): España 14,50 € (IVA y gastos de envío incluidos)

**El desarrollo no es sólo crecimiento
del PIB**

11

**Prevención de conflictos en el marco
euro-mediterráneo**

27

Teoría

JOSEPH STIGLITZ

El desarrollo no sólo es crecimiento del PIB

El prestigioso economista Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001, destaca por su posición crítica respecto a las organizaciones económicas internacionales, y por su análisis de los mercados con información asimétrica. Este texto pertenece a la conferencia que Stiglitz ofreció en la Corporación Financiera Nacional de Ecuador. En ella relaciona sus investigaciones teóricas en materia de economía con varios de los problemas del desarrollo, y hace una crítica al diseño de las teorías económicas convencionales.

En los últimos cincuenta años de historia económica hemos aprendido que el desarrollo sí es posible, pero ciertamente no es un proyecto con curso inevitable y predefinido. Los éxitos en el desarrollo han sido mucho más grandes que lo que cualquier persona hubiera anticipado hace cincuenta años: el Este asiático, China, Botsuana, por ejemplo, han crecido a niveles realmente admirables y no es raro que en esa parte del planeta se hable de un “milagro”. Pero también han existido evidentes fracasos en la mayoría de los países de África Subsahariana, donde el descenso del ingreso per cápita de las últimas décadas convive con numerosas enfermedades y conflictos civiles.

América Latina presenta un cuadro mucho más heterogéneo: han existido éxitos muy importantes, sobre todo en lo que se refiere a la democratización y estabilidad económicas. La hiperinflación que caracterizó el desempeño económico de la región en décadas anteriores ha sido contenida en la mayoría de los países. De igual manera, han existido fracasos importantes, sobre todo respecto a la elevada desigualdad en la distribución del ingreso, cuyo nivel en América Latina ha sobrepasado el de cualquier otra región (Rusia parece tener intenciones de competir en

Joseph Stiglitz es profesor de Economía y Finanzas en la Universidad de Columbia. En 2001 recibió el premio Nobel de Economía. De 1997 a 2000 fue economista jefe del Banco Mundial. Este texto es una versión editada de la conferencia publicada en la revista *Iconos*, marzo de 2002, N° 13, editada por FLACSO Ecuador

ese tema). El rápido crecimiento que se dio a inicios de los años noventa se ha desplomado a finales de la década, lo que ha dado lugar a varias formas de ver y entender las experiencias de América Latina.

Los triunfos, incluso hasta 1996, se produjeron gracias a algunas reformas permanentes: liberalizaciones y privatizaciones. Sin embargo, los críticos de estas reformas se preguntan si esto fue un crecimiento sostenible o solamente un caso de lo que se conoce como "alcance" (*catch-up*) al estado previo a la crisis de los años ochenta. Uno puede hacerse esta pregunta considerando que la década perdida de América Latina (los años ochenta) significó que todo el crecimiento anterior cayó en un abismo; pero, además, tomando en cuenta que cuando una economía ha atravesado por un extenso periodo sin crecimiento o de contracción económica, en el periodo siguiente las tasas de crecimiento son más altas que las normales simplemente por el proceso de alcance de restauración de los niveles anteriores a la crisis. Así, el éxito económico del inicio de los años noventa, desde la perspectiva de algunas personas, no fue más que alcanzar los niveles económicos de comienzos de la década de 1980. Luego, con la crisis financiera global de aproximadamente 1997, los pocos años de crecimiento de los años noventa bajo las doctrinas de crecimiento y liberalización llegaron a un agujero demoledor, y país tras país comenzaron a encarar recesión o situaciones peores.

Necesidad de nuevos marcos teóricos: asimetrías de información y mercados imperfectos

Ante el rápido crecimiento a principios de los años noventa —y del que no estamos seguros si responde a un alcance o al surgimiento de una nueva base de crecimiento—, y las experiencias de estancamiento en los últimos años de esa misma década, algunos se preguntan si fallaron las reformas o si es la globalización la que ha fallado en América Latina. Estas dos preguntas están muy vinculadas: el movimiento reformista estuvo en gran medida basado en la globalización y en la creencia de que las reformas tenían que estar orientadas a abrir los países al mundo porque así surgirían nuevas fuentes de crecimiento. Pero está claro que éstas no abrirían solamente nuevas fuentes de crecimiento sino también de inestabilidad. Realmente no conocemos las respuestas a estas preguntas y no las sabremos en los próximos años.

Lo que sí debemos tener claro es que al hacer juicios sobre estas experiencias y al tratar de obtener certeza sobre el rumbo de la economía, inevitablemente debemos respaldarnos en modelos de análisis (*frames*), en supuestos teóricos y en las experiencias obtenidas de distintos países, lo que nos ayuda a formarnos un juicio sobre qué políticas serían las más apropiadas para tener éxito.

Estas teorías son probadas y confirmadas de diversas formas. Mientras los economistas son fuertemente proclives al uso de modelos estadísticos, en otras disciplinas, como en la Astronomía, estos no son los únicos métodos para confirmar una teoría. Ideas como los agujeros negros y la teoría de la relatividad fueron confirmadas por una, dos o varias observaciones, y no realizando un test estadístico. Aquellas teorías —que cuentan con cierto consenso— que dicen que el

desempleo no existe o que un incremento en la oferta de trabajo automáticamente creará un aumento en la demanda, en mi opinión, no son persuasivas. A veces se pierde de vista que teorías de política económica basadas en tan malas teorías económicas son propensas a fallar. No debemos ver solamente las pruebas estadísticas para rechazar o adoptar los modelos teóricos. Si prestamos atención a temas como el desempleo, podríamos ver otros supuestos no incorporados en muchas teorías que se muestran muy lejos de la realidad, y que cualquier conclusión basada en ellas podría no ser confiable.

Para ilustrar estas deficiencias de los marcos teóricos tradicionales, permítanme contarles algo de mi trayectoria personal, que es la única forma en la que pude vivir y experimentar ciertos procesos. Yo crecí en Gary (Indiana, EEUU), una pequeña población ubicada en la orilla sur del lago Michigan. Gary es muy notable porque refleja el periodo de industrialización de EEUU. Fue fundada en 1906 como una ciudad productora de hierro y su desarrollo estuvo acompañado por el crecimiento de la industria minera y siderúrgica de EEUU, de tal forma que su historia refleja el crecimiento y el ocaso de la base industrial de mi país. Actualmente, Gary se encuentra aún habitada, pero su población se ha reducido considerablemente y se ha convertido en una ciudad relativamente pobre. Mientras crecí en este pueblo pude ver pobreza, discriminación y muchos otros problemas del sistema económico. En particular, observé que periódicamente había altos niveles de desempleo. Sin que sea su culpa, la gente perdía frecuentemente sus trabajos y no existía nada similar al "pleno empleo". Las teorías económicas que ignoraron estos fenómenos ignoraron la pobreza y la discriminación, negaron que estos fueran lo suficientemente evidentes, rechazaron que existiera el desempleo o afirmaron que no era importante. A mi juicio, estas teorías estaban cruelmente erradas.

Cuando comencé a estudiar Economía en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), fue curioso porque mis profesores también estaban preocupados por la pobreza, la discriminación y el desempleo. Pero los modelos enseñados, las teorías sobre las que nos sosteníamos, eran estándar dentro de las teorías del equilibrio que habían dominado el pensamiento durante 450 años. Según dichas teorías no existía el desempleo, simplemente ignoraban su importancia. Sostenían que se podían separar los aspectos de igualdad y distribución de los de eficacia económica. La economía debía tratar básicamente sobre la eficacia y el crecimiento, y no debía preocuparse por otras dimensiones.

En los años sesenta, junto con George Akerlof, colega y compañero en el MIT, encontramos estas ideas y modelos realmente inaceptables. Sabíamos que algo estaba mal, que esas teorías no contemplaban una parte importante de la realidad de nuestras sociedades y de nuestro país. Pasamos muchas horas discutiendo sobre qué estaba mal. Sabíamos que varios supuestos estaban claramente errados, como por ejemplo que en competencia perfecta, en función del precio, la pendiente negativa de la curva de demanda da la posibilidad de vender tanto como uno quiera.

Identificamos unos supuestos en el modelo de competencia perfecta equivocados. Así, había otros problemas fundamentales con el modelo de mercados perfectos: en muchas circunstancias los mercados simplemente no existían. En algunos países los individuos no podían endeudarse, ni comprar seguros contra ries-

No debemos ver solamente las pruebas estadísticas para rechazar o adoptar los modelos teóricos

gos pese a que los estaban demandando. En algunos trabajos e investigaciones exploré las consecuencias de esta ausencia de mercados. Junto con David Newbery exploramos las consecuencias de la ausencia de mercados de riesgo para una liberalización del comercio, y mostramos que una de esas consecuencias — cuando hay mercados de riesgo imperfectos— era que la liberalización perjudicaría a todos.

Hoy, la importancia del riesgo está siendo reconocida mayormente. Por ejemplo, como una excepción a los contenidos de los reportes de desarrollo, hace un año el Banco Mundial entrevistó gente pobre y les preguntó cuáles eran los elementos de su vida que más les impresionaban. Como resultado, no solamente obtuvieron que a escala mundial la gente carecía de ingresos, sino que se referían repetidamente a la inseguridad; encarar inseguridad respecto a sus ingresos, respecto a la violencia, respecto a la salud, etc.

Los modelos que trabajamos durante ese periodo ponían énfasis en que, en ausencia de mercados arriesgados, una inusual apertura podría estar expuesta a altos grados de volatilidad y con esto provocar severos efectos en el bienestar de la sociedad, más de lo que la sociedad estaba dispuesta a aceptar. En estudios empíricos posteriores hemos confirmado esos resultados, entonces: ¿por qué no están presentes en los mercados? ¿por qué ninguna de esas ausencias de mercados de riesgo está contemplada dentro de los modelos teóricos tradicionales?

Todo apuntaba a que el supuesto de la información perfecta, uno de los más importantes pues había sostenido durante 150 años a los economistas del modelo tradicional, estaba equivocado. Evidentemente, los economistas no creían que la información era perfecta, pero era mucho más fácil escribir modelos que la asumían. Se esperaba que la economía real, en la que la información no era perfecta, fuera bien descrita por esos modelos. Esto no se basaba en ninguna teoría o conclusión empírica, solamente era una esperanza. De hecho, una de las conclusiones más importantes del trabajo que George Akerlof y yo hicimos fue enseñar que esa esperanza no es cierta, que inclusive pequeñas cantidades de imperfección en la información cambian el comportamiento de la economía. Por ejemplo, si la información es imperfecta la competencia será imperfecta; con competencia perfecta, si bajas tus precios puedes vender tanto como quieras; con información imperfecta, si bajas tus precios puede ser que tus clientes no lo sepan. Una de las aplicaciones de nuestro análisis era demostrar que aunque existieran muy pequeños costos de búsqueda de información, y aunque el mercado tuviera un gran número de empresas (competencia), los precios podrían estar mucho más cercanos al de monopolio que al precio estándar que los modelos de competencia predicen.

Es decir, nuestro trabajo sólo enfatiza en la importancia del marketing y el acceso a los mercados. Aún así, la teoría económica tradicional niega la importancia de los temas en los que muchas personas y escuelas de negocios piensan continuamente. En síntesis, la teoría de competencia imperfecta reta el supuesto de competencia perfecta y, por ende, el trabajo o las ideas desarrolladas en Princeton que argumentan y tratan de desarrollar mejores modelos de ésta.

Otro ejemplo: la teoría económica tradicional dice que nunca ha existido la restricción del crédito, que los países pobres pueden tener acceso a créditos tal como lo tienen los países ricos, y que las empresas nuevas tienen acceso al crédi-

to tal como lo tiene General Motors o grandes corporaciones. Esto parece muy poco realista.

Las teorías que hemos desarrollado sobre la información imperfecta explican, por ejemplo, por qué al haber restricción de crédito, y aunque existiera un exceso de demanda por créditos, los bancos simplemente no alzan la tasa de interés. La explicación es que al incrementar la tasa de interés los bancos sólo atraparían créditos arriesgados, aquellos que estarían deseosos de pagar la tasa de interés más alta con el mayor riesgo consecuente y la mayor probabilidad de no pago, en detrimento de aquellos que con una tasa de interés más baja aseguran el pago.

La teoría tradicional ha asumido que no existe el desempleo. Si éste no existiera nuestra vida sería muy aburrida porque, en cierto sentido, lo que siempre estamos tratando de hacer es mantenernos en acción. Pero como macro-economista debo decir que el desempleo es algo que todos los gobiernos del mundo afrontan. La Gran Depresión fue un evento real pese a que a algunas personas les gusta reescribir la historia y pretender que nunca ocurrió. Durante la Gran Depresión, en EEUU uno de cada cuatro trabajadores no tenía trabajo y no estaba disfrutando del ocio como afirma la teoría tradicional. En muchos casos, la idea del desempleo como ocio no era una explicación de economistas, pero las ideas y hechos que sucedían entre los economistas eran para avergonzarse. Sin embargo, en EEUU hay una gran escuela de pensamiento que trata de explicar el desempleo desde el punto de vista de cierto gusto por el ocio. Si fuera así, lo que sucedió en EEUU en 1933 es que cerca de la cuarta o quinta parte de la población decidió que disfrutaba más estando en casa que trabajando. Si esa es la perspectiva, por su puesto que no hay necesidad del gobierno del Estado ya que la gente simplemente quiere disfrutar del ocio: déjenlos disfrutar de hacer lo que quieran, es una forma más eficiente de manejar la economía. Pero mucha de esta gente no parecía muy feliz con todo su ocio: la tasa de suicidios y divorcios aumentó, y como parte de toda esa "alegría", surgieron algunas protestas por todo el mundo. Dicha situación difícilmente coincide con la teoría de que el desempleo era solamente un disfrute de ocio.

Por otro lado, las teorías sobre información asimétrica ayudaron a explicar por qué las empresas no rebajarían sus sueldos aunque hubiera un exceso de oferta de trabajo y, por ende, el desempleo pudiera convertirse en un fenómeno persistente. La información asimétrica mundial que George Akerlof y yo estudiamos es sólo un aspecto, aunque de los más importantes, de la información imperfecta. La información asimétrica se refiere a que algunas personas conocen más información que otras. Uno de los aspectos más importantes de estas teorías es que la información asimétrica puede ser creada: las empresas deliberadamente crean prácticas que tratan de incrementar la disparidad de información entre ellas y otras. Así, los administradores que tratan de volverse insustituibles en las empresas pueden tornarse difíciles de ser despedidos si incrementan la información asimétrica. Hay casos en los que el administrador del banco ha creado un sistema computacional que sólo él puede usar. Así, aunque el banco quiebre, no puede ser despedido porque de otra forma toda la información del banco desaparecería. Es importante enfatizar que las asimetrías de la información no sólo existen sino que en muchas ocasiones son creadas por el hombre.

Las asimetrías de la información no sólo existen sino que en muchas ocasiones son creadas por el hombre

Una de las principales implicaciones de esta línea de investigación es que el resultado más importante del pensamiento económico, la "mano invisible" de Adam Smith, que argumenta que los mercados competitivos por sí mismos apuntan a una eficiente colocación de recursos sin ninguna intervención estatal, está equivocada. El Gobierno y, en general, el Estado tienen una importante función. Los mercados competitivos con información imperfecta, y todos los mercados la tienen, no son necesariamente óptimos y existe un principio según el cual las intervenciones del Gobierno en el mercado mejoran el bienestar de cada miembro de la sociedad.

Actualmente, una corriente de investigación muy importante enfatiza que existen imperfecciones de información que también afronta el Gobierno. Pero no se trata de comparar un Gobierno idealista con un mercado imperfecto, sino de comparar Gobiernos con mercados, ambos encarando corrientes de información. Se trata de que existe un rol importante para el Gobierno en las economías nacionales.

Los errores del Consenso de Washington

Una de las razones por las que este particular grupo de resultados es tan importante para la economía del desarrollo es que debilita los fundamentos intelectuales del Consenso de Washington respecto a cómo deben desarrollarse los países —y que se tornaron predominantes en instituciones económicas internacionales en Washington y en la Tesorería de EEUU durante los años ochenta y noventa—. Cuando se debilitaron estos fundamentos intelectuales del Consenso de Washington, también lo hicieron sus recomendaciones de políticas.

Numerosas de estas políticas inspiradas en el Consenso de Washington tienen mucho sustento. Pero, ¿qué hay de los resultados? Por ejemplo, es obvio que los países no pueden crecer bien si experimentan hiperinflación; de ahí la importancia para los Gobiernos de implementar macro políticas anti hiperinflacionistas. Pero, ¿qué tan bajo hay que llevar los niveles de inflación si para ello hay que incrementar las tasas de interés a niveles muy altos y si con esto se está imponiendo un costo demasiado caro a la economía nacional, costo que excede el beneficio de la reducción de la inflación? Este es un ejemplo de que el efecto de los resultados es lo más importante. Hay un ápice de verdad en el énfasis del Consenso de Washington sobre el peligro de la inflación en exceso. El problema es que, frecuentemente, este hecho es llevado a extremo.

Quiero ilustrar las diferencias entre los puntos de vista del Consenso de Washington y los sugeridos por los nuevos modelos de la Economía —que difícilmente son "nuevos", ya que tienen 20 años de antigüedad, pero que en el mismo periodo en que éstas ideas eran desarrolladas para su aceptación en la academia, eran completamente ignoradas por el Consenso de Washington y, por ende, existía una gran divergencia entre la política por un lado y la investigación por el otro—. Me voy a referir a dos elementos en particular: las privatizaciones y el mercado financiero globalizado.

Las privatizaciones

Cuando se trata de trasladar una empresa del Estado al sector privado debe ser necesariamente para incrementar la eficiencia y la productividad. Pero, en *The Fundamental Theory of Privatization*, David Newbery y yo explicamos que, cuando hay información imperfecta, las privatizaciones no son eficientes. En muchos casos las privatizaciones han sido revertidas, como la de las carreteras en México. De igual manera, EEUU ha iniciado sólo una privatización en los últimos diez años y fue un desastre. Recuerdo una imagen de Reagan conversando sobre la mejor manera de llevar a cabo las privatizaciones y diciendo que Gran Bretaña estaba privatizando seis billones, que otros estaban privatizando tres billones y cosas por el estilo. Pero, EEUU sólo tenía un plan de dos billones en Texas. Finalmente, se propuso una privatización en la que nunca nadie hubiera pensado: la de la fabricación de bombas atómicas. En realidad, sólo privatizaron la fabricación de los principales ingredientes de la bomba atómica y, una vez eso, sólo es cuestión de consultar la web para saber cómo armarla. Esta privatización ha sido un desastre y ahora hay una corriente en el Congreso solicitando su nacionalización.

Además de estos, han existido otros problemas en relación con las privatizaciones. El primero de ellos se refiere a que cuando se privatiza un monopolio, algunas veces, la empresa es más eficiente que cuando era manejada por el Gobierno, pero para explotar a los consumidores: el resultado es que los precios suben y los consumidores no se encuentran en mejor situación. Un país africano privatizó un monopolio —obviamente con el apoyo del Banco Mundial—, y esto trajo consigo el incremento de los precios de las conexiones a internet, de tal forma que incluso la gente rica en las universidades no se lo podía permitir.

Un segundo problema tiene que ver con el desmantelamiento de las empresas. Este es especialmente grave en aquellos países donde las medidas de privatización han ido acompañadas de tasas de interés muy altas. La idea de la privatización era poner empresas en una base formal y proveer mejores incentivos para inversión y crecimiento. Muy a menudo, las empresas privatizadas, antes que crear riqueza, se dedican al desmantelamiento de sus activos. Esto se produce porque si las tasas de interés son altas a las empresas no les conviene invertir, y es más provechoso desmantelar los bienes que consiguieron baratos en privatizaciones signadas por la corrupción.

Un tercer problema tiene que ver con las estructuras de gobierno, con la dificultad de establecer las reglas que definan el manejo de las empresas públicas, quién toma las decisiones y quiénes están interesados en las resoluciones adoptadas. Estos problemas son verdaderos ejemplos de información. Aun con información perfecta, como es el caso de las viejas teorías económicas, los administradores no siempre toman las decisiones que maximizan el costo de la firma; nunca deciden algo simplemente pensando en el interés de la empresa. Los administradores de las empresas estatales deberían venderlas al más alto costo posible, pero en ocasiones están más interesados en conseguir su propio enriquecimiento que en el de los accionistas de la empresa (el Estado). Ya en las teorías modernas se reconoce que hay una distinción entre la administración y la propiedad de la misma. Así, muchas privatizaciones se dan bajo algunas estructuras legales ina-

Las fallas de las privatizaciones son consecuencia de los errores en la aproximación analítica a estos problemas, y tienen que ver con supuestos y marcos teóricos muchas veces instrumentalizados de forma tendenciosa

propiadas que necesitan llevar a cabo un desmantelamiento antes que la creación de riqueza como producto de la venta. Las experiencias en economías en transición respaldan fuertemente estas conclusiones. Cuando la privatización ocurre en países en los que las estructuras de gobierno son débiles, su impacto en el crecimiento económico es cero y, por otro lado, cuando existen fuertes estructuras de gobierno, puede darse un efecto positivo en el crecimiento económico.

Finalmente, la privatización ha sido frecuentemente asociada a la corrupción, tanto que en algunas partes del mundo ha sido llamada "robotización" (*roberization*). La idea simplista que está detrás de los enfoques de muchas instituciones económicas cuando explican a los países las ventajas de la privatización es: "si tienes las empresas estatales hay un riesgo real de que las personas que están en ellas sean corruptas y estén robando la riqueza del país". Y eso era indudablemente cierto, pero tenían una idea muy ingenua sobre el proceso político; lo que avizoraban era que después de haber realizado el sermón sobre la corrupción, el proceso político y la necesidad de iniciar el proceso de privatización, los responsables gubernamentales dirían: "aleluya, ahora entendemos que somos pecadores, pedimos perdón por haber pecado por tanto tiempo; ahora privatizaremos de tal manera que nunca más estemos tentados a pecar". Ese era el modelo. La realidad fue que ellos dijeron: "aleluya, ustedes nos han dado una idea que no habíamos tenido antes: ¿por qué compartir los beneficios de la corrupción con los futuros políticos? Ahora podemos tener toda la ganancia de la corrupción. En otras palabras, si privatizamos podemos robar, además del flujo, también el stock. Nos han dado un nuevo vehículo para la corrupción a un nivel tan alto que nunca se nos hubiera ocurrido antes, muchas gracias". Tras agradecer a las instituciones económicas internacionales el abrirles los ojos, estos grupos avanzan en el proceso de privatización.

Si los nuevos dueños, ahora particulares, hubieran iniciado un proceso productivo utilizando eficientemente los recursos, todo hubiera ido bien. Pero lo que sucedió país tras país es que la nueva elite decidió que podía utilizarlos, no para iniciar un proceso de creación de riqueza, sino para continuar obteniendo recursos adicionales para sí mismos mediante el debilitamiento del proceso político, por ejemplo, no pagando impuestos y sobornando a las autoridades impositivas. De ahí que, con este esquema de corrupción en las privatizaciones, las elites adquirieron una base de riqueza que les permitió perpetuarlo.

Estos son algunos de los problemas de la privatización sobre los que un modelo de economía simplista no llamaría su atención pero que, en un modelo enfocado en la información imperfecta y las limitaciones de la misma, inmediatamente resaltan. Por ello, las fallas de las privatizaciones son realmente consecuencia de los errores en la aproximación analítica a estos problemas, y tienen que ver con supuestos y marcos teóricos muchas veces instrumentalizados de forma tendenciosa.

Los mercados financieros

Los mercados financieros en proceso de liberalización representan otro ejemplo donde existieron problemas predecibles, y que fueron advertidos en la mayoría de los casos, pero no tuvieron eco en las políticas ortodoxas que finalmente se toma-

ron, pues éstas se sustentaban en teorías clásicas “irrefutables”. Por ejemplo, la noción de “banca libre” según la cual se pueden eliminar todos los roles del gobierno y las supervisiones, ha sido tratada relativamente pocas veces, en apariencia porque cada vez que se ha intentado implementar ha sido un desastre. Chile lo probó una vez y fracasó. Pero han existido intentos de limitar la supervisión del gobierno en la liberalización de los mercados financieros. El argumento expuesto ha sido que el control gubernamental debería limitarse a los requerimientos del activo recibido, y que otro tipo de intervención interferiría con la eficacia del mercado de capitales. Eso es un error.

Tailandia es un ejemplo de cómo políticas de supervisión mal dirigidas —ideología sustentada por el Consenso de Washington porque deja de lado el rol de la información—, pueden llevar a un desastre. En los años ochenta, Tailandia tuvo enorme éxito en su desempeño económico basado en un sistema financiero muy bien regulado: tenía restricciones en inversiones especulativas en bienes raíces. Estas restricciones obedecían a dos motivos: primero, que se dieron cuenta que inversiones especulativas en bienes raíces eran el origen de fuertes crisis financieras, y que éstas a su vez eran la fuente de mucha de la inestabilidad financiera alrededor del mundo. Asociada con el mercado de bienes raíces, gran cantidad de países tuvo la experiencia de crecimientos y contracciones traumáticas. Los tailandeses no quisieron tener esas crisis en vista de que su economía era muy frágil como para experimentarlas. Segundo, se percataron de que tenían una economía pobre que necesitaba crear puestos de trabajo, y era más lógico invertir en fábricas que en edificios de oficinas vacíos. Pero los expertos extranjeros les aconsejaban liberalizar, y que si el mercado les indicaba que era mejor invertir en oficinas vacías, que confiar en el mercado. Lamentablemente, esto es lo que hizo Tailandia. Con ironía debo decir que, sin embargo, no llegaron al éxito de EEUU: en Texas hubo un nivel de desocupación del 30% antes de que la burbuja de bienes raíces explotase, mientras ésta explotó en Tailandia tan sólo con un nivel del 20% de desocupación. La crisis que se inició en el este de Asia en 1997 fue el resultado de la liberalización de sus mercados financieros.

Al mismo tiempo, las ideas sobre información jugaron un rol importante en los procesos de reestructuración. No obstante, los enfoques del Consenso de Washington proveen muy poca información sobre los roles apropiados del gobierno en el proceso de reestructuración, probablemente porque en modelos con información perfecta nunca hay quiebras. Después de todo, con información perfecta, quién prestaría a alguien que no va a pagar; lo que demuestra que la sola existencia del quiebre de bancos es un ejemplo más de las imperfecciones de la información.

Por otro lado, los modelos macroeconómicos que eran la base de las políticas del Consenso de Washington —con resultados tan desastrosos en el este asiático—, simplemente consideraban la quiebra cuando ésta estaba en el centro de los problemas. En Indonesia y Corea, cuando las quiebras fueron inducidas con las políticas de altas tasas de interés, el 70% y 50% de las empresas, respectivamente, fueron afectadas.

El Consenso de Washington estuvo basado en un modelo económico equivocado que muy seguidamente confundía ganancias con medios. Tomó privatizacio-

nes y liberalización como ganancias de por sí, más que como medios para crear una mejor economía. Ciertamente, malos modelos llevaron a malas recomendaciones de políticas y a enfoques muy estrechos. Esos enfoques llevaron a enfatizar en un excesivo monitoreo de la banca internacional y en tasas de interés muy altas, lo que exacerbó los problemas de las economías nacionales. Modelos equivocados también llevan a estrechar el enfoque analítico, por ejemplo, en el sentido de que más que debilidades del mercado financiero se esperaban crisis de tipo macroeconómico, lo cual fue un error.

Ha habido grandes éxitos en términos de desarrollo económico, por ejemplo en los países del este asiático, pero la mayoría de estos triunfos no se dieron por aplicar los preceptos del Consenso de Washington. El éxito se logró por desarrollar políticas adoptadas en sus propios términos, bajo sus propias condicionantes; políticas muy selectivas no enfocadas sólo a un tema en particular sino a problemas generales, y aunque adoptaron muchas cuestiones inherentes a la liberalización, no priorizaron las privatizaciones.

El desarrollo y el crecimiento del PIB

El enfoque desarrollado sobre la información imperfecta ha ayudado a explicar muchos de los errores de los modelos económicos convencionales. Se trata de un ataque desde dentro de las teorías clásicas, aceptando los modelos utilizados por economistas durante décadas pero realizando en ellos pequeñas modificaciones y demostrando que en todos ellos se reconocía que la información es imperfecta. A partir de ahí, he intentado explorar las implicaciones de esa imperfección, y los resultados fueron bastante traumáticos: se enseñó que el modelo convencional que asumía información perfecta no era robusto y uno no podía sustentarse en él para recomendar ninguna política económica.

Mi colega George Akerlof realizó dos ataques a los principios fundamentales de ese modelo. Por un lado, atacó los supuestos sobre el sustento y la confianza de los individuos, y sobre las relaciones entre los individuos y la sociedad; por otro, también criticó el principio que afirmaba que las instituciones no eran relevantes. Lo que Akerlof enfatiza es que los individuos existen dentro de una sociedad y que hay un importante constreñimiento social a las acciones de los individuos; las normas de conducta y las nociones sociales sobre justicia afectan al comportamiento de los individuos como tales, pero también al de la sociedad en su conjunto.

Estas ideas influyen directamente en la perspectiva sobre el desarrollo que he estado elaborando en los últimos años. Ésta se refiere a la transformación de la sociedad de una manera integral. Según los puntos de vista sobre el desarrollo que predominaron en los modelos del Consenso de Washington, las diferencias entre países subdesarrollados o en vías de desarrollo con aquellos ya desarrollados, o aún con los pequeños con altos niveles de inversión, se referían a la falta de capital (luego incluyeron al "capital humano") y a la ineficiente utilización de sus recursos. Según esa teoría, los mercados aseguraban la eficiente ubicación de los recursos, y la falta de eficacia era debida a la intervención del Estado. Por consiguiente, la mejor forma de apoyar el desarrollo era excluir al Estado de los proce-

tos económicos. Así se generaba una clara y simple recomendación para el desarrollo: quitar del medio al Estado, privatizar y liberalizar.

Es lo que han hecho numerosos países durante mucho tiempo y todavía están esperando los resultados: que se genere el desarrollo. Pero, estas recomendaciones no son suficientes para garantizar el desarrollo. Éste incluye algunos aspectos adicionales que hay que considerar. Se trata, en el fondo, de una transformación de la sociedad, de cambiar las relaciones tradicionales y viejas formas de pensar. Por ejemplo, modernizar la manera de tratar la salud, la educación y los métodos de producción, involucrando la idea de que el cambio es posible (no se tienen que hacer las cosas como se hicieron el último año, la última generación o durante los últimos cincuenta años). Se trata de aceptar el cambio, pero también de promoverlo. Un importante ingrediente de ello es el fuerte énfasis en "las formas científicas de pensar".

Si se aceptan estas perspectivas, las implicaciones que se derivan son muy importantes. Cabe señalar tres:

- Aceptar que una economía que incrementa su Producto Interior Bruto (PIB) no es una economía desarrollada. Es decir, un país puede incrementar su producto per cápita desarrollando, por ejemplo, una mina en una remota región del país, pero no se crea ningún país desarrollado, todo lo contrario, puede permanecer subdesarrollado en todos los aspectos del funcionamiento de una sociedad.
- Si se habla de desarrollo hay que ir más allá de la economía, más allá del modelo del Consenso de Washington, y pensar en otros aspectos de la sociedad.
- El cuestionamiento de la autoridad si ésta representa la forma tradicional como se hacen las cosas. En este caso, la pregunta sobre la autoridad sería si ésta se genera por líderes nacionales o por imposición de las instituciones del exterior. De ahí que la democracia sea un ingrediente muy importante en el proceso de transformación del desarrollo: el cambio no puede ser forzado ya que parte de la transformación en las formas de pensar, cambios que deben venir desde el interior del país como resultado de la discusión y el diálogo.

Así, una parte importante del avance en el proceso del desarrollo es llevar a cabo estrategias que involucren tenencia y participación.

La concepción del desarrollo como transformación social lleva a plantearse cuestiones como: qué la promueve, qué la sostiene, qué puede canalizar el cambio y qué puede impedirlo. Existen algunos ejemplos que pueden incidir en las formas de pensar el desarrollo. Por ejemplo, se afirma que los recursos naturales por sí solos no conducen hacia el desarrollo, pero, al mismo tiempo, bien pueden llevar hacia la corrupción en la apropiación, explotación y manejo de los mismos, lo que es contraproducente para el desarrollo. Por otro lado, se asiente que la educación es la clave para el éxito del desarrollo entendido como transformación social, pero no sólo hay que referirse a la cantidad, sino al contenido, a la calidad de la educación. De lo contrario se plantea la pregunta ¿educación para qué? Por ejemplo, en Etiopía, donde el 85% de la población vive en el sector rural, normalmente la educación ha sido vista como una forma de movilidad social, de conseguir trabajo en la ciudad. Pero esto no influye para el desarrollo y el nuevo gobierno ha dispuesto

que la mayoría de la gente educada en el sector rural debe permanecer en él la mayor parte de sus vidas. Si queremos contribuir al desarrollo debemos preguntar ¿cómo puede la educación mejorar la sociedad?, ¿cómo podemos ayudar a formar agricultores más productivos? Estas podrían ser pautas que incidan en las reflexiones sobre el desarrollo y que permitan pensarlo como una transformación social en general y no sólo como crecimiento del PIB.

Bajo esta perspectiva, el error del Consenso de Washington no radica únicamente en que posee un modelo equivocado de sociedad —en términos de modelos económicos e información y competencia perfectas—, sino que tampoco está enfocado hacia el desarrollo en términos de transformación social.

El desarrollo como transformación de la sociedad

El concepto de desarrollo debe abarcar un conjunto más amplio de objetivos, no solo el crecimiento del PIB, relacionados con los estándares de vida: crecimiento sostenido y desarrollo de la democracia. Para reflexionar sobre el desarrollo, más allá de la teoría económica neoclásica, hay que tener en cuenta cuatro aspectos particulares.

Aprender de los errores

Para reflexionar sobre los errores del desarrollo no solo hay que revisar los casos de países que han tenido éxito sino también los que han fracasado. Por ejemplo, en África los fracasos son asociados a conflictos civiles. Obviamente, esos conflictos no crean un ambiente atractivo para la inversión, para realizar negocios y, por ende, no hay condiciones que faciliten el crecimiento económico. Pero los conflictos tienen muchas causas y algunas de ellas hacen referencia a la economía. Los economistas se han dado cuenta de ello y en la última década han comenzado a estudiar los factores económicos que influyen en el conflicto. Entre estos se encuentran la inequidad, la pobreza y el desempleo.

La crisis en Asia es un ejemplo de cómo altas tasas de interés, mucho más elevadas de las normalmente manejadas, y un excesivo gasto fiscal (déficit) provocaron una seria recesión que rápidamente se convirtió en depresión. Una parte importante de la depresión se originó por el mal manejo de la reestructura financiera que llevó a una priorización de la dolarización de la economía. El resultado era predecible, y así se advirtió a su tiempo: si estas políticas se mantenían, se llegaría a una revuelta civil. En cinco meses se produjeron disturbios sociales en los que perdieron la vida cientos de personas. El origen de la crisis social fue la aplicación de políticas económicas inadecuadas. Como resultado de las políticas antes descritas, los flujos de capital salieron del país ya que las inversiones no son atraídas hacia países con revueltas sociales y políticas.

La justificación de la aplicación de las medidas de altas tasas de interés fue que éstas atraerían capital, pero también ignoraban una dimensión de la sociedad más amplia: el alejamiento en términos sociales de las empresas convertiría a

estos lugares en menos atractivos para la inversión. En definitiva, ignorar una dimensión social general supuso el fracaso de las recetas económicas aplicadas.

Las políticas económicas no pueden dejar de lado la cuestión de distribución. Si no se persiguen políticas con un amplio consenso social, si se siguen políticas que benefician al rico a expensas del pobre, se producirá un conflicto social y se convertirá en un ambiente poco propicio para el crecimiento económico.

Crear empleo

Una parte esencial del éxito de las estrategias de desarrollo es la creación de trabajo y de nuevas empresas. El empleo es importante para la cohesión social: la gente que no tiene trabajo está muy insatisfecha. Resulta necesario tratar de entender las causas de creación y destrucción de empleo en una sociedad, y tratar de que, si existen fuerzas que impulsan a la destrucción de fuentes de trabajo, éstas deben ser contrabalanceadas con políticas que generen más empleo. En muchos países se han perseguido agresivas políticas de globalización, pero eso podría llevar a la destrucción de empleos, lo cual es particularmente problemático en aquellos casos donde los Estados tratan de competir con productos agrícolas subsidiados de EEUU o Europa.

La teoría que se encuentra detrás de la liberalización del comercio es muy persuasiva y afirma que la protección lleva a la ineficiente ubicación de recursos. Se sostiene que la liberalización del intercambio permitirá que los recursos se muevan de sectores protegidos de baja productividad hacia aquellos de alta productividad que reflejan las ventajas competitivas del Estado. Sin embargo, si el país está en un programa en el que las tasas de interés han sido forzadas a niveles muy altos, no se creará empleo. Para moverse hacia los sectores de alta productividad hay que ser capaz de invertir. El empleo debe ser creado constantemente: alguien debe crear fuentes de trabajo, nuevas empresas, pero si las tasas de interés son muy altas, nadie podrá hacerlo.

Un buen manejo de lo público

El tercer tema es el manejo de las empresas estatales. Si no se cuenta con una buena administración pública, los administradores, o sea los líderes políticos, usarán su control para distraer los recursos hacia su interés propio en vez de hacia el beneficio público. El manejo y diseño del proceso económico es clave para evitar o incentivar la corrupción, por lo que hay que ser sensitivo para diseñar las políticas económicas: la corrupción no es sólo aquella que actualmente existe sobre los bienes en juego, sino también la entendida en el más amplio sentido de las normativas legales.

El conocimiento puede hacer la diferencia

Uno de los aspectos que el mundo bancario ha enfatizado como parte del proceso de desarrollo es el conocimiento. La diferencia en el desarrollo entre países no

Ignorar una dimensión social general supuso el fracaso de las recetas económicas aplicadas

hace referencia únicamente a la falta de capital, sino también a un desfase importante en términos de conocimiento. No es extraño que Corea, en su estrategia, haya insistido notablemente en la importancia del conocimiento. Incrementar los niveles de conocimiento técnico es un mecanismo para cerrar esa brecha. Gran parte del éxito económico de los coreanos en los últimos años ha estado basado en ello y es, además, en lo que enfatiza actualmente la política educativa de ese país.

Globalización y desarrollo

Es frecuente la confusión entre la globalización y las políticas del Consenso de Washington. La gente ha culpado a la globalización por el fracaso de estas políticas, pero eso no es cierto. Si se observan los países más exitosos del mundo, como los del este asiático, estos han tomado ventaja de la globalización y, en algunos casos, han sido llamados "integradores". Su crecimiento está basado en exportaciones, pero el elemento distintivo de su política económica es que aplicaron la globalización en sus propios términos.

Ellos no respondieron a los dictados ajenos fuera de su país. El resultado fue estructuras políticas muy estables y con un alto nivel de crecimiento económico, más que cualquier otro país del mundo. En los análisis sobre la crisis del este asiático este aspecto es pasado por alto, y se enfatiza en algunos problemas recientes. Pero, aún después de la crisis, el PIB per capita de estos países es ocho veces mayor respecto al que tenían hace 35 años, y dos de los países inmersos en la crisis no han tenido ni un año de contracción económica en los últimos 30, mientras que los otros dos sólo tuvieron un año de crecimiento negativo.

Estos Estados son los más exitosos en términos de crecimiento, estabilidad y reducción de la pobreza. Considerando estos tres criterios, su desarrollo fue asombroso y lo importante es que no siguieron los dictados del Consenso de Washington sino que tomaron las oportunidades de la globalización, particularmente en cuanto a la promoción de exportaciones.

No obstante, los problemas con la globalización son reales. Estos se presentan, por ejemplo, cuando se constituye una compañía o por la injerencia de las instituciones económicas internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), un organismo que gobierna el comercio en el mundo y cuyo resultado es un régimen fundamentalmente injusto. La agenda de las rondas de negociación es diseñada por y para el Norte. La apertura comercial no solo ha dado ganancias de forma desproporcional a los países ricos sino que los países pobres se encuentran en una situación peor. Los países de África Subsahariana, como resultado de los términos de intercambio establecidos, se han convertido en la región más pobre del mundo y, como resultado de la última ronda de negociaciones de la OMC, sus ingresos han disminuido aún más.

Recientemente, Europa ha abierto la mayor parte de sus mercados, excepto el de las armas, pero este hecho es deficiente en tres aspectos. Primero, no se han eliminado los subsidios en la agricultura, lo que significa que los países menos desarrollados no tienen un justo acceso a esos mercados, cuando la agri-

cultura es parte esencial en su economía. Segundo, la apertura sólo se aplica a los países más pobres del mundo en los que, por ejemplo, Ecuador no consta. Tercero, la apertura de mercados sólo la ha llevado a cabo Europa; EEUU y Japón todavía no lo han hecho.

El sistema global de gobierno ha sido fundamentalmente injusto, ha estado dominado por el Norte en función de los intereses comerciales y financieros de los países desarrollados.

La importancia de las ideas y la creatividad

Si bien algunas ideas nos involucran en batallas, no debemos descuidar el campo de la batalla de las ideas mismas. Las políticas están basadas en ideas. Hay evidencia de éxitos y fracasos de ciertas economías, pero ésta es limitada y eso parcialmente se debe a que el mundo está cambiando. El mundo de hoy es diferente de lo que era hace cuarenta años.

Según las políticas del Consenso de Washington, la distribución no es importante, se puede ignorar y puede separarse de lo relacionado con la eficacia. Afirman que lo que realmente determina la economía son simplemente las leyes de la oferta y la demanda. Por ende, cualquier economista que no ha aprendido más que esas leyes, está capacitado para ir a cualquier país y dar buenas recetas para sus problemas. Sus argumentos sobre el intercambio también están errados.

Lo más importante es contar con marcos de análisis (*frames*) apropiados. Las políticas dependen de los modelos teóricos en los que se inscriban. No se puede ver aquello que no está contemplado en el marco teórico; es decir, si en el marco de análisis el desarrollo es igual a crecimiento del PIB, se va a dejar de lado otros factores. Pero si se considera que el desarrollo es algo más que el PIB, se necesitan crear nuevos marcos de análisis que permitan explorar y sugerir políticas. Así, si nos centramos en el PIB, lo hacemos en el crecimiento de la economía, pero con sólo calcular mal este índice ya nos estaríamos basando en las variables equivocadas. Por ejemplo, si nos centramos en un tipo de crecimiento económico fundamentado en la producción, también deberíamos considerar si ese crecimiento de la producción se basa o no en el consumo de su base de recursos naturales, ya que si ese fuera el caso, esa producción no es sustentable y se debe restar del PIB la eliminación de los recursos que el país tiene. Eso depende del marco de análisis. Por eso, si no se tiene un esquema económico correcto se estarán tomando las decisiones económicas equivocadas. Si un enfoque simple basado en el PIB no reconoce que el crecimiento está basado en la eliminación de los recursos naturales del país, se estarán adoptando medidas incorrectas.

Otro ejemplo: si se tiene un marco del PIB que cuenta como gastos transferencia de capital, se puede obtener una balanza comercial que aparece equilibrada, pero que realmente es deficitaria, y eso puede ser un problema cuando una economía se dirige hacia una recesión: lo que parece una balanza comercial sana, en realidad, está agravando el problema. Al mismo tiempo, los marcos contables incorrectos pueden llevar a esconder subsidios. Una vez más, tener los marcos

correctos es tan importante porque permiten identificar subsidios escondidos. Esto es particularmente cierto en programas de largo plazo; por eso en EEUU se ha reformado el esquema de contabilidad pública de manera que se puedan tomar en cuenta los grandes subsidios que frecuentemente están escondidos.

Con las experiencias de éxito en el este asiático uno pensaría que ese sería el destino de la investigación de las instituciones económicas internacionales, es decir, que se trataría de entender qué llevó a ese reciente y enorme crecimiento económico. Pero, por alguna razón, nunca existieron recursos para tal fin. La única explicación que encuentro es que uno de los principales problemas de las ideologías de cualquier clase es precisamente no fortalecer el espíritu de análisis científico. Repetidamente, Japón urgió a las instituciones económicas internacionales a estudiar las experiencias del este asiático y a determinar por qué fueron tan exitosas. Finalmente, se dieron por vencidas y mencionaron que no tenían los recursos suficientes para hacerlo. Japón no solamente tuvo que impulsarlo sino financiarlo, de cuyo esfuerzo resultó el famoso estudio *East Asia, a miracle*.

Ese estudio es muy importante porque demostró las diferencias entre las estrategias del este asiático con aquellas del Consenso de Washington, y fue la base para revisar algunas políticas de desarrollo y aceptar nuevos modelos. Lo más importante es que hay modelos alternativos, no sabemos exactamente cuál es el correcto. Existe el riesgo de utilizar el modelo equivocado, pero hay alternativas. No hay ni debe haber una sola forma de entender la economía. Las diferentes políticas proponen riesgos diferentes y una parte importante del proceso democrático es que la elección de la alternativa debe ser realizada por el país como consecuencia de una discusión democrática.

Lo que hemos aprendido en los últimos cincuenta años es que el desarrollo sí es posible, pero no es inevitable. La equidad y el desarrollo sustentable y democrático son posibles si ideamos un mejor modelo de la economía y un mejor concepto de lo que entendemos por desarrollo.

ROBERTO ALIBONI

Prevención de conflictos en el marco euro-mediterráneo

La prevención de conflictos se puede perseguir de numerosas maneras: mediante actividades a largo plazo de construcción de la paz, o con actividades a corto plazo de diplomacia preventiva; tanto con una agenda de construcción de la paz integrada, como con iniciativas específicas de seguridad humana; de forma multilateral o bilateral. Todas estas opciones están contempladas en la Declaración de Barcelona. Sin embargo, hasta el momento, los países euro-mediterráneos no se han acogido a las opciones englobadas en la diplomacia preventiva por las mismas razones que frenaron el desarrollo de su cooperación política y de seguridad. En la actualidad, la Asociación Euro-Mediterránea se inclina hacia una agenda que incluye, de forma casi exclusiva, la prevención a largo plazo. Este texto es un extracto del informe presentado en el Grupo de Trabajo sobre Asuntos de Interés Mutuo del Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo), que tuvo lugar el 14 y 15 de agosto de 2002 en Barcelona.

Roberto Aliboni es vicepresidente del Instituto de Asuntos Internacionales (IAI) de Roma

Traducción:
Leandro Nagore

La Declaración de Barcelona¹ se puede considerar como un régimen de construcción de la paz internacional. Según la definición del Grupo Internacional de Crisis (ICG, por sus siglas en inglés), los regímenes de construcción de la paz internacional son aquellas "leyes internacionales, normas, acuerdos y sistemas, cuyos

¹ La Declaración de Barcelona es el resultado de la reunión, en noviembre de 1995 en Barcelona, de los representantes de los 27 socios euro-mediterráneos (los 15 Estados miembros de la UE y los 12 socios mediterráneos: Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Israel, Jordania, Autoridad Palestina, Líbano, Siria, Turquía, Chipre y Malta) con tres objetivos principales: preservar la paz y estabilidad en la región; instaurar una zona compartida de prosperidad mediante el establecimiento de un área de libre comercio; promover el entendimiento entre las diferentes culturas. (N. de la E.)

ámbitos pueden ser globales, regionales o bilaterales, diseñados para minimizar los riesgos a la seguridad, para promocionar la confianza y, además, para generar los marcos necesarios para el dialogo y la cooperación”.² Están dirigidos a la prevención de conflictos y a la gestión tras el conflicto, incluyendo la prevención para evitar que los conflictos se intensifiquen.

La Declaración no se dirige de forma exclusiva a la prevención de conflictos y, de hecho, en ningún momento habla de ella. Sólo ha sido invocada de forma esporádica en los diversos borradores de la Carta para la Paz y la Estabilidad elaborada por altos funcionarios. Sin embargo, la Declaración se consagra de forma inherente a la prevención de conflictos y constituye en sí un importante régimen de construcción de la paz.

Que la prevención de conflictos sea la tarea principal de la Declaración de Barcelona se confirma, de forma indirecta, por dos circunstancias. La primera es que excluye la resolución de conflictos de sus propios objetivos al declarar que la “iniciativa euro-mediterránea no pretende sustituir a las demás actividades e iniciativas suscritas en el interés de la paz, la estabilidad, y el desarrollo de la región”, dejando claro que tal exclusión se refiere ante todo al Proceso de Paz en Oriente Medio. No obstante, no excluye la gestión de los conflictos y su posible prevención. La segunda circunstancia se encuentra al final del capítulo que ilustra la asociación política y de seguridad, donde hace referencia a “la posibilidad a largo plazo de establecer un pacto euro-mediterráneo para la consecución de este fin”. Aún cuando no especifique a qué tipo de pacto se refiere, sabemos gracias a los trabajos previos, que los europeos, y sobre todo Francia, propusieron el concepto de un pacto de estabilidad. Los socios del Sur no estaban preparados para comprometerse con un acuerdo de estas características, aunque no lo descartaban. Lo que queda de todo esto es una alusión a un instrumento típico de la prevención de conflictos.³ En todo caso, esta alusión es esencial para comprender los sentimientos que presidieron al establecimiento de la Asociación Euro-Mediterránea y la amplitud de miras que le es inherente. Por consiguiente, la prevención de conflictos parece ser una característica significativa e intrínseca del Proceso de Barcelona.

¿Qué concepto de prevención de conflictos encaja con la Declaración de Barcelona?

Las actividades de prevención de conflictos pueden ser consideradas como respuestas, tanto a corto como a largo plazo, a las crisis y a los conflictos. A corto plazo, la prevención aísla los síntomas de una crisis e interviene para suprimirlos o corregirlos. A largo plazo, identifica las raíces más profundas de las posibles crisis y conflictos y actúa para asentar los fundamentos estructurales de la paz. En el

² ICG, *Capacidad de respuesta de la UE ante una crisis. Instituciones y procesos para la gestión y prevención de conflictos*, ICG Issues Report, Bruselas, 2001, Nº 2, p. 3.

³ Véase el pacto de estabilidad que los miembros de la Unión Europea implantaron de forma exitosa en el marco de la CSCE/OSCE y posteriormente en los Balcanes.

primer caso es una respuesta encaminada al mantenimiento de la paz, mientras que en el segundo el objetivo es la construcción de la paz. Para hacer uso de las definiciones que ofrece la Comisión de la Unión Europea, se podría decir que, mientras la prevención de conflictos a corto plazo tiene por tarea “reaccionar con rapidez a un conflicto naciente”, el objetivo de la prevención a largo plazo es la “proyección de la estabilidad”.⁴

En la primera mitad de los años noventa, bajo la presión de numerosos conflictos emergentes —sobre todo en el mismo seno de los Estados— la comunidad internacional se preocupó más por la necesidad de implementar la diplomacia preventiva en sus numerosas facetas. Esta prioridad a corto plazo se plasmó con gran nitidez en el documento redactado por el entonces secretario general de Naciones Unidas, Boutros Boutros Ghali, *Programa para la Paz*.⁵ Sin embargo, rápidamente, se abrió camino al núcleo de la problemática: la relación entre los conflictos y los factores políticos, y la naturaleza socioeconómica de los mismos.

Esta relación proviene de dos fuentes diferenciadas: la primera, del renovado vigor del humanismo y el interés por lo humanitario en el contexto del fin de la Guerra Fría; y la segunda, de la percepción creciente respecto a las relaciones a largo plazo entre el desarrollo socioeconómico y los conflictos, sobre todo en el marco de las organizaciones internacionales económicas. La primera tendencia ha hecho que surja el concepto de seguridad humana, “una forma alternativa de ver el mundo, con los seres humanos como punto de referencia, y sin centrarse exclusivamente en la seguridad del territorio y de los gobiernos”.⁶ El segundo aspecto ha traído consigo el concepto de estabilidad estructural, “una situación caracterizada por el desarrollo económico sostenible, la democracia⁷ y el respeto por los derechos humanos, estructuras políticas viables, y un ambiente social y medio ambiental saludable, con la capacidad para gestionar el cambio sin tener que recurrir al conflicto violento”.⁸

Actualmente se desarrolla un importante esfuerzo de consolidación de la paz en el ámbito internacional, con el objetivo de alcanzar la estabilidad estructural por medio de la intervención en el origen mismo de los conflictos. La seguridad humana está enmarcada en el concepto de estabilidad estructural. No obstante, varios objetivos de la seguridad humana se persiguen de forma *ad hoc*, como la prohibición de los niños soldados y la regulación de las armas cortas. Esta tendencia ha sido alentada por la iniciativa de los Gobiernos de Noruega y Canadá para el esta-

⁴ *Comunicado de la Comisión sobre Prevención de Conflictos*, COM (2001) 211 fin., Bruselas, 11 de abril de 2001, p. 6.

⁵ Boutros Boutros Ghali, *Programa para La Paz*, Naciones Unidas, Nueva York, 1992.

⁶ En palabras del ministro canadiense de Asuntos Exteriores, Anxworthy, citado por Astri Suhrke, “Seguridad humana y los intereses de los Estados”, *Security Dialogue*, septiembre de 1999, Vol. 30, Nº 3.

⁷ En esta definición se hace referencia al concepto de democracia como se definió en Atenas en el siglo V con la aparición de la filosofía y la dialéctica.

⁸ Las definiciones incluidas en este artículo provienen de la guía del SWP-CPN (Conflict Prevention Network), *Prevención de Conflictos y la Consolidación de la Paz: Una Guía Práctica*, Berlín, diciembre de 2001.

*Actualmente
se desarrolla
un importante
esfuerzo de
consolidación
de la paz en
el ámbito
internacional,
con el
objetivo de
alcanzar la
estabilidad
estructural
por medio de
la interven-
ción en el
origen mismo
de los
conflictos*

blecimiento de una Red de Seguridad Humana.⁹ Por tanto, la estabilidad estructural se pretende conseguir mediante programas integrados o por iniciativas específicas de construcción de la paz.

Se realizan actividades de construcción y de mantenimiento de la paz tanto a nivel multilateral como bilateral. Las actividades centradas en el mantenimiento de la paz suelen ser desarrolladas por organizaciones multilaterales o por coaliciones internacionales *ad hoc*. El bilateralismo no es muy frecuente en este caso. Por el contrario, la construcción de la paz, aunque perseguida principalmente por las organizaciones internacionales, también figura de forma significativa en las agendas bilaterales, sobre todo cuando se trata de cooperación al desarrollo.

Percepciones del Norte y del Sur

En el ámbito de la Asociación Euro-Med, actualmente existe un concepto predominante de prevención a largo plazo. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto este concepto es compartido por los socios del Norte y del Sur. De hecho, existen importantes limitaciones y ambigüedades en la forma y la extensión con la que se comparte este concepto.

La opinión en los países más desarrollados es que la democracia está ligada, por una parte, al desarrollo y, por otra, a la paz. La correlación entre paz y democracia se fundamenta en el conocido precepto kantiano de que los "Estados republicanos", dentro de un ambiente de legalidad internacional, no van a la guerra entre sí. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos del concepto de "paz democrática". En cuanto a la correlación entre la democracia y el desarrollo socio-económico, Amartya Sen la ha definido como un proceso en el que el número y la calidad de las libertades individuales fomentan e incrementan el crecimiento económico.¹⁰ En términos más prosaicos, la democracia debilita y diluye las restricciones al desarrollo económico y, a su vez, se alimenta de ello. La democracia, o la democratización, se considera como un factor que cambia y reduce el papel del Estado en la economía junto con toda concentración de riqueza y de poder. Hace que sea posible la liberalización de la economía y abre el camino a la privatización. Introduce y refuerza la estabilidad. El crecimiento económico posible gracias a la estabilidad, permite, a su vez, que aumente el empleo y se reduzca la pobreza. Esta situación ayuda, y mucho, a reducir conflictos.

Lo que se impugna entre el Norte y el Sur en la Asociación Euro-Med no es el argumento en sí, sino su significado y verdadera aplicación en la práctica. Existen dos grandes diferencias respecto de la prioridad entre la democratización y el desarrollo económico; y el contenido y significado de la democracia y los derechos humanos ante valores y percepciones culturales relativas. Mientras la cuestión de la prioridad es de especial importancia para los Gobiernos entrantes, la necesidad

⁹ Ver www.humansecuritynetwork.org. Sobre la forma en la que evolucionó la Red de Seguridad Humana, Astri Suhrke, *op.cit.*

¹⁰ Amartya Sen, *Lo sviluppo è libertà*, Mondadori, Milán, 2000. También, Alfred A. Knopf, *Development as Freedom*, Inc., Nueva York, 1999.

de una visión cultural relativista goza de mayor relevancia y tiene más interés para las sociedades civiles, los intelectuales y los grupos opositores.

Respecto a la prioridad, la percepción de los países del Norte tiende a considerar la democracia como el elemento clave para el desarrollo, mientras que para los países del Sur el desarrollo, una vez alcanzado, facilitaría el advenimiento, en más o menos tiempo, de la democracia. El Norte suele considerar el crecimiento económico y político como un único proceso fuertemente interrelacionado. En el Sur se percibe como un proceso por etapas. Tanto el Norte como el Sur, aunque con diferentes grados y de formas distintas, reconocen la relación que existe a largo plazo entre la prevención de conflictos, por una parte, y la reforma política y económica, por otra. Difieren en la relación específica entre las reformas políticas y económicas.

En la década de 1990, los países del Norte realizaron un esfuerzo significativo para combinar las reformas políticas con las económicas en la perspectiva de la prevención de conflictos. El Comité de Ayuda para el Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Europea han "integrado" la prevención de conflictos en sus respectivas agendas de cooperación sociopolítica y para el desarrollo. Esta integración conlleva dos implicaciones: a largo plazo existe una relación entre las reformas políticas y económicas y la prevención de conflictos; y, mientras las reformas económicas facilitan los cambios políticos y la democratización, las reformas económicas no pueden dar su fruto sin las reformas políticas.

Un ejemplo de la integración de la prevención de conflictos en la cooperación al desarrollo se refiere a la pobreza. Ésta es el resultado de desigualdades sociales y económicas profundamente asentadas y difusas. A su vez, la desigualdad es un importante obstáculo en el camino hacia el desarrollo sostenible y tendría una relación significativa con los conflictos. La pobreza es considerada como un factor de procesos multidimensionales de exclusión. "Las dimensiones de la pobreza cubren distintos aspectos de las capacidades humanas: económicas (renta, sustento, trabajo decente), humanas (salud, educación), políticas (habilitación, derechos, voz), socioculturales (estatus, dignidad) y protectoras (inseguridad, riesgo, vulnerabilidad)".¹¹ Todas estas dimensiones están inextricablemente ligadas las unas a las otras como fuentes potenciales de conflicto. Por consiguiente, según la perspectiva del Norte, la pobreza no puede ser erradicada exclusivamente por medios económicos. Su erradicación también requiere, entre otras, una acción de habilitación y un proceso general de democratización.

Mientras desde la perspectiva del Sur el desarrollo económico es una prioridad que está casi desvinculada de las reformas políticas, los países occidentales ven la necesidad de contar con la democracia política y el carácter complementario de las reformas políticas y económicas.

Por otra parte, para los socios del Sur la democracia y los derechos humanos son considerados como conceptos dotados de cierta relatividad cultural. La rela-

¹¹ Ver la "Declaración de Política de la Reunión de Alto Nivel del CAD tras la aprobación de las Líneas Directrices sobre la Reducción de la Pobreza" y CAD, *Ante la pobreza: Hacer frente al reto global mediante la cooperación*, Líneas Directrices del CAD sobre la Reducción de la Pobreza, Resumen, París, 25-26 de abril de 2001.

ción, que tanto subrayan los socios del Norte, entre democratización y desarrollo económico es percibida como una injerencia por la que se ven presionados a aceptar un concepto de democracia que les es ajeno, como requisito para poder acceder a los recursos necesarios para la consecución del crecimiento económico sostenible.

En los países del Sur son muchas las personas convencidas de que la democracia aporta estabilidad y, por tanto, a largo plazo, ayuda a prevenir conflictos. En todo caso, desean permanecer libres para ejecutar sus propios conceptos; por ejemplo, reformas políticas apoyadas en conceptos y valores distintos a los occidentales. Los sectores no gubernamentales en el Sur no sólo perciben la injerencia del Norte. Ven la insistencia de éste en la afirmación de su modelo de democracia racionalista como un pretexto ofrecido a los regímenes autoritarios para rechazar todo tipo de reforma política.

¿La prevención de conflictos en la Asociación Euro-Mediterránea es unificadora o segregadora?

En cierta medida, es un proceso unificador ya que todas las partes están convencidas de que es necesario implementar reformas para poder sostener los cambios estructurales que, a su vez, permitirán mantener relaciones pacíficas. Cuando se trata de la forma en la que deben de ser implementadas las reformas, el concepto se vuelve segregador o potencialmente segregador.

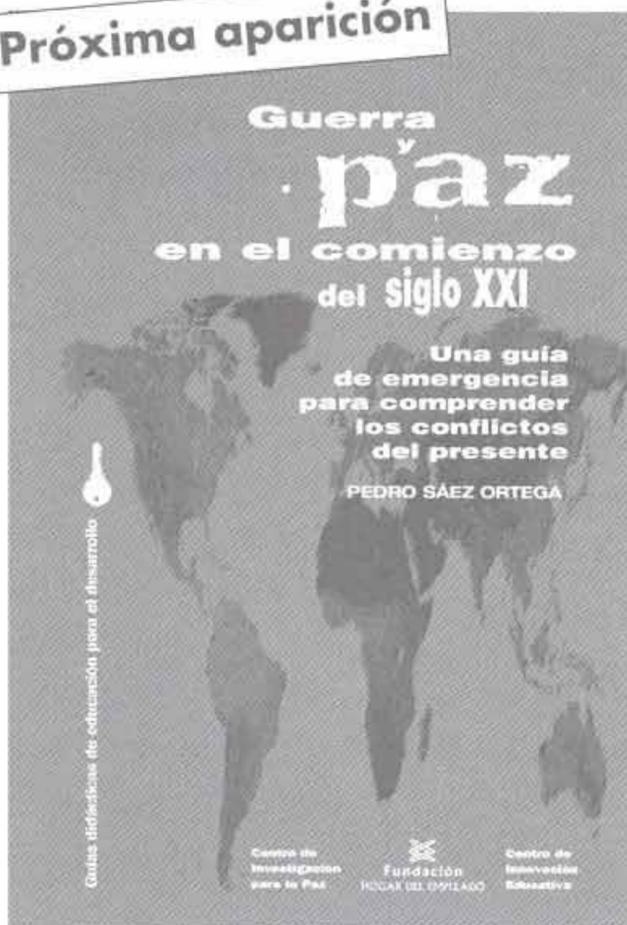
La confrontación en el marco euro-mediterráneo entre el Norte y el Sur respecto del compás a seguir y de la relación entre las reformas políticas y económicas se debe, en parte, a motivos conceptuales e ideológicos, como también, a circunstancias y conveniencias políticas. Independientemente de los motivos para esta confrontación, y aún cuando la distancia que los separa no pueda ser eliminada, puede y debe ser reducida. Una primera aproximación podría ser mediante la reducción del unilateralismo que los socios del Sur perciben en los conceptos políticos que esgrimen los europeos, y en el papel que se espera que desempeñen estos conceptos en el proceso de la cooperación. Para acortar las diferencias se trataría de desarrollar todas las oportunidades de debate y diálogo que sea posible tanto a nivel gubernamental como civil. En este sentido, la inclusión de los países interesados en el proceso que genera los informes estratégicos de la Unión Europea, es tan importante como el fortalecimiento del dialogo político y, en términos generales, de todo el proceso institucional del proceso euro-mediterráneo.

Otra forma de perseguir el mismo objetivo, pero de forma más estructural, sería la actualización de la co-propiedad en el marco institucional euro-mediterráneo. En la actual Asociación Euro-Med las reformas son menos un asunto que pertenece a los socios, que un proceso (más o menos) impuesto por la condicionalidad de la Unión Europea. Pero, si se desea que las reformas no sean percibidas por los socios del Sur como un mero producto del unilateralismo de la Unión Europea, deberían permanecer principalmente en manos de los países involucrados. Un proceso euro-mediterráneo más equilibrado, tanto política como institu-

cionalmente, permitiría que las partes lleguen a compromisos más convincentes y operativos respecto de las prioridades reformadoras (reformas políticas contra reformas económicas) y, por encima de todo, sobre los procedimientos y los contenidos de la reforma política.

Las políticas referidas en el texto, una vez mejorado el consenso respecto a las reformas, harían de la prevención de conflictos un concepto más unificador de lo que es en la actualidad. De esta manera, se fortalecería el objetivo de prevención de conflictos de las políticas que se desarrollan actualmente en el marco euro-mediterráneo.

Próxima aparición



Guerra y paz en el comienzo del siglo XXI

Una guía de emergencia
para comprender los
conflictos del presente

Edita: CIP-FUHEM.
Madrid 2002. 206 páginas.

SUMARIO

Una lectura del 11 de septiembre de 2001 • La crisis del presente, a vista de pájaro • Estrategias educativas para abordar el futuro • Propuestas didácticas en torno al 11 de septiembre • Materiales para saber y hacer más

Este libro es una guía para comprender la realidad internacional, con especial atención a los conflictos armados, sus manifestaciones y raíces. Con un estilo didáctico, este riguroso análisis se ocupa de cuestiones como el papel de las religiones como factores de guerra o vehículos de paz, el supuesto "choque de civilizaciones" y las legitimaciones para un nuevo imperialismo y los estereotipos sobre el islam como nuevo "enemigo" de Occidente. Orientado hacia educadores, *Guerra y Paz en el comienzo del siglo XXI* proporciona información, análisis y bibliografía para comprender los grandes problemas mundiales de forma global e interrelacionada. A la vez, presenta reflexiones sobre las posibilidades y límites de su traducción al espacio educativo y ofrece un conjunto de propuestas didácticas para tratar estas cuestiones desde un enfoque crítico e innovador.

BOLETIN DE PEDIDO

- Deseo recibir la guía didáctica
Guerra y paz en el comienzo del siglo XXI
P.V.P. 10 € (España: gastos de envío incluidos).
206 páginas

FORMA DE PAGO

- Talón bancario a nombre de Fundación Hogar del Empleado
- Giro postal a nombre de Fundación Hogar del Empleado
- Contra reembolso
- Transferencia bancaria a:
Banco Popular. C/ O' Donnell, 22. 28009 Madrid.
Nº Cuenta: 0075 0251 11 0600005047

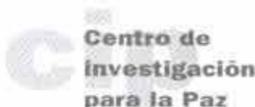
DATOS PERSONALES

Nombre:.....
Apellidos:.....
Dirección:.....
Localidad:.....
Provincia:.....
CP: Teléfono:.....

Los datos que usted nos facilita pasarán a los archivos de la Fundación Hogar del Empleado y su grupo de empresas, y serán tratados como exige la ley de Protección de Datos en vigor. Usted tiene derecho a acceder a su información, así como cancelarla o rectificarla.

Igualmente, puede solicitar su pedido
e información sobre nuestras publicaciones a:


Fundación
HOGAR DEL EMPLEADO


Centro de
investigación
para la Paz

Duque de Sesto, 40 - 28009 MADRID
Tel.: 91 431 04 06 - Fax: 91 576 32 71 - Web: cip.fuhem.es - E-mail: cip@fuhem.es

Los peligros de un ataque nuclear	37
El fin de una ilusión	39
Brasil: las perspectivas de Lula	45
Costa de Marfil: el fin de la excepción	57
Demasiado sofisticada para la guerra	63
Retos y oportunidades para la paz en Sri Lanka	67
Argelia: inmovilismo político, dependencia económica y tensiones sociales	73
Mafia y crimen organizado transnacional	81

EDWARD M. KENNEDY

Los peligros de un ataque nuclear

Ante la noticia de la posibilidad de un ataque nuclear por parte de EEUU a Irak, el senador Edward M. Kennedy llama la atención sobre lo errado de esta medida y previene sobre los peligros de la misma. Este texto fue publicado originalmente el 29 de enero de 2003 en "Los Angeles Times".

Nuestras referencias al uso de armamento atómico nos pone en grave peligro. El concepto de ataque nuclear preventivo contra Irak lleva la semilla de un desastre mundial.

Este peligroso mundo acaba de hacerse aún más peligroso. La noticia de que el Gobierno está considerando la posibilidad del uso preventivo de armamento nuclear en Irak debería desatar las sirenas de alarma, pues ésta no sólo puede ser una guerra equivocada en un momento equivocado, sino que podría escapar a cualquier control de un momento a otro. Tomar la iniciativa acudiendo a armamento nuclear haría del conflicto con Irak una catástrofe en potencia.

El presidente Bush tiene una oportunidad el martes por la noche (4 de febrero) para justificar o explicar la necesidad de dar un giro tan radical a nuestra política tradicional. Un cambio de tal magnitud debe, como mínimo, plantearse en el Congreso para que sea debatido antes de que EEUU entre en guerra contra Irak.

La información sobre un ataque nuclear preventivo resulta consecuente con la línea extremista destacada hace un año en el Informe de Política Nuclear del presidente Bush, y con el desdén de este Ejecutivo por las tradicionales normas de comportamiento internacional.

Según esta información, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld ha ordenado al Comando Estratégico estadounidense la planificación del empleo de armas nucleares en una amplia gama de nuevas misiones, que incluye la posibilidad de usarlas en Irak para destruir búnkeres subterráneos.

Este uso sin precedentes del arsenal nuclear nacional se convertiría en la decisión más desastrosa desde el ataque atómico sobre Hiroshima. La mera consideración de un ataque preventivo con armamento nuclear en las circunstancias actuales y contra una nación no nuclear, difumina peligrosamente la histórica y crucial distinción entre armamento convencional y atómico. En el caso de Irak, la opción atómica resulta absurda.

Edward M. Kennedy es senador demócrata del estado de Massachusetts (EEUU)

Traducción: Eric Jalaín

Las armas nucleares forman una categoría aparte por buenas razones: por su incomparable poder de destrucción y por su capacidad para amenazar realmente la supervivencia de la humanidad. Siempre han quedado separadas de otras alternativas militares por un profundo compromiso de hacer todo lo posible para que no vuelvan a ser utilizadas. Tan sólo deben usarse en las circunstancias más extremas: por ejemplo, si está amenazada la existencia de nuestra nación. No tiene sentido eliminar el “cortafuegos” que durante medio siglo ha apartado la guerra atómica de otras formas de guerra. Una bomba nuclear no es una opción cualquiera dentro de un arsenal.

Nuestro ejército es la fuerza de combate más poderosa del planeta. Podemos luchar y ganar una guerra en Irak con bombas de precisión y con nuevas armas convencionales muy sofisticadas. El presidente Bush no ha demostrado que Irak suponga una amenaza a nuestra seguridad nacional tan inminente como para ni tan siquiera ir a la guerra; mucho menos como para destapar la botella del genio atómico.

Planteando la posibilidad de que el armamento nuclear pudiera formar parte de un ataque preventivo contra Irak, El Gobierno tan sólo está logrando aumentar entre la comunidad internacional una reputación de EEUU como desconsiderado unilateralista; una reputación que en el fondo debilita nuestra propia seguridad. La amenaza nuclear va a alejarnos aún más de nuestros aliados, la mayoría de los cuales siguen sin estar convencidos de la necesidad de una guerra con Irak. Y resulta básicamente contrario a nuestros intereses nacionales tensar aún más unas relaciones que nos son esenciales para ganar la guerra contra el terrorismo y para promover en el mundo nuestros ideales.

Esta política también agrava el peligro de la proliferación nuclear pues, en efecto, viene a decir a Estados no nucleares que las armas atómicas son necesarias para evitar un potencial ataque estadounidense, a la par que para los Estados nucleares del mundo se abriría la veda que permite el uso de armas atómicas. ¿Es este el ejemplo que queremos dar a Corea del Norte, Pakistán e India, o a cualquier otra potencia nuclear?

El uso de armas nucleares en Irak sin que exista una amenaza inminente y abrumadora contra nuestra seguridad nacional, conduciría a una ruptura casi total de relaciones entre EEUU y el resto del mundo. Y como mínimo, provocaría un aumento masivo del “antiamericanismo” en el mundo árabe, con el consecuente incremento de simpatía hacia los terroristas que intenten hacernos daño. Nuestra nación, tradicional faro de esperanza, se convertiría de la noche a la mañana en símbolo de muerte, destrucción y agresión.

En la presentación el pasado otoño de su estrategia de seguridad nacional, el presidente Bush declaraba: “El mayor peligro al que se enfrenta nuestra nación consiste en el cruce entre radicalismo y tecnología”. Reflexión más que acertada, en la medida en que la radical consideración del Gobierno del uso de nuestro arsenal nuclear contra Irak es en sí misma un grave peligro para nuestros intereses nacionales, para nuestra nación y para todo lo que EEUU defiende.

JOSÉ LUIS GÓMEZ DEL PRADO

El fin de una ilusión

La promulgación de la doctrina del presidente George W. Bush ha terminado con la ilusión de una seguridad colectiva y de la prohibición de la guerra. No podemos más que rendirnos a una evidencia que salta a la vista. La política exterior de EEUU durante todos los años marcados por la Guerra Fría, a pesar de sus reivindicaciones democráticas y de lucha por la libertad y la protección de los derechos humanos, no ha perseguido otro fin que el de sus propios intereses. La obsesión "antiterrorista" reemplaza hoy a la obsesión "anticomunista" de antaño. La única respuesta del Gobierno estadounidense es la guerra.

José Luis Gómez del Prado es ex funcionario de Naciones Unidas

Con la creación de Naciones Unidas, en 1945, los vencedores de la II Guerra Mundial tuvieron como objetivo primordial "preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra". Por primera vez en la historia de la humanidad se prohibía la guerra y se creaba un sistema de seguridad colectiva en el ámbito internacional, que asegurara que no se haría uso de la fuerza armada "sino en servicio del interés común".¹

Durante estos últimos cincuenta años hemos vivido la ilusión de que el sistema que se había puesto en marcha con la creación de Naciones Unidas, a pesar de sus imperfecciones y del equilibrio de terror nuclear que se instaló entre las dos superpotencias durante la Guerra Fría, podía funcionar. Se ha hecho abstracción de todas las atrocidades de las que hemos sido testigos desde el final de la II Guerra Mundial: guerras de Corea, Indochina y Vietnam, Camboya, Congo ex-belga, guerras en los Grandes Lagos de África, en Centroamérica, en Medio Oriente, en ex-Yugoslavia, entre otras, seguidas de sus secuelas de genocidios, masacres y hambrunas.

La ilusión ha podido mantenerse gracias, en gran parte, al desenlace afortunado bajo los auspicios de Naciones Unidas de la crisis de los misiles soviéticos instalados en Cuba. El proceso de descolonización en el marco de Naciones Uni-

¹ Carta de Naciones Unidas, Departamento de Información de Naciones Unidas, OPI/511.

das que culminó con la independencia de Namibia y el fin del *apartheid* en Suráfrica, han sido también elementos positivos que nos han hecho mantener la ilusión, así como las operaciones de paz emprendidas por Naciones Unidas en Centroamérica que pusieron de relieve que un enfoque más dinámico de la paz era posible.

Durante los mandatos presidenciales estadounidenses anteriores, la propaganda a través de sus medios de comunicación masivos nos hacía aceptar, con mayor o menor éxito, los objetivos y las consecuencias expansionistas de la política estadounidense. La ventaja con el presidente actual es que las mentiras de Nixon, Reagan, Carter, Bush padre y Clinton aparecen como un trabajo de orfebrería fina frente a las burdas mentiras de George W. Bush y de su Gobierno apoyadas por su fiel sirviente británico.² Resulta imposible, aún con la mejor voluntad del mundo, no preguntarse si la Guerra Fría o las acciones que ha llevado a cabo EEUU en nombre de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos no han sido sino una enorme superchería y que lo único que les ha interesado en todo momento ha sido sus propios intereses. El empeño del Gobierno de Bush por llevar al mundo a una guerra contra Irak ha hecho caer la máscara: el rey está desnudo.

Es cierto que el principio de seguridad colectiva proclamado en la Carta de Naciones Unidas nunca ha podido implementarse verdaderamente. Únicamente en dos ocasiones se ha puesto en marcha una coalición internacional para parar una agresión de una nación contra otra: en 1950 en Corea y en 1990 con la invasión de Kuwait por Irak. Pero, en esas dos ocasiones, la reacción de la comunidad internacional se hizo más bien en nombre de que por Naciones Unidas, como muy bien señaló el secretario general Pérez de Cuellar con respecto a Irak, ya que la disposición de crear un Comité de Estado Mayor como lo prevé la Carta nunca ha sido aplicada.

Resulta difícil no tener presente la referencia de Noam Chomsky a una quinta "libertad" que los estadounidenses hubieran añadido a las cuatro famosas libertades proclamadas por el presidente Roosevelt, y que han constituido uno de los fundamentos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, "la de robar, explotar y dominar".³

Nunca en los cincuenta años desde que se creó la ONU, la hipocresía de un miembro permanente de utilizar para sus propios intereses el propósito de la Carta de Naciones Unidas de no usar "la fuerza armada sino en servicio del interés común", se ha presentado tan cruda y desprovista de argumentos como en la pre-

² El 5 de febrero, el secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, presentó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las "pruebas" tan demandadas por inspectores de la ONU, miembros del Consejo de Seguridad y la comunidad internacional. Dichas "pruebas" resultaron poco convincentes. Hasta tal punto que algunos de los emplazamientos señalados por Powell ya habían sido visitados por los inspectores, y las autoridades iraquíes se complacieron en enseñárselos a la prensa internacional. Respecto al discurso de apoyo que pronunció el ministro de Asuntos Exteriores británico, Jack Straw, y que fue muy elogiado por el representante estadounidense, resultó ser un plagio de una tesis de un estudiante estadounidense realizada hace más de doce años.

³ Noam Chomsky, *The Culture of Terrorism*, South End Press, Boston, 1987.

sente obstinación del Gobierno estadounidense por hacer la guerra, no sólo a Irak sino a cualquier nación que EEUU considere como parte del “eje del mal”.

El derrumbamiento del muro de Berlín, en 1989, y el desmantelamiento de un sistema bipolar de seguridad a cargo de la Unión Soviética y de EEUU, ha confirmado el auge de la hegemonía estadounidense que se venía afirmando desde principios del siglo XX. Las actuaciones, dentro de Naciones Unidas, en Somalia, conflicto Irak-Kuwait y ex-Yugoslavia; y fuera de la ONU y sin ningún mandato del Consejo de Seguridad, en Kosovo en 1999 con el ataque de la OTAN a Yugoslavia, corroboran el dominio de la política exterior estadounidense.

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington no pueden servir, únicamente a ellos, para justificar el síndrome belicista del presidente Bush. Constituyen más bien la oportunidad para poner en práctica una doctrina elaborada por los ultraconservadores de su equipo. Tras haber invadido Afganistán en busca de la red de Osama Ben Laden, el Gobierno estadounidense apunta ahora a Irak. Casualidad geo-estratégica, tanto Irak como Irán se hayan en la encrucijada donde se encuentran las mayores reservas petrolíferas no sólo de Oriente Medio sino también de todos los países de Asia anterior, y en el confín, junto con Afganistán, del mundo ruso, chino, indio y árabe: el nuevo centro estratégico del mundo.⁴ No es de extrañar que, junto a Irak, otro de los miembros que actualmente forman parte del “eje del mal” sea Irán.

La doctrina del presidente Bush, que oficialmente dio a conocer el 20 de septiembre de 2001, había sido ya elaborada en 2000, meses antes de su entrada en función. Los fundamentos ideológicos, económicos, políticos y militares de su política extranjera habían sido descritos en dos informes de la fundación Project for a New American Century.⁵ En dichos documentos, elaborados por sus más próximos colaboradores, que forman parte del complejo militar-industrial, se trata el problema iraquí desde el punto de vista de los intereses estadounidenses, y se proclama que el objetivo de EEUU es alcanzar la hegemonía indiscutible del planeta. A fin de defender los valores y los intereses estadounidenses se recomienda el recurso a guerras preventivas.

Argumentos del presidente de EEUU y su equipo ultraconservador

Después de haber tratado en vano de implicar al régimen de Sadam Husein con la red de Ben Laden⁶ y los atentados terroristas en EEUU —el antrax que al final

La doctrina del presidente Bush, que oficialmente dio a conocer el 20 de septiembre de 2001, había sido ya elaborada en 2000, meses antes de su entrada en función

⁴ Paul-Marie de la Gorce, “Le Sud-Ouest asiatique, nouvel axe du monde”, *L'empire contre l'Irak, Manières de Voir*, París, enero-febrero 2003.

⁵ Eric Rouleau, “De la propagande et de ses ratés”, *Le Monde diplomatique*, París, febrero 2003.

⁶ El vídeo que la agencia de prensa Al-Jazeera transmitió el 12 de febrero de 2003 en el que Osama Ben Laden apoya a la población musulmana iraquí, y al que el secretario de Estado, Powell, otorgó la máxima publicidad, a los estadounidenses les viene como anillo al dedo.

Donald Rumsfeld parece sufrir de amnesia y haber olvidado sus contactos diplomáticos en 1983 en Bagdad con Sadam Husein, mientras el dictador iraquí atacaba con armas de destrucción masiva a los combatientes iraníes

resultó ser de procedencia nacional—, se le reprocha a Sadam Husein ser un dictador sanguinario y un violador de los derechos humanos del pueblo iraquí; de no respetar las decisiones de Naciones Unidas; de tener contactos con grupos terroristas; de constituir una amenaza para los intereses vitales de EEUU y de la comunidad internacional en general; de poseer armas nucleares, biológicas y químicas de destrucción masiva o tratar de obtenerlas.

Sadam Husein es sin duda un dictador, un violador de los derechos humanos más fundamentales, un criminal de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Pero la propaganda estadounidense pasa por encima dos cosas importantes. Primero, que EEUU nunca ha hecho la guerra para destituir a un dictador. Por el contrario, a lo largo de su historia, EEUU ha provocado golpes de Estado para instalar regímenes dictatoriales (contra Mossadegh en Irán, contra Arbenz en Guatemala, contra Allende en Chile); ha mantenido a dictadores (Batista en Cuba, Somoza en Nicaragua, Trujillo en República Dominicana, Mobutu en Zaire) o mantiene estrechas relaciones con los dictadores más sanguinarios (gran recibimiento en la Casa Blanca, en septiembre de 2002, al dictador Obiang de Guinea Ecuatorial).

Segundo, nos quieren hacer olvidar que EEUU colaboraba muy estrechamente con el dictador iraquí durante la guerra irano-iraquí. El actual jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, parece sufrir de amnesia y haber olvidado sus contactos diplomáticos en 1983 en Bagdad con Sadam Husein, mientras el dictador iraquí atacaba con armas de destrucción masiva a los combatientes iraníes. También parece no recordar que gracias a los créditos otorgados por Washington, Sadam Husein pudo atacar con armas químicas, en 1988, a la población kurda de Halabja con aviones Mirage franceses, y comprar la tecnología avanzada estadounidense de Union Carbide y Honeywell, así como de otras empresas francesas, inglesas, alemanas, rusas o chinas. Es verdad que en ese momento Irak formaba parte, según EEUU, del “eje del bien”.

Sí, Sadam Husein constituye una amenaza, pero para su propio pueblo. Irak no parece representar una amenaza ni siquiera para las naciones fronterizas. Si así fuera, ya se hubieran encargado éstas de atacarlo como lo hizo Israel, en 1981, de manera “preventiva” destruyendo una central atómica en construcción. El embargo internacional que sufre Irak desde 1990, y los bombardeos que EEUU y el Reino Unido realizan unilateralmente sobre territorio iraquí desde 1998, constituyen un uso de la fuerza que viola el Artículo 2(4) de la Carta de Naciones Unidas. La guerra y todas estas acciones han reducido a gran parte de la población iraquí a la miseria y la pobreza.⁷ Si Irak poseyera armas de destrucción masiva, el peligro sería mucho mayor en caso de un ataque de lo que es actualmente.

En cuanto al no respeto de las resoluciones de Naciones Unidas, se necesita tener pocos escrúpulos al querer hacer creer ese argumento cuando existe otro país mercenario de EEUU para llevar a cabo sus más bajas faenas, Israel, que nunca ha respetado una sola resolución de Naciones Unidas y que ostenta el triste récord de la más larga ocupación extranjera de territorios que no son suyos.

⁷ Según Unicef, más de 500.000 niños han perecido a consecuencia de las secuelas de la guerra de 1991 y del embargo internacional, y actualmente mueren cada mes entre 5000 y 7000 menores.

Además, un tribunal belga ha inculpado recientemente a su actual primer ministro, Ariel Sharon, de crímenes de guerra por su posible responsabilidad en las matanzas de Sabra y Chatila en 1982. Según la decisión, se le podrá perseguir en cuanto éste cese en su mandato de primer ministro.

En lo que respecta a la amenaza de armas de destrucción masiva, los dirigentes de EEUU no son los más indicados para dar lecciones. En 2001, se opusieron a que se estableciese un sistema de control internacional con la aplicación de la Convención sobre Armas Biológicas y Tóxicas de 1972, dando como justificación que tal sistema podría perjudicar la seguridad nacional de EEUU. Las verdaderas razones de tal oposición se encontraban en un artículo del *New York Times*, publicado el 4 de septiembre de 2001, en el que se señalaba que EEUU había comenzado un programa secreto de investigaciones sobre armas biológicas que violaba las disposiciones de dicha Convención. EEUU debería también dirigir sus esfuerzos para controlar el arsenal de armas de destrucción masiva de Israel. Ese país está en posesión de más de 200 ojivas nucleares así como de armas químicas y de un programa avanzado de armas biológicas. Pero, sobre todo, debería neutralizar el régimen de Corea del Norte que, además de ser tan o más sanguinario que el de Sadam Husein, posee ojivas nucleares y ha amenazado con bombardear directamente a las tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur y cualquier territorio estadounidense si EEUU continúa amenazándolo y provocándolo.

¿Guerra preventiva?

La doctrina de la guerra preventiva del presidente Bush se basa en las mismas premisas que la doctrina que Hitler aplicó en 1941 contra la Unión Soviética, o Japón contra EEUU con el ataque a Pearl Harbour. Los preparativos militares y de otra índole que llevan a cabo EEUU y el Reino Unido constituyen, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas, una amenaza contra la paz.

Los atentados terroristas que ha sufrido EEUU han tenido como principal objetivo la población civil y han violado el derecho más fundamental: el derecho a la vida. En este sentido, constituyen crímenes de lesa humanidad y como tales se encuentran en el ámbito de la jurisdicción universal. Existen medidas⁸ y normas para perseguir y juzgar a los responsables de esos crímenes. En lugar de fortalecer el sistema penal internacional que se está construyendo con la entrada en vigor, en julio de 2002, del Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional, EEUU ha optado por debilitarlo⁹ y por declarar la guerra antiterrorista.

⁸ La resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contiene una serie de medidas para luchar eficazmente contra el terrorismo si los Estados miembros las ponen en práctica.

⁹ La campaña estadounidense contra el sistema multilateral de normas penales instituido por el Estatuto de Roma ilustra la política exterior de EEUU. Después de haber reducido al más pequeño común denominador las normas del estatuto de la Corte Penal Internacional durante las negociaciones, con la falsa esperanza de facilitar así la firma a dicho instrumento, EEUU retiró su firma de dicho tratado. Eso sólo fue el comienzo de una campaña orquestada en contra de la Corte Penal Internacional.

Las amenazas del presidente Bush a Naciones Unidas de seguir el mismo destino que el de la Sociedad de Naciones si no van en la dirección marcada por EEUU, o la de actuar en Irak unilateralmente sin autorización del Consejo de Seguridad, si no son fanfarronadas tejanas auguran un mal presagio.¹⁰

Si la comunidad internacional sigue ciegamente por la vía unilateral trazada por el Gobierno de Bush podemos despedirnos del sistema multilateral de normas internacionales pacientemente elaborado en el transcurso de los últimos cincuenta años. Así mismo, podemos olvidarnos de todas las normas y mecanismos contenidos en la Carta de Naciones Unidas que determinan que una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz; que una guerra preventiva es inadmisibles en el derecho internacional; que los Estados tienen la obligación de arreglar pacíficamente sus controversias.

El siglo XX ha sido testigo de la ascensión hegemónica de EEUU. Su política exterior es en gran parte responsable de un sinnúmero de guerras y de la desolación con la que hemos entrado en el nuevo milenio. Este siglo se anuncia ya como una repetición de la misma política, sólo que el enemigo ha cambiado de nombre. Un gran especialista de EEUU ha señalado acertadamente: "una política exterior que a la vez de ser inmoral no tiene éxito no sólo es estúpida sino que deviene cada vez más peligrosa para aquellos que la practican o la apoyan".¹¹

EEUU ha desencadenado una ofensiva internacional contra el nuevo sistema de justicia internacional establecido por la Corte. Por una parte, el Gobierno de Bush trata de asegurarse que sus nacionales estén exentos de la jurisdicción en materia de crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra previstos en el estatuto de la Corte. Para ello, EEUU presiona a cualquier Estado con el fin de concretar un tratado de impunidad con EEUU que le obligue a no poner en manos de la Corte Penal Internacional ciudadanos estadounidenses acusados de dichos crímenes. Uno de los últimos tratados de impunidad se firmó con India. Por otra parte, y en violación directa con el estatuto de la Corte, EEUU ha presionado al Consejo de Seguridad para que éste adopte una resolución (1422 de 12 de julio de 2002). En esa resolución el Consejo "pide, (...) que la Corte Penal Internacional, si surge un caso en relación con acciones u omisiones relacionadas con operaciones establecidas o autorizadas por Naciones Unidas y que entrañe la participación de funcionarios, ex funcionarios, personal o antiguo personal de cualquier Estado que no sea parte en el Estatuto de Roma y aporte contingentes, no inicie ni prosiga, durante un periodo de doce meses a partir del 1 de julio de 2002, investigaciones o enjuiciamiento de ningún caso de esa índole salvo que el Consejo de Seguridad adopte una decisión contraria"; y "expresa la intención de renovar en las mismas condiciones, el 1 de julio de cada año, la petición que se indica en el párrafo uno para periodos sucesivos de doce meses durante el tiempo que sea necesario". Esto significa una total impunidad para los estadounidenses u otros nacionales que operen bajo mando de EEUU.

¹⁰ Es de esperar que el impacto de las importantes marchas que han tenido lugar en las principales capitales del planeta y que han movilizado a más de 10 millones de personas, el pasado 15 de febrero, no sea tan sólo el de obtener una prórroga a la guerra, y haga recapacitar al Gobierno estadounidense sobre que el mundo lo que quiere es la paz.

¹¹ Gabriel Kolko, "Another century of war?", *The New Press*, Nueva York, 2002.

KENNETH MAXWELL

Brasil: las perspectivas de Lula

El 27 de octubre de 2001 Luis Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores (PT), fue elegido presidente de Brasil. La elección de "Lula", por aproximadamente 50 millones de votos, ha supuesto para el Partido de los Trabajadores (PT) la realización de un sueño. El mensaje de lucha contra la pobreza del presidente de una de las mayores democracias del mundo, convierten a Lula en la esperanza para la solución de los problemas sociales que acometen a buena parte de la sociedad brasileña. Kenneth Maxwell analiza de forma exhaustiva lo que supone la elección de Lula en este texto publicado en "The New York Review" el 5 de diciembre de 2002.

Kenneth Maxwell es director del Programa de Estudios Latinoamericanos del Consejo de Relaciones Internacionales de Nueva York

Traducción: Berna Wang

Volví de Brasil a EEUU el día de las elecciones, el domingo 27 de octubre, cuando 115 millones de votantes acudieron pacíficamente a los colegios electorales, pulsaron las teclas de sus máquinas de votar electrónicas y, por un margen enorme, eligieron a un antiguo obrero, Luis Inácio Lula da Silva. Lula, como se le conoce en todo el mundo, ganó con el 61% de los votos populares, 22,5 puntos más que José Serra, ex ministro de Salud y candidato del Gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Su victoria fue, en todos los sentidos, aceptada con tranquilidad en todo Brasil.

Lula, presidente

El triunfo de Lula parecía la realización de un sueño americano, una ascensión desde las tierras olvidadas del norte de Brasil hasta la presidencia; desde la cabaña de troncos hasta la jefatura del Estado. Pero dos días después, en Washington D.C., dudé de si estaba en el mismo planeta, por no hablar del mismo hemisferio. EEUU no celebraba esta notable demostración de civismo democrático en una región donde ni el civismo ni la democracia están firmemente arraigados, y en un

país que hasta no hace tanto estuvo gobernado por una dictadura militar que duró 21 años.

Por el contrario, Henry J. Hyde, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara, acababa de escribir al presidente Bush advirtiéndole de que el presidente electo de Brasil era un peligroso "radical castrista que se ha disfrazado de moderado con fines electorales". Además, afirmaba Hyde, Lula podría formar con Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez de Venezuela "un eje del mal en América", que podría incluso tener a su disposición una "bomba nuclear de 30 kilotones" brasileña, y los "misiles balísticos" de Brasil para lanzarla.¹

Ninguna de las personas con las que hablé en Brasil cree que Lula considere un modelo a Cuba, no digamos Venezuela. En cualquier caso, Brasil es una sociedad demasiado compleja, diversa y sofisticada como para emprender esa dirección: solamente la economía del estado de São Paulo, donde Lula ganó su reputación, es mayor que la de Argentina o Colombia. Y la acusación sobre las armas nucleares cae por su propio peso. Tanto Argentina como Brasil, tras la reinstauración de la democracia, pusieron fin a sus programas nucleares y firmaron un tratado internacional que convirtió América Latina en una zona libre de armas nucleares. No obstante, Constantine Menges, del Hudson Institute, ex funcionario del Gobierno de Reagan, viene alertando de una amenaza nuclear brasileña en el *Washington Times* desde principios de octubre, igual que los estadounidenses de origen cubano del Congreso y que algunos alarmistas resucitados de la derecha jurásica.² Lula, afirman, es miembro de una organización, el Foro de São Paulo, que fomenta el terrorismo.

Ni siquiera los expertos mejor informados con los que hablé en Brasil habían oído hablar del Foro de São Paulo. En realidad éste es el nombre de una agrupación internacional de partidos de izquierda y Lula asistió a su última reunión, celebrada en La Habana, lo que sin duda es el motivo por el que los estadounidenses cubanos del Congreso lo pusieron en su punto de mira. Pero la acusación de que es una conspiración "castrista" secreta encaminada a promover el terrorismo internacional es, cuando menos, exagerada. Jorge Castañeda, actual ministro de Exteriores mexicano, asistió a algunas reuniones del Foro de São Paulo hace algunos años, y hoy es una de las personas menos predilectas de Castro. Pero las acusaciones de este tipo pueden acabar cobrando vida propia, y así ha ocurrido ya en este caso, pues aparecieron de forma reciclada en la edición de *The New York*

¹ Carta al presidente Georges W. Bush del representante Henry J. Hyde, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de EEUU, 24 de octubre de 2002.

² Carta remitida al presidente George W. Bush por los representantes Cass Ballenger (republicano, Carolina del Norte), Dan Burton (rep., Indiana), Jin Gibbons (rep., Nevada), Benjamin Gilman (rep., Nueva York), Wally Herger (rep., California), Darrell Issa (rep., California), Walter Jones (rep., Carolina del Norte), Brian Kerns (rep., Indiana), Dana Rohrabacher (rep., California), Ileana Ros-Lehtinen (rep., Florida), Ed Royce (rep., California), Christopher Smith (rep., Nueva Jersey), el 3 de octubre de 2002. Constantine C. Menges, "Blocking a New Axis of Evil", *Washington Times*, 7 de agosto de 2002.

Times del 31 de octubre.³ Rastreado el origen de esta campaña contra Lula, he descubierto que surge nada menos que de una "autoridad" como Lyndon LaRouche, cuya página web decía en 1995: "La insurgencia narcoterrorista conocida como Foro de São Paulo tiene patrocinadores de muy alto nivel dentro de la clase dirigente económica y política de América, en forma de un gabinete estratégico con sede en Washington fundado en 1982 por David Rockefeller, McGeorge Bundy y otros, conocido como Inter-American Dialogue (IAD)".⁴

Tras las elecciones brasileñas, Constantine Menges retomó la cuestión: la elección de Lula, declaró, "representa el mayor fracaso del espionaje desde el final de la II Guerra Mundial". Si no se frena a Lula, "George W. Bush habrá perdido Sudamérica".⁵ La ultraderechista *Pittsburgh Tribune-Review* ya ha llamado a George Tenet, director de la CIA, "máximo benefactor de Lula" por su "negligencia y perfidia [que] han permitido que Lula esté tan cerca de la presidencia".⁶ El parlanchín secretario de Hacienda estadounidense, Paul O'Neill, que siempre dice las palabras inadecuadas en el momento inadecuado, concluyó que ahora los mercados debían esperar a que el presidente Lula "les garantice que no es un demente". Los brasileños tendrían motivos para pensar que en realidad los dementes están en Washington.

Nadie duda de que los intereses que están en juego tras la elección de un candidato de la izquierda en Brasil son muchos y los riesgos elevados; ni de que Lula y el PT tienen credenciales socialistas que vienen de largo; ni de que Lula se ha entrevistado con Castro; ni de que recibió un "sable bolivariano" de la victoria de manos del presidente venezolano Chávez; ni de que su asesor más próximo, José Dirceu, recibió entrenamiento como guerrillero en Cuba y regresó a Brasil hace decenios con el rostro alterado por la cirugía plástica para ocultarse. Nadie puede negar tampoco que Brasil padece una importante crisis económica nacional que se produce dentro de un entorno internacional en el que la economía estadounidense sufre una recesión, y ni puede ni quiere reactivar la escala de inversiones a las que se había acostumbrado Brasil durante los años del *boom* de los años noventa. La perspectiva de una guerra con Irak, además, podría hacer que se disparasen los precios del petróleo, lo que se sumaría a unas presiones inflacionistas ya crecientes. Éstas no son las condiciones ideales para una transmisión histórica de poder, y en un país como Brasil, tan excesivamente vulnerable a las sacudidas financieras externas, sería un desafío para cualquier líder y partido político no puestos a prueba. Pero pocos de estos factores son obra de Lula, y es absurdo menospreciar el notable triunfo democrático que representa su elección como pre-

*Los brasile-
ños tendrían
motivos para
pensar que en
realidad los
dementes
están en
Washington*

³ Larry Rohter, "Relations with US a Challenge for Leftist Elected in Brazil", *The New York Times*, 31 de octubre de 2002, p. A10.

⁴ Valerie Rush, "Inter-American Dialogue: Sponsors for São Paulo Forum in Washington", *Executive Intelligence Review*, 10 de noviembre de 1995. En: www.larouche-pub.com/other/1995/2245_iad.html.

⁵ Dave Eberhart, "Expert Laments US Failure in Brazil", NewsMax.com, 30 de octubre de 2002.

⁶ Dateline D.C., "Tenet Is Lula's Geatest Benefactor", *Pittsburgh Tribune-Review*, 20 de octubre de 2002.

sidente, o reconocer que si hubiera sido "castrista" o "chavista" nunca habría sido elegido presidente de Brasil.

Un triple éxito

El éxito de esta elección es triple: para el propio Lula, para el PT que él fundó, y para Brasil. Lula comenzó su vida en la pobreza extrema, en el nordeste asolado por la sequía. Él y su madre fueron abandonados por su padre, que, al igual que millones de brasileños, emigró al sur en busca de trabajo y se dirigió al estado de São Paulo, que se industrializaba rápidamente. Más tarde, Lula y su madre también recorrieron los más de 1.600 kilómetros que llevaban hasta São Paulo, uniéndose a los conocidos con el sobrenombre de *paus-de-araras*, literalmente "perchas de loro" (así llamados por los desvencijados carros de madera en los que viajaban), que acudieron en masa a ese estado en los años cincuenta y sesenta.

El padre de Lula, que había vuelto a contraer matrimonio, no estaba dispuesto a aceptar a ninguno de los dos en la familia. Lula fue limpiabotas y después tornero, y más tarde activista del sindicato de metalúrgicos y dirigente político. Ha sido elegido en su cuarto intento de llegar a la presidencia gracias a más de 50 millones de votos. Como decían los carteles de su campaña, "ha llegado la hora de Lula". En el hemisferio occidental sólo otro candidato ha obtenido más votos en unas elecciones a la presidencia, y fue Ronald Reagan, otro activista sindical no menos persistente en sus ambiciones presidenciales.

La elección también ha sido un éxito para el partido de Lula. Los sociólogos llevan muchos años afirmando que parte del problema de las democracias emergentes es que carecen de partidos políticos sólidamente institucionalizados. Durante veinte años, el PT de Brasil se ha construido a sí mismo pasando de ser una organización de base a una organización nacional, y ha adquirido experiencia en los gobiernos municipales y estatales. En la última década, el partido, que ahora tiene más de 300.000 miembros, se ha desplazado ideológicamente al centro, de forma muy parecida a como hizo el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) durante la transición democrática española de los años setenta, cuando se desembarazó de su pasado marxista para integrarse en la corriente política dominante en Europa, a consecuencia de lo cual ganó el poder con Felipe González, uno de los modelos del PT brasileño. Igual que en España, este cambio permitió al PT ampliar su base inicial, que estaba formada por activistas católicos inspirados por la teología de la liberación, los sindicatos obreros que nacieron en los años setenta en São Paulo, miembros de organizaciones no gubernamentales, así como el movimiento de campesinos sin tierra (MST), que se convirtió en una fuerza en los años ochenta organizando a los aparceros a los que la rápida mecanización de la agricultura brasileña iba desplazando en el medio rural.

Tanto los sindicatos como el MST surgieron de un pasado combativo: en los años setenta, importantes huelgas consolidaron los sindicatos obreros, y el MST, silencioso durante la campaña presidencial como consecuencia de un pacto con Lula, se ha especializado en invasiones y tomas de tierras relámpago que a menudo tienen un fuerte trasfondo político. La hacienda de la familia del presiden-

te Fernando Henrique Cardoso, por ejemplo, sufrió varios asedios y una invasión durante sus dos mandatos presidenciales.

Sin embargo, el PT ha logrado introducir en el sistema político brasileño a muchos marginados que en otros países de América Latina carecen de representación o de voz institucionalizada. En la actualidad, tal vez el 30% de los miembros del PT se autodenomina radical, entre ellos la línea dura conocida en el léxico político siempre imaginativo de Brasil como "chiítas". Pero la mayoría de los miembros del partido ha aprendido a jugar el juego democrático. Es de este tipo de partido político moderno del que actualmente carece gran parte de América Latina, y lo que hace que muchas sociedades se polaricen peligrosamente entre el Estado, por una parte, y las masas, por otra, sin instituciones mediadoras eficaces para encauzar las aspiraciones de éstas en políticas no violentas y efectivas.

A medida que, en estos últimos veinte años, los sindicatos y el PT iban creciendo en Brasil, fueron entablando conexiones internacionales con la izquierda de América Latina y otros países. Los sindicatos de São Paulo, especialmente el sindicato de metalúrgicos que presidía Lula, recibió, a finales de los años setenta y principios de los ochenta, un apoyo muy fuerte y el aliento de los sindicatos estadounidenses, especialmente del de los trabajadores del automóvil United Auto Workers (UAW), como parte de su esfuerzo para responder al traslado a otros países de las fábricas de automóviles que realizaban las multinacionales de EEUU; y de la AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations), que intentaba propiciar la creación de sindicatos no comunistas en América Latina siguiendo el modelo estadounidense. La izquierda paranoica podría atacar con igual facilidad a Lula por ser un títere de la UAW de Walter Reuther que por ser un títere de Fidel Castro.

Pero para entender a Lula es fundamental darse cuenta de que es, básicamente, un sindicalista, un duro negociador sindical, un ferviente convencido del poder que confiere escuchar a diferentes sectores de opinión y conciliar intereses divergentes por medio del debate, un formidable forjador de consenso y un líder con carisma para movilizar después a las multitudes en la dirección elegida. Todo esto, con casi dos tercios del voto popular brasileño, convierte a Lula en una poderosa figura política que no ha perdido el contacto con sus orígenes. No resulta sorprendente que hable de forjar un "pacto social" en Brasil, ni que su primera prioridad sea declarar la guerra al hambre.

El éxito de la elección para Brasil no es menos destacable. Brasil sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo menos desarrollado. Según el doctor Roberto Borges Martins, presidente del instituto de estadística oficial de Brasilia (IPEA), el 10% más adinerado de la población controla el 50% de la riqueza nacional, mientras que el 50% menos favorecida posee sólo el 10%. Sin embargo, como sabemos desde hace algún tiempo gracias a los estudios académicos, y como sugiere la propia trayectoria de Lula, pese a estas desigualdades, en Brasil existe también una gran movilidad social. Brasil cuenta con una clase media muy grande, articulada y bien informada y con una fuerte división de poderes a nivel federal entre el Gobierno, el Congreso y la judicatura. Las propias elecciones, por ejemplo, se realizaron con eficacia ejemplar, y los datos se conocieron en toda la nación la misma noche de la jornada electoral (Florida haría bien en seguir el

*Los votantes
habían
actuado con
considerable
habilidad,
equilibrando
sus votos
entre los
candidatos
federales y
estatales*

ejemplo). Los resultados eran claros. No había indicios de fraude. Y gran parte de ello se debe a la existencia del tribunal electoral, responsable de vigilar los comicios y de resolver las quejas. Cuando viajaba por diferentes regiones del país antes de las elecciones, me impresionaron la calidad y la claridad de los anuncios informativos de la televisión que difundió el tribunal electoral para instruir a la población sobre cómo utilizar las máquinas electrónicas para votar.

También me impresionaron los debates de inauguración y clausura de la campaña entre los candidatos, especialmente el último debate entre Lula y Serra, la víspera de la segunda vuelta electoral, en el que los brasileños y sectores sociales de todo el país formularon a ambos preguntas cuidadosamente meditadas. Y una vez conocidos los resultados esa noche, quedó patente que los votantes habían actuado con considerable habilidad, equilibrando sus votos entre los candidatos federales y estatales, diciendo "sí" a Lula para la presidencia, "sí" al PT al aumentar su representación en el Congreso en un 57% en la cámara baja y en un 75% en el Senado, pero también eligiendo sólo a uno de los siete candidatos del PT para gobernador en la segunda vuelta. Por tanto, no hubo ninguna "marea roja". Fue un voto que se dividió para garantizar el control de una parte del gobierno sobre la otra.

Al analizar la política brasileña se deberían tener en cuenta los paralelismos entre Brasil y EEUU. Los dos países poseen sistemas federales grandes y complejos. En ambos, la función de los estados y de los gobernadores estatales es importante. Ambos cuentan con grandes mercados para la televisión, la radio y la prensa, y las encuestas y los asesores de imagen tienen un gran peso en las campañas electorales. Por tanto, resulta significativo que los votantes brasileños eligieran como gobernadores a políticos de los partidos que se habían opuesto a Lula y habían apoyado a la coalición del presidente saliente, especialmente en los poderosos estados desarrollados del centro y del sur: São Paulo, Minas Gerais y Rio Grande do Sul.

Los resultados fueron especialmente significativos en el caso de Rio Grande do Sul, un estado que fue durante mucho tiempo bastión del PT y uno de sus principales escaparates, al igual que en São Paulo, donde uno de los estrechos colaboradores de Lula, José Genoíno, se presentaba a gobernador. Este no ganó a pesar de que en la primera vuelta Aloízio Mercadante, otro de los "cardenales" del PT (el grupo de poderosos asesores que rodea a Lula y tienen toda su confianza), fue elegido senador con más de diez millones de votos, un récord en la historia del Senado brasileño.

En el estado de Rio de Janeiro, mientras tanto, fue elegida gobernadora Rosinha Mateus, esposa de Anthony Garotinho, otro candidato presidencial derrotado, y no el candidato del PT, aunque en las elecciones federales el estado se inclinó por Lula. Garotinho, además, es presbiteriano y representa el papel cada vez más importante que tienen los evangélicos protestantes en la política brasileña (en la actualidad se calcula que cuentan con aproximadamente sesenta representantes en el Congreso, más del 10% de la cámara baja). Esta nueva fuerza en Brasil, no diferente de los fundamentalistas cristianos de EEUU, defiende posturas morales y sociales conservadoras, y critica las posiciones liberales del PT sobre el aborto, la homosexualidad y la educación religiosa.

En un sistema federal como el de Brasil, el poder de los estados y la función de los gobernadores siempre ha sido un importante contrapeso del Gobierno central. Al igual que en EEUU, la aprobación de las leyes en el Congreso brasileño depende de alianzas de partidos, de negociaciones y del toma y daca. El PT lo sabe, y estos cálculos pragmáticos desembocaron en la elección de un industrial ajeno al PT como vicepresidente en la lista vencedora de Lula. Los costosos anuncios televisivos de la campaña de Lula no salieron de los bolsillos de los mal pagados maestros de escuela que constituían uno de los grupos de apoyo más incondicionales del PT: fueron muchos los empresarios que acudieron a prestar su ayuda. Como uno de ellos me dijo gráficamente: “Es mejor perder los dedos de la mano que el brazo”.

Mientras los resultados generales muestran un desplazamiento significativo e importante hacia el centro izquierda, el principal partido de la derecha, el Partido del Frente Liberal (PFL), sigue siendo una fuerza poderosa en el Congreso tras las elecciones. Muchos de los dirigentes del PFL están en el poder desde 1964, cuando se produjo el golpe de Estado militar. Se quedaron para contribuir a negociar la transición a la democracia, y continuaron hasta formar una parte clave de la coalición que apoyó la candidatura del sociólogo Fernando Henrique Cardoso a la presidencia en 1994, y su reelección en 1998. Por primera vez en la historia reciente ahora están en la oposición, lo que podría tener un efecto positivo para aclarar la postura del PFL en asuntos como el libre comercio, la reforma del mercado y la privatización, y crear un partido conservador democrático de centro derecha con una organización más coherente como alternativa al PT. Algo que sería saludable para el desarrollo de la democracia brasileña.

Elecciones y economía

La conmoción que los resultados electorales produjeron en los analistas de Wall Street, que en los últimos nueve meses han dominado la forma en que se ve a Brasil en EEUU, fue sorprendente. Pese a los buenos resultados que Lula obtenía continuamente en las encuestas, los analistas de los principales bancos y firmas de inversión de EEUU persistían en creer en la victoria del candidato del Gobierno de Cardoso, José Serra. Estaban histéricos ante la perspectiva de una victoria de Lula. Goldman Sachs incluso se inventó un “Lulámetro” para predecir el aumento del riesgo de la inversión en función de los resultados de Lula en las encuestas. Pero su opinión se basaba en información no fiable sobre la fuerza de Serra y sobre lo que habían y no habían conseguido los últimos ocho años de reformas de Cardoso. La situación de Serra era débil desde el principio. La coalición de Cardoso ya se había desintegrado antes de que empezara la campaña, y el PFL nunca apoyó la candidatura de Serra. Había graves fricciones en el seno del propio Partido Democrático Social del presidente Cardoso sobre la candidatura de Serra, a la que se oponían varios fundadores del partido.

Por otra parte, en su segundo mandato, el programa de reformas de Cardoso había llegado a un punto muerto. Brasil dependía de los préstamos exteriores para cubrir su enorme déficit público y, al mismo tiempo, vinculaba cada vez más la

deuda pública y la privada al dólar y al tipo de cambio, lo que hizo a Brasil vulnerable tanto a las percepciones de riesgo en los mercados financieros internacionales como a cualquier cambio negativo en la economía internacional. Además, tras ocho años de gobierno de un presidente cosmopolita, políglota y bien relacionado, y un equipo económico muy conocido en Wall Street, era inevitable que, a medida que se aproximaban las elecciones de 2002, la incertidumbre sobre el futuro preocupara a los inversores.

La fe ciega de Wall Street en que Serra representaba la "continuidad" nunca tuvo fundamento. Dentro del Gobierno de Cardoso, Serra había sido la voz de la oposición leal. Era un crítico de los hijos predilectos de Wall Street, el ministro de Economía Pedro Malan y el presidente del Banco Central Arminio Fraga. Como ministro de Sanidad obtuvo fama internacional por su lucha contra las empresas farmacéuticas multinacionales a favor de los medicamentos genéricos. Y, además, Serra tenía un "problema Gore": no sabía cómo abordar la herencia del Ejecutivo de Cardoso, del que formaba parte; disgustó al presidente al no defender con energía su historial cuando fue atacado, y su campaña, a diferencia de la de Lula, fue casi todo el tiempo negativa.

Lula, por otra parte, contaba con la ayuda de uno de los asesores políticos de más éxito de Brasil, Duda Mendonça. Bajo la tutela de Mendonça, se recortó la barba, domeñó su retórica de orador callejero, abandonó los pantalones vaqueros y las camisetas, vistió sobrios trajes, camisas y corbatas de hombre de negocios y con una dentadura recién arreglada, sonrió sin cesar ante todas las dificultades, ciñéndose a su postura de "paz y amor" y presentándose ante los ciudadanos como la figura de un paternal abuelo. Para tranquilizar a las mujeres, entre las que comenzó con un porcentaje de aceptación muy bajo, Lula empezó a aparecer cada vez más con su esposa, Marisa Letícia da Silva, en las paradas de la campaña, al estilo estadounidense.

Por el contrario, Serra, luchador y sin carisma, ambicioso hijo de un inmigrante italiano, líder estudiantil y exiliado, doctorado en Económicas en Cornell, y un hombre de opiniones críticas decididamente severas, se concentró en "deconstruir" a sus primeros rivales. La gobernadora del estado de Maranhão, Roseana Sarney, que había obtenido excelentes resultados en las encuestas en las primeras fases de la campaña, se encontró con su candidatura destruida por un asalto por sorpresa de la policía federal a la oficina de su esposo, un hombre de negocios, y por las ampliamente difundidas fotografías de los fajos de billetes de origen no explicado que ahí aparecieron. Esto logró retirar a Roseana Sarney de la liza, pero al elevadísimo coste de distanciarse de la poderosa dinastía Sarney, encabezada por el padre de Roseana, José Sarney, ex presidente de Brasil y actualmente influyente senador, que creyó que el Gobierno de Cardoso y Serra estaban detrás de esta acción sin precedentes. No mucho después, José Sarney decidió dar su importante apoyo a Lula.

Con Roseana Sarney fuera de combate, Serra dedicó su atención a Ciro Gomes, gobernador del estado de Ceará, que también había empezado a obtener buenos resultados en las encuestas y era un protegido del gurú de Harvard, el profesor Mangabeira Unger. Una campaña negativa de televisión subrayó el carácter voluble de Ciro Gomes y sus equivocaciones (cuando se le preguntó por

el papel que tenía en su campaña su novia, una famosa actriz brasileña, respondió que estaba ahí para “dormir conmigo”). Como resultado, Ciro Gomes cayó vertiginosamente en las encuestas. Pero esto fue una victoria pírrica para Serra, pues en la segunda vuelta electoral, Ciro Gomes también respaldó a Lula. Así pues, Serra consiguió llegar a duras penas a la segunda vuelta y comenzó con 25 puntos porcentuales detrás de Lula, una distancia casi insalvable en el tiempo de que disponían.

La actuación política, las hábiles relaciones públicas y las complejidades del sistema político brasileño explican en gran parte la victoria de Lula. Aunque es exagerado afirmar que las elecciones fueron un rechazo al “Consenso de Washington” sobre desarrollo económico y el llamado modelo “neoliberal”, como dicen muchas personas ajenas al proceso, sí desembocó en la captación por el PT de un gran grupo de votantes de clase media decepcionados con el Gobierno de Cardoso. Éste aportó muchas cosas a su mandato: estilo, compromiso, civismo, elogio internacional. Domó la inflación, disminuyó de forma significativa la pobreza extrema, redujo las tasas de mortalidad infantil, realizó una política dinámica y relativamente fructífera contra la difusión del SIDA y mejoró la educación primaria. Pero continuó existiendo corrupción, y la justicia siguió siendo lenta, para muchos inalcanzable. Cardoso recortó los gastos excesivos de estados y ayuntamientos e hizo mucho para reforzar el sistema bancario. Algunos segmentos sociales se beneficiaron de la inversión en bonos del Estado. Pero la mayor parte de la clase media sufrió los perversos efectos de los tipos de interés excesivos, la inflación subió lentamente mientras el valor del real caía (un 40% el año pasado), y el desempleo y el subempleo aumentaron de forma espectacular. La delincuencia y la inseguridad hicieron la vida insostenible en muchas zonas urbanas incluso para las familias más modestas.

Cuando los inversores de Wall Street visitan Brasil a veces vuelan en helicóptero desde la azotea de un edificio a otro en São Paulo. Si observaran lo que ocurre en tierra, podrían comprender mejor por qué perdió el gobierno. Brasil ha sido siempre un país con una vida callejera activa, un país de pequeños negocios, bares y fábricas. Pero en las semanas previas a las elecciones, cuando conducía por São Paulo, una ciudad de más de 15 millones de habitantes y el corazón industrial y financiero de Brasil, me sorprendió ver calle tras calle edificios, tiendas y fábricas cerrados y esquinas desiertas. Incluso en el centro de la ciudad los viejos edificios de apartamentos estaban vacíos, clausurados con tablas y cubiertos de pintadas.

En la elegante Avenida Paulista, los edificios estaban rodeados por vallas de más de tres metros y medio de altura rematadas con varias filas de alambre electrificado. Era la clase media de Brasil, básicamente conservadora, la que no veía a Fernando Henrique Cardoso y su equipo económico con los mismos cristales de color de rosa que los forasteros. El PT se dio cuenta de que tenía que captar el voto de esta clase media —ni la muy rica y ni la muy pobre, sino la de los asalariados y pequeños empresarios— si quería llegar al poder. Y fue un desplazamiento decisivo en los votos de esta clase el que llevó a la derrota de Serra.

En Brasil, hay un paréntesis de dos meses entre las elecciones y la investidura del nuevo presidente, el 1 de enero de 2003. Este es un periodo de riesgo

La actuación política, las hábiles relaciones públicas y las complejidades del sistema político brasileño explican en gran parte la victoria de Lula

potencial. Los profundos problemas económicos que han hecho a Brasil vulnerable a los caprichos de los inversores extranjeros no han desaparecido pese a la pasajera euforia postelectoral. Los inversores privados continúan asustadizos y el riesgo de un ataque especulativo contra la moneda brasileña sigue siendo elevado. Muchos economistas extranjeros temen que la fuga de capitales, el bloqueo de las líneas de crédito y una renovada caída libre del valor del real puedan desembocar con facilidad en una profecía autocumplida y obligar a Brasil a suspender el pago de su deuda.

Los economistas brasileños alegan que los temores son exagerados y que se puede gestionar el servicio y la renovación de la deuda. Señalan que Brasil ya ha recibido los primeros 3.000 millones de dólares del paquete del Fondo Monetario Internacional (FMI) para "sacar de apuros" al país que se negoció el pasado mes de agosto, y que el Fondo enviará otros 3.000 millones de dólares antes de final de año. Afirman que las reservas de Brasil pueden sostener y cubrir todas sus obligaciones. Ahora han surgido voces menos histéricas para dar razones contra el pánico, entre ellas la del presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, William McDonough. Y cabe esperar que los grandes intereses estadounidenses con importantes inversiones fijas y un considerable interés a largo plazo en Brasil, también tratarán de calmar la histeria. Después de todo, la inversión estadounidense en el país sudamericano en los últimos años ha sido cinco veces superior que la realizada en China. Entre las empresas estadounidenses que tienen inversiones de envergadura en Brasil están General Motors, Ford, Texaco, Exxon, General Electric, Citibank, McDonald's, Cargill, Philip Morris, Goodyear y, de no menos importancia, Alcoa, de la que fue jefe el actual secretario de Hacienda O'Neill.

Pero las peticiones de Wall Street, el FMI y EEUU de que se nombre a personas "amistosas para el mercado" en los puestos clave de ministro de Finanzas y presidente del Banco Central, serán incesantes, pues creen que los designados de la "derecha" garantizarán que Brasil cumple las condiciones impuestas por el FMI en el acuerdo de ayuda, que conlleva mantener unos tipos de interés altos, superávits elevados en el presupuesto y el pago puntual de la deuda. Esto choca con las expectativas de la mayoría de los votantes brasileños, que quieren tipos de interés más bajos, más crecimiento y creación de empleo. Pero el impago de la deuda no es el único peligro que afronta Brasil en este periodo. Además de los temores de Wall Street, está la presión de las visiones utópicas.

Perspectivas de futuro

En la izquierda, muchos consideran la elección de Lula un rechazo a las políticas de los años noventa que fomentaron los mercados abiertos, el libre comercio y la privatización. Confían en que Brasil, con Lula de presidente, encabece la lucha contra la globalización. Desde 2001, alentado por la administración del PT en el estado de Rio Grande do Sul, Porto Alegre es el lugar de cita del Foro Social Mundial, una enorme reunión de activistas antiglobalización que se consideran el contrapunto del Foro Económico Mundial de Davos. Sin duda, el Brasil de Lula galvanizará inevitablemente las esperanzas y la presencia de muchos activistas antiglo-

balización que van en pos de sus propias utopías. Es probable que sus expectativas acrecienten los temores de la extrema derecha de que Lula y Brasil se conviertan en lo que la extrema izquierda quiere que sea.

En el ámbito nacional, el gran dilema girará en torno al conflicto entre expectativas y limitaciones. Los gobernadores y los alcaldes desean escapar de la camisa de fuerza financiera que les impuso la administración saliente y renegociar sus deudas con el Gobierno central. Los trabajadores y funcionarios, enérgicos partidarios del PT, quieren aumentos salariales para mantenerse a la par que la inflación. Los campesinos sin tierras quieren tierras y su recompensa por permanecer en silencio durante la campaña. Y los que están en el fondo de la pirámide económica quieren que suba el salario mínimo. Todas estas demandas chocarán de frente con las limitaciones impuestas por el paquete de 30.000 millones de dólares del FMI.

El tercer gran problema para el PT es la falta de experiencia en la administración de un gobierno complejo como el de Brasil. El nuevo Gobierno necesita asesores leales que lo conduzcan por el laberinto de la burocracia federal. Y el PT tiene una experiencia internacional limitada, aunque aquí podrá contar con el servicio diplomático, ampliamente reconocido y sumamente hábil. Tendrá que aprender con rapidez. El nuevo Ejecutivo tendrá que tomar decisiones urgentes sobre asuntos como el comercio, el cumplimiento del pacto con el FMI y las crisis crecientes en sus fronteras sudamericanas, desde Argentina hasta Colombia, pasando por Venezuela. El PT necesitará a Duda Mendonça para que lo ayude a gestionar su imagen, porque las imágenes a veces pueden ser tan importantes como las realidades, y una de las imágenes que los elementos moderados del PT más temen es que en Brasilia, el 1 de enero, el recién elegido presidente Lula aparezca con los presidentes Castro y Chávez, mientras una delegación estadounidense de bajo nivel, por razones de protocolo, es ocultada de los ojos del público en algún lugar de la fila de atrás.

Por una afortunada casualidad para EEUU, la actual embajadora, Donna Hrinak, es una profesional muy competente que ha estado destinada en Bolivia y Venezuela: como dice con orgullo a los brasileños, y especialmente al PT, es hija de un obrero metalúrgico. Ya es muy respetada en Brasil entre los políticos y la prensa. El problema no es tanto la calidad de los informes que se envíen desde Brasilia a Washington cuanto la falta de coherencia en la respuesta de Washington a los desafíos que traerá inevitablemente la presidencia de Lula.

Antes del 11 de septiembre, cuando Afganistán e Irak expulsaron a América Latina de los titulares y la arrinconaron en lo que se refiere a Washington, la política estadounidense hacia la región estaba dominada por la política nacional. Y con Constantine Menges, Hyde y la delegación estadounidense de origen cubano en el Congreso denunciando a Lula, su victoria, lejos de ser recibida como la confirmación de una democracia que funciona y de la inclusión política —algo que EEUU dice que desea en sus esfuerzos en favor de la construcción de la democracia en todo el mundo—, amenaza con ser interpretada una vez más a través del estrecho prisma de la Pequeña Habana. Es como si EEUU hubiera pasado toda la Guerra Fría mirando a Rusia a través del prisma de Albania, y a China a través del prisma de Macao, o explicara a la India examinando la política nacional de las Maldivas.

Para un país de su tamaño e importancia, Brasil cuenta con poco apoyo en el Congreso de EEUU. Tampoco la prensa y la televisión estadounidenses tienen mucho interés por este país. Las noticias procedentes de Brasil se refieren sobre todo al samba, al sexo y al fútbol, y las informaciones económicas están confinadas en las páginas de economía. Es hora de que Washington se dé cuenta de que las palabras inoportunas en Hacienda, la histeria en Wall Street y los absurdos temores ante un nuevo eje del mal pueden perjudicar los intereses de EEUU. Las elecciones de Brasil deben verse contra el telón de fondo de la crisis argentina, la posibilidad inminente de un sangriento golpe de Estado en Venezuela y el conflicto creciente en Colombia.

Si Brasil fracasa, como podría suceder, las consecuencias serán importantes no sólo para el sistema financiero internacional, sino para las perspectivas de la democracia en la región. Resulta irónico que mientras EEUU habla ahora de cómo "construir" una democracia después de una guerra en Irak, se arriesgue, por falta de atención y unas prioridades mal enfocadas, a agravar los problemas que podrían debilitar a la mayor y más fructífera democracia de lo que tanto le gusta considerar su propio "barrio".

CÉSAR DOCAMPO

Costa de Marfil: el fin de la excepción

Costa de Marfil ha perdido su tradicional estabilidad política y ha entrado en zona de severas turbulencias. Tres grupos rebeldes acosan al Gobierno y controlan la mitad del territorio. Las últimas negociaciones entre las partes en conflicto no han dado todavía sus frutos y las fuerzas rebeldes acusan al Gobierno de incumplimiento de los acuerdos y amenazan con volver a combatir.

César Docampo es
analista de política
internacional

Cuando el viejo patriarca de Costa de Marfil, Felix Houphouet-Boigny, murió en 1993, dejaba tras de sí más de treinta años de una estabilidad política excepcional para la región. Entonces resultaba difícil vislumbrar la profundidad de los conflictos actuales. Las tres décadas de férreo orden y de relativa prosperidad económica daban pie a una considerable cuota de optimismo. Hasta ese momento, la pequeña nación africana (16 millones de habitantes y 332.000 km²) había sido un ejemplo de transición colonial. En 1960, Francia acordó el traspaso del poder a Houphouet-Boigny, un político tan compenetrado con la elite metropolitana que hasta había sido diputado de la IV República. El nuevo líder no defraudó a la vieja metrópoli. Con mano firme (no dudó en reprimir a sangre y fuego conflictos al interior de su propio grupo étnico) e inteligencia política logró que el apoyo de París rindiera sus frutos: paz para los viejos colonos y buenos negocios. No sólo para los franceses, sino también para una fuerte comunidad libanesa y una consolidada burguesía nativa que basaba su poder en la economía de la plantación, y de la cual Houphouet-Boigny era su más ilustre representante. Comparado con sus vecinos, la situación socioeconómica parecía envidiable. Los beneficios de la agricultura tropical (cacao —primer productor mundial— y café) se desparramaron por todo el sistema y transformaron a Abiyán, la capital económica del país, en el centro económico y financiero de la región.

No obstante, es necesario evitar una descripción demasiado benévola del régimen. Principalmente en los años ochenta y principios de los noventa, Hou-

phouet-Boigny debió lidiar con crecientes dificultades económicas (caída de precios de los principales productos de exportación y creciente endeudamiento) y políticas (aumento de las denuncias de corrupción y descontento de sectores del interior del país y de los estudiantes). Al final de su vida era evidente que la habilidad política de Houphouet-Boigny para contener los crecientes conflictos menguaba sustancialmente, y que su estilo de gobierno ya se perfilaba claramente anacrónico e ineficaz para una sociedad que se pretendía moderna.

La herencia del patriarca no fue bien administrada. No hubo un claro heredero, en gran parte porque el líder desaparecido se había negado a elegir alguno. Dos hombres disputaron el poder. Donan Bedié, líder del Parlamento; y Dramane Ouattara, primer ministro y ex funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), un musulmán proveniente del norte con gran raigambre entre sus seguidores. Bedié ocupó el primer puesto porque así lo decía la ley, pero no solo de legalidad vive el sistema. Cuando llegó la hora de la legitimidad, las elecciones, el nuevo presidente comenzó a trastabillar. En parte por impericia política, pero también porque la conformación estructural de la sociedad marfileña sufría de una debilidad congénita de difícil solución. La elite dominante de Costa de Marfil, cristiana y proveniente del sur, es electoralmente minoritaria frente al norte musulmán (el 60% de la población del país), muchos de ellos procedentes de Burkina Faso y otros países musulmanes de la región (Malí, Ghana, Nigeria, Liberia). Houphouet-Boigny no tuvo que afrontar ese problema en las urnas ya que reinaba en un régimen de partido hegemónico con elecciones apañadas, pero fue lo suficientemente hábil para manejar los equilibrios correspondientes dada la peculiar estructura socio-económica del país. No era una mera casualidad que Ouattara fuera el primer ministro en el momento de su muerte, y que varios altos oficiales del ejército también eran de origen musulmán. El viejo líder aplicaba virtuosamente la fórmula de “represión más cooptación”. Pero, después de su fallecimiento, esta “falla estructural” del sistema político marfileño se volvió crítica —por un lado por torpeza política de los nuevos responsables políticos y, por otro, por cambios en las condiciones económicas reinantes que hacían más difícil el reparto de recursos a los diferentes grupos sociales—, y es la clave más importante para comprender la situación actual en el país. Con elecciones libres, el sistema corría el serio peligro de ser arrasado por el voto musulmán y el esquema conformado por Houphouet-Boigny (relativa apertura a los sectores musulmanes, pero con clara hegemonía católica) habría sufrido profundas transformaciones.

Bedié careció de la habilidad política de su antiguo jefe. Revitalizó el discurso nacionalista para neutralizar a la mayoría musulmana. En una sociedad donde más del 40% de la población es extranjera o tiene padres nacidos en otro país, la cuestión nacional no es tema de fácil definición y se presta a manipulaciones de todo tipo, algo que el Gobierno de Bedié no dudó hacer. Las leyes dictadas antes de las elecciones de 1995 fueron estrictas y a Ouattara, por ser uno de sus progenitores nacido en Burkina Faso, se le impidió participar. La jugada era demasiado burda pero, en un país que ya tenía cierta tradición en hostigar a lo extranjero, el montaje funcionó y Ouattara no pudo presentar su candidatura. La legitimidad del triunfo de Bedié, por lo tanto, era endeble. En el ejercicio del poder, el nuevo presidente hizo poco para compensar esa debilidad. Su gestión sufrió varias denuncias de corrup-

ción y hasta los organismos financieros internacionales expresaron su descontento con el manejo de los fondos. Si consideramos, además, que durante la segunda mitad de los años noventa los precios internacionales de varios de los productos de exportación del país habían sufrido severos descensos, era evidente que la situación se había convertido en un cóctel explosivo: baja legitimidad debido a la exclusión arbitraria del principal candidato opositor, deficiente administración y crisis económica. El golpe de Estado de 1999 fue fruto de ese estado de desorden y desgobierno. Lo que pareció un amotinamiento militar por motivos salariales terminó con la destitución del jefe del Ejecutivo y una nueva jefatura política a cargo del general Guei.

El nuevo líder enarboló el clásico discurso sobre la paz, el orden y la limpieza de procedimientos para restaurar el sistema a través de la celebración de comicios transparentes. Las elecciones no se hicieron esperar —en parte por la presión de París y Washington— y se celebraron en octubre de 2000. El general Guei presentó también su candidatura, con muchas posibilidades de triunfo dado que Ouattara y Bedié fueron excluidos. Pero algo falló y fue derrotado por un experimentado político opositor de Houphouet-Boigny, Laurent Gbagbo.

Guei cometió el mismo error que Bedié. Ninguno de los dos intentó o pudo mantener algún tipo de alianza con representantes del norte musulmán. Fue así que el general Guei no dudó en expulsar a varios oficiales seguidores de Alá que no veían con buenos ojos su presentación en los comicios. La integración de los representantes del norte musulmán (extranjeros o no) seguía siendo un nudo altamente problemático del equilibrio del sistema.

La doble fractura

Desde el inicio del Gobierno de Gbagbo fue evidente que los nuevos comicios no parecían haber tranquilizado las aguas políticas del país. Washington se negó en primera instancia a reconocer el nuevo Gobierno y los franceses lo hicieron a regañadientes. Ouattara, por su parte, seguía fuera del sistema debido a una legislación xenófoba y manipuladora de los sentimientos nacionalistas. El general Guei permanecía lleno de rencor por su derrota y con muchos seguidores en el ejército. Y Bedié aún seguía preguntándose como había desperdiciado una herencia política tan jugosa. Como si esto fuera poco, la presencia de Gbagbo en la jefatura del Gobierno era otra fuente de conflicto al interior de los sectores dominantes. Esta vez la naturaleza de la crisis no estaba cargada de religión sino de perfiles étnicos. En un país con más de 60 etnias diferentes, las identidades políticas se conforman de un modo específico. El nuevo presidente pertenece a un grupo étnico del oeste del país (beté) que ha rivalizado tradicionalmente con la etnia que hegemonizó el poder desde la independencia, los baoulé. Este doble eje de tensión: cristianos del sur versus musulmanes del norte, sumados los conflictos al interior de la elite no musulmana, constituye el entramado básico de la crisis.

El complejo esquema de fracturas, donde las identidades son interpeladas y puestas en juego en situaciones de alto voltaje político, es el factor explicativo de que las elites en el Gobierno, sean las encabezadas por Bédié, Guei o Gbagbo, hayan puesto un inusitado empeño en enarbolar el discurso nacionalista. La exal-

La integración de los representantes del norte musulmán seguía siendo un nudo altamente problemático del equilibrio del sistema

tación de los valores patrios no es más que un desesperado escudo protector de una elite que se siente acosada y que por lo tanto contra ataca para defenderse y mantener su poder. La virulencia de los discursos se traduce en hechos durante el Gobierno de Gbagbo: creciente hostigamiento a los extranjeros, expulsión de musulmanes de los puestos públicos, expropiaciones y expulsiones. En este contexto, el Foro de Reconciliación celebrado en octubre de 2000, donde estuvieron los cuatro principales dirigentes del país (el general Guei, Bédié, Ouattara, y Gbagbo) no alcanzó acuerdos de ningún tipo. Fue una buena oportunidad perdida para evitar la violencia que se desataría poco tiempo después.

2002: crisis y desintegración nacional

El año que pasó será recordado como el tiempo de las novedades horribles. El alzamiento militar del 19 de setiembre de 2002 ha sido el punto de partida del caos. Las escenas de muerte y destrucción ocurridas en varias ciudades del país hicieron evidente la profundidad de la crisis y la naturaleza de los conflictos.

Al inicio, el alzamiento estuvo preñado de interrogantes y confusión: ¿golpe, amotinamiento reivindicativo, secesión encubierta? Aquel día importantes centros urbanos fueron atacados por grupos armados. En principio, algunos creyeron ver una suerte de movimiento reivindicativo de tropas que se resistían a ser desmovilizadas por el Gobierno de Abiyán. Las autoridades rápidamente acusaron al general Guei de estar detrás de los hechos, pero su asesinato en los primeros días del golpe parece descartar su protagonismo. A pesar de la indefinición del perfil de los alzados, autodenominados Movimiento Patriótico de Costa de Marfil (MPCM), quedó claro desde un primer momento su determinación. Si bien no se hicieron con el control de Abiyán —aunque realizaron operaciones en la misma— sí lograron ocupar la mitad norte del país, especialmente Bouaké, la segunda ciudad más importante de Costa de Marfil. El Gobierno intentó reconquistarla pero fracasó. Poco después se acordó un cese al fuego; el norte musulmán se encuentra ahora alzado en armas.

Y como si de ilustrar mejor la descomposición del régimen se tratara, dos nuevos grupos comenzaron a operar en octubre de 2002 en la zona oeste del país, en la frontera con Liberia: el Movimiento de Justicia y Paz y el Movimiento Popular Marfileño del Gran Oeste. El Gobierno ha denunciado la influencia de Liberia. Se sospecha que viejos combatientes del conflicto liberiano y de Sierra Leona estén combatiendo en la zona. Comparado con el Movimiento Patriótico de Costa de Marfil, que ha mostrado un comportamiento disciplinado, los dos grupos del oeste han operado de forma anárquica, al estilo de las fuerzas militares alimentadas por componentes mercenarios. Estos dos grupos se reconocen como herederos del general Guei (el mismo era oriundo del oeste del país) y claman venganza y la destitución de las autoridades. Es necesario recordar que la zona oeste fue protagonista de intentos secesionistas en los años setenta, los cuales fueron duramente reprimidos por Houphouët-Boigny.

La comprometida situación del Gobierno de Laurent Gbagbo demuestra la debilidad de su sistema de defensa. Si no fuera por la protección francesa, la situación del presidente Gbagbo sería aún más dramática. Las Fuerzas Armadas

de Costa de Marfil nunca conformaron un cuerpo profesional importante porque Houphouet-Boigny no lo consideró necesario (en gran parte para evitar crear instituciones incontrolables). Dados estos antecedentes y sumados los vaivenes políticos recientes, no sorprende la debilidad de las fuerzas leales al Gobierno y que grupos pequeños de amotinados, uno de ellos el MPCM, liderado por un antiguo jefe estudiantil de 30 años, hayan puesto en jaque a las fuerzas gubernamentales y tengan bajo su control la mitad norte del país. El Ejecutivo denuncia que el MPCM es apoyado desde Burkina Faso. No hay elementos todavía para sostener tal aseveración, aunque dado el material utilizado no se descarta que estén recibiendo ayuda externa.

Un acuerdo endeble

Si bien, en enero de 2003, el cese el fuego también incluía a las fuerzas rebeldes del oeste, la situación era muy volátil dado que las violaciones del pacto de no agresión eran más que evidentes (han sido constatadas varias rupturas del alto el fuego por parte de las fuerzas gubernamentales). No obstante, la presión de la comunidad internacional, especialmente de Francia y los países de la región, ha generado las condiciones para comenzar las negociaciones entre los sectores enfrentados.

Francia, con más de dos mil hombres tratando de contener a las partes del conflicto, ha asumido una fuerte responsabilidad.¹ La mesa de negociación se trasladó a París y allí se reunieron los principales partidos, las tres fuerzas militares rebeldes y el primer ministro, Pascal Affi N'Guessan, representando al Gobierno. En ella acordaron modificar la legislación electoral para evitar los recurrentes obstáculos sufridos por candidatos como Ouattara. Pero lo más importante es la conformación de un Gobierno de transición que, en un plazo indeterminado todavía, llamara a elecciones. Gbagbo ha cedido su primer ministro por otro de consenso, Seydou Diarra. Un musulmán del norte, perteneciente a la elite del poder, Diarra parece un actor adecuado a las necesidades del momento. Su experiencia política y administrativa en diferentes cargos públicos lo perfila como un candidato correcto.²

Tres semanas después de las negociaciones de París, el Gobierno de transición todavía no había sido formado. Gbagbo se resiste a incorporar representantes rebeldes en su Ejecutivo, mientras que sus seguidores se manifiestan fervientemente en las calles en contra de Francia y a favor de EEUU. Los rebeldes sostienen que les corresponden los ministerios de Interior y Defensa, pero el presidente no lo ha confirmado y se niega a solucionar el *impasse*.

¹ Francia pretende conformar una fuerza de paz para evitar estar en la primera línea de fuego. El contingente estaría operando bajo el paraguas de la Comunidad Económica de Países de África del oeste. El principal grupo sería de soldados senegaleses.

² Diarra fue primer ministro durante el breve Gobierno del general Guei. También ha sido presidente del Instituto Nacional del Cacao y representante del país en la Organización Internacional del Café, así como embajador en Brasil, Unión Europea y Gran Bretaña. También tiene experiencia en la administración de grandes plantaciones de café y cacao.

Gbagbo y la búsqueda de opciones

Laurent Gbagbo, el actual presidente de Costa de Marfil, ha realizado la mayor parte de su vida política en la oposición. Viejo militante de izquierda en su época juvenil, en los años ochenta puso énfasis en un fuerte discurso nacionalista. Ahora, con el poder en sus manos —aunque debilitado y con baja legitimidad— resiste con uñas y dientes la presión de sus enemigos. Su Gobierno ha desatado una violenta campaña contra los extranjeros que ya ha dejado centenares de muertos y miles de refugiados. Y sus acusaciones de que los grupos rebeldes están financiados desde el exterior no le ha hecho bien a la convivencia regional.

No menos dureza ha mostrado el presidente frente a París. Sus críticas a lo que considera un débil apoyo recibido desde la ex metrópoli es público y conocido.³ Apostando a que Francia no tiene otra opción que apoyarlo, Gbagbo se ha mostrado altivo y no ha dudado en violar el cese el fuego que París está intentando controlar. Quizás detrás de este peculiar comportamiento exista una carta oculta: la opción estadounidense. Si se analiza con detenimiento su política de hostilidad a algunos intereses económicos franceses (principalmente su oposición a renegociar los contratos de los servicios telefónicos y de provisión de agua a manos de capitales galos) y su política de apertura a las inversiones de otros países, principalmente a capitales estadounidenses y británicos, es posible concluir que el presidente Gbagbo está a la búsqueda de nuevas opciones políticas y económicas para fortalecer su poder. Visto desde esta perspectiva, la cuestión del petróleo adquiere una particular relevancia. Algunos expertos sostienen que las aguas territoriales que bordean a Costa de Marfil tienen un considerable potencial petrolífero y que en el mediano plazo el país podría convertirse en un exportador de relevancia regional;⁴ un escenario donde las compañías estadounidenses estarían muy interesadas en participar.

³ La presencia e influencia francesa en África ha disminuido de forma progresiva en las últimas dos décadas. Principalmente durante el Gobierno socialista de Lionel Jospin, cuya sensibilidad democrática parecía demasiado exquisita para las duras y desagradables tareas de un continente no apto para estómagos débiles. Esto ha sido percibido por los líderes africanos, entre ellos Gbagbo. El nuevo Gobierno francés, con un revitalizado Chirac, más africanista, a la cabeza, parece querer compensar parte de la desidia del pasado. La presencia en enero de 2003 en Costa de Marfil del ministro de Relaciones Exteriores francés, Dominique de Villepin, con el fin de negociar un cese el fuego, expresa ese renovado interés. Ver Philippe Leymaire, "Dificultades en la cooperación entre Francia y África", *Le Monde diplomatique*, junio 2002; y Philippe Leymaire, "El eterno retorno de los militares franceses a África", *Le Monde diplomatique*, noviembre 2002.

⁴ Reed Kramer, "Finding Africa's oil: in deep water", 21 de enero de 2003. En: www.allafrica.com

No es casual que los seguidores de Gbagbo pidan en las calles la protección estadounidense y expresen su descontento por lo que ellos consideran una traición de Francia. El máximo jefe político en Abiyán se encuentra en una situación política extremadamente difícil y su búsqueda de opciones no cesará hasta agotar todas las alternativas. El tiempo dirá si Washington está tentado a tener una mayor influencia en una zona que ha sido tradicional coto de presencia francesa.

Cesar Docampo

THALIA GRIFFITHS

Demasiado sofisticada para la guerra

Costa de Marfil era un modelo de éxito, hasta la crisis actual, producto de una década de descontento. Costa de Marfil siempre ha presumido de ser diferente de sus vecinos. Sus 30 años de dictadura fueron benignos, mientras la economía prosperaba. Tras independizarse de Francia en 1960, invitó a los ciudadanos de sus menos afortunados países vecinos a que acudieran a cultivar cacao y café, o a trabajar en el servicio doméstico o de seguridad de las prósperas villas de Abiyán (capital económica). Acogió también a refugiados de la guerra civil de Liberia, asegurándoles alojamiento con la gente del propio país, no en campamentos.

Este país parecía pues haber ganado la apuesta que, en el momento de la independencia, realizó su presidente fundacional Felix Houphouet-Boigny al presidente de Ghana, Kwame Nkrumah, en la que planteó que el modelo capitalista marfileño, basado en una agricultura de plantaciones y en una economía de mercado mixta, con monopolios estatales en los sectores clave, iba a funcionar mejor que el Estado socialista de Nkrumah.

El modelo marfileño también incluía el aplastamiento de la mayor parte de la oposición política; cerca de 4000 personas fueron víctimas del ejército durante su represión, en 1970, de la rebelión secesionista del Guébié, en el oeste del país. Pero ante lo acontecido al otro lado de sus fronteras, desde la guerra de Liberia hasta los problemas económicos de Ghana, pasando por el aislamiento de Guinea, los marfileños solían darse por satisfechos.

A principios de los años noventa su moneda, el franco CFA, se hallaba tan sobrevaluado que llegó virtualmente a paralizar la producción interna. Pero, mientras los productos franceses de importación continuaran tan baratos, la clase política estaba dispuesta a seguir brindando con champán.

Todo cambió con el fallecimiento de Houphouet-Boigny, en diciembre de 1993. Tras un breve forcejeo, el poder fue tomado por el presidente del Parla-

Thalia Griffiths es co-editora del boletín quincenal londinense *Africa Confidential*

Traducción: Eric Jaláin

mento, Henri Konan Bedié, que aunque heredero constitucional apareció en la televisión rodeado de gendarmes e invitó a los marfileños a ponerse a su disposición.

Bédié no era un líder especialmente dotado, y sus esfuerzos por imitar a su predecesor no lograron sino hacer aún más obvio el abismo existente entre ambos. Bajo, rotundo y tímido, no parecía realmente un presidente. Siempre subrayó la similitud de su trayectoria con la de Houphouët-Boigny, pues ambos procedían de los plantadores de cacao del grupo Akan, y popularizó el concepto de *Ivoirité* ("Marfil-idad") como una manera de excluir a potenciales competidores.

Se introdujeron enmiendas constitucionales exigiendo que todo candidato presidencial fuera marfileño de tercera generación, una restricción de alcance en un país con tan altos niveles de inmigración.

Los seguidores del ex-primer ministro Asassane Ouattara, un musulmán del norte considerado, antes de la irrupción de Bédié, el sucesor ungido por Houphouët, formaron en 1994 un nuevo partido de oposición, el *Rassemblement des Républicains*. Pronto se convirtieron en el principal objetivo de la campaña de *Ivoirité* de Bédié, y finalmente Ouattara no se decidió a embarcarse en la batalla legal por ser admitido como candidato en las elecciones presidenciales de 1995.

Así, Bédié resultó elegido prácticamente sin oposición alguna. Aprovechando el repunte de la economía, tras una devaluación del franco CFA en 1994, la corrupción sustituyó al patrocino de los años de Houphouët-Boigny. Los donantes comenzaron a darse cuenta de ello, y a suspender su apoyo.

Finalmente, el amotinamiento militar en diciembre de 1999, por cuestiones salariales, condujo al poder al general Robert Guei, el *Mr Clean* ("Don Limpio") del ejército. Siendo uno de los protegidos cercanos a Houphouët-Boigny, este militar había sido marginado por Bédié tras negarse a desplegar el ejército contra las protestas de la oposición durante las elecciones de 1995.

Aún condenando la toma del poder por la fuerza, la comunidad internacional acogió la nueva situación con prudente optimismo, pues Guei prometía limpieza a fondo de cara a organizar elecciones. Pero, llegado el momento, descubrió que prefería seguir siendo presidente, e incluso retomó el tema de la *Ivoirité* aún con mayor entusiasmo que el propio Bédié. Pero el partido fundado por sus seguidores carecía de base de apoyo nacional.

Tanto Ouattara como Bédié resultaron excluidos de las elecciones presidenciales de octubre de 2000. Cuando Guei intentó autoproclamarse vencedor, los seguidores de Laurent Gbagbo marcharon sobre el palacio presidencial, desafiando los disparos, para reclamar que su candidato fuera reconocido presidente.

Los seguidores de Ouattara boicotearon las elecciones y, poco después de la jornada electoral, fueron hallados los cadáveres de 57 musulmanes del norte a las afueras de Abiyán. Su muerte aún no ha sido aclarada satisfactoriamente. Los ocho gendarmes acusados de la matanza y enjuiciados por un tribunal militar fueron absueltos por falta de pruebas, después de que los testigos se negaran a acudir al juicio temiendo por su seguridad.

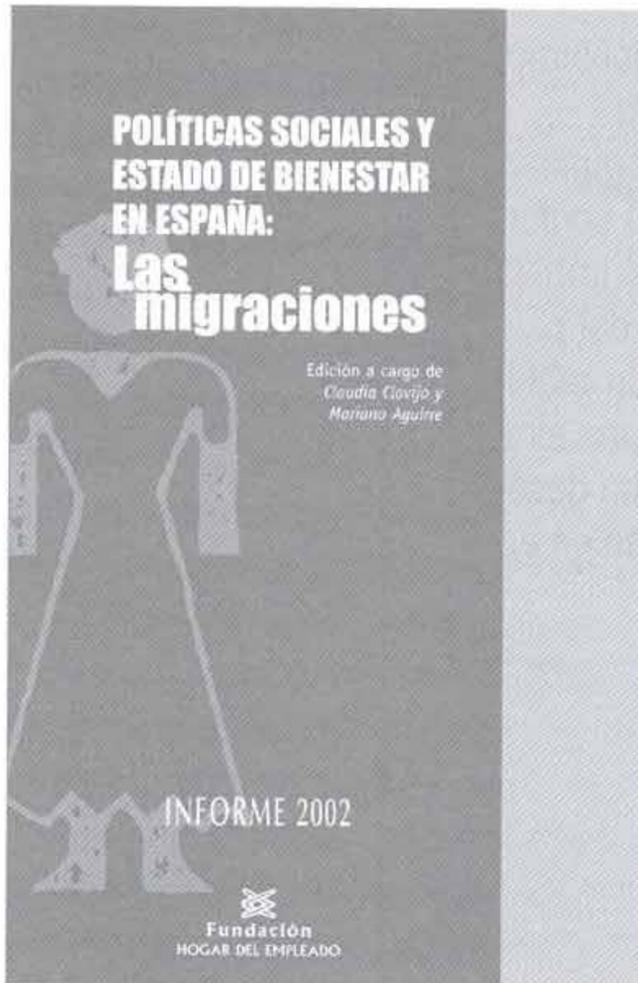
Asumiendo la presidencia en un ambiente tan envenenado, Gbagbo optó por seguir dividiendo para vencer, en vez de tratar de unir al país. La tremenda tarea de darle la vuelta al país le ha venido grande a un gobierno compuesto por fieles opositores carentes de experiencia en el desempeño público. Pero un drástico aumento del precio del cacao está iniciando la recuperación de la economía tras los turbulentos últimos años. A pesar de lo cual, las profundas divisiones comunitarias, los resentimientos provocados por la política de *Ivoirité* y la sostenida exclusión de Ouattara de las esferas de gobierno, junto al descontento en el ejército, están creando una mezcla explosiva.

El tópico era que Costa de Marfil era demasiado sofisticada para guerras civiles, sus ciudadanos estaban demasiado acostumbrados a una vida confortable, en la que los inmigrantes del norte se hacían cargo de todo el trabajo duro. La rapidez con la que los rebeldes se han hecho con la mitad del país ha sorprendido a todo el mundo (posiblemente, incluso a los propios rebeldes). Pero el país queda ahora dividido por muchas cosas más que una simple línea de alto el fuego. La Costa de Marfil próspera y multicultural ha desaparecido para siempre, y no queda nada claro qué clase de paz puede emerger de esta crisis.

POLÍTICAS SOCIALES Y ESTADO DE BIENESTAR EN ESPAÑA:

INFORME 2002

Las migraciones



Edita: Fundación Hogar del Empleado, Madrid 2002. 384 páginas.

Para el Estado de bienestar y, más concretamente, para el sistema público de servicios sociales, la llegada y asentamiento de personas inmigrantes supone la presencia de un nuevo sujeto social que participa en dicho sistema. Esto plantea el reto de atender las peculiaridades de este nuevo sujeto, lo que afecta tanto a asuntos generales como a otros más específicos.

En *Políticas sociales y Estado de bienestar en España: las migraciones. Informe 2002* se aborda el fenómeno de las migraciones en relación con la historia y con el actual proceso de globalización, sus implicaciones jurídicas y culturales, su impacto en las políticas públicas y las respuestas que se dan en ámbitos concretos como el sistema laboral, la vivienda, la educación y la salud.

SUSCRIPCIONES

- Deseo suscribirme al Informe de Políticas sociales y Estado de Bienestar en España y recibir el *Informe 2002*.
- | | |
|--|---------|
| <input type="checkbox"/> Suscripción para España (IVA y gastos de envío incluidos) | 19,00 € |
| <input type="checkbox"/> Suscripción para envíos a Europa: (19,00 + 6,10 €) | 25,10 € |
| <input type="checkbox"/> Suscripción para envíos al resto del mundo: (19,00 + 12,15 €) | 31,15 € |
- (Precio especial para socios suscriptores)

BOLETIN DE PEDIDO

- Deseo recibir ejemplares de *Informe 2002. Políticas sociales y Estado de Bienestar en España: las migraciones*.
- | | |
|---|---------|
| <input type="checkbox"/> P.V.P. (IVA y gastos de envío incluidos para España) | 23,50 € |
| <input type="checkbox"/> Precio para envíos a Europa: (23,50 + 6,10 €) | 29,60 € |
| <input type="checkbox"/> Precio para envíos al resto del mundo: (23,50 + 12,15 €) | 35,65 € |

FORMA DE PAGO

- Talón bancario a nombre de Fundación Hogar del Empleado
- Giro postal a nombre de Fundación Hogar del Empleado
- Contra reembolso
- Transferencia bancaria a:
Banco Popular. C/ O' Donnell, 22. 28009 Madrid.
Nº Cuenta: 0075 0251 11 0600005047

DATOS PERSONALES

Nombre:.....

Apellidos:.....

Dirección:.....

Localidad:.....

Provincia:.....

CP: Teléfono:.....

Los datos que usted nos facilita pasarán a los archivos de la Fundación Hogar del Empleado y su grupo de empresas, y serán tratados como exige la ley de Protección de Datos en vigor. Usted tiene derecho a acceder a su información, así como cancelarla o rectificarla.

Igualmente, puede solicitar su pedido e información sobre nuestras publicaciones a:


Fundación
HOGAR DEL EMPLEADO


Centro de
Investigación
para la Paz

Duque de Sesto, 40 - 28009 MADRID
Tel.: 91 431 04 06 - Fax: 91 576 32 71 - Web: cip.fuhem.es - E-mail: cip@fuhem.es

RAQUEL RICO BERNABÉ

Retos y oportunidades para la paz en Sri Lanka

La antigua Ceilán asiste hoy a un proceso de paz que trata de poner fin a dos decenios de conflicto armado entre el Gobierno (de mayoría cingalesa) y los diferentes grupos disidentes tamiles encabezados por los Tigres de Liberación de la Tierra Tamil (LTTE, por sus siglas en inglés), que se inició tras la independencia de Sri Lanka en 1948 de Gran Bretaña. La guerra ha dejado aproximadamente 64.000 muertos, entre 500.000 y 1.000.000 de desplazados internos, unos 200.000 refugiados y un país económica, social y psíquicamente devastado. Sin embargo, por primera vez desde hace 20 años, el alto el fuego se ha prolongado durante un año, las partes en conflicto negocian temas de gran relevancia política y social, y la población civil parece estar esperanzada.¹

Ninguno de los intentos de paz llevados a cabo desde finales de la década de 1980 dio lugar a un alto el fuego prolongado o a una paz duradera. Sin embargo, el apoyo de la población de Sri Lanka al Partido Nacional Unido (UNP), principal partido de la oposición, en los comicios de principios de diciembre de 2001,² indicó el fracaso de la estrategia de “guerra para la paz” del Gobierno anterior, y fue una apuesta por un nuevo intento para finalizar el conflicto. En febrero de 2002, el Gobierno del primer ministro Ranil Wickremasinghe y el LTTE, apoyados por el

Raquel Rico Bernabé es Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, posgraduada en Cultura de Paz (Cátedra UNESCO para la Paz y los Derechos Humanos) y Master en Resolución de Conflictos por la Universidad de Bradford (Gran Bretaña)

¹ Ver sobre el conflicto en Sri Lanka, Carolina María Rudas Gómez, “Informe: Violencia continua en Sri Lanka”, *Papeles de Cuestiones Internacionales*, verano 2002, N° 78, p. 89 (N. de la E.).

² Los resultados de las elecciones llevaron a una tensa cohabitación política entre el primer ministro, Ranil Wickremasinghe, del UNP y la presidenta, Chandrika Kumartunga, de la Alianza Popular (AP).

papel facilitador del Gobierno de Noruega, acordaron un alto el fuego y firmaron el Memorando de Entendimiento, estableciendo la Misión de Observación de Sri Lanka (SLMM, por sus siglas en inglés) para el control del respeto a la tregua y acordando futuras negociaciones. Desde ese momento han tenido lugar cuatro rondas de negociaciones en Tailandia (entre el 12 y el 17 de septiembre de 2002, entre el 31 de octubre y el 3 de noviembre de 2002, y entre el 6 y el 9 de enero de 2003) y en Noruega (entre el 25 de noviembre y el 5 de diciembre de 2002).

El proceso de paz de Sri Lanka está llevando a acuerdos políticos, administrativos y legales que parecían imposibles anteriormente. Si en un primer momento las partes radicalizaron sus posiciones, en reuniones posteriores éstas han sido abiertas al diálogo y a la negociación. De hecho, si uno de los ejes básicos de lucha armada del LTTE ha sido la reivindicación de un Estado independiente para la población tamil en el norte y este de la isla, en la tercera ronda de negociaciones tanto el LTTE como el Gobierno (aunque sin el apoyo de todos los partidos políticos) se mostraron dispuestos a explorar una solución política basada en la autodeterminación interna (en las áreas en las que históricamente ha habitado la población tamil) en el marco de una estructura federal. Con este objetivo se llevarán a cabo las discusiones en las negociaciones previstas entre el 7 y 10 de febrero en Tailandia, y para marzo en Japón, sobre temas políticos como la separación de poderes entre el centro y la región, así como dentro del propio centro; la protección de los derechos humanos; los diferentes mecanismos políticos y administrativos; la región geográfica; las finanzas públicas; y la ley y el orden.

Así mismo, ambas partes tratan de llevar a cabo un proceso inclusivo que aspira a integrar a todos los sectores sociales. Para ello se acordó tener en cuenta las necesidades de todas las comunidades que viven en la isla, haciendo especial hincapié en la musulmana. Por otro lado, las partes han propuesto la creación de un comité de mujeres para asegurar la incorporación de los temas de género en el proceso de paz. Respecto a la situación de los niños soldado, el LTTE ha declarado que, junto con Unicef, elaborará un plan de acción para restaurar la normalidad en la vida de los niños involucrados en el conflicto armado.

Con el fin de facilitar el debilitamiento del conflicto y reforzar el acuerdo de alto el fuego, el Gobierno se compromete a devolver uno de los hoteles ocupados en la península de Jaffna (territorio reivindicado históricamente por el LTTE y habitado mayoritariamente por población tamil),³ y el LTTE asegura que todo el transporte de comandos de un área a otra tendrá lugar bajo la supervisión de la Misión de Observación de Sri Lanka. Además, el LTTE aceptará el derecho de los grupos políticos a desarrollar trabajo de índole política, incluyendo en lugares como la península de Jaffna y las islas, siempre y cuando no estén armados. Por otro lado, ambas partes han acordado facilitar la restauración y rehabilitación de los lugares de culto en el norte y en el este del país pertenecientes a todas las comunidades religiosas. Finalmente, y tras superar serias diferencias respecto al modo de procedimiento, en la última ronda de negociaciones las partes han iniciado un plan de

³ No obstante, Anton Balasingham, jefe negociador del LTTE, ha denunciado que tropas del Gobierno están ocupando zonas residenciales tamilyes en Jaffna bajo la bandera de "zonas de alta seguridad", lo que está provocando tensiones entre las partes.

acción acelerado para el reasentamiento de la población desplazada durante la guerra.

No obstante, el proceso no cuenta con el apoyo de todos los sectores sociales de Sri Lanka. Tanto la presidenta Chandrika Kumaratunga, líder de la Alianza Popular (AP), como otros partidos de oposición al primer ministro Wickremasinghe, han criticado el papel de Noruega en el proceso de paz (al que acusan de beneficiar al LTTE) y las concesiones que el Gobierno está haciendo a dicho grupo. Este hecho podría suponer un impedimento a una potencial reforma de la Constitución (necesaria para la transición a un Estado de estructura federal), dado que el Gobierno requeriría una mayoría de dos tercios en el Parlamento, y que actualmente no alcanza. Por otro lado, Rauf Hakeem, el presidente del Congreso Musulmán, que da soporte crucial al Gobierno, está sufriendo presiones por parte de su partido ya que los acuerdos alcanzados en las primeras negociaciones no se han cumplido. Finalmente, el All Ceylon Buddhist Congress, que agrupa a los principales líderes religiosos cingaleses, declaró tras la tercera ronda de negociaciones que acepta que los tamiles hindúes y otras minorías tengan derechos económicos y sociales, pero que las decisiones políticas tendrían que ser tomadas únicamente por los cingaleses budistas.

A pesar de los impedimentos, la posibilidad de negociación de la cesión de autonomía, la intención de proteger los derechos humanos, la voluntad de llevar a cabo un proceso inclusivo de los diferentes sectores sociales, y el especial hincapié en la problemática de los niños soldado y de la militarización de la sociedad en general, son aspectos remarcables y necesarios para la paz. Sin embargo, este proceso también se enfrenta a dificultades que emanan de las propias características del contexto actual de Sri Lanka y de la herencia dejada por el conflicto armado.

Herencias de la guerra

Las propias características sociales de Sri Lanka, sumadas a los años de conflicto bélico, han dejado un legado tremendamente complicado tanto a nivel político como social, económico y cultural. En el contexto actual, para que el proceso de paz pueda derivar en una paz autosostenible y duradera tendría que poner especial énfasis en los problemas sociales que originan dichas características.

El primer aspecto a tener en cuenta es que el conflicto que ha vivido Sri Lanka está íntimamente relacionado con el fracaso en la formación del Estado tras la independencia. Este fracaso llevó a la discriminación de ciertos sectores sociales y provocó el estallido de la llamada “emergencia política compleja”, describiendo un contexto de difícil solución: la crisis es multidimensional y arrastra un sufrimiento humano profundo; es una crisis intraestatal a pesar de que también tiene ciertas dimensiones interestatales (como el flujo de refugiados); la violencia se dirige deliberadamente hacia objetivos civiles y hacia estructuras culturales y económicas de gran importancia; el tejido civil se ha roto; y el Estado se muestra colapsado para dar respuesta a tal situación.

En segundo lugar, Sri Lanka presenta un entramado social muy plural y complejo. La pluralidad étnica, religiosa y cultural del país también dificulta la represen-

tación e inclusión de todas las comunidades en el proceso de paz. En Sri Lanka existen tres grupos de población mayoritarios: los cingaleses, los tamiles y los musulmanes. La población cingalesa, que constituye el grupo más numeroso, forma casi tres cuartas partes de la población total y, a su vez, está dividida en dos segmentos: los que habitan en el suroeste del país (en las áreas sujetas a las reglas coloniales desde mediados del siglo XVI) y los descendientes del reino de Kandy. La población cingalesa es mayoritariamente budista y su lengua, el singalés, proviene de las lenguas clásicas indias. Por otra parte, los tamiles, que son población mayoritaria en el norte y el este de la isla, también constituyen dos grupos diferenciados socialmente: los tamiles de Sri Lanka, cuyos orígenes en la isla se remontan a hace 1.500 años; y los tamiles indios, traídos a Sri Lanka por los hacendados ingleses a principios del siglo XX como mano de obra para las plantaciones de té. Ambos grupos comparten el mismo idioma, el tamil, y son mayoritariamente hindúes, sin embargo constituyen grupos sociales muy diferenciados y con diferentes problemáticas. Habitan en distintas partes del país y están regidos por un riguroso sistema de castas que los ha mantenido aparte históricamente, haciendo de los tamiles de las plantaciones de té individuos de "casta baja" con escasos derechos y con unas condiciones de vida especialmente arduas. Finalmente, los musulmanes de Sri Lanka se ven a sí mismos como un grupo étnico diferenciado; y, a pesar de que la mayoría de ellos habla tamil, su rivalidad con los tamiles y la ausencia de sentimiento de representación por el LTTE (a pesar de que éste asegura representar también las aspiraciones de los musulmanes), han llevado a una fuerte segregación social entre ambos grupos provocando enfrentamientos violentos que pueden hacer peligrar el proceso de paz.

Por otra parte, la prolongación del conflicto y las barreras físicas que éste ha impuesto han dado lugar a una falta de comunicación entre las diferentes comunidades, y al denominado *othering process* (proceso por el cual se entiende que existe una gran diferencia entre el grupo de pertenencia y los restantes grupos sociales o culturales), incurriendo en una ausencia de conocimiento y de entendimiento respecto al "otro". Además, ciertos grupos o individuos interesados en la duración del conflicto han utilizado y originado procesos y estrategias de destrucción del capital social, creando el llamado "anti-capital social".⁴ Los grupos armados, por ejemplo, han llevado a cabo campañas de propaganda y violencia para alimentar el miedo, sentimientos de victimización y sentidos de agravio. Los asesinatos públicos y la violencia teatral se han usado estratégicamente para intimidar a la población, provocando represalias entre comunidades y profundizando las líneas de fricción entre éstas. Estos factores crean, por un lado, escepticismo y sospechas entre comunidades y, por el otro, potencian la creación de estereotipos que, ligados al uso de la violencia como medio de reforzar el sentimiento de identidad, provocan constantes incidentes interétnicos.

Otra herencia del conflicto armado es la destrucción física y psíquica. La guerra ha originado una economía devastada, enormes flujos de desplazados inter-

⁴ Término utilizado por varios autores para describir las redes y vínculos sociales que no crean un legado beneficioso para la sociedad, sino que destruyen las estructuras sociales.

nos y de refugiados, y ha destruido gran parte de la infraestructura del país (especialmente en el norte y este de la isla). Los servicios de salud en áreas directamente afectadas por la guerra se han deteriorado drásticamente resultando en una alta tasa de enfermedades infecciosas y precarizando el nivel de sanidad. El flujo irregular e inadecuado de equipo y material médico (incluyendo medicamentos básicos) ha tenido un efecto negativo en el alcance y la calidad de los servicios médicos de atención primaria. La desnutrición se ha extendido, la mayoría de las instalaciones sanitarias y de abastecimiento de agua potable han sido dañadas por bombardeos aéreos, y el hacinamiento ha creado un desequilibrio entre el abastecimiento de instalaciones y la demanda que se hace de ellas. Los niveles de alfabetización han caído debido al deterioro de las instalaciones educativas. Las escuelas en los lugares de acogida de desplazados están masificadas, faltan profesores cualificados y muchos de los niños se han unido a la lucha armada o se ven obligados a trabajar para contribuir a la renta familiar.

Otra consecuencia de la precariedad de la infraestructura y de la calidad y el alcance de los servicios es la enorme tasa de desempleo y la incertidumbre que se ha creado a nivel laboral, social y familiar, lo que ha convertido a Sri Lanka en unos de los países cuya tasa de suicidio es más alta (hay registrados más de 7.000 suicidios por año, es decir, más víctimas de suicidio anuales que víctimas de asesinato por la guerra). Las tasas de alcoholismo y la violencia doméstica han incrementado vertiginosamente. La cultura de la violencia es sin duda una de las herencias psíquicas y culturales del conflicto. La violencia se ha convertido en un medio "normal" para solucionar los problemas. En ciertas áreas del nordeste del país existen miles de minas antipersona aún por explotar, la población está altamente militarizada y los niños están expuestos a la posibilidad diaria de violencia directa.⁵ El uso endémico de la violencia tendrá efectos a largo plazo sobre las próximas generaciones.

Finalmente, otra de las características del contexto actual de Sri Lanka con las que se enfrenta el proceso de paz es una situación de post-alto el fuego de inseguridad, incertidumbre y terror oculto. Presumiblemente, una de las consecuencias de la tregua tendría que haber sido el cese de la violencia contra la población civil; sin embargo, la violencia continúa. La SLMM no parece ser un mecanismo accesible para todos los grupos de población. Un informe del UTHR (Profesores Universitarios por los Derechos Humanos) de la Universidad de Jaffna⁶ ha denunciado el deterioro de la situación de los derechos humanos en el norte y este del país. Según este informe, a pesar de que, como consecuencia de dicho acuerdo, se ha producido cierta desmilitarización de los grupos combatientes y se han abierto las carreteras posibilitando el libre desplazamiento de civiles, el LTTE sigue reclutando niños masivamente, y la confiscación de bienes, el hostigamiento y la violencia continúan. Este contexto hace de la población civil la princi-

⁵ Según la Dirección de Inteligencia Militar de Sri Lanka, cerca del 60% de los combatientes del LTTE tienen menos de 18 años de edad.

⁶ UTHR, *Towards a totalitarian peace: the human rights dilemma*, Special Report, 10 de mayo de 2002, N° 13. En: www.uthr.org

*El uso
endémico de
la violencia
tendrá efectos
a largo plazo
sobre las
próximas
generaciones*

pal víctima del conflicto, y la convierte en una pieza clave de cualquier intento de paz que pretenda ser duradero.

Retos para la paz

El proceso de paz de Sri Lanka supone una gran oportunidad para un país que ha sufrido un largo y cruento conflicto, y que ha quedado devastado económicamente, dividido socialmente, y lleno de odios e incertidumbres. Pero, el conflicto de Sri Lanka no sólo tiene dimensiones políticas. Por tanto, los acuerdos sobre cuestiones políticas, como la cesión de autonomía o la reconstrucción de las infraestructuras y de los servicios públicos básicos, no serán suficientes para que el día a día de los ciudadanos de Sri Lanka sea pacífico. Las dimensiones social y cultural suponen grandes retos que deben ser entendidos como aspectos sustanciales y que requerirán esfuerzos significativos para ser superados. Hay que tener en cuenta a todos los sectores sociales y culturales. A pesar de que ambas partes dicen tratar de llevar a cabo un proceso inclusivo, no todos los sectores sociales se sienten representados. Es necesario dar voz a los tamiles de "casta baja" de las plantaciones de té, e incluir de forma más directa a los musulmanes.

En segundo lugar, resulta esencial la creación de mecanismos que promuevan la mejora de las relaciones intergrupales, la interculturalidad y la convivencia entre los distintos grupos sociales. La desmilitarización de la sociedad y la reinserción de los excombatientes es un aspecto de vital importancia que requerirá programas específicos a medio y largo plazo. Finalmente, el respeto a los derechos humanos tiene que ser entendido como un requisito que se ha de cumplir *de facto*, y no sólo como mera voluntad política sobre el papel.

En definitiva, Sri Lanka ha iniciado un proceso político hacia la paz que debe ser valorado y apoyado. Sin embargo, la euforia política no debe ser un tamiz que imposibilite ver las necesidades del panorama de a pie que derivan de la propia herencia que ha dejado el conflicto. La paz tiene que implementarse tanto desde arriba hacia abajo, como desde abajo hacia arriba. Porque, como afirma Goodhand,⁷ "[en Sri Lanka] la sociedad civil es tanto parte del problema como parte de la solución".

⁷ Jonathan Goodhand, *Aid, conflict and peace building in Sri Lanka*, Conflict assessments 2, Centre for Defence Studies King's College, Universidad de Londres, Londres, 2001.

LAURENCE THIEUX

Argelia: inmovilismo político, dependencia económica y tensiones sociales

Hace 11 años, la interrupción del proceso electoral en Argelia, del cual habría salido victorioso el Frente Islámico de Salvación (FIS), desencadenó un conflicto entre el ejército, que se hizo con el poder, y los militantes islamistas reagrupados en una red compleja de grupos armados. Esta guerra, que se ha cobrado más de 150.000 muertos, no ha terminado. La política de reconciliación nacional llevada a cabo por el presidente Abdelasis Buteflika no surtió los efectos esperados ya que la violencia de los grupos armados continúa. Desde principios de 2002, los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los militantes del Grupo Islamista Armado (GIA) y del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) han provocado 1400 muertos.¹

La situación política y económica de Argelia sufre un peligroso inmovilismo, teniendo en cuenta el creciente descontento de una población sometida desde hace más de una década a la violencia y al constante deterioro de su nivel de vida, asociado a una represión brutal de sus derechos y libertades.

¹ "El País", 6 de enero de 2003, p.4.

Laurence Thieux es investigadora y colaboradora del Centro de Investigación para la Paz (CIP)

Una situación política bloqueada

Argelia sigue sin encontrar una solución política para salir de la crisis. A pesar de llevar a cabo su octava consulta electoral,² desde el inicio de la crisis en 1992, no existen avances reales en la democratización de su sistema político, controlado por el Ejército. El presidente Buteflika, como su predecesor Liamín Zeroual, quiso dar a su mandato una legitimidad institucional. Zeroual, tras ser elegido como presidente en noviembre de 1995, había conseguido restablecer la confianza de los países occidentales tras un periodo de incertidumbre marcado por el desafío planteado al régimen por la Plataforma de San't Egidio. Dicha plataforma, en la que se establecen las condiciones para iniciar el diálogo, fue firmada por los partidos argelinos de la oposición —Frente de Liberación Nacional (FLN), FIS, Frente de Fuerzas Socialistas (FFS), Partido de los Trabajadores (PT), Al Nahda y la Liga Argelina de Defensa de los Derechos Humanos dirigida por Ali Yahia Abdenmour—, reunidos en Roma el 15 de enero de 1995. Esta reunión, junto a la participación del FIS en ella, fue percibida por el régimen como una amenaza. Éste, a partir de entonces, quiso dotarse de una legitimidad institucional. Sin embargo, tanto las elecciones legislativas de 1997 como las locales de ese mismo año fueron marcadas por un fraude masivo.

Los partidos políticos tampoco han conseguido adquirir más representatividad. El pueblo siente una profunda desafección por el sistema político en general ya que el control del Ejército sobre el sistema es tan evidente que cualquier proceso electoral es percibido como una mascarada.

En las elecciones legislativas del 30 de mayo y las locales del 10 de octubre de 2002, el antiguo partido único, el FLN, bajo el liderazgo del actual primer ministro Ali Benflis, volvió a dominar el escenario político argelino.³ En estas últimas, el Islah o Movimiento Nacional para la Renovación (MNR), liderado por Abdallah Djeballah, se impuso como el primer partido islamista —con medio millón más de votos que en el escrutinio anterior del 30 de mayo— en detrimento de las formaciones Movimiento Social por la Paz (MSP) y Al Nahda. Actualmente, el Islah controla 39 municipalidades y la Asamblea Popular de la *wilaya* (provincia) de Skikda. El MSP sólo gobierna en 19 municipalidades. La emergencia del Islah como el tercer partido de la oposición demostró que la ideología islamista cada vez tiene más adeptos en Argelia y que su capacidad de movilización dependía sobre todo de la adopción de una estrategia de oposición res-

² Desde 1995 se han realizado elecciones en ocho ocasiones: elecciones presidenciales de noviembre de 1995; el referéndum de noviembre de 1996 sobre la aprobación de una nueva Constitución; las legislativas de junio de 1997; y locales en octubre del mismo año; las presidenciales de abril de 1999; el referéndum sobre la Ley de Concordia Civil y las elecciones legislativas de mayo de 2002; y las locales en octubre de 2002.

³ En las elecciones locales del 10 de octubre el FLN obtuvo la mayoría absoluta en las asambleas de 43 *wilayas* de las 48 existentes y en 668, de las 1541, municipalidades.

⁴ ICG, "La crise algérienne n'est pas finie", octubre 2000. En: <http://www.intl-crisis-group.org>

pecto al poder. La integración del MSP en el poder ha disminuido notablemente su influencia política.

El último proceso electoral se caracterizó por el escaso interés de la población por la votación. Oficialmente la tasa de participación habría sido del 50,1%. En Cabilia, aunque el voto fue perturbado (en la *wilaya* de Tizi Ouzou no pudieron funcionar 23 de los 67 burós de votos) la tasa de participación en dicha *wilaya* fue del 7,47% y del 15,05% en la de Bejaä. El FFS conservó el control de 65 municipalidades (Tizi Ouzou y Bejaïa entre ellas) y de las asambleas populares de estas dos *wilayas*.

El retorno del FLN al escenario político argelino es una muestra más del inmovilismo que caracteriza la situación política del país. Muchos analistas coinciden en que el principal obstáculo para lograr una solución al conflicto es el control del Estado y de la economía por parte del Ejército, cuya legitimidad ha sufrido un importante desgaste tras una década de "guerra sucia". Para el International Crisis Group (ICG), "reconsiderar el papel del Ejército en la política y someterlo a un control civil debe ser la prioridad de cualquier programa de reforma".⁴ Según este informe, uno de los mayores desafíos sería convencer a parte de los oficiales del Ejército de la necesidad de cambios. Los diez años de guerra civil no han pasado en vano sobre la identidad del ejército y algunos oficiales, especialmente fuera de Argelia como el Movimiento Argelino de Oficiales Libres (MAOL), insisten en la necesidad de reconsiderar su papel en la sociedad argelina. La división de los cuerpos de seguridad involucrados en la lucha antiterrorista y la progresiva pérdida del control del monopolio de la violencia, constituyen otro desafío para el Ejército ya que representa una amenaza para su cohesión y su futuro como institución.

Hasta ahora, el Ejército no ha cedido ni un ápice de su poder. Desde el inicio de la crisis, los presidentes han tenido un margen de maniobra muy estrecho y sus intentos de liberarse de la tutela de los generales han fracasado. El presidente Budiaf fue asesinado en junio de 1992, Liamín Zerual, su sucesor, tuvo que dimitir en 1998 tras una intensa campaña mediática dirigida contra él y sus colaboradores más próximos. Buteflika también empezó a ser víctima de una virulenta campaña de prensa, en el verano de 2002, acusándole de corrupción.⁵

Otra debilidad de la política seguida por el régimen es su obstinado rechazo a la reinserción política de los islamistas, reflejado en la oposición al partido Wafa, liderado por Taleb Ibrahim, y en el encarcelamiento prolongado de los líderes islamistas Ali Benhadj y Abassi Madani detenidos en 1992. La negación de la existencia legal del islamismo merma cualquier posibilidad de salida política a la crisis argelina. El fracaso de la política de concordia civil demuestra que limitar el proyecto de reconciliación nacional a una negociación con los grupos armados sin proyecto político, impide el restablecimiento de la paz.

Sin embargo, la recomposición del FIS se plantea a partir de la liberación de sus líderes históricos en 2003, lo que ha impulsado un fuerte movimiento en el

⁵ La prensa privada francófona acusó a Buteflika de estar en el centro de un escándalo político financiero y haber concedido mercados importantes a amigos suyos. El presidente habría concedido una licencia de telefonía móvil a un operador egipcio, ORASCOM. *Libération*, 14 de agosto de 2002.

El fracaso de la política de concordia civil demuestra que limitar el proyecto de reconciliación nacional a una negociación con los grupos armados sin proyecto político, impide el restablecimiento de la paz.

seno de los distintos grupos políticos que reivindican la representación del FIS en el exterior. Dichos grupos —Delegación Parlamentaria del FIS en el Exterior (DPFE) dirigida por Anuar Haddam desde EEUU, el Consejo de Coordinación del FIS, partidarios de Ahmed Zaoui, otro grupo de “argelinistas” en Ginebra, la Instancia Ejecutiva del FIS en el Exterior (IEFE) en Bélgica— se reunieron, en agosto de 2002, para la creación de una estructura única.⁶ Mourad Dhina, el portavoz del Consejo de Coordinación del FIS en el exterior, encabeza desde entonces el buró ejecutivo del FIS hasta la liberación de Abassi Madani y Ali Benhadj. Dicha recomposición, realizada bajo el liderazgo de Mourad Dhina, ha sido rechazada por la tendencia del FIS representada por Rabah Kébir del IEFE y por Madani Mezrag, que encabezó el Ejército Islámico de Salvación (EIS), y de buena parte de los líderes del FIS en Argelia.

El aumento de las tensiones sociales en Argelia crea un clima favorable a la expansión de la influencia islamista. La máquina represiva y la política de intimidación del régimen fomentan el estallido de revueltas populares, reflejo de la existencia de profundas tensiones sociales avivadas por el contraste entre los resultados satisfactorios de la economía argelina y el progresivo y constante deterioro de las condiciones de vida de la población.

Dualidad económica y situación social insostenible

Aunque Argelia ha recuperado su equilibrio macroeconómico gracias principalmente a un notable aumento de sus ingresos generados por los hidrocarburos, su economía no ha sido profundamente reestructurada. Desde la firma de los acuerdos del escalonamiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional en abril de 1994, no ha habido cambios significativos. Las privatizaciones están en el centro de las luchas de los clanes en el poder para mantener sus privilegios y control de los recursos.

Los ingresos procedentes del sector de los hidrocarburos —éste supone el 97% de las exportaciones— han permitido al Estado restablecer su equilibrio financiero. Según el Banco de Argelia, las reservas de cambio alcanzarían 21,5 mil millones de dólares. El Consejo Nacional Económico y Social (CNES) estima que la tasa de inflación alcanzaría 3,2% para 2003. El Ministerio de Finanzas estableció el presupuesto del Estado para 2003 sobre la base del barril de petróleo a 19 dólares. Los ingresos previstos serían de 15,6 mil millones de dólares. El crecimiento de la economía sería del 4,6% y la deuda externa debería pasar de 22 mil millones de dólares en 2002 a 20,5 mil millones en 2003. El pago de la deuda externa absorbe todavía el 30% de estos ingresos.

⁶ El Congreso Abdelkader Hachani del FIS, celebrado en agosto de 2002 en Bélgica, fue convocado por Abassi Madani. Su legitimidad ha sido cuestionada por otros miembros del FIS. Sin embargo, el hijo de Abassi Madani declaró a la cadena de televisión qatari Al Jazira que el objetivo del congreso era reunir todas las personalidades del FIS tanto del interior como del exterior, y aglutinar todas las instancias representativas creadas en el exterior, tras la disolución del FIS en marzo de 1992, en una sola organización. Los documentos del Congreso del FIS pueden ser consultados en: <http://moutamar.ennour.org/index.php>

Las reformas necesarias para reanimar el sector productivo y volver a crear una dinámica de empleo y consumo en Argelia han sido bloqueadas por los enfrentamientos entre los clanes del Ejército que quieren conservar sus rentas patrimoniales. Al mismo tiempo, las privatizaciones y las reestructuraciones de las empresas nacionales son un proceso complejo que pueden agudizar aún más las tensiones sociales: la privatización de las empresas públicas tiene como corolario la supresión de empleo y la reducción del nivel de vida de un sector de la población. Esta cuestión reanimó las divisiones en el seno del poder. La voluntad de Buteflika de acelerar el informe con el apoyo del ministro de Energía y de Minas, Chakib Khelil,⁷ y del ministro de Participación y Coordinación de Reformas, Abdel Hamid Temmar, ha encontrado fuertes resistencias en el seno del poder.

El deterioro de la situación social y educativa reflejado en el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el desarrollo humano, clasifica a Argelia en la 106 posición de los 173 países estudiados. Según este informe el 20% más pobre de la población sólo dispone del 7% de la renta y del consumo global, y el 15 % sobrevive con 2 dólares de ingresos al día.⁸ Argelia tiene una tasa de desempleo del 30% y la mayoría de los parados son jóvenes. El deterioro generalizado de las condiciones económicas y sociales del pueblo argelino suscitó manifestaciones violentas como las revueltas de la Primavera Negra en Cabilia en 2001.

Las señales de cambio

Aunque el *statu quo* parezca ser la nota dominante de la situación política y económica en Argelia, se identifican algunos factores de cambio. La situación de la cúpula militar no es la misma que hace diez años, y está padeciendo de un fuerte desgaste por la "guerra sucia". Los testimonios de algunos oficiales disidentes y las denuncias de las organizaciones de defensa de los derechos humanos de las exacciones cometidas por las fuerzas de seguridad implicadas en la lucha antiterrorista, han cambiado profundamente la imagen del Ejército argelino, el cual se siente amenazado. En este sentido, el juicio del general Nezzar contra el oficial argelino, autor de "la guerra sucia", Souaïdia ha sido muy simbólico. El general jubilado, atacado por las declaraciones del joven oficial pretendía modificar la imagen del Ejército e intentó utilizar el juicio para absolver el alto mando militar de las acusaciones formuladas contra él.

Para el escritor Khadija Mohsen Finan, "aunque el sistema y las prácticas no han cambiado las máscaras han caído, los dioses han sido desacralizados y la imagen del poder en general sea civil o militar, está fuertemente deteriorada".⁹ Sin

⁷ Chakib Khelil forma parte de una nueva elite tecnócrata formada en EEUU. Trabajó durante 20 años en organismos financieros de Bretton Woods. *Algeria Interface*, agosto 2000. En: <http://www.algeria-interface.com/>

⁸ *Liberté*, 7 de octubre de 2002.

⁹ Kahadija Mohsen Finan, "L'Algérie. Une improbable sortie de crise?", *Les Notes de l'IFRI*, marzo 2002, N° 37, p.17.

embargo, no se vislumbra una alternativa y los países occidentales no confían en la capacidad de las fuerzas políticas de la oposición para impulsar un verdadero cambio político. De esta forma, continúan apoyando al régimen argelino.

El apoyo de Occidente

Con distintos matices, los países europeos y EEUU no han dejado nunca de brindar su apoyo a Argelia. A pesar de las divergencias y pluralidad de mensajes que han podido surgir de los distintos países europeos, todos los actores implicados han reconocido que Francia ha desempeñado un papel preponderante en la posición de la Unión Europea ante Argelia. Las dudas respecto a los verdaderos autores de las masacres colectivas que se multiplicaron a partir de 1997, no han modificado la política de la Unión Europea que ha seguido apoyando la aparente democratización elaborada desde la cúpula militar.

Esta posición fue confirmada con la firma de los acuerdos de Asociación con Argelia en abril de 2002, a pesar del incremento de las acusaciones formuladas contra el régimen argelino por violaciones sistemáticas de los derechos humanos.¹⁰ El acuerdo fue ratificado en octubre por el Parlamento Europeo, que aprobó una resolución que toma en cuenta parte de las recomendaciones de las organizaciones de defensa de los derechos humanos (Amnistía Internacional, Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Human Rights Watch) que insistían en el cumplimiento del artículo 2 del acuerdo referente al respeto de los derechos humanos —concretar los mecanismos de control de la aplicación de este artículo, facilitar las visitas de las ONG hasta ahora obstaculizadas por el régimen, tratar la cuestión de los desaparecidos—. ¹¹

Desde el inicio de la crisis, Francia intercedió a favor de Argelia ante las distintas organizaciones internacionales para que siguieran apoyando al régimen argelino. Las críticas por parte del Gobierno socialista dirigido por Lionel Jospin, a

¹⁰ El acuerdo de Asociación entre Argelia y la Unión Europea fue firmado el 22 de abril de 2002 en Valencia, a pesar de las presiones de las organizaciones de defensa de los derechos humanos recordando las exigencias políticas de democracia y respeto de los derechos humanos que suponía la firma del acuerdo. Desde entonces la Unión Europea ha seguido apoyando el régimen argelino. El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Piqué, felicitó la celebración de las elecciones legislativas en Argelia el 30 de mayo de 2002 por su transparencia, y constató una nítida mejora en el ámbito de los derechos humanos. Esta posición fue vivamente criticada por Amnistía Internacional que escribió el 5 de junio de 2002 una carta abierta a los miembros de la delegación europea en visita a Argelia en ese momento. AFP, 4 de junio de 2002.

¹¹ El texto de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo difiere del que había sido propuesto por la Comisión de Asuntos Exteriores. La mención a la incapacidad de las instituciones argelinas para satisfacer las necesidades de la sociedad ha sido suprimida, así como una referencia a las milicias paramilitares y al Ejército como culpable de violaciones de los derechos humanos. La preocupación del Parlamento Europeo por la amenaza que representa la reforma del código penal adoptada en 2001 sobre la libertad de prensa y la petición de una desmilitarización de la sociedad argelina, han sido también omitidas en la resolución final.

partir de 1997, coincidiendo con el recrudecimiento de la violencia, no desembocaron en una reorientación de esta política.¹² El retorno de la derecha en Francia desde las elecciones presidenciales y legislativas de la primavera de 2002, es propicio al refuerzo de las relaciones entre los dos países. España también firmó un tratado de amistad y cooperación con Argelia el 8 de octubre de 2002.¹³

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la posición del régimen argelino ha sido reforzada. Desde entonces cuenta con el respaldo del Gobierno de EEUU que ha convertido la lucha antiterrorista en uno de los ejes prioritarios de su política internacional. Por el papel que podrían jugar las autoridades argelinas en este ámbito, la importancia estratégica de Argelia para EEUU ha sido realizada. La participación de Argelia en la cumbre de Sharm el Sheij en 1996 fue apreciada por el Gobierno estadounidense. El esfuerzo diplomático de Argelia en el seno de la Organización para la Unidad Africana (OUA) también resulta interesante para EEUU. Argelia podría convertirse en un mediador clave para obtener la cooperación de los países africanos en este ámbito. En septiembre tuvo lugar en Argelia una reunión de los países africanos miembros de la Unión Africana para ratificar la convención de lucha antiterrorista.¹⁴ La nacionalidad argelina de buena parte de los implicados en las redes terroristas vinculadas con Al Qaeda detenidos en Europa,¹⁵ han realzado la importancia de la cooperación de los servicios de seguridad argelinos para los gobiernos occidentales, los cuales han multiplicado los contactos con las autoridades argelinas. En enero de 2003, se sucedieron en Argel el ministro belga de Defensa, André Flahaut, y el secretario estadounidense adjunto de Defensa, Peter Rodman. Este último fue recibido por el general Lamari. El embajador británico en Argel, Graham Hand, declaró al diario *El Watan* que Gran Bretaña estaba dispuesta a vender material militar a Argelia y que había autorizado a sociedades británicas vender este tipo de equipos militares.¹⁶

¹² El ex-ministro francés de Asuntos Exteriores, Hubert Védrine, ante la represión de las revueltas de Cabilia durante la primavera de 2001, declaró que consideraba las revueltas populares profundamente legítimas. *Libération*, 20 de junio de 2001, p.9.

¹³ Dicho acuerdo establece un marco de cooperación en varios ámbitos: energía, pesca, inmigración, lucha antiterrorista. España renovó también una línea de crédito de 130 millones y la reconversión de 150 millones de dólares de la deuda pública argelina hacia España en inversiones. Se prevé también un incremento en el suministro de hidrocarburos con el aumento del 50% de la capacidad del gasoducto Magreb-Europa y la creación de un nuevo Medgas. *Middle East Economic Survey*, 14 de 10 de 2002, Vol. XLV, N° 41.

¹⁴ El 11 de septiembre tuvo lugar en Argel una cumbre intergubernamental de los Estados miembros de la Unión Africana para la prevención y lucha antiterrorista. Junto con los delegados de 160 países, otros representantes de las organizaciones internacionales e instituciones especializadas (ONU, UE, Interpol, OSCE, OTAN) se reunieron para estudiar la forma de aplicar la convención de lucha antiterrorista aprobada en julio de 1999 durante la cumbre de la OUA. *Le Quotidien d'Oran*, 17 de agosto de 2002.

¹⁵ En el Reino Unido la mayoría de las personas que fueron detenidas por asuntos relacionados con el terrorismo eran argelinas.

¹⁶ *La Tribune*, 27 de enero de 2003.

Paralelamente a este renovado interés estratégico, Argelia representa también un interés económico para EEUU, quién promovió en 1999 un proyecto de asociación económica con los países del Magreb (la iniciativa Eizenstat). Las grandes compañías estadounidenses han afianzado su presencia en el sector de los hidrocarburos argelinos y el Gobierno está incitando a las autoridades argelinas para acelerar el ritmo de liberalización de dicho sector.¹⁷ El subsecretario de Comercio estadounidense, Samuel Bodman, declaró, durante su visita a Argel a finales de septiembre de 2002, que Argelia debía abrir su legislación en el sector de los hidrocarburos y prometió a cambio una mayor ayuda y asistencia técnica en el proceso de adhesión de Argelia a la Organización Mundial del Comercio (OMC).¹⁸ La preparación del anteproyecto de Ley sobre los hidrocarburos parece ir en este sentido.¹⁹

A pesar del incremento de la dependencia de Argelia respecto a los países occidentales (apoyo logístico y financiero y dependencia exterior de su economía), el régimen argelino no está sometido a ninguna presión política aún cuando su mantenimiento en el poder represente un riesgo para la estabilidad del país a medio o largo plazo.

¹⁷ El anteproyecto de ley de liberalización del sector de los hidrocarburos preparado por el ministro Chakib Khelil ha sido paralizado. Esta Ley pretendía modificar el funcionamiento y organización de la compañía argelina Sonatrach. El objetivo sería desvincular la gestión económica de la empresa nacional de hidrocarburos del Estado. Sobre esta cuestión ver Aurelia Mañé Estrada, "El fin del pacto social: hidrocarburos y legitimación política", *Nación Árabe*, invierno 2002, Nº 46, pp. 99-114. Sobre la presencia de las compañías estadounidenses de hidrocarburos en Argelia ver Laurence Thieux, "Los hidrocarburos en Argelia: intereses económicos y violencia política", *Papeles de Cuestiones Internacionales*, julio 1999, Nº 67.

¹⁸ *Le Quotidien d'Oran*, 28 de septiembre de 2002.

¹⁹ Este proyecto de Ley pretende liberalizar la gestión del sector de los hidrocarburos. Si el proyecto llegara a ser adoptado, Argelia sería uno de los primeros productores de hidrocarburos de Oriente Medio en establecer un marco liberal y competitivo para la extracción, producción y comercialización de este elemento. *Middle East Economic Survey*, 7 de octubre de 2002, Vol. XLV, Nº 40.

DIDIER RUILHE

Mafia y crimen organizado transnacional

Después de la Guerra Fría, la mafia y el crimen organizado renacieron de sus cenizas. Los economistas liberales han tendido a adoptar una postura negligente con respecto a la mafia, como si se tratase de una anomalía, un negocio ilegal. Pero esta perspectiva oculta la naturaleza social y política de las sociedades secretas y minusvalora las implicaciones del blanqueo de dinero a gran escala. Es como si se hubieran cerrado los ojos con respecto a la economía global ilegal; como si la mafia y sus metas fueran un factor más dentro de la globalización. Un sistema criminal como la mafia, con gran experiencia histórica, puede alcanzar cualquier país y tiene la organización necesaria para lograr sus metas.

Para que el negocio de las drogas sea tan rentable, debe ser ilegal. La presencia de una economía ilegal hace subir los precios de los productos de contrabando y así nace un fenómeno de inflación con repercusiones sobre la economía entera.¹ La rapidez del crecimiento del mercado del narcotráfico muestra también el desarrollo de una actividad como el blanqueo de dinero en el sistema financiero internacional. Los narcotraficantes, la mafia y otras organizaciones criminales aprovechan para ello lugares conocidos como paraísos fiscales (por ejemplo, el principado centroeuropeo de Liechtenstein). Pero, si es cierto que las economías ilegales paralelas causan tanto daño a los países, estos podrían tomar decisiones para sancionar los paraísos fiscales y disminuir considerablemente o acabar con el poder del crimen organizado.

Las organizaciones criminales se han conectado para sobrevivir y crear nuevas economías y espacios paralelos a los sistemas democráticos. Al contrario que organizaciones terroristas como ETA o el IRA, que precisan una entidad territorial

Didier Ruilhe es Diplomado por la Universidad de Wisconsin-Madison, con especialidad en Relaciones Internacionales (política exterior estadounidense y seguridad internacional)

¹ Financial Action Task Force on Money Laundering (FAFT), *Report on Money Laundering Typologies 2001-2002*, 1 de febrero de 2002. En: <http://www.faft-gafi.org>

como fuente de apoyo y de energía nacionalista, la mafia contemporánea no las necesita. Es una organización que funciona como un Estado, construida por miles de personas que quieren alcanzar sus metas sin la regulación de los Estados.

Las acciones de la mafia son perjudiciales para la estabilidad estatal. Los Gobiernos contaminados por organizaciones criminales actúan de forma diferente de como lo harían sin ellas. Las ideologías de las relaciones internacionales solo tratan de las relaciones entre Estados. Los teóricos realistas se niegan a mirar a la economía como forma intelectual que dirige el mundo y sitúa en segundo plano la importancia del Estado. Pero la mafia no parece tener dificultad para entenderlo y utilizarlo contra los Estados soberanos.

El fracaso de la democracia: financiación de la política y corrupción

Como se puede constatar cuando llegan las elecciones, actualmente los candidatos tienen una presencia muy mediática. Son imprecisos a la hora de hablar de los problemas sociales, culturales y económicos y ofrecen una imagen para los medios más que soluciones. Una base económica es indispensable para jugar en política. La mayoría del dinero utilizado en las elecciones proviene de los negocios. Pero el mundo de la política debe ser un mundo ético, ya que su función es servir al pueblo, y el de los negocios no se basa en esta misma filosofía, pues no existe para servir a la sociedad sino para hacer un intercambio de servicios y mercancías por dinero. Como explica Vitto M. Caferra, "la financiación irregular de la política y la corrupción asociada a ella no sólo viola el principio de que los ciudadanos tienen que determinar la vida del Estado, sino que pone en crisis el principio también fundamental del pluralismo político, ya que los sectores económicos imponen análogas contrapartidas a todos los partidos políticos y a los políticos individuales financiados de un modo corrupto".²

Una vez que se transita por los caminos de la corrupción, raramente se puede reclamar una pretensión de legitimidad. Corrupción y democracia, desde un punto de vista conceptual, son incompatibles: la corrupción socava la estructura social, el principio de la mayoría y las bases mismas de la democracia.

Hay ejemplos históricos de Estados democráticos donde ha colapsado el sistema político. Italia y Colombia son, quizá, los dos casos más claros de esta época. Lo que ocurre en Colombia y ha ocurrido en Italia ya había sucedido en otras entidades gubernamentales y tendrá lugar hasta que exista un sistema anticorrupción adaptado al mundo actual. Uno de los peores enemigos del Estado y del interés general es la mafia. Estudiar su historia puede ayudar a comprender sus mecanismos parasitarios en los dominios público y privado. No es una organización anárquica, sin conocimiento y sin metas. Debe ser vista como un Estado, una especie de empresa multinacional compuesta por miles de personas educadas, que conocen la ley y el ambiente en el que trabajan (la mafia rusa, muy sofisticada-

² Vitto M. Caferra, *Il sistema della corruzione. Le ragioni I soggetti I luoghi*, Laterza, Bari, 1992.

da, emplea incluso economistas con doctorados).³ La mafia tiene sus propias leyes y comportamientos sociológicos. Aparece de manera gradual y conquista el terreno poco a poco. Una vez que se vuelve la organización más poderosa de una región o un país, cualquier Gobierno o empresa extranjera puede verse obligado a tratar con ella. Estos regímenes ilegales se vuelven legales si un miembro poderoso de la mafia pasa a ser alcalde o llega a una posición alta en el gobierno. De esta manera, el sistema criminal se despenaliza y puede hacer crecer sus negocios impunemente y sin temer repercusiones jurídicas. Susan Strange opina que “el crimen organizado [...] es otro ámbito significativo de retirada por parte de los Estados-nación. Tanto si consideramos el narcotráfico como la inmigración ilegal, las fuerzas de ambas actividades sobrepasan los esfuerzos de las policías y los funcionarios de aduanas nacionales, por muy arduos que sean. Lo que capturan es una mínima fracción de los flujos que atraviesan las fronteras”.⁴

La corrupción política y el uso abundante de dinero muchas veces ilegal ha transformado de manera fundamental el funcionamiento de los partidos políticos. Este fenómeno existe también en las democracias. La corrupción aumenta los costos y los riesgos de las inversiones y tiene un impacto negativo en los flujos de capital. La alta corrupción puede llevar a los Gobiernos a desarrollar proyectos faraónicos, con fondos privados o de organismos de ayuda al desarrollo, en lugar de dedicar estos mismos recursos a tareas productivas (así ocurrió con Rusia con la ayuda financiera recibida del FMI). La compra de armamento sofisticado e innecesario puede ser un negocio más rentable para una cúpula gobernante que dedicar estos fondos a mejorar las prácticas agropecuarias o educativas del país. Los altos índices de corrupción, por tanto, degradan las posibilidades de desarrollo.

El concepto de corrupción incluye prácticas como el soborno, la extorsión, el fraude, la compra y entrega de votos, las contribuciones políticas ilícitas, el abuso del poder y el abuso de confianza, la malversación de fondos públicos o el conflicto de intereses. En ocasiones se soborna a una persona no para que tome una resolución ilegal, contraria al Derecho, sino para que adopte o acelere una resolución legal. Malem cita un comentario de Lord Young, presidente de Cable & Wireless, que es una muestra de la ambigua posición adoptada por el mundo de los negocios hacia la práctica del soborno: “Cuando usted habla de comisiones está hablando de algo que es ilegal en este país. Pero existen otras partes del mundo en las que yo estuve y donde todos sabemos que sí ocurre. Y que si usted quiere seguir haciendo negocios allí tiene que hacerlo, no es algo moralmente reprochable. En muchos países del mundo el dinero llega hasta las capas inferiores del país desde la cúpula del Estado, que es dueño de todo. Ahora bien, esto no es inmoral ni corrupto. Es muy diferente a la práctica nuestra. Debemos tener mucho cuidado con eso de insistir en que nuestras costumbres sean observadas en todo el mundo”.⁵

³ *International Herald Tribune*, 30 de septiembre de 1997, p. 8.

⁴ Susan Strange, *Dinero loco: El descontrol del sistema financiero global*, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1998, p. 208.

⁵ Jorge F. Malem, *Globalización, comercio internacional y corrupción*, Editorial Gedisa, Barcelona, 2000.

*La alta
corrupción
puede llevar a
los Gobiernos
a desarrollar
proyectos
faraónicos,
con fondos
privados o de
organismos
de ayuda al
desarrollo, en
lugar de
dedicar estos
mismos
recursos a
tareas
productivas*

Respecto de la consideración de los actos de la corrupción, no hay prácticamente ningún país y ninguna cultura que no sancione de alguna manera el soborno. Casi todos los regímenes jurídicos desarrollados prohíben a sus funcionarios recibir dinero a cambio de favores, con el criterio de que sólo la imparcialidad debe regir el funcionamiento de la Administración pública. Afirmar, pues, que los pagos de peaje deberían estar permitidos carece de fundamento. Los funcionarios corruptos tienden a favorecer únicamente a las empresas que se ganan su confianza.

Ésta es la manera más pacífica de sobornar a alguien, pero la mafia puede emplear métodos más salvajes. Es muy improbable, especialmente en las democracias, que pueda sobornar a los funcionarios más altos del Gobierno, como el presidente y sus ministros, ya que no se pueden reemplazar fácilmente. Sin embargo, parlamentarios, alcaldes, jueces, policías y otros funcionarios son presas más fáciles.

Uno de los mayores problemas dentro del fenómeno de la corrupción es el de personas que trabajan dentro de la lucha contra el narcotráfico. Existen muchos ejemplos conocidos. Guillermo González Calderoni guardó celosamente secretos durante diez años como jefe superior de la policía de México. Los políticos le pedían favores y Calderoni ayudaba a los narcotraficantes a pasar drogas y al desarrollo del narcotráfico.⁶ Otro caso fue la acusación al presidente de Colombia, Ernesto Samper, de haber recibido dinero del narcotráfico para la financiación de su campaña electoral en 1994. El crimen organizado entiende que no puede matar a un presidente, pero puede delatarle si no cumple su parte del trato y, así, destrozarse su reputación social.

En Italia fueron asesinados 26 jueces en un periodo de 22 años, todos ellos dedicados a combatir a los políticos corruptos y a la mafia. El juez Giovanni Falcone, en su obra *Men of Honor*,⁷ señalaba que la violencia de esta organización es difícil de comprender; de hecho —afirmaba— es difícil entender que haya un proceso lógico detrás de ella. Pero la mafia es una sociedad, una organización que tiene su propio sistema legal. Quien es reconocido como miembro de la “familia” acepta sus regulaciones y respeta a todos sus miembros. Es esencial que cada miembro de ella sepa que, si no cumple con su deber, la pena de muerte será inevitable e inmediata. La clave del éxito y de la expansión del crimen global en los años noventa es la flexibilidad y versatilidad de su organización. Pero aún más importante es el sistema de protección, la red de agentes de la ley, jueces y políticos que están en su nómina. Una vez que entran en el sistema, están cautivos de por vida.

Muchos investigadores piensan, como Allison Jamieson, que se debe hacer un esfuerzo por entender los principios de la mafia. Entender su organización es saber cómo un pueblo siciliano tradicional estaba configurado política y socialmente. Falcone asegura también que el mundo occidental, y particularmente Europa, tiene la tendencia de exorcizar al demonio proyectándole una imagen

⁶ *El País*, 24 de diciembre de 1996.

⁷ Giovanni Falcone, *Men of Honor*, Fourth Estate, Londres, 1992.

diferente de la suya. Pero si se quiere combatir a la mafia eficazmente, no se la debe transformar en un monstruo o en una enfermedad: “debemos reconocer que se nos parece”.⁸ La mafia es un sistema de poder y toma el lugar del Estado allí donde éste pierde su autoridad.

La economía criminal global

El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas asegura que, durante los últimos años, la comunidad internacional ha experimentado un gran número de convulsiones políticas, cambios geopolíticos y reestructuraciones tecnológicas. El crimen organizado ha surgido como uno de los desafíos más alarmantes. El crimen transnacional organizado, con su capacidad para extender sus actividades y hacer tambalearse la seguridad y las economías de los países —en particular los que están en vías de desarrollo o en transición— representa una de las mayores amenazas que tienen que afrontar los Gobiernos para asegurar su estabilidad, la seguridad de su pueblo, la conservación del tejido social y la viabilidad y desarrollo de sus economías. La Comisión Antimafia del Parlamento italiano, por su parte, señala que las organizaciones criminales internacionales han llegado a acuerdos y tratos para dividirse las zonas geográficas, desarrollar nuevas estrategias de mercado, elaborar formas de asistencia mutua y solventar conflictos, todo ello a escala planetaria. “Se trata de una genuina contra potencia (superpotencia) criminal, capaz de imponer su voluntad a los Estados legítimos, socavar las instituciones y fuerzas de la ley y el orden, trastornar el delicado equilibrio económico y financiero y destruir la vida democrática”.⁹

El crimen organizado es antiguo, pero ahora se ha unido para crear una red global diversificada que trasciende las fronteras y vincula negocios de toda clase: la mafia siciliana, la mafia estadounidense, los cárteles de Colombia y México, las redes criminales nigerianas, los *Yakuzas* japoneses, las Tríadas chinas, las mafias rusas, los traficantes de heroína turcos, las cuadrillas armadas de Jamaica y una miríada de agrupaciones criminales regionales. No pueden extender su alcance internacional sin entrar en el territorio de otra potencia criminal. Por ello, la lógica empresarial les permite encontrar respetuosos tratos y puntos de convergencia.

Las estrategias de la mafia consisten en ubicar sus funciones de gestión y producción en zonas de bajo riesgo, donde poseen un control relativo del entorno institucional, mientras buscan sus mercados en las zonas de demanda más rica, donde se pueden cobrar precios más altos. En las repúblicas de la antigua Unión Soviética, durante el periodo de transición, redes criminales rusas y de todo el mundo se hicieron con el control de material militar y nuclear que podían vender a buen precio dado el caótico escenario internacional posterior a la Guerra Fría. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Crimen Organizado, de 1994, estimó que el tráfico global de drogas suponía en torno a 500.000 millones de dólares

⁸ *Ibidem*, p. 83.

⁹ *Informe de la Comisión Antimafia del Parlamento Italiano a la Asamblea de Naciones Unidas*, 20 de marzo de 1990.

El tráfico de drogas sigue siendo el principal negocio del crimen organizado. El mayor peligro para su supervivencia puede ser la legalización de las drogas

estadounidenses anuales; una cifra mayor que el comercio de petróleo. La mafia siciliana, a su vez, sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, utilizando su control histórico del sur de Italia y su profunda penetración en el Estado italiano.

En 1987, un acuerdo entre la mafia siciliana y el cartel de Medellín abrió el camino para intercambiar heroína de Asia / Europa por cocaína de Colombia. De este modo los colombianos pudieron entrar en el mercado de heroína de EEUU, que hasta entonces se repartían las mafias siciliana y estadounidense y las Tríadas chinas. A su vez, utilizando la infraestructura siciliana, los cárteles de Colombia pudieron distribuir su cocaína en Europa a cambio del pago de una cuota. La creciente internacionalización de las actividades de la mafia italiana en los años noventa muestra su poder para renovarse. Actualmente es la mafia mejor articulada junto con las Tríadas chinas, algo que puede deberse a sus orígenes similares. Ambos tipos de organización se arraigan en la historia y la etnia y surgieron como un movimiento de resistencia contra invasores.

Un ejemplo muy particular es el de los *Yakuzas*, cuyo origen puede rastrearse en las redes de protección creadas por *samurais* en los primeros estadios de la urbanización japonesa del siglo XIX. Al igual que ocurrió con otras organizaciones, la protección se convirtió en la opresión de sus propios miembros. La globalización permitió "exportar" las empresas japonesas y con ello llevaron a EEUU su práctica habitual de chantaje y extorsión, intimidando a los ejecutivos japoneses del extranjero con sus *sokaiyas* (provocadores violentos). Para operar en EEUU y Europa, los *Yakuzas* llegaron a diversos tratos con las mafias siciliana y estadounidense, así como con varios grupos criminales rusos.

El fin de la Guerra Fría y la desaparición casi total del Estado en Rusia y las repúblicas ex soviéticas, junto con el establecimiento de un capitalismo salvaje, han permitido la espectacular expansión de diversas redes criminales durante los años noventa. Una de las mafias más poderosas y brutales es la chechena, que controla sus territorios y otros países de la ex Unión Soviética. Hay cárteles que nacieron internacionalizados desde el principio, como el de Medellín o el de Cali en Colombia y los de Tamaulipas y Tijuana en México. Su intención explícita era la exportación de drogas a EEUU y Europa.

El crimen organizado se ha internacionalizado y embarcado en una amplia gama de actividades, pero el tráfico de drogas sigue siendo su principal negocio, hasta el punto de que el mayor peligro para su supervivencia puede ser la legalización de las drogas. Como indica Manuel Castells:¹⁰ "Pueden (las mafias) confiar en la ceguera política y la moralidad equivocada de unas sociedades que no asumen la base del problema: la demanda impulsa la oferta. La fuente de la drogadicción y, por lo tanto, de la mayoría de los delitos del mundo, radica en los daños psicológicos causados a las personas por la vida cotidiana en nuestras sociedades. Así que, pese a la represión, habrá un consumo masivo de drogas en un futuro previsible. Y el crimen global organizado encontrará medios de suministrar a esta demanda, haciendo de ello un negocio muy rentable y la madre de la mayoría de los delitos restantes".

¹⁰ Manuel Castells, *La era de la información: economía, sociedad y cultura*, Fin de Milenio, Blackwell Publishers Inc., Cambridge Ma, 1998, Vol. 3.

La economía criminal se ha extendido a otras actividades globales diversificadas e interconectadas como el tráfico de armas y material nuclear, el contrabando de inmigrantes ilegales, el tráfico de órganos y el blanqueo de dinero.

La mayoría de los asesinatos del crimen organizado son intra nacionales. Es decir, que los rusos asesinan a rusos, los sicilianos asesinan a sicilianos, los miembros del cártel de Medellín y del cártel de Cali se matan entre sí, precisamente para controlar su base local/nacional, desde la que pueden operar cómodamente.¹¹ El desprecio por la vida humana también se puede deducir de sus negocios con emigrantes. A partir del endurecimiento de las leyes de inmigración para contener los flujos migratorios, las mafias han encontrado una razón para intervenir en un inmenso mercado a nivel mundial. Todos los días se interceptan barcos u otros medios de transporte llenos de inmigrantes ilegales. Como sostiene Manuel Castells: "La inmigración ilegal controlada por criminales no es sólo una fuente de beneficios provenientes de los pagos efectuados por los futuros inmigrantes (por ejemplo, sólo en México y el Caribe ascenderían a 3.500 millones de dólares anuales). También mantienen a muchos de ellos en cautiverio durante un largo tiempo para saldar su deuda con un alto interés. Los expone, así mismo, al fraude, el abuso, la violencia y la muerte. Es más, al amenazar con desbordar los canales de inmigración legal, desata reacciones xenófobas que, manipuladas por políticos demagógicos, están acabando con la tolerancia cultural y los sentimientos de solidaridad en la mayoría de los países".

El desarrollo del narcotráfico y la identificación cultural

El negocio y la producción de drogas han penetrado profundamente el sistema político de América del Sur. Los carteles se han repartido el continente entero, con países que cultivan las plantas para que sean refinadas y procesadas en otros, y países que se dedican a la exportación de las drogas utilizando medios cada vez más sofisticados. El mercado de las drogas es un componente muy importante de la economía del continente americano. Pero el narcotráfico ya no es solamente el mercado de las drogas sino que se ha convertido en una ideología y ha penetrado el sistema social y la religión. Los líderes de la droga se comportan como líderes espirituales con una meta nacionalista. Manuel Castells explica este fenómeno:¹² "El apego de los narcotraficantes a su país y a sus regiones de origen va más allá del cálculo estratégico. Están profundamente arraigados en sus culturas, tradiciones y sociedades regionales. No sólo han compartido su riqueza con sus ciudades e invertido una parte considerable [...] de su fortuna en su país, sino que también han recuperado las culturas locales, reconstruido la vida rural, afirmado vigorosamente sus convicciones religiosas y su fe en santos y milagros locales, apoyado el folclore musical [...], hecho de los equipos de fútbol [...] el orgullo de la nación".

El narcotráfico ha combinado astutamente el soborno, la intimidación, el financiamiento de la política y la hábil afirmación de la identidad cultural, en Colombia,

¹¹ *Ibidem*.

¹² *Ibidem*, pp. 226-227.

México, Rusia, Rumania, Hungría, Tailandia, entre otros. Manuel Castells opina que la posibilidad tecnológica y organizadora de establecer redes globales ha transformado y dado poder al crimen organizado. Afirma que, durante largo tiempo, su estrategia fundamental fue penetrar en las instituciones nacionales y locales del Estado en su país de origen para proteger sus actividades. Cuanto más global se vuelve el crimen organizado, más destacan sus componentes de identidad. Así, las mafias conservan sus bases étnicas, culturales y posiblemente su territorio. Son capaces de mezclar la identidad cultural y la empresa global.

Muchas veces se trata de líderes mafiosos que se han vuelto modelos para una generación de jóvenes que no ve otra posibilidad de salir de la pobreza. Muchos de estos jóvenes desarrollan personalidades copiadas de la fascinación que tienen por los mafiosos. El autor Gabriel García Márquez describe muy bien la vida de los jóvenes criminales. Habla de la carencia de metas, del sentido inmediato, del *carpe diem* de jóvenes que no pretenden tener una vida larga y que se conforman con el deseo de ser momentáneamente poderosos, tener dinero, armas e identificarse con la ideología de cada banda. Criminales como Malverde (bandido de principios del siglo XX) son convertidos en patronos de los narcotraficantes (como el mito de Pablo Escobar en Colombia o de varios jefes de la mafia en Sicilia). La cultura de la violencia resulta de su presencia durante largas temporadas y de la virulencia de sus efectos. Por ejemplo, desde los años cincuenta Colombia sufre la presencia de grupos organizados que practican métodos de intimidación contra la población y la imagen de la democracia. Se puede decir que el narcotráfico es ahora endémico a la cultura colombiana. *Impunity in Colombia*¹³ muestra el efecto de los conflictos sobre la cultura del país, que se ha sustituido por una cultura mafiosa y anárquica. Como dijo el presidente César Gaviria (1990-1994), la impunidad está en el fondo de muchos de los problemas del país. El efecto de la impunidad va más allá en la esfera sociológica, ya que las víctimas reciben un mensaje muy claro de los criminales: son superiores a la ley y eso les permite ignorar los derechos humanos fundamentales.

Lo que ocurre en Colombia no es un caso aislado del mundo. No es el único Estado frágil, y la mafia se aprovecha de los lugares más débiles para sus intereses. Otros casos son Venezuela, Brasil, Suráfrica, Pakistán, el sureste asiático y los Estados de Europa del este, incluyendo a Rusia. Indochina parece desempeñar un papel similar al de Colombia al aliarse países vecinos (Tailandia, Birmania, Laos, Malasia y partes de China), y conducir una producción narcótica de tipo empresarial. Allí también los Gobiernos presentan índices altos de corrupción y de infiltración por el crimen organizado.¹⁴ La región del Océano Índico (Madagascar, Comores, Seychelles, Mauricio) es otro lugar muy apreciado por los narcotraficantes, ya que los Gobiernos son débiles y esto les permite actuar con impunidad.¹⁵

¹³ Institute of Latin American Studies, *Impunity in Colombia*, The British Library, Londres, 1995.

¹⁴ Terraviva, agosto de 1998, Nº 20, p. 11.

¹⁵ Jean-Marc Balencie, Arnaud de la Grange et. al., *Mondes Rebelles*, Éditions Michalon, París, 2001.

Suráfrica está sufriendo una tensión entre grupos étnicos y la incapacidad del Estado para resolver este problema fundamental para el desarrollo del país, lo que se añade a la extrema pobreza y la alta incidencia del sida para hacer de él un lugar con condiciones para la violencia y el odio. Se habla incluso de tramas para desestabilizar a la joven democracia suráfricana. Nelson Mandela ha afirmado que “estamos tratando con experimentados criminales políticos que tienen en su poder inmensos recursos: dinero, armas, redes de comunicación y contactos en el poder. Se trata de una red muy bien organizada e infiltrada en los órganos del Estado, en el ejército y la policía”.¹⁶ Como señaló Mary de Haas, una profesora de la Universidad de Natal que publica un informe bimensual sobre la violencia política en la provincia: “O los servicios de seguridad son increíblemente incompetentes, o hay miembros destacados de la policía y el ejército que apoyan la estrategia de la desestabilización”.¹⁷ La violencia ha permeado todos los niveles sociales, y la infiltración mafiosa en un Gobierno débil facilita sus acciones y sus lucrativos negocios.

Otra entidad política, denominada por algunos el Estado mafioso por excelencia, es Rusia. El propio ex presidente Boris Yeltsin llegó a afirmar públicamente que se trata de un Estado mafioso a escala mundial, carcomido por la corrupción de arriba a abajo. Rusia tiene un alto índice de políticos y funcionarios asesinados por el crimen organizado, crímenes que en un 90% quedan impunes. Durante el comunismo se desarrolló una economía paralela basada en la corrupción. Actualmente se estima que las mafias poseen el 40% de las empresas privadas, el 60% de las estatales y hasta un 80% del sistema bancario. Es decir, poseen los recursos para controlar el Gobierno nacional e influir en Gobiernos e instituciones extranjeras. Se calcula que existen en Rusia más de 9.000 mafias que dan trabajo a un estimado de 100.000 individuos. Es casi imposible contabilizar los funcionarios que trabajan para ellas. Para el ex ministro del Interior, Anatoli Kulikov, el Estado mafioso deriva de los “huecos” existentes en la legislación, la falta de una política estatal unificada y la descoordinación entre los cuerpos de seguridad del Estado.

Puntos para la reflexión

Es imposible pensar que los narcotraficantes de los países del Tercer Mundo y de los Estados frágiles puedan desarrollar sus negocios internacionales sin la ayuda —u omisión— de los Gobiernos poderosos y de intereses privados. Tampoco se puede pensar que las infraestructuras de los países más ricos no sean permeables. Un hecho muy importante que estos países parecen olvidar es que los pueblos más ricos y desarrollados son una minoría, mientras que la mayoría de la población mundial vive en la pobreza y el subdesarrollo. Las redes de crimen orga-

¹⁶ “Las manzanas podridas de Suráfrica”, *El País*, 12 de agosto de 1997. Ver Mark Shaw, *Crime and policing in Post-Apartheid South Africa*, David Phillips Publishers, Cape Town, 2002.

¹⁷ *Ibidem*.

nizado no se han olvidado de este dato y han amasado su fortuna monetaria y política sobre la miseria mundial, aunque sólo para agravarla.

Si existe voluntad estatal de erradicar las mafias del mundo, habrá que emplear métodos muy distintos que los utilizados hasta ahora. El uso de la fuerza no es siempre la mejor técnica para contraatacar un fenómeno persistente que utiliza todos sus recursos para aprovecharse de cada situación. Las fuerzas estatales democráticas deberían utilizar sus tecnologías para garantizar la seguridad de sus ciudadanos contra todas las formas de poder destructivo. Y la sociedad civil y sus organizaciones deben tomar serias iniciativas, porque la lucha contra las mafias y la corrupción es, también, una defensa de la democracia y la paz, en los Estados democráticos y en los frágiles y autoritarios.

Observatorio de conflictos

Honduras: violencia, pobreza y
corrupción

93

CAROLINA MARIA RUDAS GÓMEZ

Honduras: violencia, pobreza y corrupción

Honduras es uno de los países más pobres y violentos de América Central. El apoyo militar y económico de EEUU durante la década de los ochenta y el predominio militar en el poder durante más de 40 años, junto a los desastres naturales que sufrió el país en los años noventa, provocaron en el Estado centroamericano una grave crisis económica, una sociedad descompuesta y una democracia frágil, impidiendo su desarrollo. Actualmente, Honduras vive una crisis en la que los niños y jóvenes son las principales víctimas al ser considerados la causa de la creciente inseguridad ciudadana.

La región que hoy es Honduras estuvo ocupada en un principio por los mayas, y posteriormente por grupos menores de indígenas hasta la conquista española en 1502. El 15 de septiembre de 1821 se independizó del dominio español y junto con las demás provincias centroamericanas integró el imperio mexicano de Iturbide, disuelto dos años más tarde. En 1838 se constituyó como un Estado soberano. La nueva nación emergió con una herencia hispánica-indígena que se ha conservado hasta la actualidad, con una mayoría de población mestiza, idioma español y religión católica.

República bananera y gobiernos militares

A finales del siglo XIX se instaló en el país centroamericano la United Fruit Company (UFCo), corporación estadounidense que se adueñó de enormes extensiones de tierra, casi toda la producción de frutas del país, los ferrocarriles, barcos y

¹ La autora quiere agradecer especialmente a José Rigoberto Reyes, abogado penalista hondureño, quien colaboró proporcionando información y análisis para la realización de este artículo.

Carolina María Rudas Gómez es Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de los Andes de Bogotá, Master en Resolución de Conflictos por la Universidad de Bradford (Inglaterra). Es colaboradora del Centro de Investigación para la Paz (CIP)¹

puertos, y de las principales decisiones políticas. Desde 1920 hasta 1923 hubo 17 intentos de golpe de Estado militares. En 1924, EEUU invadió Honduras e instauró una democracia formal. Desde 1932 hasta 1954 el país fue gobernado por el dictador Tiburcio Carias Andino y por Juan Manuel Gálvez, ambos del conservador Partido Nacional.

Entre 1956 y 1972, Honduras tuvo gobiernos militares que en ocasiones permitieron la celebración de elecciones democráticas en las que se eligieron a civiles. Estos fueron sucesivamente derrocados por nuevas revueltas militares. En 1969, la reforma agraria obligó a cientos de campesinos salvadoreños, que vivían en Honduras, a abandonar su tierra lo que condujo a una guerra de dos semanas entre los dos países centroamericanos. El conflicto recibió el nombre de "Guerra del Fútbol" por coincidir con un encuentro deportivo entre Honduras y El Salvador en las eliminatorias para el campeonato mundial de México en 1970.

En 1978, el jefe del Ejército, general Policarpo Paz García, asumió el poder. El régimen hondureño se alió estrechamente con Anastasio Somoza, dictador de la vecina Nicaragua. La revolución sandinista influyó para que se eligiera una Asamblea Constituyente en Honduras, una de cuyas primeras decisiones fue ratificar como presidente a Paz García. En 1981 ganó las elecciones el candidato del Partido Liberal, Roberto Suazo Córdoba.

Gobiernos civiles e intervención estadounidense

Durante la presidencia de Suazo Córdoba y de su sucesor José Azcona Hoyo (1986-1990), Honduras participó activamente en la lucha contra el Gobierno sandinista de Nicaragua tolerando la presencia de tropas estadounidenses y la instalación de bases contrarrevolucionarias nicaragüenses en su territorio. Se calcula que en 1983 el Pentágono tenía 1.200 soldados en el país que intervenían en operativos bélicos, daban instrucción militar y apoyo logístico, y construían obras de infraestructura. La "contra" nicaragüense mantenía unos 15.000 efectivos, a los que se sumaban cerca de 30.000 refugiados nicaragüenses. En 1985, 7.000 soldados estadounidenses realizaron maniobras muy cerca de la frontera con Nicaragua.²

Honduras promulgó una "ley antiterrorista" que prohibió el derecho de huelga. Grupos paramilitares de exterminio actuaron con impunidad y las "desapariciones" de opositores políticos fueron corrientes. El manejo de la ayuda estadounidense desató una corrupción desenfrenada en las Fuerzas Armadas. El plan de privatización y reducción del gasto público fracasó. En el sector agropecuario, el desempleo estacional alcanzó aproximadamente al 90% de los trabajadores.

Consolidación de la democracia

En 1989, Rafael Callejas, candidato del Partido Nacional, triunfó ampliamente en

² En: <http://www.eurosur.org/guiadelmundo/paises/honduras/>

unas elecciones calificadas de fraudulentas. Respaldado por EEUU y el sector empresarial, Callejas inició una completa liberalización de la economía, aumentando los impuestos, incrementando los precios de los combustibles y devaluando la moneda. En 1990, tras la derrota sandinista en las elecciones nicaragüenses, el Gobierno de George Bush redujo la ayuda económica al país y criticó duramente los abusos a los derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas de Honduras.

El Gobierno hondureño respondió a la nueva posición estadounidense decretando la amnistía para los detenidos y perseguidos políticos y aboliendo la ley anti-terrorista. Las Fuerzas Populares Revolucionarias Lorenzo Zelaya, que habían combatido al Estado en los años ochenta, se acogieron al decreto y renunciaron a la lucha armada. Pese a ello, numerosas organizaciones de derechos humanos denunciaron la participación de oficiales del Ejército en forzar al desplazamiento de campesinos, el asesinato de líderes sindicales y su participación en casos de corrupción y tráfico de drogas.

El aumento del poder militar y la inestabilidad política se sumaron a la debilidad de la economía, que además de perder la ayuda de EEUU, tuvo que enfrentar una grave sequía que afectó al 60% de los cultivos de subsistencia. El descontento popular se expresó en las urnas con el triunfo del candidato de la oposición, el liberal Carlos Roberto Reina, en 1993. Una de las primeras resoluciones del nuevo Gobierno fue la abolición del servicio militar obligatorio y la disolución de la Dirección Nacional de Investigaciones, denunciada por cometer innumerables torturas. El Congreso Nacional inició el proceso de reforma constitucional y asignó el control de las fuerzas de seguridad pública al poder civil. En enero de 1995 comenzó a actuar la Dirección de Investigación Criminal, conducida por civiles, que sustituyó a la policía secreta desarticulada el año anterior. Altos funcionarios de Gobierno fueron a prisión por su vinculación con el tráfico de pasaportes oficiales. La Corte Suprema de Justicia revocó la inmunidad del ex presidente Callejas para que declarara sobre falsificación de documentos y apropiación de fondos públicos. Reina fue alcanzado por su ofensiva contra la corrupción. El presidente fue investigado por el uso indebido de fondos estatales para resolver un asunto privado.

En noviembre de 1997, Carlos Flores, del Partido Liberal, fue elegido presidente. Flores realizó varias reformas judiciales y penales, estableciendo una comisión anticorrupción, creando una Corte Suprema independiente y eliminando el cargo de Jefe de las Fuerzas Armadas. El 31 de octubre de 1998, el Huracán Mitch, una de las más fuertes tormentas tropicales de los dos últimos siglos, dejó 14 mil muertos (5.657 oficiales y 8.058 desaparecidos), 12.272 heridos, 1,5 millones de damnificados y 3.794 millones de dólares en pérdidas económicas (70 % del PIB). Un año después las inundaciones quitaron la vida a 35 personas y dejaron miles de hectáreas de tierra inservibles.

En 2001, a pesar de los intentos del Ejecutivo por mejorar su imagen, continuaron las denuncias contra miembros de las Fuerzas Armadas por cometer asesinatos extrajudiciales. Las organizaciones de derechos humanos acusaron a ex oficiales de organizar escuadrones de la muerte para ejecutar a jóvenes arbitrariamente.

En 1990, tras la derrota sandinista en las elecciones nicaragüenses, el Gobierno de George Bush redujo la ayuda económica al país

Violencia, corrupción y pobreza

El 25 de noviembre de 2001, Ricardo Maduro, del Partido Nacional, ganó las elecciones presidenciales, definidas por observadores internacionales como pacíficas y justas, después de un conflicto político en el que el Partido Liberal le denunció por no ser hondureño de nacimiento.³ Antiguo miembro de los “Chicago boys”,⁴ Maduro presentó un programa de corte neoliberal y anunció un paquete de impuestos sobre las ventas, conocido como el “paquetazo”, contra el que se han alzado diversas voces de protesta. Prometió reducir el crimen, impulsar la economía y luchar contra la corrupción. En 2002 intentó implementar las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, dentro de las que se incluyó el congelamiento de los salarios de los trabajadores. Maduro ha fracasado en su intento de reducir el gasto público, la burocracia y la corrupción administrativa.

En Honduras la violencia común se ha generalizado a niveles extraordinarios. En Tegucigalpa se producen 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en San Pedro de Sula 95 por cada 100.000 habitantes, lo que califica a Honduras como uno de los países más violentos de América Latina. La pobreza también constituye un problema estructural para Honduras: aproximadamente el 70% de la población vive bajo la línea de pobreza. Las ejecuciones extrajudiciales de menores de edad se han incrementado a niveles insospechados, al igual que la proliferación de armas cortas y tráfico de drogas. Según los informes del Congreso Nacional, en Honduras circulan ilegalmente 600.000 armas de fuego.

La impunidad para procesar a los miembros de la elite económica, militar y oficial, es exacerbada por un sistema judicial corrupto. Aunque las Cortes llevan a cabo procesos en contra de miembros de las Fuerzas Armadas, existen muy pocos detenidos. Algunos periodistas han sufrido amenazas por parte del Gobierno. Existen altos niveles de discriminación y violencia contra la mujer, prostitución infantil y exclusión de los indígenas. El índice de percepción de corrupción realizado por Transparency International ha catalogado a Honduras como uno de los tres países más corruptos de América Latina y uno de los 30 más corruptos del mundo.⁵

Actores

Partidos políticos

Asociación para el Progreso de Honduras Francisco Morazán Frente Constitucional – Fundado en 1988.

³ Ricardo Maduro es hijo de padre panameño y madre guatemalteca y nació en Panamá. Obtuvo la ciudadanía hondureña en 1980.

⁴ Nombre que recibieron de la prensa especializada figuras académicas como Milton Friedman, Theodore Schultz o Gary Becker, pertenecientes al Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, y que prestaron servicios de asesoría a gobiernos de países como Chile, Argentina y México.

⁵ El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International para Honduras es de 2,7. Este índice clasifica la percepción que se tiene de la corrupción de un país de 1 a 10, siendo el 1 el de mayor percepción de corrupción y el 10 el percibido como menos corrupto. En: www.transparency.org

Frente Patriótico Hondureño, que incluye **Partido de Acción Socialista de Honduras** y **Partido Comunista de Honduras Marxista Leninista** - Fundado en 1954.

Partido Demócrata Cristiano de Honduras – Fundado en 1968. Presidido por Hernán Corrales Padilla. Su candidato para las elecciones de 2001 fue Marco Orlando Iriarte.

Partido Innovación y Unidad Social Democracia – Fundado en 1970. Su presidente es Olban Valladares.

Partido Liberal (PL) – Fundado en 1891 y presidido por Carlos Roberto Flores Facusse, ex presidente de Honduras.

Partido Nacional (PN) - Fundado en 1902, de tendencia conservadora. Es liderado por Ricardo Maduro, actual presidente del país.

Partido de Unificación Democrática (PUD) – Actualmente presidido por Matías Funes Valladares, fue fundado en 1993.

Pueblo Unido en Bloque por Honduras – Fundado en 1999.

Unión Revolucionaria del Pueblo - Fundado en 1980.

El poder político se ha repartido desde 1981 entre el Partido Liberal y el Partido Nacional en un esquema de bipartidismo que no ha posibilitado la participación real de terceros partidos.

Organizaciones sociales

Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH)

Lucha por la paz, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Surgió en 1978 en el seno de un grupo de ciudadanos que pelearon por repatriar al padre James Francis Carney.⁶ El 8 de noviembre de 1994 el CODEH adquirió su personería jurídica convirtiéndose en una organización de pleno derecho.

Casa Alianza

Organización independiente sin fines de lucro, dedicada a la rehabilitación y defensa de los niños y niñas de la calle en Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Es la filial latinoamericana de Covenant House, con sede en Nueva York. Fundada en Guatemala en 1981, expandida a Honduras y México en 1986, y a Nicaragua en 1998, Casa Alianza apoya y cuida cerca de 8.961 niños y niñas de la calle anualmente, de los cuales la mayoría son huérfanos por la guerra civil, han abusado de ellos o han sido rechazados por familias desintegradas y golpeadas por la pobreza. Además, sufren el trauma de la indiferencia de la sociedad en la que viven.

Otras organizaciones

Confederación de Trabajadores de Honduras, fundada en 1964; Central General de Trabajadores (CGT), de tendencia socialcristiana; Federación Unitaria de Traba-

⁶ James Francis Carney, más conocido como Padre Guadalupe, fue un cura guerrillero apresado, torturado y asesinado por militares hondureños en 1983.

jadores (FUT); Federación de Sindicatos de Trabajadores de Honduras (FESITRAH); Federación Independiente de Trabajadores; Sindicato de Trabajadores de la "Tela Railroad Company" (nombre con que opera en Honduras la United Brands, ex United Fruit) (SITRATERCO); Sindicato de Trabajadores de la Compañía Agrícola y Ganadera de Sula (SITRACOAGS); Frente de Unidad Nacional de Campesinos de Honduras (FUNACAMPH); Confederación Hondureña de Cooperativas; Comité Coordinador de Organizaciones Populares (CCOP); Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH); Unión Nacional de Campesinos (UNC); Bloque Popular (BP); Federación Unida de Trabajadores Hondureños (FUTH).

Relaciones exteriores

Honduras – El Salvador

En 1969 los problemas fronterizos entre Honduras y El Salvador y la emigración de 300.000 salvadoreños a Honduras en busca de tierra y empleo, aumentaron los ánimos nacionalistas en ambos países desencadenando la llamada "Guerra del Fútbol" entre sus dos Ejércitos. En octubre de 1980, bajo la presión de EEUU que necesitaba la alianza de ambos Ejércitos para luchar contra las revoluciones socialistas, se firmó un tratado de paz entre los dos Estados remitiendo la disputa territorial a la Corte Internacional de Justicia. A pesar del acercamiento en los años ochenta, el Ejército hondureño se negó a aceptar la presencia de soldados salvadoreños en su territorio lo que produjo en 1984 una crisis en su interior y el apresamiento del General Álvarez, que había dirigido junto a EEUU la lucha contrarrevolucionaria en Honduras.

En 1992, la Corte Internacional de Justicia otorgó la mayor parte del territorio en disputa a Honduras y, en 1998, se firmó un tratado de demarcación fronterizo siguiendo el decreto de la Corte. Actualmente Honduras y El Salvador mantienen relaciones diplomáticas y comerciales pacíficas aunque todavía existen algunas tensiones sobre las fronteras marítimas en el Golfo de Fonseca.

Honduras - Nicaragua

En los años ochenta Nicaragua y Honduras vivieron su propia "guerra fría". El Ejecutivo hondureño, incitado por EEUU, apoyó y permitió la presencia de fuerzas irregulares que se oponían al Gobierno sandinista como la "contra" nicaragüense. Honduras fue utilizada como plataforma de la estrategia militar contrarrevolucionaria dirigida por EEUU. Tras diferentes demostraciones de hostilidad por parte de los dos Gobiernos, en 1986 Nicaragua denunció por ello a Honduras ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. A pesar de las tensiones, nunca se declaró una guerra abierta entre ambos países ya que, según los propios militares hondureños, "esta no sería su guerra, podría traer una derrota militar y si se acabara, el apoyo militar que Honduras estaba recibiendo de EEUU se trasladaría a Nicaragua".⁷

⁷ Víctor Meza, Medea Benjamín, Philip Shepherd, *Honduras-EEUU. Subordinación y crisis*, Centro de Documentación de Honduras, 1988.

Tras la derrota electoral de los sandinistas en 1990, el nuevo Gobierno nicaragüense, presidido por Violeta Barrios de Chamorro, inició una política de normalización con sus vecinos que pretendía acelerar un proceso de integración centroamericano. Honduras aprovechó para solicitar el retiro de la demanda de 1986 ante el Tribunal de La Haya a lo que el Ejecutivo nicaragüense accedió.

Honduras y Nicaragua han protagonizado intensas discusiones sobre la soberanía marítima. En 1986, con el Tratado Ramírez-López, Colombia y Honduras se repartieron las tres cuartas partes de la superficie del Golfo de Fonseca adjudicándole a Nicaragua una cuarta parte. En 1999, ante la decisión del Gobierno hondureño de ratificar dicho tratado suscrito con Colombia, Nicaragua presentó una reclamación ante la Corte Centroamericana de Justicia solicitando medidas cautelares que dejaran sin efecto la acción de Honduras. El incremento de la tensión diplomática dio paso a varias rondas de conversaciones con un experto designado por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. En 2000, ambos países acordaron someter la decisión final al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

Honduras – EEUU

A pesar de que Honduras perdió interés estratégico para EEUU tras las elecciones que dieron el triunfo a Violeta Chamorro en Nicaragua, y que gran parte de la cooperación económica y de armamento fue retirada, EEUU continúa siendo el principal socio comercial y político de Honduras. Genera el 46% de las importaciones de Honduras y compra el 40% de sus exportaciones. EEUU invierte en el país centroamericano 840 millones de dólares destinados a las maquilas, producción de frutas, turismo, electricidad y cultivo de mariscos. Las maquilas de EEUU en Honduras generan aproximadamente 115.000 empleos en este sector.

Militarmente, EEUU mantiene presencia armada en una de las bases militares hondureñas y se han desarrollado conjuntamente ejercicios antinarcóticos y de limpieza de minas en la frontera con Nicaragua.

En cuanto a la presidencia del país, EEUU se siente más complacido con Ricardo Maduro que con el liberal Rafael Pineda Ponce. La coincidencia con el actual presidente no se limita al modelo económico, sino que incluye las reformas de modernización del Estado. Una de ellas, apoyada directamente por la Agencia para el Desarrollo Internacional de EEUU (USAID), es la mejora del sistema de justicia. Sin embargo, EEUU no está conforme con el resultado de sus inversiones públicas en el país para volver más efectivas ciertas instituciones. Por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico parece haber más retrocesos que avances. Pese a los roces, la dependencia de Honduras con respecto a EEUU, tanto en el ámbito de la cooperación bilateral como en el de las inversiones privadas, sigue siendo fundamental.⁸

⁸ Manuel Torres Calderón, "Fricciones entre EEUU y Honduras", *La Insignia*, 28 de febrero de 2002. En: http://www.lainsignia.org/2002/febrero/ibe_111.htm

Derechos humanos⁹

Seguridad ciudadana

Según un informe realizado por el Comisionado de Derechos Humanos de Honduras en 2000, entre 1997 y 2000 se notificaron en la prensa internacional y en denuncias de organismos de derechos humanos 1609 muertes violentas. De ellos, 1324 corresponden a muertes por arma de fuego, 150 por arma blanca, 36 por cuerpo romo, 11 por lesiones, 10 quemados, 2 por envenenamiento y 65 por otras causas.

La mayoría de las víctimas son mayores de 21 años, y le sigue el grupo de 13 a 18 años y el de 19 a 21. Un 93% son varones y un 7% mujeres. En el 63% de los casos se desconoce si los asesinados pertenecían a alguna agrupación o asociación. El 34% de las ocasiones la víctima era miembro de alguna mara —asociación de jóvenes, mayoritariamente hombres, socialmente excluidos, con una estructura jerárquica informal, que se cohesiona en busca de una seguridad o un respaldo que la familia, la sociedad o el Estado no les brinda satisfactoriamente— o pandilla y aproximadamente en un 3% pertenecía a asociaciones juveniles e iglesias.

En el 52% de los casos se desconoce los asesinos, aunque el 34% de las veces afirma que han sido las maras o pandillas, el 8% particulares, el 5% miembros de la policía preventiva, el 1% otros agentes del Estado y menos del 1% miembros de la Dirección General de Investigación Criminal. Las regiones con mayores índices de violencia son Cortés y Francisco Morazán (juntos, 1417 casos), siguiéndoles en importancia los departamentos de Yoro (75 casos) y Atlántida (33 casos).

Según las cifras del Comité de Derechos Humanos de Honduras, de noviembre de 2000 a mayo de 2001 se registraron 704 actos de violencia generalizada y 295 asaltos a mano armada. En este periodo, el crimen organizado se ha incrementado, produciéndose 11 secuestros, algunos seguidos de muerte, y 256 delitos por narcotráfico.

Niños y jóvenes

Los niños son las principales víctimas de la violencia común y de la pobreza en Honduras. Según varias organizaciones de derechos humanos, se estimaba que para 2000 habría 350.000 niños trabajando ilegalmente.¹⁰ El Gobierno ha admitido que aproximadamente 65.000 niños no tienen acceso a ningún tipo de educación. El 40% de los menores de 5 años sufren malnutrición y 7000 niños mueren por falta de condiciones sanitarias adecuadas. En las dos principales ciudades, San Pedro de Sula y Tegucigalpa, con una población de 682.400 menores, se hicieron 2.500 denuncias por abuso sexual.

⁹ Basado en los informes del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, informes de 2000 y 2001 de Amnistía Internacional, Comité de Derechos Humanos de Honduras, Casa Alianza; *Country Report on Human Rights Practices*, Bureau of Democracy, Human Rights Watch y Labor US Department of State, 2001.

¹⁰ US Dept. of State, *Country Reports on Human Rights Practices* - 1999, 25 de febrero de 2000.

Se estima que 10.000 menores viven en la calle, número que aumentó desproporcionadamente tras el Huracán Mitch. Muchos de ellos han sido explotados sexualmente y el 40% se dedican a la prostitución. Aproximadamente el 30% de los niños de la calle de Tegucigalpa y San Pedro Sula tienen SIDA.

Más de 940 niños y jóvenes han sido asesinados desde enero de 1998, con un promedio de 50 menores de 23 años asesinados cada mes según Casa Alianza. La mitad de las muertes corresponde a personas con edades entre los 16 y 17 años. Más del 22% son menores de 16 años. Solamente en octubre de 2001 se contabilizaron 300 asesinatos de jóvenes.

La alta incidencia de asesinatos de jóvenes se relaciona directamente con el crecimiento de las pandillas juveniles. De acuerdo con la organización Xibalba, antes de 1997 ya existían en Honduras unos 175 grupos de jóvenes pandilleros. Para marzo de 1999, la Policía Preventiva consideraba que había 34.202 jóvenes ligados a las maras. Dos años después se estima que las dos principales pandillas involucran entre 38.000 y 45.000 jóvenes, en su mayoría de 18 años, lo que representa entre el 7% y el 10% de los nacidos a comienzos de la década de los años ochenta.

El retorno de migrantes deportados de EEUU y la influencia de las pandillas juveniles de El Salvador han jugado un papel determinante en la formación de las maras hondureñas, pero el mayor responsable es el modelo político, social, económico y cultural excluyente y permisivo a la violencia. A partir de 1997, estos grupos se consolidaron y crecieron desmesuradamente debido al tráfico de armas y de drogas y al aumento de la delincuencia común. Hasta el momento, sólo se enfrenta el problema con más violencia y no se buscan soluciones permanentes y efectivas. Los escasos programas de rehabilitación social y productiva que trabajan con las maras no son complemento de ningún acuerdo con las pandillas, sino que intentan por sí mismas ser una respuesta a la crisis. La tendencia general promueve más la intolerancia y la respuesta policial o autoritaria que la conciliación.¹¹

Diferentes organizaciones de derechos humanos han denunciado que miembros de las Fuerzas Armadas, junto a grupos de civiles y de vigilancia privada, han asesinado o utilizado la fuerza contra supuestos integrantes de bandas juveniles. La Comisión Interagencial de ejecuciones extrajudiciales investiga al menos 300 de estos casos. En agosto de 2001, el Gobierno invitó a la Relatora Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias, Asma Jahagir, para investigar las denuncias en contra de miembros de las Fuerzas Armadas por el asesinato de menores. En su visita, la relatora obtuvo evidencia de 65 menores asesinados por la policía y por fuerzas de seguridad privada entre enero y junio de 2001. El Ministerio de Seguridad negó las acusaciones de que la policía estuviera involucrada en estos crímenes aunque admitió que varios individuos de la institución policial habían sido acusados de ejecuciones extrajudiciales.

Mujeres

La violencia hacia las mujeres es uno de los principales problemas de Honduras.

¹¹ Dr. Leo Valladares, *Informe preliminar sobre muertes violentas de niños, niñas y adolescentes en Honduras*. En: http://www.casa-alianza.org/ES/newstuff/informe_especial/

En febrero de 2000, la Organización Panamericana de Salud informó que el 60% de las mujeres en Honduras habían sido víctimas de la violencia doméstica. El Ministerio Público informó que en Tegucigalpa se reciben aproximadamente 340 denuncias cada mes y que 12 mujeres fueron asesinadas por violencia doméstica. Aunque legalmente las mujeres tienen el mismo estatus que los hombres, en la realidad sufren discriminación tanto en la familia como en el trabajo.

Indígenas

La población indígena de Honduras se compone de 450.000 miembros y supone el 11% de la población total. Las pequeñas comunidades indígenas no tienen acceso a participar en las decisiones que afectan a sus tierras, cultura, tradiciones y recursos naturales. La ambigüedad de los títulos de propiedad de las tierras indígenas conduce a conflictos entre las comunidades y el Gobierno. Las Cortes niegan los recursos legales a los grupos indígenas lo que los obliga a invadir tierras privadas con las consecuentes acciones represivas del Ejecutivo.

Defensores de derechos humanos¹²

Los defensores de derechos humanos han sufrido amenazas, ataques y cargos criminales como resultado de su trabajo. Ciertas autoridades gubernamentales han tratado de desacreditar sus actividades acusándolos de proteger criminales. En junio de 2001, Carlos Roberto Flores, líder comunitario y activista ambiental que se oponía a la construcción de un embalse hidroeléctrico, fue asesinado por guardias de seguridad en Olanco. Aunque se levantaron cargos en contra de cinco guardias de seguridad, a finales de 2001 todavía no habían sido arrestados.

Minas antipersona

En la actualidad, existen aproximadamente 3.000 minas antipersona repartidas en 250 km, del territorio hondureño, colocadas en la década de 1980 por combatientes de Nicaragua y el Salvador. Se está llevando a cabo un proyecto de limpieza de minas.¹³

Impunidad

No ha habido un progreso significativo en la investigación de procedimientos judiciales por las desapariciones de los años ochenta. Asma Jahagir, la Relatora de Naciones Unidas contra las ejecuciones extrajudiciales señaló que: "La impunidad todavía se mantiene en el sistema judicial de Honduras. Las leyes de inmunidad son algunas veces abusadas para dar impunidad a personas poderosas y que puedan seguir asesinando. Continúan las amenazas de muerte a defensores de

¹² Amnistía Internacional, *Country Reports*, 2002

¹³ Human Rights Watch, http://www.hrw.org/reports/2000/landmines/LMWeb-12.htm#P5615_842130

derechos humanos. La inacción por parte del Gobierno en este asunto solo hace que los perpetradores de estos asesinatos se sientan con más poder para cometer más acciones violentas”.

Policía Nacional

La Policía Nacional ha sido responsable de violaciones de los derechos humanos contra manifestantes pacíficos. Ha habido denuncias por abuso de autoridad o por negligencia en el cumplimiento de sus deberes.

Prisiones

Según varios informes hay un tratamiento degradante e inhumano en las prisiones. Los centros de reclusión están severamente sobre poblados y poseen pésimas condiciones sanitarias.

Libertad de prensa

Los medios de comunicación más antiguos y de mayor influencia en Honduras están concentrados en seis familias, algunas de ellas con acciones en más de un medio y con poder político y económico. Por ejemplo, *La Tribuna*, uno de los principales periódicos de Tegucigalpa es propiedad de la familia del ex presidente Flores lo que generó vicios en la información durante sus años de mandato. Se han denunciado numerosos intentos de oficiales del Gobierno por intimidar a periodistas que investigaban o criticaban al Ejecutivo y al sector económico.

Narcotráfico y tráfico de armas

Debido a su situación geográfica, Honduras se ha convertido en un punto clave para el narcotráfico y el tráfico de armas. El departamento de Gracias Dios, situado en el norte del país y con una superficie de 16.630 km², no dispone de carreteras ni teléfono. Su acceso sólo es posible por avión o barco convirtiéndolo en un lugar privilegiado para el tráfico de armas y de narcóticos.

Según informes de la policía hondureña, traficantes internacionales utilizan el territorio hondureño y centroamericano para entregar armas a cambio de droga a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Parte de las armas podrían provenir de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, países que enfrentaron guerras civiles en los años ochenta.

INFORMACIÓN EN INTERNET

Datos generales

- US Department of State: Background Note: Honduras - <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/1922.htm>
- Honduras: A Country Study US Library of Congress - <http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/hntoc.html>
- World Factbook 2000 - <http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/ho.html>
- Guía del Mundo - <http://www.eurosur.org/guiadelmundo/paises/honduras/>

Gobierno

- Constitución - <http://www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/Honduras/honduras.html>
- Secretaría de Relaciones Exteriores - <http://www.sre.hn/>

Partidos políticos

- Partido Liberal (PL) - <http://www.partido-liberal.hn/>
- Partido Nacional (PN) - <http://www.partidonacional.hn/>
- Página de Ricardo Maduro (presidente PN) - <http://www.maduro.hn/>

Derechos humanos

- Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) - <http://www.codeh.hn/>
- Casa Alianza - <http://www.casa-alianza.org>
- Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras - www.conadeh.hn (no está en funcionamiento actualmente)
- Country Reports on Human Rights practices 2001 Released by the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor U.S. Department of State - http://www.rds.org.hn/docs/listas/derechos/documentos/informe_departamento_estados.pdf
- Investigation upon extra-judicial executions of children, girls and young in Honduras (1998/2000) - <http://www.casa-alianza.org>
- Human Rights Watch; minas antipersona - http://www.hrw.org/reports/2000/landmines/LMWeb-12.htm#P5615_842130
- Amnesty International Report 2002. Honduras Covering events from January - December 2001 - <http://web.amnesty.org/web/ar2002.nsf/amr/honduras!Open>
- El derecho a la información y la libertad de expresión en Honduras. Comisionado Nacional de Derechos Humanos - http://www.lainsignia.org/2002/enero/der_020.htm

Medios de Comunicación

- *Diario Tiempo* - <http://www.tiempo.hn/>

- *La Prensa* - <http://www.laprensahn.com/>
- *La Tribuna* - <http://www.latribunahon.com/>

Otros recursos

- Colectivo de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) - <http://codemuh.globalnet.hn/>
- Honduras Revista Internacional - <http://www.hondurasri.com/>
- Organización Panamericana de Salud OPS/PAHO - <http://www.paho-who.hn/>

Portales

Lanic Universidad de Texas - <http://lanic.utexas.edu/la/ca/honduras/>

DATOS BÁSICOS

Situación geográfica: Honduras tiene una posición geoestratégica en Centroamérica por sus fronteras con El Salvador, Nicaragua y Guatemala, y por su situación privilegiada en el Golfo de Fonseca, en el Océano Pacífico. El 80% de su territorio está cubierto por montañas y selvas. Su población y la actividad económica se concentran en la costa del Caribe y en las tierras altas del sur, cerca de la frontera con El Salvador. En las llanuras del litoral Atlántico se sitúan las plantaciones bananeras más extensas de América Central. En el sur se cultiva café, tabaco y maíz. La deforestación, el mal uso de la tierra y el desarrollo descontrolado contribuyen a la degradación de los suelos.

Superficie:

Total: 112.090 km²

Tierra: 111.890 km²

Agua: 200.000 km²

Fronteras:

Total: 1520 km. Guatemala: 256 km. El Salvador: 342 km. Nicaragua: 922 km

Recursos naturales: oro, plata, cobre, aluminio, hierro, antimonio, carbón, pesca, madera.

Uso de la tierra: Agricultura: 15%, cultivos permanentes: 3%, pastos permanentes: 14%, bosques: 54% , otros: 14% (1993 est.).

Catástrofes naturales: Sequías, huracanes e inundaciones en la costa Caribe.

Problemas ambientales

Población urbana en expansión; deforestación por limpieza de suelos para la agricultura; erosión del suelo por desarrollo no controlado; polución del agua por minería; deforestación debida al Huracán Mitch; depredación de los bosques para la exportación especialmente en el departamento de Olancho.

Población: 6.406.052 de habitantes (2001)

Las cifras de población son estimadas pues dependen de un alto nivel de mortalidad por SIDA, lo que condiciona las expectativas de vida, el crecimiento poblacional y las tasas de mortalidad.

Tasa de crecimiento de la población: 2,43% (2001)

Tasa de nacimientos: 3,194% (2001)

Tasa de mortalidad: 0.552 % (2001)

Tasa de mortalidad infantil: 3,3 % (2001, PNUD)

Esperanza de vida al nacer: Hombres: 63,2 años , Mujeres: 68,8 años (PNUD, 2001)

Tasa de fertilidad total: 4,15 por cada mujer (2001 est.)

Tasa de malnutrición: 22% (WFP, 2002)

VIH/SIDA – Tasa en adultos: 1,92% (1999 est.)

Personas infectadas de VIH/Sida: 63.000 (1999 est.)

Muertes por VIH/Sida: 4,200 (1999 est.)

Grupos de población: mestizos 90%, indígenas 7%, negros 2%, blancos 1%

Religiones: católicos 97%

Lenguas: español, lenguas indígenas

Alfabetismo: 72,7%

Capital: Tegucigalpa

Divisiones administrativas:

18 departamentos: Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibuca, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro

Gobierno: República. Presidente: Ricardo Maduro Joest, del Partido Nacional (elegido en noviembre de 2001)

Economía: Honduras es uno de los países más pobres y menos desarrollados de América Latina. Su economía se basa en la agricultura y en la exportación de café y banano. Después del Huracán Mitch, en 1998, la economía se ha recuperado en un 57%. Tiene recursos marinos, mineros y madereros. La moneda (lempira) ha sufrido una devaluación moderada en el último año.

PIB: 5.932 miles de dólares (Banco Mundial, 2000)

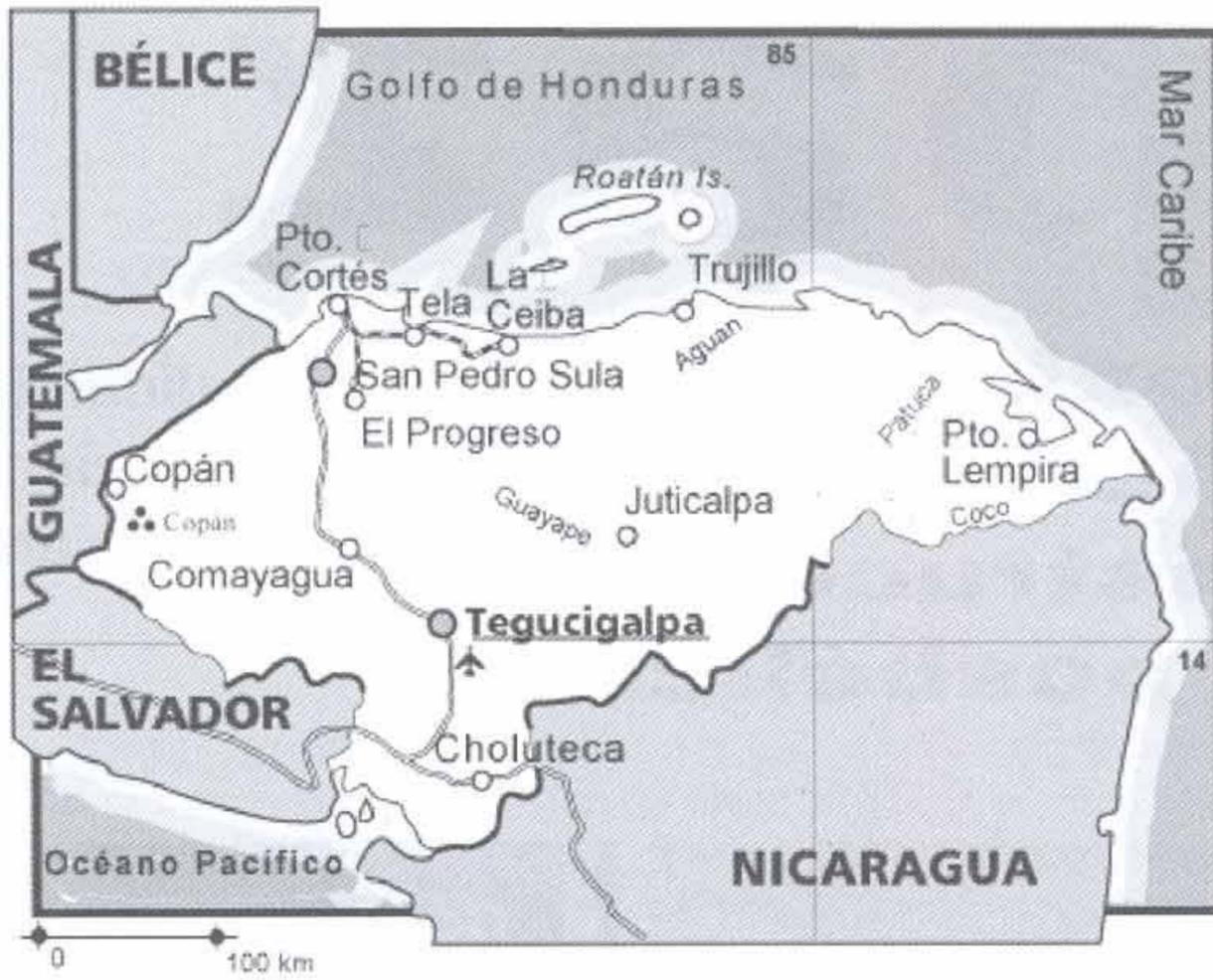
Crecimiento real del PIB: 4,8% (Banco Mundial, 2000)

Población debajo de la línea de pobreza: 66% (CEPAL, 2000.)

Tasa de desempleo: 28% (1999 est.)

Deuda externa: 3.296 millones de dólares (Banco Mundial, 2000)

Productos agrícolas: Banano, café, cítricos, carne, camarones



Fuente: <http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/>

Construir

la paz

Una aproximación didáctica a la reconstrucción posbélica

➤ Guías didácticas de educación para el desarrollo

Índice

INTRODUCCIÓN APROXIMACIÓN TEÓRICA

La complejidad de los conflictos actuales

La construcción de la paz

Referencias bibliográficas

PROPUESTAS DIDÁCTICAS

Bloque 1: LOS CONFLICTOS ARMADOS DE FIN DE SIGLO

Bloque 2: LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ

Con esta guía queremos contribuir a promover un mayor conocimiento de las reconstrucción posbélica, de los diversos actores internos y externos al conflicto y explorar vías para una acción solidaria

Centro de investigación para la Paz



Fundación
HOGAR DEL EMPLEADO

Duque de Sesto, 40 - 28009 MADRID
Tel.: 91 431 04 06 - Fax: 91 576 32 71
Web: cip.fuhem.es - E-mail: cip@fuhem.es

Boletín de pedido

Deseo recibir () ejemplares de la Guía Construir la Paz. PVP: 7,20 €

Nombre y Apellidos

Dirección

Localidad

Provincia

C.P.

País

Tel.

Forma de pago:

Talón bancario a nombre de FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO

Giro Postal a nombre de FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO

Contra reembolso

También puede solicitarlos por teléfono, fax o correo electrónico.

**Justicia kichwa como práctica de
identidad étnica**

111

Identities

FERNANDO GARCÍA

Justicia kichwa como práctica de identidad étnica

El debate sobre el pluralismo jurídico en Ecuador se sitúa en un contexto en el que la emergencia y consolidación del movimiento indígena ecuatoriano ha contribuido al fortalecimiento de la democracia, a la construcción de nuevas formas de participación ciudadana y a la valoración de la diversidad étnica y cultural.¹ El autor plantea la relación entre la administración de justicia y los procesos de identificación que viven actualmente los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador, en especial la nacionalidad kichwa.² Para ello, profundiza tanto en la percepción que los indígenas tienen de su propio sistema de justicia como en la que muestran ante el sistema jurídico estatal. Este texto forma parte de la ponencia presentada en el III Congreso de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica, celebrado del 9 al 12 de agosto de 2002 en Quetzaltenango (Guatemala).

La administración de justicia indígena ha ganado impulso a partir de la reforma constitucional de 1998,³ incorporándose a la agenda política nacional. Las organizaciones indígenas han participado en la discusión y elaboración de dos anteproyectos de ley: Proyecto de Ley Orgánica de las Nacionalidades Indígenas, que

Fernando García es antropólogo, coordinador académico del programa de Antropología de FLACSO Ecuador

¹ En este sentido, el programa de Antropología de FLACSO Ecuador está desarrollando la investigación "Construcciones ciudadanas diferentes: el movimiento indígena y de mujeres en el Ecuador".

² Sobre el sistema jurídico kichwa de la Sierra y naporuna de la Amazonía, ver Fernando García, *Formas indígenas de administrar justicia: estudios de caso de la nacionalidad kichwa ecuatoriana*, FLACSO, Quito, 2002.

³ En 1998 se elaboró una nueva Constitución ecuatoriana tras la destitución en 1997 del ex presidente Abdalá Bucaram, para la que se movilizó fuertemente la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). En la Constitución de 1998 se reconocen por primera vez los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos (N. de la E.).

norma a los pueblos y nacionalidades; y el Proyecto de Ley de Administración de Justicia Indígena, que compatibiliza el sistema jurídico estatal con los sistemas jurídicos indígenas.⁴

La administración de justicia, al igual que otros aspectos sociales como la permanencia y vigencia de la lengua kichwa, la existencia de un sistema de cargos comunitarios políticos y religiosos, la subsistencia de los lazos de parentesco y de la endogamia étnica y la adscripción territorial, contribuyen a la formación de la identidad cultural kichwa, la cual se encuentra en proceso de reconstitución.⁵

En relación a ello, plantear la noción de identidad, en el sentido de categoría práctica y no analítica,⁶ supone un acercamiento a una pregunta clave: cómo se denominan a sí mismos en términos discursivos los protagonistas del sistema de administración de justicia kichwa y cómo, también en términos discursivos, denominan a los "otros" (a los actores del sistema de justicia estatal).

La autopercepción del sistema de justicia kichwa

Se distinguen dos tipos de autoridades indígenas: las tradicionales y las comunitarias.⁷ Las primeras tienen una doble imagen de los infractores, percibidos como aquellos que crean problemas o conflictos por ignorar o desconocer las costumbres o las leyes pero que, cuando cometen la trasgresión, la mayoría están dispuestos a corregir sus actos. Las autoridades comunitarias consideran que son personas que se han excedido, han sobre pasado los límites de la convivencia comunitaria, peor no por eso son considerados como "negativos" al grupo.

Los mediadores comunitarios añaden que se trata de personas muy "temperamentales que no pueden controlar sus impulsos". Si los implicados están embriagados existe mayor riesgo de convertirse en posible infractor.

Las familias, especialmente las mujeres, consideran que las infracciones se producen cuando hay falta de comprensión entre los miembros del hogar. Reconocen que la situación es más proclive en aquellas familias que son "más pobres, donde frecuentemente hay problemas por falta de dinero, comida y vestido".

⁴ Actualmente, se haya en discusión dentro del Parlamento el Proyecto de Ley de Administración de Justicia Indígena, que propone la aplicación del art. 191 de la Constitución. Este artículo reconoce a las autoridades indígenas la facultad de desempeñar funciones de justicia, aplicando normas propias, de conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarias a las leyes nacionales (N. de la E.).

⁵ Fernando García, *op.cit.*

⁶ El autor toma la propuesta de Roger Gould, según la cual la identidad participativa es "la identificación social con respecto a la cual un individuo responde, en una determinada instancia de protesta social, a apelaciones normativas e instrumentales específicas". Gould afirma que la identidad participativa incluye la activación conjunta de la identidad colectiva sustentada en las redes sociales de los actores, una de las cuales es justamente la administración de justicia indígena. Roger Gould, *Insurgent identities. Class, community and protest in Paris from 1848 to the commune*, Universidad de Chicago, Chicago, 1995.

⁷ Fernando García, *op.cit.*, pp. 47-48.

En general, los infractores muestran un balance heterogéneo de sus autoridades: “Yo creo que nuestras autoridades son buenas pero deben ser más conscientes, no pueden abusar diciendo que son autoridades; que arreglen los problemas, que hagan todo lo que tengan que hacer, pero que no maltraten a las personas”, comenta uno de ellos.

También se menciona que los jueces se dejan llevar por las “apariencias”. La vida pasada del acusado tiene un gran peso en la decisión de los jueces. Así mismo, se hecha de menos que las autoridades comunitarias, en especial las recientemente nombradas, desconozcan el contenido de los reglamentos internos comunitarios y no sepan cómo aplicarlo. Los jóvenes señalan que los jueces son mayoritariamente adultos y ancianos, lo cual les deja a ellos sin oportunidad de ejercer tales funciones, a pesar de que reconocen que los adultos y los ancianos tienen más experiencia.

El abuso de autoridad y la falta de garantías constituyen uno de los puntos más discutidos: “En nuestro sistema jurídico, para ser testigo no toman (las autoridades) en cuenta nada (...) uno en estos casos queda indefenso (...) Los acusados no pueden defenderse y una vez que se les sanciona y que dicen que hay que pagar la multa, así debe ser.” “Uno de los jueces había sido familiar de la otra parte, entonces ya no me quedó más que resignarme a que seguro me iban a sancionar.”

Los infractores censuran que los jueces, cuando están ejerciendo su oficio, se extralimitan a los consejos y pasan al maltrato oral de los acusados. Este hecho no es aprobado por las costumbres, pero sucede en muchos casos. La impuntualidad en las convocatorias de las diferentes etapas del proceso y la demora en la fase de investigación, cuando se pregunta todo el tiempo “lo mismo”, también fueron señaladas por un grupo de infractores como percepciones negativas del sistema jurídico kichwa. Se llega incluso a objetar la agilidad y celeridad con que se resuelven los conflictos: “Si son problemas deben solucionarse más rápidamente, no detener todo con una investigación muy larga, ya que los problemas pequeños tienen razones muy evidentes, deben agilizar más el proceso y conocer mejor los reglamentos.”

Las penas corporales constituyen el punto más álgido de crítica al sistema de justicia indígena: “Aparte de la sanción económica, existe el azote, la ortiga, el baño con agua fría; pero nada de eso es legal.”

También en relación a la autopercepción por parte de los distintos autores del sistema de justicia kichwa, una mujer afirmaba: “con la autonomía que tenemos en la administración de justicia reforzamos nuestras costumbres, nuestras vidas, no gastamos dinero, ni somos discriminados como antes, todos los problemas los solucionamos entre indígenas”.

Percepción del sistema de justicia estatal

Las percepciones más importantes de los indígenas respecto del sistema jurídico estatal son, primero, de aceptación, luego de imposición y rechazo, y por último de compatibilidad. Las tres categorías no son excluyentes, y se plantean de esta manera solo con fines explicativos y de comprensión.

*Las
percepciones
de los
indígenas
respecto del
sistema
jurídico
estatal son de
aceptación,
de imposición
y rechazo, y
de compati-
bilidad*

En primer lugar, se considera que la ley estatal como tal es buena. La percepción cambia con respecto a los administradores de justicia porque no cumplen las leyes, ya que benefician a la parte que posee recursos económicos y castigan a la que no tiene (generalmente pobres, ya sean indios, negros o mestizos).

Los factores que explican el deterioro y la falta de confianza en el sistema jurídico estatal son: la corrupción de los funcionarios judiciales y abogados; el gasto exagerado de dinero; la falta de una justicia que mida a todos de igual forma; la lentitud y excesiva burocracia judicial; la modalidad por escrito y en castellano de los procedimientos; la distancia geográfica de los tribunales; el trato discriminatorio y racista; y, sobre todo, el desconocimiento de la vida y la realidad de los comuneros.

La percepción de la imposición y el rechazo se basa en que los indígenas nunca fueron consultados por los autores de las leyes para formularlas y aprobarlas. Para su elaboración tampoco se tomó en cuenta la realidad de las comunidades y la existencia y la práctica ancestral del derecho indígena. Una autoridad tradicional así lo explica: "El sistema jurídico estatal no es bueno para nosotros y sus leyes tampoco, ya que son hechas por las mismas personas que ejercen autoridad, los diputados, sólo entre ellos, nunca consultan al pueblo. Ya promulgado (el veredicto) lo único que dicen es que hay que cumplir, por eso no les hacemos caso, nunca hemos pensado que sean buenas." "El sistema jurídico estatal sí funcionaría si siguiera la ley, pero a este sistema no le basta con la ley, sus integrantes han hecho de la administración de justicia un negocio".

La consecuencia más clara que se deriva de esta percepción es la defensa por parte de las comunidades de la vigencia de su sistema de justicia indígena. Los siguientes testimonios así lo demuestran: "Las autoridades del Estado, al principio, no querían aceptar nuestro sistema de administración de justicia y hubo muchos problemas porque, según ellos, no tenemos fundamentos ni estamos respaldados por la ley; incluso hubo muertes de compañeros por tratar de defender nuestra autonomía." "En una ocasión vinieron los abogados, pero a ellos les dijimos todo lo que nos han robado, lo que nos han empobrecido, que ellos solo se han llevado nuestro dinero y nada nos han ayudado, que ahora nosotros mismos hacemos nuestras leyes. Les dijimos: 'ustedes en Ambato (ciudad de la Sierra central ecuatoriana), en su oficina, son buenos, aquí somos nosotros los que regulamos todo porque nosotros también tenemos nuestros pensamientos, nuestras memorias, tenemos experiencia y, sobre todo, tenemos nuestras propias leyes indígenas que son las que solucionan los problemas, sus leyes sólo han aumentado a los ladrones, a los delincuentes, solo han dañado nuestra vida, hasta ahora no han solucionado ningún problema con sus leyes".

La tercera percepción plantea la posibilidad de compatibilizar ambos sistemas. Se trataría de partir del reconocimiento del pluralismo jurídico que manda la Constitución, estableciendo jurisdicciones y competencias, para incorporar a cada sistema los aportes más significativos del "otro" u "otros" con el fin de enriquecerse mutuamente. La presidenta de una organización regional indígena plantea algunas líneas generales al respecto: "Hay que ver normas básicas a nivel del mismo Estado porque, dentro de la diversidad, jamás podremos tener algo uniforme. Tampoco es que cada quien vaya a hacer lo que quiera, tiene que haber unas

bases establecidas. Por ejemplo, cuando las actitudes policiales que van más allá de su deber (cuando se les va la mano) obviamente tendrán que ser sancionados, no pueden quedar impunes porque sean de una institución que tenía que cumplir con el control del orden social. Por otro lado están los derechos humanos. En esos casos, deberán ser juzgados en función de normas básicas. En lo que no estaríamos de acuerdo es en que en asuntos internos de las comunidades haya interferencias o que nos estén viendo como a niños, entonces hay que poner un juez de paz que avale lo que han hecho. El juez de paz debe ser reconocido, respetado de manera íntegra, porque es autoridad comunal, de la zona”.

La percepción indígena del sistema de justicia estatal ha pasado de una etapa de condena y negación a otra de afirmación, diálogo y apertura. Así lo plantea un dirigente de una organización nacional: “si encerramos el sistema jurídico indígena sólo dentro de la comunidad, caeríamos en el error de decir los indios para los indios y no es momento de que los indios vayan por un lado y los mestizos por otro, sino más bien de una apertura, un entendimiento tanto por parte de la sociedad mestiza, como de los indígenas.”

El fortalecimiento de la identidad étnica

La noción de identidad participativa de Roger Gould⁸ permite considerar la práctica de administración de justicia kichwa como una forma de “apelación normativa”, que cada vez que es activada toma el carácter no sólo de protesta social ante el sistema jurídico estatal sino también de una forma de identificación étnica al interior de la cultura kichwa.

La administración de justicia pone en evidencia algunos elementos culturales de carácter identitario como el uso de la lengua kichwa. “La administración de justicia indígena mantiene y fortalece la identidad cultural. Mediante la realización de asambleas todos se enteran de lo que estamos arreglando porque para arreglar problemas utilizamos nuestra propia lengua. La gente comprende porque para administrar se necesita la lengua propia, esto es un factor muy importante para solucionar conflictos, y fortalece porque los dirigentes estamos solucionando, entonces existe respaldo de las comunidades”, afirma un dirigente kichwa. “La administración de justicia indígena se practica resolviendo los problemas con eficacia y rapidez, se mantiene respetando los acuerdos pactados entre las partes y fortalece la identidad cultural recuperando la cultura ancestral, como por ejemplo, concienciando a los jóvenes para que practiquen la lengua kichwa y mantenerla viva”.

La existencia de un sistema de cargos políticos y religiosos al interior de las comunidades indígenas muestra también otro rasgo de identidad. Con el tiempo, este mecanismo, que de alguna manera es una forma de ejercer autonomía frente a la sociedad nacional, ha sufrido cambios en cuanto a requisitos, funciones y responsabilidades. Sin embargo, el principio tradicional de autoridad se mantiene ya que, como sostiene Boaventura de Sousa Santos, las autoridades indígenas son

⁸ Roger Gould, *op.cit.*

La pertenencia étnica y cultural, como elemento diferenciador del "otro", es percibida y transmitida por muchos actores

elegidas para que manden obedeciendo el mandato comunitario, al contrario de las comunidades no indígenas donde los que son elegidos ordenan según su propio mandato.⁹

Continuamente se hace referencia al principio básico de la cultura kichwa *ama quilla, ama llulla, ama shua* (no mentir, no robar, no ser ocioso), y con ella a lo propio, a lo tradicional, a lo que la antropóloga Esther Sánchez denomina las "propias normas".¹⁰ Algunos ejemplos lo confirman: "Nuestra vida, nuestra cultura, la reforzamos con la administración de justicia, por eso hay que tenerla, hay que aplicarla, hay que divulgarla, para que no la perdamos y nos transformemos en mestizos, y decir donde quiera y con quien quiera que somos indios". "Si nosotros dejáramos nuestro sistema perderíamos nuestra cultura, porque el sistema jurídico estatal quiere que todos seamos 'iguales', y no llegan a una justicia verdadera; en cambio, en el sistema jurídico indígena queremos la justicia y el desarrollo de nuestros distintos pueblos sin perder nuestra identidad. En el sistema jurídico estatal hablan de integración, de globalización y con eso nos quieren hacer desaparecer".

La pertenencia étnica y cultural, como elemento diferenciador del "otro", es percibida y transmitida por muchos actores. Las relaciones de parentesco al interior de cada comunidad aparecen como redes sociales con fuertes lazos de fidelidad. Una función parecida cumple la endogamia étnica, muy presente en estos grupos, como una forma más de estrechar la relación entre sus miembros. La necesidad de restituir estas relaciones cuando se quiebran, como es el caso del ejercicio de la justicia indígena, resulta apremiante ya que la red no resiste una ruptura demasiado duradera. Así mismo, la presión social por resolver cualquier infracción es muchas veces insostenible debido a la necesidad de recuperar el orden social.

En muchas ocasiones esta pertenencia étnica tiene expresiones de carácter fundamentalmente político. Así lo expresa una dirigente de la comunidad de Otavalo: "Cuando se está en unidad todo el pueblo participa en las mingas,¹¹ los congresos, los paros o los levantamientos, conjuntamente, para ver qué necesitamos como pueblo indígena". "La expresión de la minga como valor cultural, no sólo es para el trabajo sino también para la toma de decisiones", afirma un dirigente del pueblo chibuleo.¹² Estos elementos son vistos como formas de fortalecimiento y respeto de la identidad indígena y como una ocasión para fortalecer y respetar la identidad de los "otros" (de la sociedad mestiza).

⁹ Boaventura de Sousa Santos, *Estado, derecho y luchas sociales*, ILSA, Bogotá, 1991.

¹⁰ Esther Sánchez, "Reflexiones antropológicas en torno a la justicia y la jurisdicción especial indígena en una nación multicultural y multiétnica", en Fernando García (coord.), *Las sociedades interculturales: un desafío para el siglo XXI*, FLACSO, Quito, 2002.

¹¹ La minga es el trabajo comunitario en las comunidades indígenas (N. de la E.).

¹² Chibuleo es un pueblo perteneciente a la nacionalidad kichwa, ubicado en la sierra central ecuatoriana (N. de la E.).

La misma práctica de la justicia constituye un factor aglutinante de la identidad. Así lo atestigua un dirigente tradicional: “La cultura indígena se ha mantenido y fortalecido con la administración de justicia indígena, que ha sido un medio vital para poder vivir en armonía con la familia y con la comunidad, sin corrupción. Nosotros, como autoridades tradicionales, tratamos de mantener nuestra cultura, idioma, porque para nosotros es parte de nuestra vida. Además, creo que las leyes deberían estar escritas en kichwa y que haya indígenas profesionales, como abogados y profesores, que nos ayuden a guiar la comunidad, para que nuestra cultura resucite del olvido y vivamos en unidad”. Este testimonio exterioriza la necesidad de recuperar las normas, usos y costumbres legales actuales y pasados, sin confundir este ejercicio con una “positivización” del derecho indígena, que desmantelaría el planteamiento mismo del pluralismo jurídico. Una mujer, dirigente de su pueblo, propone: “estamos seguras de que las leyes o resoluciones elaboradas por la comunidad, sea local o provincial, seguirán adelante. Que el gobierno nacional acepte y nos deje solucionar a nosotros mismos porque somos capaces, sin tener un título, por haber obtenido experiencias como dirigentes o autoridades por varios años en la comunidad”. “Se podrían elaborar leyes sobre el agua, la tierra, que exista una ley propia de los indígenas y que sea aprobada e inscrita en la Constitución, porque queremos que se obre de acuerdo a la realidad como vivimos, no solo con la idea de que los gobiernos imponen los costos, perjudicando la vida de los comuneros”. En este testimonio se habla incluso de un fuero especial indígena, como sucede en el caso colombiano, que norme la resolución de los conflictos jurídicos de los pueblos indígenas.

Un último elemento, esclarecedor de la identidad kichwa, es la adscripción territorial a la comunidad que, junto a la pertenencia étnica, forma parte de la resolución de la competencia y jurisprudencia de las autoridades indígenas. La continuidad de la comunidad, vista como una forma de autonomía y de espacio contra hegemónico de la sociedad nacional, tal como lo plantea Laura Nader,¹³ sigue cumpliendo un papel significativo entre los indígenas kichwas.

Relación entre ambos sistemas jurídicos

De la relación entre la administración de justicia indígena y el fortalecimiento de la identidad étnica, se desprende una doble reflexión: qué ocurre al interior del sistema jurídico indígena y en relación con el sistema estatal de justicia.

Respecto a la primera cuestión, es evidente que se trata de sistemas vivos en los que confluyen usos y costumbres propios con normas nuevas. Por ello muchos testimonios hablan de la reactivación del sistema jurídico indígena, y no solo de su reconocimiento en la Constitución de 1998. Es necesario contar con las etnografías jurídicas de cada cultura que permitan seguir manteniendo la práctica de la justicia indígena, su difusión y conocimiento al interior del “otro” sistema y el inicio del diá-

¹³ Laura Nader, *Ideología armónica. Justicia y control en un pueblo de la montaña zapoteca*, CIESAS, México, 1998.

logo intercultural propuesto por De Sousa Santos como un mecanismo para el logro del pluralismo jurídico.¹⁴

Existe el afán por parte de las autoridades indígenas de crear "jurisprudencia" con la práctica de su propio derecho tras las reformas constitucionales. Este proceso de reafirmación no requiere de la elaboración de legislación secundaria por parte del poder legislativo ecuatoriano para ser legitimado, sino que descansa en la vigencia de los usos y costumbres propios y en la lucha desarrollada para que sea reconocido.

La necesidad frecuentemente expresada de que las autoridades indígenas conozcan el "otro" sistema jurídico marca la diferencia con el pasado. Ya no está en juego el reconocimiento como tal sino las nuevas formas de compatibilidad que deben existir entre ambos. En ese sentido, la dirigencia indígena ecuatoriana ha hecho una amplia convocatoria, no exclusivamente a profesionales del Derecho, ya que su concreción requiere del aporte de otros sectores sociales, pueblos indígenas, legisladores, académicos, jueces y magistrados, entre otros.

El presidente de la Asociación de Jóvenes y gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la comunidad San Francisco de Chibuleo, plantea que todos los comuneros y comuneras deben ganar espacio, prepararse para desempeñar cualquier cargo, demostrar gran responsabilidad e inteligencia en su desempeño, pero con identidad, conservando la lengua, los valores, las costumbres.

Retomando la preocupación planteada por Willem Assies y otros¹⁵ denominada "la renta de la identidad", no se trata de permitir que la administración de justicia indígena se convierta en un motivo de cosificación de la identidad o de polarización interétnica, sino que sea vista y tratada como una oportunidad de abordar las diferencias a través del diálogo y no necesariamente a través de medios legales.

¹⁴ Boaventura de Sousa Santos, *op.cit.*

¹⁵ Willem Assies, Gemma van del Haar y Andre Hoekema (eds.), *El reto de la diversidad. Pueblos indígenas y reforma del Estado en América Latina*, El Colegio de Michoacán, Zamora (México), 1999.

La política estadounidense y el desafío
del terrorismo

121

HUMAN RIGHTS WATCH

La política estadounidense y el desafío del terrorismo

La tendencia del Gobierno estadounidense a ignorar los derechos humanos cuando se trata de la lucha contra el terrorismo puede permitirle adoptar determinadas medidas de seguridad a corto plazo, pero con el tiempo será contraproducente y puede ser el germen de nuevas acciones terroristas. Esta tendencia se plasma en los diferentes métodos utilizados para medir el comportamiento democrático y la situación de los derechos humanos según el país correspondiente, sea aliado o enemigo; en su negativa a aplicarse los mismos estándares que exige a los demás y en sus ataques e intentos de minar instituciones y normas como el Tribunal Penal Internacional (TPI). Ante esta situación, la voz de Europa es más necesaria que nunca como referente internacional en la materia.

El terrorismo es opuesto a los derechos humanos y su proliferación en 2002 ha significado un gran desafío. El movimiento de derechos humanos tiene un interés directo en el éxito del esfuerzo antiterrorista, dado que la violencia dirigida contra civiles se opone a los valores de estos derechos. Sin embargo, la tendencia del Gobierno estadounidense a ignorar los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo no sólo es inquietante en sí misma sino peligrosamente contraproducente. El resentimiento que fomenta puede dar lugar a nuevos terroristas, disuade a posibles aliados en la lucha antiterrorista y mina los esfuerzos por poner freno a las atrocidades terroristas.

No se puede derrotar al terrorismo desde la distancia. Acabar con él requiere el apoyo de la población de los países donde residen los terroristas. Son esas personas las que deben tomar la iniciativa a la hora de disuadir a posibles futuros terroristas. Pero si ven a Washington apoyar a los Gobiernos

Human Rights Watch es una organización de defensa de los derechos humanos con sedes en EEUU y Europa. Más información en: www.hrw.org. Este documento es un extracto del Informe Anual 2003 de HRW y puede consultarse en inglés en: www.hrw.org/wr2k3/introduction.html#eu

Traducción: Allison M. Rohe y Mabel González Bustelo

que los reprimen, difícilmente estarán dispuestos a colaborar. Sus reticencias no harán más que aumentar si su comunidad entera es vista como sospechosa, como sienten actualmente muchas personas de Oriente Medio y el norte de África.

Está claro que EEUU debe adoptar medidas adicionales de seguridad. Pero el Gobierno estadounidense también debe prestar atención a la patología del terrorismo (el conjunto de creencias que conduce a algunas personas a participar en ataques a civiles, a creer que el fin justifica los medios). Una fuerte cultura de los derechos humanos es el antídoto a esta patología pero, en demasiados lugares, Washington ve estos derechos principalmente como un obstáculo para sus metas. Los derechos humanos y la seguridad se refuerzan pero, a menudo, Washington los trata como un juego de "suma cero".

Incluso en los momentos cumbre de la Guerra Fría, el Gobierno estadounidense comprendió la necesidad de tener una visión positiva. Entendió que EEUU no sólo podía estar en contra del comunismo. Tenía que representar la democracia aunque, a veces, el apoyo fuera solamente retórico. Del mismo modo, hoy en día estar solamente en contra del terrorismo no funcionará para el Gobierno estadounidense. Tendrá que estar también a favor de los valores que explican por qué es erróneo atacar a civiles: los derechos humanos.

Ha habido señales de esa visión en un discurso que el presidente Bush pronunció en la academia militar de West Point, en junio; en relación a la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de su Ejecutivo, anunciada en septiembre; y en las condiciones para desembolsar más asistencia internacional (la Cuenta para el Desafío del Milenio, o Millennium Challenge Account), anunciadas en noviembre. Pero este acercamiento retórico a los derechos humanos no se ha plasmado de forma coherente en la conducta y la política exterior estadounidense.

La triste ironía es que, durante la mayor parte del último medio siglo, EEUU estuvo muy a menudo detrás de la expansión del ideal de los derechos humanos. Encabezó la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la construcción del sistema internacional de los derechos humanos, y dejó oír su voz e influencia en favor de estos en muchas partes del mundo. Incluso en 2002, el Gobierno de Bush intentó hacer avanzar los derechos humanos en lugares donde no se desarrollaba la guerra contra el terrorismo como Myanmar (Birmania), Bielorrusia y Zimbabue. También reconoció el vínculo entre represión y terrorismo y, aunque de forma limitada, intentó promover los derechos humanos en algunos lugares más directamente involucrados en la lucha contra el terrorismo, como Egipto y Uzbekistán.

Este largo compromiso con los derechos humanos ha sido comprometido en tres aspectos importantes. Primero, en algunos países clave en la campaña contra el terrorismo, como Pakistán y Arabia Saudí, incluso ha sido escaso un apoyo retórico (a menudo, sólo las declaraciones del Departamento de Estado en su informe anual sobre la situación global de los derechos humanos). Washington ha mostrado también poca iniciativa a la hora de hacer frente a Gobiernos como los de Rusia, China e Israel, que utilizan la lucha contra el terrorismo para encubrir o intensificar la represión dirigida a movimientos separatistas, disidentes o nacionalistas (en muchas ocasiones muy represiva).

Segundo, aunque el Gobierno estadounidense trata de promover los derechos humanos, su autoridad está dañada por su negativa a estar sujeto a los estándares que predica a los demás. Desde su rechazo a los Convenios de Ginebra al mal uso de la designación del “combatiente enemigo”; desde el uso de comisiones militares al mal manejo de las leyes de inmigración para denegar a los sospechosos sus derechos, Washington ha hecho la guerra al terrorismo como si los derechos humanos no fueran una limitación.

Tercero, EEUU se ha opuesto intensamente a la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, desde el Tribunal Penal Internacional a otros esfuerzos más modestos por afirmar o reforzar las normas de derechos humanos.¹ Esta oposición implica una visión radical del orden mundial. Ciertos elementos influyentes del Ejecutivo estadounidense parecen percibir el Derecho Internacional como un impedimento innecesario, una serie de reglas que en el futuro puede limitar a EEUU de manera imprevisible e inconveniente. Dada la abrumadora fuerza económica y militar de EEUU, razonan, los intereses estadounidenses se defenderán mejor con negociaciones individuales caso por caso.

Pero, incluso la fuerza estadounidense tiene límites. Las normas compartidas —de comercio, paz o derechos humanos— son necesarias para que la mayoría de los Gobiernos las cumplan de manera voluntaria. Puede que se necesite ejercer presión para refrenar a los Gobiernos recalcitrantes, pero un orden global eficaz depende de que la mayoría de los Gobiernos actúen voluntariamente según las reglas acordadas. Incluso si el resultado es negativo en un caso determinado, la mayoría de los Gobiernos reconoce que un sistema de Derecho actúa en su interés a largo plazo. Esta lógica se derrumba si la superpotencia se exime a sí misma de la aplicación del Derecho Internacional. Si las normas compartidas ceden el paso a relaciones basadas únicamente en el poder, el mundo volverá a un orden premoderno “hobessiano”. Esto difícilmente puede favorecer los intereses a largo plazo de EEUU ni de nadie.

En 2002, la negligencia de Washington con respecto a los derechos humanos se apreció en su comportamiento en foros internacionales, en su relación bilateral con otros Gobiernos y en el tratamiento de sospechosos terroristas.

Foros internacionales

En el ámbito multilateral, el Gobierno estadounidense se opuso constantemente a cualquier esfuerzo para hacer cumplir los estándares de los derechos humanos. Esta postura no es completamente nueva. Los Gobiernos, tanto demócratas como republicanos, han mantenido siempre una distancia con los tratados de derechos humanos. EEUU no ha ratificado la mitad de los seis tratados más importantes en la materia (incluyendo la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), ni el tratado más importante para regular los con-

¹ De modo similar, esta postura puede verse en otros asuntos como el rechazo al Protocolo de Kioto sobre calentamiento global o su bloqueo a los esfuerzos por fortalecer el Convenio de Armas Biológicas.

*EEUU no ha
ratificado la
mitad de los
seis tratados
más
importantes
de derechos
humanos, ni
el tratado
más
importante
para regular
los conflictos
armados*

flictos armados modernos (el Primer Protocolo Adicional de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949). Incluso cuando ha ratificado un tratado, lo ha hecho de forma que se niega a los estadounidenses la opción de aplicarlo en cualquier tribunal, sea internacional o nacional. En 2002, esta resistencia se intensificó.

Un ejemplo de esta actitud se vio en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (el organismo central en esta materia dentro del sistema de la ONU). México propuso una resolución que ponía el énfasis en la importancia de que la lucha contra el terrorismo respetase los derechos humanos. Ésta no denunciaba a ningún Estado sino que, simplemente, reafirmaba un principio esencial. Pero Washington se opuso a esta resolución, aparentemente no controvertida. Le acompañaban Argelia, India, Pakistán y Arabia Saudí (países poco comprometidos con los derechos humanos). Al final, México retiró la propuesta. La Asamblea General de la ONU adoptó luego por consenso otra similar, después de que Washington fracasase en su intento de hacerla descarrilar.

De forma similar, el Gobierno estadounidense se opuso a los esfuerzos por fortalecer la prohibición de la tortura. Puso objeciones a un nuevo Protocolo Opcional a la Convención Contra la Tortura que establece un sistema de inspección para las instalaciones de detención donde se sospecha que se utiliza la tortura (lo que sería una importante medida de prevención). Sin embargo, como una cuestión política, EEUU se opone a la tortura e incluso ha ratificado la Convención. Si Washington quiere evitar la vigilancia bajo este nuevo procedimiento de inspección podría simplemente decidir no ratificar el protocolo (el cual, como su nombre indica, es opcional). En cambio, la decisión de tratar de privar a otros Estados de esta protección añadida de los derechos humanos, responde a un deseo evidente de evitar fortalecer cualquier instrumento internacional que pudiera ser usado, incluso remotamente, para criticar su propia conducta. El protocolo se sometió al voto de la Asamblea General de la ONU en diciembre y EEUU fue uno de los cuatro Gobiernos que se opusieron, frente a 127 partidarios.

Durante la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU sobre los niños, en mayo, el Gobierno estadounidense trató de evitar cualquier referencia a la Convención sobre los Derechos de la Infancia. EEUU es el único país en el mundo que no ha ratificado este tratado (junto con Somalia, que no tiene Gobierno nacional reconocido). La cumbre de más alto nivel de la ONU sobre el tema de la niñez realizada en una década era una oportunidad importante para reafirmar los derechos recogidos en la Convención. Sin embargo, Washington puso objeciones a cualquier mención concreta de los derechos de los niños, optando por una referencia más ambigua a su "bienestar".

La oposición estadounidense a la aplicación de los estándares de derechos humanos llegó a su extremo en el caso del Tribunal Penal Internacional. Éste tiene numerosas salvaguardas para abordar la preocupación legítima de Washington sobre juicios políticos. Entre ellas se pueden mencionar unos crímenes estrechamente definidos, la supervisión por varios grupos de jueces independientes, la previsión del proceso de destitución de un juez abusivo por una mayoría de los Estados firmantes (la mayoría de los cuales son democracias y aliados cercanos de EEUU), y la capacidad de un Gobierno nacional de evitar el procesamiento del TPI si lleva a cabo de buena fe su propia investigación y, en su caso, procesa-

miento. Además, el TPI no puede ejercer su jurisdicción sobre un sospechoso a no ser que su Gobierno haya ratificado el tratado o el sospechoso sea acusado de haber cometido un crimen en el territorio de un Gobierno que lo haya ratificado (ambas cuestiones son bases de jurisdicción ampliamente aceptadas).

Sin embargo, el Gobierno de Bush declaró una verdadera guerra contra el Tribunal. Rechazó la firma del anterior presidente Bill Clinton. Amenazó con clausurar su participación en operaciones de paz de la ONU a no ser que los miembros estadounidenses de esas operaciones autorizadas por la ONU fueran eximidos de la jurisdicción del TPI. Amenazó con cortar la ayuda militar a otros Gobiernos a menos que se comprometieran a no entregar nunca sospechosos estadounidenses al Tribunal, y el presidente Bush firmó una legislación que autoriza la intervención militar para liberar a cualquier sospechoso estadounidense detenido por el TPI (llamada "Ley de Invasión de La Haya"). Con algunas excepciones, no consiguió disuadir a los Gobiernos de ratificar el tratado y, a mediados de diciembre, 87 de ellos lo habían suscrito (mucho más que los 60 necesarios para su entrada en vigor). Pero los esfuerzos del Gobierno estadounidense para eximir a sus ciudadanos de la investigación y el juicio dieron lugar a un doble estándar que amenazó con minar la legitimidad de este organismo.

Mediante estas intervenciones en foros multilaterales sobre diversos asuntos, el Gobierno estadounidense daba a entender que los estándares de derechos humanos son, en el mejor de los casos, algo de cara a la galería. Están bien y son grandes declaraciones, pero su aplicación universal —aplicación que podría llegar a afectar de forma indirecta a EEUU— debe ser evitada. Esta hipocresía sólo sirve para minar las normas y la credibilidad de EEUU a la hora de hablar de derechos humanos, sea en la lucha contra el terrorismo o en el combate de la represión y los abusos.

Relaciones bilaterales

En sus relaciones bilaterales, el Gobierno estadounidense sí hizo algunos esfuerzos para promover los derechos humanos a la vez que luchaba contra el terrorismo. Después del 11 de septiembre, muchos suponían que su ya débil compromiso con las cuestiones de derechos humanos en Asia Central finalizaría. Sin embargo, en algunas formas se intensificó. La presencia militar estadounidense en Uzbekistán, Kirguizistán y Tayikistán asociaba a EEUU con las políticas represivas de estos países (al igual que las frecuentes cumbres presidenciales y los paquetes de ayuda). Washington exageraba los progresos y reformas para justificar la continuación de la ayuda. Ahora, más a menudo que en el pasado, los funcionarios estadounidenses presionaron a los líderes de la región para liberar prisioneros, respetar la libertad de los medios de comunicación y dejar funcionar a la sociedad civil. EEUU también dio sus primeros y limitados pasos para utilizar su influencia en estos países en la promoción de los derechos humanos; así, canceló una reunión de alto nivel con el ministro de Asuntos Exteriores de Kazajistán, con el objetivo de lograr la liberación de un disidente turco detenido en aquel territorio, y suspendió una misión comercial a Kirguizistán por su rechazo a la prensa independiente.

El apoyo de Washington a los derechos humanos en los países críticos con la lucha contra el terrorismo fue, en el mejor de los casos, incoherente y, en el peor, inexistente

En Colombia, un país ligado por el secretario de Estado Colin Powell a la guerra global contra el terrorismo, Washington también adoptó algunas medidas positivas: acusó a líderes de los paramilitares y las guerrillas colombianas implicados en graves abusos de derechos humanos y narcotráfico, anuló el visado estadounidense a un alto almirante vinculado a abusos flagrantes y suspendió la asistencia a una unidad de las fuerzas aéreas colombianas implicada en una seria violación del Derecho Internacional Humanitario. En esta ocasión el Gobierno estadounidense también exageró los progresos de Colombia a la hora de cumplir con las condiciones de derechos humanos vinculadas a la ayuda militar, lo que enviaba señales contradictorias al ejército colombiano. Sin embargo, sus acciones mandaron un mensaje —más fuerte que en el pasado— de que Colombia debe romper los vínculos entre sus Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares.

A pesar de estos ejemplos positivos, el apoyo de Washington a los derechos humanos en los países críticos con la lucha contra el terrorismo fue, en el mejor de los casos, incoherente y, en el peor, inexistente. Afganistán, el primer objetivo de los esfuerzos antiterroristas en 2002, ilustra el problema. La destitución de los talibán abrió la posibilidad de mayores libertades para el pueblo afgano. En Kabul, la capital afgana donde patrullaban los soldados de mantenimiento de la paz, la vida había mejorado sustancialmente. Pero el Gobierno estadounidense pretendía lograr la seguridad en el resto del país sin demasiados gastos. Como mucho ofreció un tibio apoyo al despliegue de tropas internacionales fuera de Kabul (los países europeos eran igual de renuentes) e hizo poco para desmovilizar a las facciones o establecer un ejército profesional afgano. Por el contrario, delegó esta seguridad en los señores de la guerra y les proporcionó dinero y armas.

En algunas partes del país, la consecuencia de esto fue que la vida siguió siendo similar a lo que era bajo los talibán (algo muy lejano al juramento de Bush, reiterado en octubre, de ayudar a Afganistán a “reclamar su futuro democrático”). Por ejemplo, Ismail Khan, el señor de la guerra en Herat, en el oeste de Afganistán, eliminó toda la disidencia, amordazó a la prensa y obligó a las mujeres a llevar el burka. Los que resistían sufrieron amenazas de muerte, encarcelamientos e incluso torturas. Afganos que se habían refugiado en Irán durante el régimen de los talibán se quejaban de que eran más libres allí que bajo el dominio de Khan. Pero, el secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, durante una visita a Herat en abril, llamó a Khan una “persona atractiva”. Bajo una creciente presión para responder a la violencia y la inseguridad fuera de Kabul, el Gobierno de Bush anunció en noviembre el envío de un pequeño número de soldados y funcionarios de asuntos civiles a capitales regionales afganas. Un paso positivo, pero insuficiente para poner fin a los abusos de los señores de la guerra.

En Pakistán, el general Pervez Musharraf logró enmiendas constitucionales que prolongaban su mandato presidencial cinco años, se otorgó el poder de disolver el Parlamento y creó un Consejo de Seguridad Nacional dominado por militares para supervisar el Gobierno civil. Pero, interrogado por estas preocupantes tendencias en agosto, el presidente Bush contestó: “Mi reacción sobre el presidente Musharraf es que todavía está con nosotros en la guerra contra el terror, y

eso es lo que aprecio". Sólo después, como una idea adicional, mencionó la importancia de la democracia. Debido al apoyo de Washington al líder militar de Pakistán y a los represores señores de la guerra en Afganistán, no debía haber sorprendido que los partidos políticos antiestadounidenses fueran los grandes ganadores de las elecciones parlamentarias en octubre. Su victoria también en las elecciones locales en las dos provincias fronterizas con Afganistán complicará los esfuerzos estadounidenses para capturar cualquier fuerza residual de los talibán o Al Qaeda en la región.

En Indonesia, un ejército abusivo y sus milicias aliadas han sido los factores más importantes en el conflicto separatista y comunal. La incapacidad del Gobierno para hacer rendir cuentas de los abusos militares ha generado malestar popular. Las atrocidades patrocinadas por el ejército en Timor Oriental, en 1999, habían conducido a EEUU a recortar parte de su asistencia militar. Pero, dado que Indonesia es visto como un importante frente en la lucha contra el terrorismo, el Ejecutivo de Bush intentó reanudar la formación militar, a pesar de los escasos o nulos progresos logrados a la hora de obligar a los militares a someterse al imperio de la ley. Bush también buscaba que se desestimase una denuncia presentada ante los tribunales estadounidenses por víctimas de las atrocidades militares en Aceh, que reclamaban una indemnización de Exxon Mobil por su supuesta complicidad en los abusos. EEUU justificó su oposición a estos esfuerzos por imponer los derechos humanos debido, en parte, al miedo de que Indonesia respondiera finalizando su cooperación en la guerra contra el terrorismo.

Otros aliados de EEUU en la guerra contra el terrorismo recibieron un trato más suave respecto a sus abusos de los derechos humanos. El presidente ruso, Vladimir Putin, sólo recibió críticas moderadas en respuesta al brutal comportamiento de sus tropas en Chechenia. A pesar de las críticas ocasionales a la conducta de China en su provincia occidental de Xinjiang —donde desde hace tiempo emplea políticas represivas sobre la mayoría uigur, de habla turca—, la decisión de definir el pequeño Movimiento Islámico de Turkistán Oriental como una organización terrorista, protegió la represión de Pekín sobre la minoría musulmana más grande del país. A pesar de los continuos abusos del ejército israelí en su lucha contra los grupos armados palestinos y los terroristas suicidas, Washington resguardó a Israel de la presión internacional y siguió suministrándole incondicionalmente armas y asistencia militar. Dado que el primer ministro de Malasia, Mahatir bin Mohamad, ofreció su apoyo decidido a la campaña contra el terrorismo, Washington también cesó en las críticas a su Gobierno, ya fuera por el uso de la detención administrativa o por la detención continuada, basada en cargos falsificados, del antiguo viceprimer ministro Anwar Ibrahim.

Estas acciones bilaterales de EEUU envían un mensaje contundente: los derechos humanos son prescindibles en el nombre de la lucha contra el terrorismo. Esta política puede proporcionar más libertad de acción para adoptar medidas de seguridad a corto plazo. Pero, si construir una cultura de los derechos humanos en lugar de la patología del terrorismo es un objetivo importante, se envió un mensaje terrible de reemplazo de los valores del respeto de la vida de cada persona por la perspectiva de que el fin justifica los medios.

La Unión Europea

A medida que Washington abandona su clásico papel como fuerte —aunque no siempre coherente— defensor de los derechos humanos, se podría haber esperado que la Unión Europea, tradicional promotora de estos, llenara el vacío. Pero el liderazgo de Europa fue imposible por su falta de voluntad política, su indebida deferencia hacia Washington y el valor que da al consenso a cualquier precio.

El año no comenzó con buenos auspicios. En la sesión anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en marzo y abril, la ausencia de EEUU —que, por primera vez en la historia de la Comisión, no fue elegido como miembro— ofreció a Europa la oportunidad de liderazgo. Fracasó. Sin Washington como líder, la Unión Europea ni siquiera presentó una resolución sobre la pésima situación de los derechos humanos en China. A cambio, siguió un diálogo estrictamente formal sobre derechos humanos con Pekín. Europa sí actuó acerca de Chechenia, pero con poco entusiasmo. Participó en esfuerzos largos e inútiles para negociar con el Gobierno ruso una suave declaración de consenso del director de la Comisión, en lugar de una resolución. Este enfoque era inapropiado desde el principio, dadas las continuas atrocidades de las fuerzas de seguridad rusas y el completo fracaso de las autoridades a la hora de llevar a las fuerzas abusivas ante la justicia. Cuando las negociaciones acababan en un punto muerto, la UE presentó con retraso una resolución crítica, pero perdió por un solo voto (la primera derrota de una resolución sobre Chechenia en tres años).

En el caso de China, los Gobiernos europeos clave han mostrado mucho más interés en crear lazos económicos que en promover los derechos humanos, a pesar de que una necesidad no excluye a la otra. Por tanto, han dejado la vía libre a EEUU, que también da más valor a las relaciones económicas con China que a liderar la denuncia del cerrado sistema político de Pekín.

La deferencia europea hacia Washington fue especialmente visible durante los conflictos sobre el Tribunal Penal Internacional. La UE merece crédito por ser uno de los principales defensores de la creación del TPI, en contraste con la intensa oposición del Gobierno de Bush. Pero los Gobiernos europeos se mostraron demasiado dispuestos a llegar a compromisos sobre cuestiones de principios, en gran parte porque el Reino Unido estaba decidido a llenar el vacío entre Europa y EEUU. Por ejemplo, en junio y julio Washington amenazó con utilizar su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para poner fin a varias misiones de paz, a menos que el Consejo eximiera de la jurisdicción del TPI a los participantes estadounidenses en operaciones autorizadas por la ONU. La amenaza no era sostenible ya que hubiera supuesto, por ejemplo, retirar las fuerzas de la ONU que impiden a Sierra Leona caer de nuevo en el conflicto y las que sirven como “parachoques” entre Hezbolá y la frontera norte de Israel. Pero en lugar de adoptar una postura basada en principios, Francia y, sobre todo, el Reino Unido apoyaron un “arreglo” que eximía las tropas estadounidenses durante un año. Que éste sea un arreglo razonable o un paso para salvar las apariencias hacia la impunidad estadounidense dependerá de si estos países consienten en extender el acuerdo cuando caduque en julio de 2003.

Debido en gran parte a la insistencia del Reino Unido, la Unión Europea no logró un acuerdo para rechazar en común el intento de Washington de obtener pactos bilaterales de inmunidad, amparados en el artículo 98 del tratado del TPI. El artículo 98 permite acuerdos bilaterales para decidir cuál, entre dos Gobiernos interesados, tiene derecho a investigar y, en su caso, procesar a un sospechoso. Pero el artículo 98 debe ser leído según el propósito principal del tratado: autorizar al TPI a supervisar cualquier esfuerzo de procesamiento y asegurar que se lleva a cabo de buena fe. Varios Gobiernos europeos opinaban que sería suficiente que Washington hiciera la promesa de perseguir a cualquier sospechoso demandado bajo el artículo 98. Pero el propósito del TPI es no confiar nunca en juramentos no verificados de procesamiento. Ése es el sistema que permitía a tiranos como Augusto Pinochet, Idi Amin o Pol Pot escapar con impunidad. Los países europeos (y otros defensores del Tribunal) deben reconocer que ningún acuerdo es válido bajo el artículo 98 a menos que las dos partes reconozcan la autoridad del TPI para supervisar. A mediados de diciembre, los Gobiernos de la UE no lo habían hecho. Sin embargo, sólo quince Gobiernos en el mundo habían llegado a estos acuerdos bilaterales de inmunidad.

Parte de la explicación de por qué la Unión Europea tiene un expediente tan débil con respecto a los derechos humanos es el valor que da al consenso, sean cuales sean las consecuencias. Una norma de consenso refleja una preferencia por la no-acción a menos que haya apoyo unánime para la acción. Su propósito es proteger contra intrusiones indebidas en los intereses de un Estado miembro. Cuando se trata de ciertos asuntos internos de la UE, quizá esta norma sea una concesión razonable con respecto a la soberanía nacional. Puede que también sea útil para hacer que los posibles Estados miembros cumplan con estándares más altos de derechos humanos. Pero, cuando se trata de promover los derechos humanos fuera del ámbito de los posibles futuros miembros de la UE, ha resultado dañino, como muestran las acciones de la UE con respecto a Chechenia, China y el TPI.

Para tener éxito, la promoción de los derechos humanos debe ser coherente y enérgica. Pero la norma de consenso de la UE da lugar al mínimo común denominador. Cualquier miembro puede diluir o paralizar una acción común para proteger los derechos humanos. La inacción llega a ser la postura por defecto.

A medida que la voz estadounidense sobre los derechos humanos desaparece, el coste de la inacción europea es mayor. Su efecto aumentará a medida que el número de miembros de la UE crezca de quince a veinticinco. Al menos en lo referente a la promoción de los derechos humanos, Europa debe adoptar un sistema distinto de toma de decisiones. Una alternativa sería permitir que una gran mayoría hable en nombre de la UE, quizá dando los Gobiernos que no estén de acuerdo el derecho de optar por no participar.

La dificultad de llegar al consenso podría mitigarse si los Gobiernos de la UE, a título individual, se sintieran libres de promover los derechos humanos de forma más enérgica que la política exterior común de la UE (es decir, si la política común se viera como un suelo en lugar de un techo). Históricamente, esto ha ocurrido. Por ejemplo, en 1997, Dinamarca respaldó una resolución crítica sobre China en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. De modo similar, Alemania ha adop-

tado una postura más fuerte que el conjunto de la UE en apoyo al TPI. Los países nórdicos han hecho lo mismo para la región de los Grandes Lagos de África y, junto con el Reino Unido, para Myanmar (Birmania). Las acciones individuales no tienen el poder de una acción colectiva, pero son mejor que nada.

Sin embargo, cada vez más los miembros de la UE parecen negarse esta libertad o, al menos, utilizar su preferencia por una acción común como una excusa para no actuar más allá del consenso. Este problema fue especialmente grave en 2002 con respecto a China y Chechenia. Los delegados en la Comisión de la ONU citaban continuamente la política común de la UE como la razón por la cual no podían presionar más (o no presionar nada) en favor de una resolución crítica.

Esta tendencia debe resistirse. La presunción de que nadie actúa si no actúan todos puede tener sentido en asuntos internos, pero es un impedimento innecesario cuando se trata de la promoción externa de los derechos humanos. La política exterior común debería verse como un mínimo que todos los miembros deben apoyar, no como una restricción para aquellos que están dispuestos a hacer más.

A este problema se suma la falta de transparencia en el proceso de toma de decisiones de la UE. Enterarse de que se ha presentado una propuesta requiere, normalmente, mucho trabajo de investigación. El público no suele estar informado de un debate de política hasta que se ha tomado la decisión, y no se suelen revelar las posturas defendidas por los distintos Estados miembros durante el debate. El déficit democrático producido por este secretismo es especialmente pernicioso en el caso de los derechos humanos, donde a menudo es necesaria la presión popular para superar la reticencia de muchos Gobiernos a promover los derechos humanos, en lugar de otros intereses políticos y económicos. Como se escucha cada vez más en los pasillos de la ONU y otros foros multilaterales, este secretismo también aleja a los posibles aliados, a los que no sienta bien tener que esperar y luego seguir un pronunciamiento de la UE cuando no tienen apenas conocimiento ni oportunidad de influir en el debate.

El consenso, la uniformidad y el secretismo tienen, cada uno, su propósito en un momento dado. Pero la voz de la UE sobre derechos humanos es demasiado importante como para permitir que estas cuestiones de procedimiento se interpongan en su camino. A medida que la UE se extiende, también debería asegurarse de que conserva su papel imprescindible en la promoción de los derechos humanos en todo el mundo.

Crónica de una Palestina ocupada 133

**Las maquilas de Juárez: una nueva
revolución industrial** 143

Testimonio

ALEJANDRO POZO

Crónica de una Palestina ocupada

La política israelí de ocupación y expulsión de los palestinos de su propia tierra ha disparado el número de simpatizantes de la causa palestina hasta un número sin precedentes. Hoy resulta difícil defender y justificar los actos cometidos por el Gobierno de Israel, que pretende justificar estas acciones con una lógica de lucha contra el terrorismo. Partiendo de la evidencia de que el objetivo sionista persigue un Estado judío para los judíos, Israel ejecuta un plan de expulsión de los palestinos. Para lograrlo, es necesario propiciar una situación insostenible. Sin embargo, la resistencia palestina lleva más de medio siglo evidenciando las carencias de este plan. El autor analiza algunas estrategias utilizadas para la ocupación militar y describe la realidad en Jerusalén, Cisjordania y la Franja de Gaza, tras su trabajo en el terreno.

El intelectual israelí Michel Warschawski, miembro fundador del Centro Alternativo de Información de Jerusalén, asegura que el conflicto israelí-palestino no es el resultado del terrorismo o del rechazo árabe, ni de una política determinada de dirigentes israelíes, sino de la esencia misma del sionismo y la filosofía que lo sustenta. “El Estado judío, tan étnicamente puro como sea posible, es la esencia del sionismo político y el cimiento del consenso nacional israelí. La exclusión o la separación de los palestinos es el objetivo común tanto de la derecha como de la izquierda sionistas. El gran debate común de la izquierda y la derecha sionista después de decenios gira en torno a los medios para alcanzar ese objetivo”, afirma Warschawski.¹

El Gobierno de Israel persigue sus objetivos mediante la marginación de los árabes que forman parte de la ciudadanía israelí y una política de expulsión de los árabes que habitan en los Territorios Ocupados de Palestina. Uno de cada cinco ciudadanos de Israel es palestino. Sin embargo, el Gobierno israelí se presenta

Alejandro Pozo es Master en Ayuda Humanitaria por la Universidad de Deusto, especialidad en Paz y Conflictos por la Universidad de Uppsala (Suecia). Ha trabajado con refugiados afganos en Irán y Pakistán, y en el conflicto palestino en Líbano y los Territorios Ocupados de Palestina. Es colaborador del Centro de Investigación para la Paz (CIP)

¹ Michel Warschawski, “Estado, nación y nacionalismo: la actualidad del sionismo”, *Revue Tiers Monde*, octubre-diciembre de 1994, N° 114. También en la web del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA): www.cscs.org/cscs, 14 de agosto de 2002.

como el Gobierno del pueblo judío y no como el de los ciudadanos israelíes. Aunque teóricamente Israel otorga los mismos derechos a todos sus ciudadanos, basta con conversar con cualquier árabe-israelí para confirmar que esto no ocurre en la práctica. Son comunes las referencias al *apartheid* de Israel, entendido como la desigualdad entre los ciudadanos con respecto a los derechos civiles en función de sus orígenes étnicos o raciales. La diferencia con el caso sudafricano es que en este último se empleó a la mayoría negra como mano de obra barata al servicio de la población blanca, mientras que en Israel no se trata de explotar a los palestinos sino de excluirlos o, mejor aún, de expulsarlos.

La estrategia de expulsión se manifiesta en los territorios palestinos mediante una ocupación militar. La seguridad en los asentamientos de colonos y el terrorismo palestino son los pretextos que esgrime el Gobierno israelí para justificar estrictos toques de queda, ocupar casas palestinas, cortar carreteras y establecer puestos de control y bases militares en unos territorios que no son suyos.

Jerusalén y los asentamientos

Jerusalén siempre se presenta como uno de los principales obstáculos ante una eventual paz duradera en Oriente Próximo. En la Ciudad Santa se encuentran numerosos lugares sagrados cristianos, judíos e islámicos, sorprendentemente cerca unos de otros. En ocasiones, esta cercanía ha ocasionado enfrentamientos entre fieles de distintas religiones. Sin embargo, el conflicto desde hace décadas entre israelíes y palestinos responde más a una situación de nacionalismo étnico excluyente (el sionismo) que a razones religiosas. Israel persigue un Estado judío para los judíos, tal como se expresa en su Acta de Constitución, y el que no lo sea no tiene cabida en él.

Jerusalén nunca formó parte de los Acuerdos de Oslo. Este y otros asuntos como la creación del Estado palestino, el derecho de retorno o compensación de los refugiados o el problema de los asentamientos, fueron relegados a fechas posteriores a dichos Acuerdos, contribuyendo así al fracaso de los mismos. Fue un fracaso en términos de paz, porque constituyó una victoria relativa del sionismo al agudizarse la separación entre israelíes y palestinos. Esto garantizaba el carácter judío del Estado de Israel a través de la aceptación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de este sistema de *apartheid*, confiriéndole el carácter democrático que necesitaban los ojos de la opinión pública occidental. La evidente falta de compromiso del Gobierno de Israel en el proceso de paz en general, y en Oslo en particular, quedó de manifiesto al comprobarse que gran parte de los asentamientos que existen hoy en Cisjordania se establecieron mientras se llevaban a cabo las negociaciones. Los asentamientos son ilegales y están prohibidos por la Cuarta Convención de Ginebra, que en su artículo 49 prohíbe la construcción de estos en tierras ocupadas.

El Gobierno de Israel afirma que existen un total de 140 colonias judías. El Applied Research Institute de Jerusalén asegura que imágenes de satélite muestran un total de 282 áreas israelíes construidas en Cisjordania y 26 en la Franja de

Gaza, excluyendo las bases y puestos militares.² El mismo instituto estima que, entre 1996 y 2001, se produjo un 84% de expansión colonial israelí, principalmente bajo el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Hoy comparten, sin relacionarse, el territorio de Cisjordania cerca de 2 millones de palestinos y 400.000 colonos israelíes, la mitad de estos en los alrededores de Jerusalén.

La población israelí no percibe los asentamientos como un evento político sino social.³ Es decir, una familia que decide vivir en un asentamiento, no lo hace porque considere que su acción contribuye al proyecto sionista de establecer un Estado judío en el territorio de la antigua Palestina.⁴ Si deciden vivir en un asentamiento es porque apenas deberán pagar por una vivienda, además de obtener una reducción del 7% en los impuestos y cerca de 20.000 euros del Ministerio de Vivienda, entre otras ventajas. La localización de los asentamientos responde a estrategias de ampliación, y la decisión parte del Gobierno de Israel. La financiación corre a cuenta, en gran parte, de algunas comunidades judías de EEUU, que no dudan en recolectar un impuesto específico para financiar el establecimiento de nuevos asentamientos.

Para apoyar el fundamento social de dichos emplazamientos, estos presentan una apariencia de normalidad y tranquilidad sorprendentes. Disponen de jardines, agua corriente y todo tipo de instalaciones, incluyendo piscinas, a pesar de estar establecidos en regiones muy áridas. Para ello, utilizan el 80% de todo el agua consumida en los territorios palestinos. Los asentamientos se establecen en las zonas más ricas (en agua) y más elevadas, y se conectan entre sí y con Israel a través de autopistas. En ningún momento los colonos deben relacionarse con los palestinos, lo que aumenta la sensación de normalidad. Al establecer un nuevo asentamiento o al construir nuevas carreteras, los soldados israelíes delimitan una zona de seguridad de un mínimo de 500 metros. Todo lo que se encuentre en ella será arrasado por las excavadoras *bulldozer* israelíes, incluyendo instalaciones, árboles, huertos y casas, sin indemnización alguna a los palestinos propietarios de estos terrenos. Jeff Halper, director del Comité Israelí contra la Demolición de Casas, afirma que las excavadoras y los tanques deberían formar parte de la bandera de Israel, ya que han contribuido de manera significativa a su proyecto sionista.⁵

*Si deciden
vivir en un
asentamiento
es porque
apenas
deberán
pagar por
una vivienda,
además de
obtener una
reducción del
7% en los
impuestos y
cerca de
20.000 euros
del Ministerio
de Vivienda,
entre otras
ventajas*

² En: www.arij.org.

³ Existen algunas excepciones en lugares puntuales, como en Hebrón, donde 450 colonos y una guardia personal de centenares de soldados israelíes cohabitan con 35.000 palestinos en la zona H2, de control israelí, en esta ciudad palestina de 140.000 habitantes. Estos colonos, ultraortodoxos judíos en su mayoría, lo son por motivos políticos.

⁴ Por Antigua Palestina se entienden los territorios que hoy abarcan Palestina e Israel. La ONU otorgó, en su Plan de Partición de 1947, un 47% del total del territorio a los palestinos, a pesar de disponer del 70% de la población de entonces. Tras la guerra de 1948, el territorio palestino quedó reducido al 22% de la Antigua Palestina. Este 22% (Cisjordania y Gaza) es lo que hoy reivindican los palestinos para constituir su Estado.

⁵ Jeff Halper, "El mensaje de las excavadoras", *El País*, 2 de septiembre de 2002.

La doble ocupación de Cisjordania

En Cisjordania, las zonas autónomas palestinas se limitan a poco más de las ocho ciudades y sus alrededores.⁶ Sin embargo, estas ciudades tampoco gozan de autonomía real y están sometidas a continuos controles de carreteras y toques de queda, entre otros mecanismos de represión.⁷

Los controles de carretera consisten en pequeños puestos militares israelíes que se instalan en las carreteras palestinas que unen las ciudades palestinas más importantes. No es posible entrar ni salir de estas ciudades sin pasar por uno o más de estos controles. En ellos, se obliga a los palestinos a esperar durante largos periodos de tiempo. Carece de importancia si hace frío o calor, si eres una persona o una ambulancia. Según una de las asociaciones médicas palestinas más importantes, la Union Palestinian Medical Relief Committee (UPMRC), en los seis primeros meses de 2002, 64 personas murieron en Nablús dentro de las ambulancias como consecuencia de las largas e injustificadas esperas a las que fueron sometidas. En estos controles, se pueden encontrar colas de espera de varios centenares de metros de longitud con palestinos arrodillados que aguardan durante horas con las camisetas levantadas por encima del pecho. Cuando se les pregunta, los soldados afirman que los palestinos deben mostrar que no llevan explosivos, al tiempo que insisten en que esta medida frena la amenaza terrorista. Sin embargo, no es más que otra de las repetidas humillaciones a las que se ven sometidos los palestinos en su propio territorio.

Los numerosos controles militares —más de 50 en Cisjordania— junto a la enorme cantidad de carreteras y caminos cortados por el ejército israelí —más de 120 cortes— ocasionan serios problemas de comunicación a los palestinos y aíslan a las pequeñas poblaciones. El suministro de agua con camiones-cuba queda interrumpido, al igual que el comercio, la educación y los servicios sanitarios. Esto obliga a los palestinos a optar por rutas alternativas para desplazarse. Muchas veces deben hacerlo a pie o a través de largos caminos de difícil acceso, con las consecuentes pérdidas de tiempo y servicio que ello supone.

Los toques de queda también se justifican por la amenaza terrorista que para el Gobierno de Israel supone todo palestino. En algunas ocasiones duran 12 horas, comenzando a las seis de la tarde, pero en otras permanecen las 24 horas del día, durante continuos periodos de tiempo de hasta dos semanas seguidas

⁶ Las ocho ciudades palestinas son Yenín, Tulkarem, Kalkiria, Nablús, Ramala, Jericó, Belén y Hebrón. Los territorios de Cisjordania fueron divididos en los Acuerdos de Oslo en las zonas A, B y C. Las zonas A son áreas de población, gestión y control palestinos; las zonas B son áreas de población y gestión civil palestinas y seguridad israelí; las zonas C, de control total israelí, comprenden el resto de territorios de Cisjordania, incluyendo los asentamientos de colonos israelíes y las carreteras. En los Acuerdos de Oslo las zonas A, B y C abarcaban una extensión del 3%, 24% y 73%, respectivamente. Tras diversos acuerdos entre palestinos e israelíes (Wye River, Sharm El Sheik), las extensiones alcanzaron el 18%, 22% y 60%, respectivamente. Ver también Isaías Barreñada, "Palestina o 'Palestinistán'?", *Papeles de Cuestiones Internacionales*, verano 2002, Nº 78, p. 23 (N. de la E.).

⁷ Ver Human Rights Watch, "Situación de refugiados palestinos en Yenín", *Papeles de Cuestiones Internacionales*, CIP/FUHEM, verano 2002, Nº 78, p. 133 (N. de la E.).

cada uno. Un toque de queda significa, además de no poder salir a pasear, no poder asistir al colegio, ir al médico o al hospital. Comprar comida se convierte en un reto. También supone un impedimento para relacionarse con los demás. El 24 de julio de 2002, la población de Nablus decidió desobedecer un toque de queda de 24 horas impuesto un mes antes por el ejército de Israel, exteriorizando su protesta a través de manifestaciones que los medios de comunicación occidentales no difundieron. La presencia de brigadas internacionales impidieron, por ese día, las represalias del ejército de Israel.⁸

La mayor parte de las acciones llevadas a cabo por los soldados israelíes están dirigidas a hacer insostenible la vida en las ciudades palestinas. Las casas ocupadas constituyen uno de los ejemplos más claros de la continua humillación a la que se ven sometidos los palestinos en Cisjordania. El ejército israelí escoge un cierto número de casas de varias plantas con el pretexto de necesitarlas para labores de vigilancia contra el terrorismo y desaloja a los propietarios palestinos, realojándolos en la planta baja. De esta forma se aseguran que quedarán a salvo de posibles atentados. La realidad que se vive en estas casas constituye un buen ejemplo para entender la estrategia de expulsión de los palestinos.

Una de las viviendas ocupadas en Nablus en julio de 2002 tenía tres plantas. Los soldados encerraron con llave en la planta baja a las tres familias palestinas que vivían en la casa. Donde difícilmente podían vivir antes 8 personas, ahora lo hacían 30. Los israelíes establecieron el aparcamiento para los tanques en el único huerto que tenía la vivienda, a pesar de disponer de enormes extensiones de terreno mejor situado para hacerlo. Limpiaron cada día sus armas con gasolina y con las ropas, toallas o manteles de los palestinos. Al acabar lanzaban las ropas a los palestinos para que las vieran. Dispararon cada noche sus armas al vacío, a pesar de que no había ningún fuego al que responder; golpearon cada noche y madrugada la puerta de metal de la vivienda donde encerraban a los palestinos, a pesar de que ellos tenían la llave y no pretendían entrar. Los niños estuvieron semanas sin poder jugar al sol. Todos los habitantes de la casa sufrían estrés. La casa permaneció ocupada más de un mes.

El centro penitenciario de Gaza

La Franja de Gaza constituye en sí misma una gran prisión. Por un lado, se ha convertido en el centro penitenciario para los palestinos acusados de tener vínculos con las organizaciones palestinas radicales, quienes son sistemáticamente deportados desde Cisjordania. Por el otro, la Franja de Gaza está cercada —incluso por mar— por soldados israelíes y salir del territorio es una tarea difícil, cuando no imposible. Para entrar o salir se atraviesa un control similar al de cualquier frontera del mundo. Un no palestino puede circular dentro y fuera de la Franja de Gaza, pero tiene que atenerse a las consecuencias. Las autoridades israelíes sellarán el visado de entrada a Israel que todo extranjero está obligado a conser-

⁸ Información sobre un grupo de brigadas internacionales, en: www.pagina.de/palestinalliure

El aislamiento al que está forzosamente sometida la Franja de Gaza asfixia sus oportunidades de desarrollo, al tiempo que la pobreza en aumento deteriora la angustiosa situación existente

var. Al pretender abandonar el país, lo primero que se le revisa al viajero es el visado. Cuando se comprueba que se ha estado en esta zona, se etiquetan de rojo su cuerpo y todo su equipaje, y se le somete a un interrogatorio, que puede durar varias horas, donde a menudo se traspasan los límites de la legalidad e intimidad.

El aislamiento al que está forzosamente sometida la Franja de Gaza asfixia sus oportunidades de desarrollo, al tiempo que la pobreza en aumento deteriora la angustiosa situación existente. La Franja de Gaza tiene 440 Km². En dos tercios de este territorio malviven 1.200.000 palestinos (4454 por Km²), mientras que en otro tercio se dispersan 7.000 colonos (51 por Km²) junto a un numeroso ejército.

Pese al reducido número de colonos que habitan en la Franja de Gaza, en comparación con Cisjordania, existe una importante cantidad de militares que controlan tanto los asentamientos como sus accesos y carreteras. Israel dispone, en términos relativos de población, de uno de los mayores ejércitos del mundo. El servicio militar obligatorio dura tres años. Tras este periodo, y hasta pasar los cuarenta, los nuevos civiles pasan a la reserva entre uno y tres meses al año. Los soldados destinados en los Territorios Ocupados suelen ser muy jóvenes. Las vulneraciones de derechos humanos que se suceden a diario en estos territorios podrían hacer desertar a alguien con mayor madurez analítica y capacidad crítica. La insubmisión en Israel no es nueva: protagonizó importantes y numerosos episodios durante la ocupación de Líbano.⁹ Actualmente existen cerca de 500 insumisos. No está basada en principios pacifistas, que niega las armas, sino que se trata de una insubmisión específica que rechaza la legitimidad y ética de lo que Israel está haciendo a los palestinos en su propio territorio. No es sencillo declararse insumiso en Israel: en julio de 2002, Shlomo Aviner, uno de los principales líderes religiosos del movimiento colono pidió sin éxito la pena de muerte para los insumisos de los Territorios Ocupados.

En todos los territorios palestinos, el agua representa un serio problema para la población. El alcalde de Gaza asegura que el problema no es de cantidad, como en Cisjordania, sino de acceso. El suministro de energía que les proporciona Israel únicamente les permite encender los motores de extracción durante unas pocas horas al día. Además, las tuberías principales sufren constantemente roturas provocadas por las excavadoras israelíes. En numerosas ocasiones, los palestinos no tienen más remedio que comprar a los israelíes el agua que previamente estos últimos extrajeron de los territorios palestinos. También son los israelíes quienes fijan, a modo de monopolio, cuánto deben pagar los palestinos por su propia agua.

Otro suceso que ilustra la gravedad de la situación que se sufre en los territorios palestinos tuvo lugar en la madrugada del 22 al 23 de julio de 2002. Un caza F-16 del ejército israelí dejó caer una bomba de una tonelada sobre un

⁹ Sobre los cambios sociales e ideológicos que alteraron las relaciones en la sociedad israelí producidos por la invasión a Líbano, ver artículo de Sergio Yahni y Diego Crenzel, "El Estado, la sociedad civil y el ejército en Israel durante el conflicto libanés", en Joan Roura y Consuelo del Val (eds.), *Oriente Próximo: ¿qué tipo de paz?*, UNED, Madrid, 2001.

barrio residencial de la ciudad de Gaza. El motivo alegado fue que en uno de los edificios completamente destruidos se encontraba Sheikh Salah Mustafa Shihadda, uno de los líderes del movimiento radical palestino Hamas. Dos días más tarde, los medios de comunicación europeos (no así los árabes) dejaron de comentar el suceso dando por válida la cifra inicial de víctimas que ofreció la CNN: 16 muertos, incluidos nueve niños. Los edificios bombardeados fueron varios bloques de pisos en los que vivían numerosas familias palestinas. La bomba cayó alrededor de la medianoche, cuando todos estaban en sus casas. 24 horas más tarde, seguían apareciendo cadáveres de víctimas inocentes que jamás serían contabilizadas. En las pocas paredes y pilares que quedaron en pie se exhibían mensajes concluyentes: "esta es la paz de Israel", "esta es el arma americana". Los medios de comunicación occidentales, que no registraron bien las víctimas y que no mostraron estos mensajes, tampoco informaron de que el bombardeo sucedió un día después de que todas las organizaciones radicales palestinas firmaran un acuerdo, por el que se comprometían a dejar de cometer atentados en el territorio de Israel, a condición de que el ejército de este último hiciera efectiva una retirada militar de los Territorios Ocupados. El primer ministro israelí, Ariel Sharon, felicitó al piloto y se mostró orgulloso por lo sucedido.

Apoyo internacional a Israel

La injusta y estratégica paranoia de lucha contra el terrorismo que desde el 11 de septiembre de 2001 gobierna la política internacional, ha beneficiado al Gobierno de Israel en al menos dos aspectos. Por un lado, le facilita un pretexto para endurecer sus acciones contra la comunidad palestina, en la que cada uno de sus miembros es calificado de presunto terrorista. Por el otro, favorece la interpretación de la crisis árabe-israelí como un "conflicto entre dos bandos", lo que podría dar la falsa impresión de que ambas facciones tienen la misma responsabilidad en tanta destrucción y desesperanza. No se trata únicamente de una enorme asimetría de fuerzas. Israel es quien condena a los palestinos a vivir en unas condiciones indignas, amparándose en la absoluta impunidad que EEUU le ha proporcionado históricamente. El 6 de agosto de 2002, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una recomendación al Consejo de Seguridad que exigía a Israel la retirada incondicional de su ejército de los territorios palestinos a las posiciones que ocupaban con anterioridad a la segunda Intifada. Se obtuvieron 114 votos a favor, incluyendo toda la Unión Europea, frente a cuatro en contra: Israel, EEUU, las islas Marshall y Micronesia. Fue únicamente un voto, el de EEUU el que, a través de su injusto derecho de veto, otorgó a Israel, una vez más, la impunidad para seguir violando los derechos de los palestinos según su criterio. Recientemente, dentro de la campaña que desarrolla EEUU para ingresar en el Tribunal Penal Internacional con garantías de inmunidad para sus ciudadanos, este país e Israel han firmado un acuerdo por el cual un Estado se compromete a no llevar a ningún ciudadano del otro a los tribunales, sean cuales sean los crímenes cometidos.

Sin embargo, EEUU no es el único responsable de lo que está ocurriendo en Palestina. Junto a los Estados miembros de la Unión Europea, Israel es uno de los 189 países firmantes del Cuarto Convenio de Ginebra, el cual viola de forma sistemática. En el artículo primero de estos acuerdos se destaca que las partes contratantes están obligadas a “respetar y hacer respetar el Convenio en todas circunstancias”. En lugar de cumplir con lo que se comprometieron, los países europeos continúan vendiendo armamento a Israel al tiempo que mantienen su acuerdo de asociación preferencial con este Estado.

En cuanto al terrorismo, el profesor y ensayista palestino Edward W. Said señala que “los atentados suicidas son reprobables, pero también consecuencia directa y, en mi opinión, programada, de años de abusos, impotencia y desesperación. Tienen muy poca relación con la presunta tendencia árabe o musulmana a la violencia. [...] Sin por ello negar todo su horror, considero que a la violencia palestina —reacción de un pueblo desesperado y terriblemente oprimido— se le ha arrebatado su contexto, el terrible sufrimiento del que nace; no se ve que es un fracaso de la humanidad, lo cual no le resta horror pero lo sitúa en una realidad histórica y geográfica”.¹⁰

La gran mayoría de las proclamas internacionales pro-palestinas tienen que ver con la creación de un Estado palestino. Centrar casi en exclusiva las pretensiones en este aspecto, dejando de lado cuestiones como la de los refugiados o el estatus de Jerusalén, entre otras, podría tener como consecuencia que una vez logrado este objetivo callaran todas las voces que hoy gritan en favor del pueblo palestino. Porque todo parece indicar que la creación del Estado palestino será un hecho, aunque no en el 100% de los territorios de Gaza y Cisjordania, que es al que tienen justo derecho. Tanto al partido laborista israelí como al Likud les conviene. Tras el fracaso relativo del proyecto sionista en cuanto a la expulsión de los palestinos, Israel necesita localizar a los palestinos en algún lugar para garantizar un Estado de Israel para los judíos. La discusión entre estos dos partidos se centra en cuánto será el territorio cedido. El Likud establece sus pretensiones alrededor de los territorios de la Franja de Gaza y las zonas A. Los laboristas extenderían estos objetivos hasta las zonas B. Pero ni uno ni otro están dispuestos a ceder los territorios que comprenden, entre otros aspectos, los asentamientos de colonos israelíes y las carreteras.

Así, la creación del Estado palestino se presenta como inevitable. Sin embargo, esto no solucionará el conflicto que los dos pueblos, árabe y hebreo, mantienen. Ambos Estados necesitarán establecer relaciones, políticas, económicas y sociales. Palestina necesitará mucho tiempo y dinero para poder ofrecer un nivel digno de vida a sus ciudadanos. Por otro lado, uno de cada cinco israelíes es palestino. Es absolutamente necesario que los dos pueblos aprendan a vivir en paz en un territorio tan reducido como el de la Palestina antigua. Para ello, se precisa un cambio en la propaganda y estereotipos que una sociedad ofrece de la otra. Michel Warschawski y el Centro Alternativo de Información de Jerusalén,

¹⁰ Said, Edward W., “La muerte lenta: un castigo minucioso”, *El País*, 12 de agosto de 2002.

entre muchos otros, plantean la idea de binacionalismo como una posible solución verdadera al conflicto.¹¹

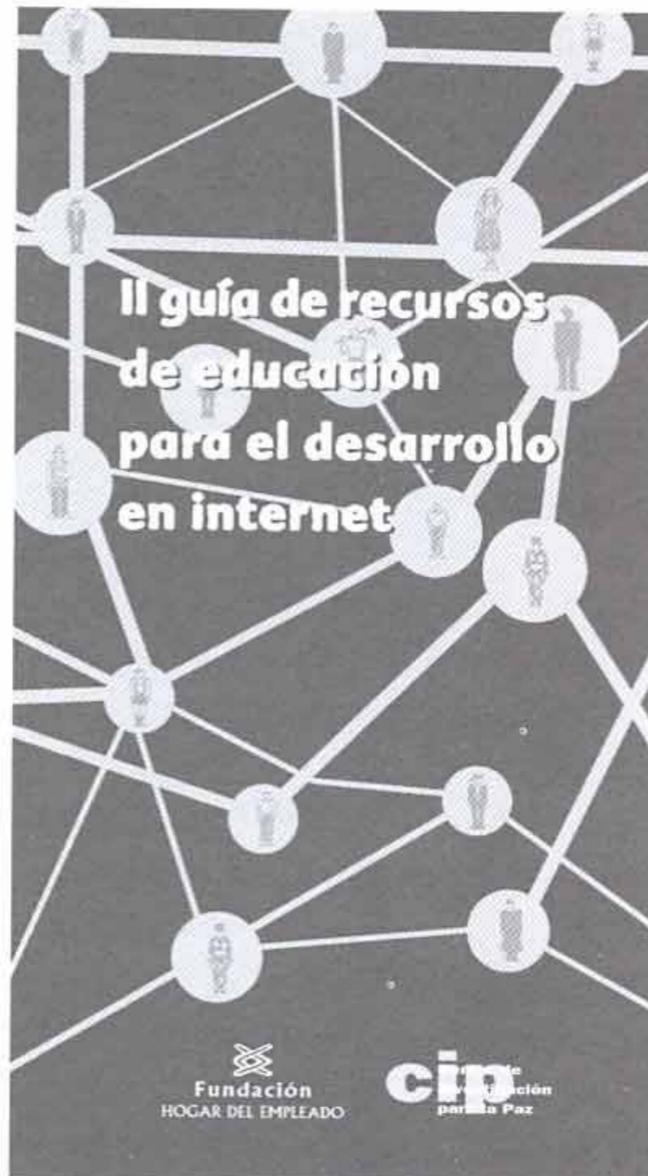
Los medios de comunicación occidentales aseguraron que con el atentado suicida de un palestino a mediados de septiembre de 2002, finalizaba un periodo de calma de seis semanas en Oriente Próximo. Durante ese periodo, murieron 68 palestinos a manos de soldados israelíes.¹² El Gobierno de Israel practica un silenciado terrorismo de Estado cotidiano que provoca que dos tercios de la población palestina viva por debajo del umbral de pobreza de dos dólares diarios. A pesar de ello, Palestina sigue resistiendo. Y continuará haciéndolo hasta que se oiga su voz, que sólo pide lo que a todas luces es su legítimo derecho. La impunidad con la que Israel reprime a la población palestina es una muestra más de las carencias en materia de justicia del actual sistema.

¹¹ Michel Warschawski, *Israel-Palestina: la Alternativa de la Convivencia Binacional*, Catarata, Madrid, 2002. Página web del AIC (Alternative Information Center of Jerusalem): www.alternativenews.org.

¹² En la web del Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza (www.pchrgaza.org) pueden encontrarse informes semanales de lo que sucede en Palestina.

Il guía de recursos de educación para el desarrollo en internet

Il guía de recursos de educación para el desarrollo
Edita: Fundación Hogar del Empleado-CIP
Madrid 2000. 252 páginas



Esta guía forma parte del proyecto **Madrid: Redes Solidari@s**

(<http://www.cip.fuhem.es/EDUCA/mrs>), del Área de Educación para el Desarrollo del CIP.

Es un proyecto destinado a educadores/as y formadores/as de educación formal y no formal, y a todas aquellas personas interesadas en la cooperación y la solidaridad. Ofrece direcciones de organizaciones y espacios de internet relacionados con la educación para el desarrollo, así como proyectos, campañas de sensibilización, artículos y propuestas didácticas. Cuenta con un apartado especial dedicado a los recursos existentes en la Comunidad de Madrid.

Centro de investigación para la Paz

Boletín de pedido

Deseo recibir () ejemplares de la *Il guía de educación para el desarrollo en internet*

Precio ejemplar: 6 €

Nombre	Apellidos	
Dirección	Localidad	
Provincia	C.P.	País
Tel.		

Forma de pago:

- Talón bancario a nombre de FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO
- Giro Postal a nombre de FUNDACIÓN HOGAR DEL EMPLEADO
- Contra reembolso

También puede solicitarlos por teléfono, fax o correo electrónico.



Fundación HOGAR DEL EMPLEADO

Duque de Sesto, 40 - 28009 MADRID
Tel.: 91 431 03 46 - Fax: 91 576 32 71
Web: cip.fuhem.es - E-mail: cip@fuhem.es

SAUL LANDAU

Las maquilas de Juárez: una nueva revolución industrial

Las empresas maquiladoras ubicadas en la zona norte de México, junto a la frontera de EEUU, suponen una nueva revolución industrial que ha atraído a gran cantidad de personas del campo a la ciudad y ha generado dramas humanos y medioambientales, en muchos casos irreversibles. La maquila implica que las empresas estadounidenses exportan a México materias primas y luego importan, libres de impuestos, las piezas terminadas y los productos ensamblados. Para atraer a estas firmas es necesario eliminar restricciones en materia laboral, sindical, de pago de impuestos y de normativas medioambientales. La competencia de los salarios chinos, más bajos aún que los mexicanos, ha provocado que muchas de estas fábricas trasladen su producción al país asiático, con lo que 250.000 personas han perdido su trabajo en el norte de México y se han quedado sin alternativas de subsistencia.

Mis alumnos me preguntan si el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, entre EEUU, Canadá y México (ALCAN) funciona tan espléndidamente como aseguró el presidente estadounidense Bill Clinton y como ahora asegura George Bush. Después de pasar unos días en el área de El Paso-Juárez, puedo afirmar que funciona fabulosamente si uno es un especulador —digo, inversor— o director general de una corporación multinacional con una fábrica sucursal abierta en Juárez. También les ha ido bien a unos pocos millonarios mexicanos que alquilan tierras para parques industriales y a los que se alimentan de los contratos de las fábricas para la exportación. En cuanto a los más de un millón de mexicanos que trabajan en las maquiladoras y que no han perdido su trabajo recientemente, han sobrevivido, lo que no hubieran podido hacer de haberse quedado en sus improductivos lugares de origen.

Saul Landau es director de Medios Digitales y de Extensión Internacional del Colegio de Letras, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica Estatal de California, en Pomona (EEUU). Su nuevo filme es *Maquila: una historia de dos Méxicos*

Las maquiladoras contemporáneas representan una nueva revolución industrial. En lugar de leer acerca de Manchester o Leeds en los años cuarenta del siglo XIX, visiten Tijuana o Juárez en la actualidad. El moderno equivalente de la saga descrita por Charles Dickens tiene en su centro la maquiladora, que atrae a gente del campo hacia las ciudades y después provoca dramas humanos.

En Juárez, por ejemplo, se han encontrado los restos de más de 250 mujeres que fueron violadas y mutiladas. Casi todas ellas trabajaban en maquiladoras. Gente de comunidades tradicionales ha hecho una difícil transición a la vida no comunal, donde cada persona debe sospechar de su vecino.

Ciudad Juárez, al otro lado del una vez poderoso Río Bravo —que ahora es un hilo de agua—, ha crecido como un cáncer. El crecimiento no tiene mucho que ver con el desarrollo. En sus desnudas colinas arenosas han brotado colonias (eufemismo de “villas miseria”). Las familias campesinas llegan cuando se rinden al hecho de que sus tierras ya no los mantienen. Encuentran trabajo en las fábricas para la exportación, arman como pueden casuchas de madera, metal y plástico y encuentran la forma de conectarse clandestinamente a la energía eléctrica (algunos se electrocutan en el intento). Esperan a que los camiones circulantes del agua y del gas que hacen sonar “La Cucaracha” por sus altavoces traigan los materiales necesarios para la vida y para cocinar. A menudo, estas familias almacenan el agua en viejos barriles de metal que una vez contuvieron productos químicos. El aire, que antes sólo era polvoriento durante la temporada de vientos fuertes, ahora apesta por las emisiones de las fábricas y por el hedor del humo de autos sin silenciador. Desde que EEUU hizo más rígida la seguridad en la frontera, los coches permanecen dos o tres veces más tiempo en los puentes que enlazan Juárez con el vecino El Paso. Las emanaciones de gases caen sobre los residentes.

En colonias como Anapra y Lago Poniente, la gente del campo adquiere rápidamente costumbres urbanas. Tratan de criar a sus hijos para que obtengan logros académicos o los envían a las maquiladoras, aún adolescentes, para que contribuyan al magro ingreso familiar. Un número alarmante de jóvenes cae en las drogas, la prostitución y la delincuencia pandillera.

En las colonias, las chozas dan a calles sin pavimentar donde los perros sarnosos defecan y los niños corren descalzos en el polvo del verano. Pero —dicen Ana María, madre de tres hijos, y Catalina, que tiene siete— al menos Juárez significa certeza de empleo.

Hace dos años —la última vez que estuve en Juárez—, la mayoría de las maquiladoras buscaban trabajadores y funcionaban con tres turnos diarios. La tasa de empleo estaba cerca del 100%. Un empleado descontento en la fábrica A podía renunciar y encontrar trabajo en la fábrica B, al otro lado de la calle, donde el salario era de cinco centavos más por hora o la comida en la cafetería era mejor. Esa movilidad laboral ha terminado con la llegada de la recesión.

Durante los últimos 18 meses, unos 250.000 trabajadores de fábricas han perdido su trabajo en México. Irónicamente, muchas de las mismas fábricas que se mudaron de EEUU en los años ochenta y noventa encuentran ahora razones apremiantes para bajar los salarios o trasladar sus operaciones a Asia. Catalina, Ana María y sus muchos hijos han sido despedidos recientemente. Las fábricas

donde trabajaban, que en otros tiempos estaban ocupadas, se han transformado en lápidas sepulcrales; los parques industriales se han convertido en cementerios industriales. Las malas hierbas, los plásticos y los papeles cubren ahora lo que fue un atestado aparcamiento frente a Quality Industrial Services. Un solitario guarda de seguridad comparte el espacio con un gato zarrapastroso y un pájaro esquivo. “Es difícil, me dijo el hombre, ver cómo cierran las maquiladoras y se van para China”. El hombre culpa a la depresión del año pasado en EEUU de que los mexicanos hayan quedado desempleados.

“A primera vista —dice Víctor Quintana, sociólogo de Chihuahua— la pérdida de empleos es resultado de la recesión en EEUU y las sacudidas posteriores al 11 de septiembre, pero en realidad eso es una cortina de humo para ocultar causas más profundas. La recesión estadounidense fue apenas un resfriado, mientras que en México nos ha dado una pulmonía”. El modelo de la maquiladora, predice Quintana, ha desgastado su potencial. “México no puede competir con China. Pero ese modelo ya ha hecho su daño”. Según Quintana, hace dos años Chihuahua tenía la mayor tasa de empleo de México. Hoy tiene el mayor desempleo del país. Gracias a los despidos provocados por los cierres de fábricas, la mudanza de éstas o la reducción de turnos, Chihuahua ha perdido más de 100.000 puestos de trabajo.

Un artículo publicado el 20 de junio de 2002 en *The Washington Post* aseguraba que, durante los últimos dos años, más de 500 fábricas de montaje de propiedad extranjera se mudaron de México a China. Los contables y gerentes de las compañías han llegado a la conclusión de que la diferencia de salarios entre ambos países cubre el coste del transporte y las inconveniencias de la distancia. En Juárez —donde el coste de la vida es aproximadamente el 75% que el de El Paso, al otro lado del río— un operador de maquinaria que comienza a trabajar en una maquiladora gana menos de ocho dólares diarios, mientras su homólogo en China gana sólo la cuarta parte de ese mísero jornal.

Víctor Quintana no llora por lo que él cree el fin de la era de la maquila. Lo que hizo el ALCAN, y todo el modelo de libre comercio, fue lanzar una ofensiva cultural contra la mayoría de los pobres del mundo. Quintana insiste que la maquiladora representa mucho más que una nueva forma de producción. “Dicta cómo nos relacionamos, cómo vivimos, qué hacemos y consumimos. Dicta el individualismo, destruye la comunidad. Es una forma de terrorismo que lleva a la gente por caminos que evitan la vida y la lleva a la bebida, a las drogas, a las religiones de moda. Nos inunda con su propaganda cultural. La maquiladora tiene su propio discurso, un discurso que se burla de los valores tradicionales, como cooperación y solidaridad. Sus únicos valores son el individualismo y la competencia”.

Quintana pierde la paciencia ante los ricos y poderosos, como el propio presidente mexicano Vicente Fox, que se retuercen las manos porque “perdemos nuestros valores tradicionales” mientras que, en busca del crecimiento económico, traen con entusiasmo al país a las maquiladoras destructoras de valores.

La maquiladoras provocan crecimiento económico, pero también el de la tasa de criminalidad. “Los que predicán que debemos respetar a la naturaleza invitan a las maquiladoras que, a su vez, destruyen la naturaleza. Las maquiladoras destruyen a la gente y su relación con la naturaleza. Están más allá de la crueldad. Simbolizan la impersonalidad del capitalismo corporativo multinacional”.

*Durante los
últimos dos
años, más de
500 fábricas
de montaje de
propiedad
extranjera se
mudaron de
México a
China*

Un ejemplo es el caso de Leticia Ortiz, que llegó a Juárez desde el campo hace 19 años. Trabajó en una gran maquiladora y ascendió hasta llegar a ser jefa de personal. Luego, sin ningún aviso, fue despedida. Los directores generales, residentes en alguna distante ciudad del mundo, decidieron mudar sus fábricas a China, donde los salarios son significativamente menores que los de Juárez y la productividad la misma. ¿Se siente amargada? “No, sólo desencantada”, dice ella. “Después de mi esfuerzo de tantos años creo que desarrollé un sentimiento de lealtad a la compañía, un sentimiento que no fue recíproco. Ni siquiera me pagaron lo que me debían por compensación, según la ley. Pero me llevaría demasiado tiempo y sería muy caro hacer la reclamación, así que acepté su oferta nada generosa”. Después de recibir la noticia de su despido, Leticia dice que se fue a su casa y lloró durante horas. Luego, dice, básicamente se pasó durmiendo seis meses. “Supongo que puede decirse estaba deprimida”.

Historia de las maquilas

A partir de 1965, Juárez inauguró sus primeras maquiladoras. El objetivo era brindar empleo a la fuerza laboral de cientos de miles de trabajadores migratorios que habían perdido su trabajo en los algodones de Texas, gracias a una nueva máquina que los había reemplazado. Los inversores estadounidenses invadieron México. Salarios bajos y una fuerza laboral productiva, bajos impuestos y ninguna regulación a favor del medio ambiente, hicieron a México atractivo. Pero poco a poco los sindicatos independientes, apoyados por algunos sindicatos de la American Federation of Labour-Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO),¹ comenzaron a surgir en las ciudades fronterizas y su sola aparición produjo un aumento en los salarios.

Hasta hace poco, las inversiones en la maquiladoras mexicanas continuaron aumentando. Desde 1994, el ALCAN proporcionaba una garantía para los inversores cautelosos y la tasa de crecimiento de las maquiladoras alcanzó las dos cifras. Este acuerdo brinda incentivos de exención de impuestos para los propietarios de maquiladoras, de forma que las compañías estadounidenses exportan materias primas a México y luego importan libre de impuestos las piezas terminadas o productos ensamblados: electrónica, equipos eléctricos, automóviles, camiones y remolques o sus piezas, productos de madera, plásticos y textiles.

Cuando comenzó el experimento de la maquila en 1965, Juárez atrajo a un puñado de fábricas. Pero ahora, casi 4.000 de estas plantas de producción para la exportación, la mayoría de propiedad extranjera, llenan el paisaje de ciudades fronterizas como Juárez, Tijuana, Mexicali, Nogales, Matamoros y otras. Es más, las maquiladoras se han movido también hacia el interior del país.

La maquila supone aproximadamente la mitad de los casi 150.000 millones de dólares que México exporta anualmente. Pero, a pesar de lo eficiente que ha

¹ Federación que agrupa a 65 sindicatos y organizaciones de trabajadores estadounidenses (N. del E.)

demostrado ser la fuerza laboral mexicana en cuanto a competencia global, se queda muy atrás de los trabajadores chinos en el campeonato de salarios bajos.

Algunas plantas de Juárez habían previsto la situación y construyeron plantas automatizadas y hasta robotizadas. Una fábrica de propiedad italiana elabora armazones de televisores y ordenadores que se hacen en un molde y son extraídos por un robot. La planta utiliza pocos trabajadores. El director italiano de la misma afirma que es lógico, en un sentido estratégico, abrir una planta en Juárez, dada su proximidad a la frontera estadounidense. "Los salarios que pagamos aquí son aproximadamente la cuarta parte de lo que tendríamos que pagar en Milán", agregó.

Pero los mexicanos que acudieron a Juárez lo hicieron por necesidad. Ya no podían sacar de la tierra ni siquiera la subsistencia. Llegaron porque las maquiladoras parecían prometer una seguridad permanente de trabajo, aunque precaria. ¿Qué pasará, ahora que alguna de esta gente se ha quedado desempleada?

Según el sociólogo Quintana, unos pocos regresarán a las aldeas que se vieron obligados a abandonar a fin de obtener empleo. Algunos aún tratan de superar los difíciles obstáculos de la frontera estadounidense. Sin embargo cerca de El Paso, desde los ataques del 11 de septiembre, casi nadie tiene éxito en cruzar. La avanzada tecnología estadounidense y las patrullas vigilantes actúan como una virulenta forma de disuasión. Más al oeste, en las áreas más remotas y cálidas del desierto de Arizona, donde las temperaturas sobrepasan en verano los 45 grados, los "coyotes" conducen a sus presas humanas. Estos traficantes de personas ofrecen por un precio sus servicios para el cruce de la frontera a aquellos que quieren desesperadamente llegar a territorio estadounidense. Los "coyotes" garantizan a sus clientes la abundancia de agua y, a menudo, los abandonan justo en el lugar en que se acaba el agua y la temperatura se vuelve insoportable para la vida humana. Sólo en junio de 2002 más de veinte mexicanos, incluyendo una niña de once años, murieron en esta ruta. Regularmente aparecen noticias en los medios acerca de camionetas que se estrellan por exceso de velocidad, matando a su carga de trabajadores indocumentados al tratar de eludir la persecución de las patrullas fronterizas. "Las leyes de inmigración de EEUU son leyes de muerte", dice un residente mexicano de la frontera.

Gracias a la vigilancia de la patrulla fronteriza recientemente militarizada, el flujo tradicional de mexicanos hacia EEUU ha disminuido significativamente. Las zonas habituales tienen demasiadas patrullas, así que el peligroso desierto se ha convertido en la elección de los verdaderamente desesperados y aventureros.

Como resultado de esta persecución de los braceros o "mojados", la mayoría de los recién desempleados permanecen en Juárez. "La población puede haber llegado a tres millones", especula Félix Pérez, un activista local del medio ambiente. Nadie los ha contado. Cada día cientos, quizá miles, llegan a la estación de autobuses buscando trabajo en las maquiladoras. "Me quedo en Juárez", dice Ana María. "Es duro aquí, pero imposible en mi tierra".

Los vendedores de maquiladoras predicán a los inversores potenciales que la fuerza laboral mexicana aún puede competir con otros países del Tercer Mundo en cuanto a salarios y productividad. Ésa es la competencia global. ¿Qué país puede ofrecer a su gente por los salarios más bajos? ¿Qué país puede prometer a las

industrias que ensucian el entorno las menores regulaciones a favor del medio ambiente, los impuestos más bajos, el menor control del puesto de trabajo en cuestiones de salud y seguridad y las menores probabilidades de sindicalización? Éste es el mercado libre. ¡Ésta es la democracia!

Para mantenerlo sano, haciendo caso a los presidentes Bush y Fox, necesitamos más de lo mismo. Bush no hace referencia a los horrores laborales, sociales y del medio ambiente que se han desarrollado junto con lo que, eufemísticamente, se conoce como libre comercio. Es más, él mismo ha presionado “patrióticamente” para ampliar su autoridad en materia comercial.²

Unos pocos días en Juárez dejan claro, a cualquier persona sensible, que no existe un cerebro orientador en el proceso de las maquiladoras. El estado de cuentas, que dicta la política de las corporaciones, dicta toda la vida.

La segunda gran víctima: el medio ambiente

Después de semanas investigando las condiciones laborales y del medio ambiente en la frontera EEUU-México, he llegado a la conclusión de que al sistema de producción utilizado para inundarnos con productos —la globalización— le falta un cerebro humano, pero tiene una excelente calculadora. Aunque los gerentes de las multinacionales y los urbanizadores de los gigantescos parques industriales de las ciudades fronterizas del lado mexicano tienen importantes títulos universitarios y hablan de forma coherente acerca de estados de cuentas, no he encontrado evidencias de una inteligencia sensible. Estos especímenes humanos, con alto coeficiente de inteligencia y licenciaturas de universidades prestigiosas, representan a un sistema de producción, distribución y ventas que acumula riquezas, materias primas y humanas, siglas y etiquetas: ALCAN, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), Organización Mundial del Comercio (OMC), comercio libre, neoliberalismo, globalización y, por supuesto, el “mercado libre”.

El sistema funciona sobre una base racional —lo cual quiere decir que posee medidas para evaluar la eficiencia— pero carece de razón humana. Por ejemplo, el sistema global necesita recursos adecuados: agua, aire y tierra de buena calidad, para seguir elaborando los productos que luego promociona implacablemente entre todos los compradores potenciales. Sin embargo, a fin de hacer “competitivos” estos productos, arruina sistemáticamente el agua, el aire y la tierra y destruye prematuramente la esencia de la propia gente que debe trabajar en sus fábricas.

Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, brinda una clara ilustración. A finales de junio de 2002 me encontraba en la margen sur de un canal de aguas negras de más de siete metros de ancho que atraviesa la ciudad. La cámara de vídeo enfocaba a Osvaldo Aguinaba, un viejo campesino, que estaba al otro lado. Traté de que el hedor que subía de la rápida corriente no interfiriera con mis pen-

² A principios de agosto de 2002 se promulgó la llamada Autoridad de Promoción Comercial (TPA, por sus siglas en inglés), un mecanismo antes denominado Fast Track que otorga a la Casa Blanca amplios poderes para sellar acuerdos comerciales con terceros países, que el Congreso puede aprobar o rechazar pero no modificar (N. de la E.)

samientos. “Dígame —grité— ¿esta agua apestosa siempre ha corrido por aquí?”. “Sí, pero eran sólo aguas albañales, desechos de seres humanos”. Osvaldo, vestido con ropa blanca de trabajo asintió con la cabeza y señaló la pútrida corriente de agua. “Ahora están mezcladas con los desechos químicos de las fábricas. Esas fábricas son responsables de casi toda la porquería. Están arruinando el campo”. Otro viejo agricultor se unió a él. Sacudió con tristeza la cabeza. “El Gobierno está dejando morir la agricultura”, dijo mientras señalaba las aguas negras.

Si uno se sube en una escalera, en el lado donde estaban los agricultores, puede ver Texas a menos de un kilómetro. En la parte mexicana de la frontera, a unos cuarenta kilómetros al sureste de Juárez, se cultivan sorgo y otros alimentos para el ganado, junto con algodón. “No nos dejan usar el agua para regar los frutales”, me dijo. “Gracias a Dios”, murmuré. Pero también me pregunté cuánto pueden vigilar las autoridades en el Chihuahua rural.

Osvaldo dijo que todavía cultiva algo de trigo. Sentí un estremecimiento. “Sí, las aguas negras se infiltran en los campos. Pero ¿qué podemos hacer? Ha habido una larga sequía. Tenemos que comer. Los animales tienen que comer. Tenemos que atender nuestros cultivos y venderlos, con cualquier tipo de agua que podamos encontrar”.

Se supone que la gente se come el trigo, así como la carne y la leche de las vacas que comen los granos regados con este río tóxico. A unos pocos kilómetros al sur, una planta convierte los desechos sólidos en barras de sedimento que luego vende a los agricultores como fertilizante. Aunque no soy científico, mi olfato me dice que me aleje de las aguas negras y no coma nada que haya estado en contacto con ellas.

“Los peores contaminantes son los metales peligrosos usados en el procesamiento de metales”, dice Federico de la Vega, quien estudió ingeniería química en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y regresó a su casa, en Ciudad Juárez, para dirigir un negocio de distribución de cervezas y refrescos y arrendar parques industriales a las maquiladoras extranjeras. “La limpieza de metales para cerraduras y otros productos industriales implica el uso de cloro, bromo y otros elementos verdaderamente tóxicos, y yo sé que algunos de los gerentes de las maquiladoras no se deshacen de los residuos venenosos de manera adecuada. Me preocupa especialmente la salud de las mujeres embarazadas que entran en contacto con esos compuestos”.

Hasta Jaime Bermúdez, el padre y principal promotor de los parques industriales de Ciudad Juárez, admitió que los problemas ambientales son graves. “Pero podemos resolverlos. Las maquiladoras traen puestos de trabajo y sin trabajo no somos nada”.

Me recordó el discurso de algunos sindicatos estadounidenses hace unas décadas, cuando sus afiliados exigían que se enfrentaran a los peligros químicos, nucleares y otros en el puesto de trabajo. “¿Qué es más importante, un poco de porquería en el aire y el agua o la oportunidad de ganarse bien la vida para su familia? Pórtense como trabajadores duros. El medio ambiente es para los afeminados”.

En ciudades fronterizas como Juárez la contaminación te golpea en los ojos, los oídos, la nariz, la garganta y los pulmones. “En primer lugar están los autobuses antiguos”, dice Félix Pérez. “Estos vehículos son el medio básico de transporte de la ciudad. No sólo son extremadamente incómodos, sino que emiten enormes cantidades de vapores nocivos”. Pérez señaló los viejos autobuses escolares estadouniden-

En ciudades fronterizas como Juárez la contaminación te golpea en los ojos, los oídos, la nariz, la garganta y los pulmones

ses, que van y vienen cargados de obreros entre las colonias donde viven y las fábricas donde trabajan. Algunos presentan poca o ninguna amortiguación mientras van saltando por las calles sin pavimentar y con huecos, a lo largo de las cuales están las chozas (las casas de algunos de los que producen artículos para el hogar, piezas para camiones elegantes y nuevos accesorios para automóviles y ordenadores). Un viaje promedio de la colonia a la fábrica tarda casi una hora.

“Lo cierto es que no tenemos un sistema de transporte que respete el medio ambiente. Agréguese el hecho de la contaminación producida por las medidas de seguridad posteriores al 11 de septiembre, puestas en práctica por las autoridades fronterizas de EEUU, y el aire se hace verdaderamente irrespirable”.

Pérez se refiere al tiempo extra que se requiere ahora para cruzar los tres puentes que enlazan Ciudad Juárez con El Paso, en Texas. La demora ha llevado el tiempo de espera por lo menos al doble, así que los residentes de Juárez y El Paso absorben el doble de emisiones, procedentes de los autos y camiones que esperan su turno con el motor encendido para que la aduana de EEUU les permita cruzar. No hace falta decir que los vehículos mexicanos no han pasado la inspección de control de emisiones.

“Luego está el asunto de la carencia de agua”, continúa Pérez. El otrora poderoso Río Bravo está reducido a un arroyo en algunas partes de Juárez y lo que queda es un desafío al contacto humano. “A Juárez le queda agua para cinco años”, predice. “Para el futuro, los funcionarios de la ciudad han descubierto una fuente de agua en el desierto, pero está localizada en un cementerio nuclear donde hay enterrado, entre otras cosas, cobalto radiactivo. Puede haberse infiltrado en el agua”.

Nadie sabe con certeza si el agua será apta para el consumo. Pero la planificación industrial en los países del Tercer Mundo no tiene en cuenta el factor de la salud humana. Los ricos, por supuesto, compran agua embotellada y el suministro de fuerza de trabajo barata, en lugares como México, será abundante durante muchas décadas. Las compañías abandonan a los trabajadores más viejos en favor de adolescentes, la mayoría de los cuales tendrá suficiente salud y energía para las necesidades productivas de los próximos cinco años. Al llegar a los cuarenta surgen los cánceres, las enfermedades pulmonares y los síndromes asociados con movimientos repetitivos.

Justo cuando nos marchábamos de Juárez la compañía Scientific-Atlanta, el segundo fabricante estadounidense de armazones de televisores, anunció que había eliminado 1.300 puestos de trabajo en México debido a la disminución de la demanda. Un portavoz de la compañía, Paul Sims, advirtió de que se esperaban más reducciones de puestos. Los problemas de Scientific-Atlanta provienen de una demanda reducida después de llegar a su nivel más alto en 2000.

Los nuevos residentes de Juárez, que llegaron aquí para buscarse la vida después de que la economía del campo se agotó, ahora se enfrentan al desempleo sin ninguna seguridad y con un entorno físico que parece insostenible.

¿Por qué las brillantes personas que desarrollaron la idea de las maquiladoras como base económica no pudieron pensar también en la posibilidad de que se produjeran situaciones extremas? ¿O es ésta la propia naturaleza del nuevo orden mundial, un corporativismo global que dicta la prosperidad a corto plazo y el desastre en el futuro?

A problem from hell / The responsibility to protect	153
Políticas sociales y Estado de bienestar en España: las migraciones. Informe 2002 / España ante el desafío multicultural	159
Seguridad humana, prevención de conflictos y paz	162
África Subsahariana ante el nuevo milenio	170
The emotion and the truth. Studies in mass communication and conflict / Medios periodísticos, cooperación y acción humanitaria. ¿Relaciones imposibles?	173

A PROBLEM FROM HELL

America and the Age of Genocide

Samantha Power

Basic Books,

Nueva York, 2002,

610 páginas.

THE RESPONSIBILITY TO PROTECT

Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty

International Development

Research Centre,

Ottawa, 2001,

91 páginas.

EEUU ha recurrido al uso de la fuerza para preservar sus intereses en numerosas ocasiones. Sin embargo, cuando se ha tratado de reaccionar para defender comunidades amenazadas de genocidio u otra violación grave y sistemática de los derechos humanos, no ha habido implicación ni por parte del Gobierno estadounidense ni de la comunidad internacional.

En los años noventa, el intervencionismo para la defensa de los derechos humanos ha generado una amplia bibliografía. Dos publicaciones recientes son de gran relevancia. En *A Problem From Hell*, Samantha Power¹ efectúa un exhaustivo estudio sobre la política de EEUU ante el genocidio. Analiza el coste humano y político de la pasividad

y la indiferencia de un Estado que se erige como guardián de la seguridad y protector de los derechos humanos.

Power indica que mientras se creaba el primer Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra para juzgar al kaiser alemán Guillermo II, el secretario de Estado de EEUU, Robert Lansing, indicó que la esencia de la soberanía era la ausencia de responsabilidad. Esta última se hizo evidente en numerosas ocasiones a lo largo de la historia. En 1915, las autoridades turcas iniciaron el proceso de deportación de la población armenia para resolver “el problema armenio” de Turquía. Este país entró en la I Guerra Mundial como aliado de Alemania contra Gran Bretaña, Francia y Rusia. Henry Morgenthau, en ese momento embajador de EEUU en Alemania, se convirtió en el principal valedor de la causa armenia presionando a su país para que interviniera ante las atrocidades que la población estaba sufriendo. Washington apeló a la neutralidad para evitar cualquier responsabilidad sobre los hechos. Alemania, por su parte, en condición de aliada de Turquía, tampoco denunció la masacre. Finalmente, EEUU entró en guerra. Sin embargo, continuó silenciando los acontecimientos al igual que potencias democráticas como Gran Bretaña o Francia, ya que debían preservar sus intereses geopolíticos en una región bajo control de un imperio, el otomano, que se resquebrajaba. La política del silencio supuso la muerte de un millón de armenios. Otro acontecimiento que tuvo

¹ Ver Samantha Power, “EEUU y sus respuestas ante el genocidio”, *Papeles de Cuestiones Internacionales*, verano 2002, N° 78 (N. de la E.).

lugar durante la II Guerra Mundial fue la muerte de más de seis millones de judíos durante el Holocausto, entre ellos unos cincuenta familiares del joven abogado polaco Raphael Lemkin. Éste dedicó su vida a la lucha por el reconocimiento de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Su objetivo era convencer a Europa y EEUU para que frenasen el genocidio alemán sobre la población judía. La Convención fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas, no obstante, Washington no la ratificó hasta pasados cuarenta años por temor a ser juzgado y tener que asumir la responsabilidad moral y política que se derivaba de su ratificación. La cuestión de intervenir con el objeto de garantizar protección humana es controvertida y difícil de resolver. Un siglo después de las palabras de Lansing, la ausencia de responsabilidad continúa. Resulta moral y políticamente intolerable que la comunidad internacional permanezca impasible cuando tienen lugar crímenes como el de genocidio. Alegar el principio de no injerencia como escudo protector tras el cual los derechos humanos puedan ser masiva y sistemáticamente violados con impunidad, como en los casos de Ruanda, Bosnia o Kosovo, resulta contrario al derecho y a los avances morales y filosóficos del siglo XX.

En la última década se han producido múltiples llamadas para intervenir en situaciones de guerra y catástrofes humanitarias. Algunas contaron con respuestas más o menos efectivas; otras no. Sí las hubo en Somalia, Bosnia o Kosovo, pero se ha cuestionado su legitimidad y motivación tanto por lo limitadas que fueron como

por la falta de universalidad y parcialidad en la aplicación. En otros casos, como el de Ruanda, la no intervención y previa retirada de las tropas de mantenimiento de la paz belgas llevó a Kofi Annan a afirmar, "si la intervención humanitaria vulnera la soberanía estatal, ¿cómo respondemos en Ruanda o Srebrenica ante violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos?"

En diciembre de 2001, la Comisión Internacional para la Intervención y Soberanía Estatal, creada en septiembre de 2000 bajo los auspicios del Gobierno canadiense, presentó el informe *The responsibility to protect* en la 56ª Asamblea General de Naciones Unidas. El informe insta a los Estados y al conjunto de la comunidad internacional a que asuman la responsabilidad de proteger y prevenir. En él se plantean las obligaciones inherentes al concepto de soberanía. Los Estados tienen una doble responsabilidad: externa, pues implica el respeto a la soberanía de otros Estados; e interna, es decir, el respeto a la dignidad y derechos básicos de la población dentro del Estado. Las autoridades son responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos y de promover su bienestar en el ámbito estatal. Internacionalmente lo son a través de Naciones Unidas. Desde la creación de la organización internacional, en 1945, se plantean nuevos retos y realidades.

En los últimos 40 años el sistema internacional ha cambiado considerablemente, lo que debe tenerse en cuenta en el debate sobre la intervención para proteger. Junto a los Estados, han surgido nuevos actores que siguen manteniendo su primacía, como

empresas multinacionales, organizaciones internacionales, ONG y actores no estatales ilegales, violentos y armados como algunos grupos que actúan en Estados en guerra. A ello se suman conflictos de carácter intraestatal, que conducen a un proceso de convulsión, de fragmentación y formación postestatal que está transformando el orden internacional. Este tipo de conflictos, cuyo origen puede fijarse en el fin de la Guerra Fría, ha generado una mayor vulnerabilidad de la población civil. La seguridad depende de una amalgama de entidades estatales más o menos estables, Estados frágiles, o en colapso, que no pueden mantener el orden interno ante graves violaciones de derechos humanos, sino que pueden constituir un riesgo para los propios ciudadanos. Esta situación plantea, para los Estados y las sociedades ajenas a los escenarios de crisis, el dilema entre mantenerse al margen, corriendo el riesgo de ser cómplices por omisión de masacres, limpieza étnica o genocidio; o intervenir, aún a riesgo de perder efectivos y no ser capaces de mitigar tales abusos. La Casa Blanca no vio amenazados sus intereses vitales ni durante el genocidio armenio ni durante el Holocausto, razón por la que se mantuvo al margen. Según Power, más allá de la política del silencio, en algunos casos hubo complicidad, como en Camboya e Irak. Entre 1975 y 1979, dos millones de camboyanos fueron eliminados por los Jemeres Rojos liderados por Pol Pot. EEUU bombardeó el país durante la guerra de Vietnam y favoreció el ascenso al poder de los Jemeres Rojos. Finalmente, el presidente Gerald Ford, tras

predecir en marzo de 1975 que la caída de Phnom Penh supondría una masacre para la población camboyana, ordenó la retirada de las tropas estadounidenses. Este hecho no supuso ninguna condena en Naciones Unidas, ni por parte de EEUU ni de Europa. En Irak, Sadam Husein acabó con la vida de 100.000 kurdos mientras Washington acordaba el envío de 500 millones de dólares en concepto de créditos agrícolas. EEUU ya había ratificado la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio cuando se produjeron los hechos, sin embargo, tal como indica Power, prevalecieron los intereses económicos y geopolíticos sobre lo humanitario. En 1991, Washington lideró una coalición internacional para atacar Irak, aunque no como reacción al genocidio contra la población kurda, sino como consecuencia de la invasión de Kuwait. Tras la Guerra del Golfo, EEUU se aseguró el acceso a un petróleo más barato y la estabilidad con Turquía, frenando la entrada de kurdos en el país a través de la creación de zonas de seguridad. En Bosnia, la limpieza étnica promovida por Milosevic acabó con la vida de 200.000 bosnios. Tampoco en este caso se utilizó el término genocidio para evitar la responsabilidad moral y legal. La ONU optó por la creación de zonas de seguridad en espacios habitados por población civil que se encontraban bajo control serbio. El entonces secretario general de Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, propuso al Consejo de Seguridad la necesidad de enviar efectivos para proteger a dicha población. Sin embargo, la fatiga existente en algunos Estados europeos que ya habían desplegado efectivos en Bosnia y la oposición del

Gobierno estadounidense a enviar tropas, supuso que únicamente fuese una fracción de las fuerzas necesarias para proteger las zonas de seguridad. Srebrenica, un área de seguridad controlada por fuerzas de mantenimiento de la paz holandesas, sucumbió al control serbio. La caída de Srebrenica y la matanza que le precedió, marcaron uno de los fracasos más estrepitosos de Naciones Unidas. Kofi Annan, entonces responsable de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, no asumió dicho error al afirmar: "no creo que esto represente un fracaso. Hay que ver si el vaso está medio lleno o está medio vacío. Todavía estamos ofreciendo asistencia a los refugiados, y somos capaces de mantener el conflicto dentro de las fronteras de la antigua Yugoslavia".

Cuando estalló el conflicto en Kosovo, EEUU invirtió 10.000 millones de dólares en la reconstrucción de Bosnia. Tres mil albanos-kosovares fueron víctimas del régimen de Milosevic. La credibilidad de EEUU estaba en juego después de lo acontecido en Bosnia, de modo que, al margen de Naciones Unidas, el Gobierno estadounidense decidió intervenir. Clinton, liderando una coalición internacional en la que se implicó Europa, decidió iniciar la guerra contra Serbia en Kosovo. Los argumentos que se expusieron fueron de carácter humanitario, sin embargo, tal como indica Power, más allá de la voluntad de la comunidad internacional por frenar el genocidio serbio sobre la población albanos-kosovar, se escondía el hecho de que estaba en juego la credibilidad de EEUU, la fuerte inversión efectuada en Bosnia y el proceso de paz iniciado que peligraba con la

crisis de Kosovo.

En el caso de la matanza de Ruanda, Washington recurrió al "no sabíamos", cuando según un oficial de EEUU, marines contaban cómo en Kigali había tantos cuerpos extendidos que se podía caminar de uno a otro sin tocar el suelo. En 1993 la CIA elaboró un informe en el que revelaba que 40 millones de toneladas de armas se transferían de Polonia a Ruanda vía Bélgica. El número de víctimas se elevó a 800.000. De nada sirvieron las advertencias de Romeo Dallaire, comandante de las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en Ruanda, que pidió la intervención meses antes del genocidio. Lo más destacable no fue que no hubiese respuesta por parte del Gobierno estadounidense, sino que ni siquiera se debatió una posible intervención. Finalmente, Francia decidió intervenir con la llamada Operación *Turquoise*, aunque tal como indica Samantha Power, fue el país menos apropiado debido a los vínculos existentes entre el Gobierno francés y el régimen genocida hutu.

Tal como relata la autora, la pasividad de EEUU y de la comunidad internacional, tanto en la prevención como reacción ante violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, ha supuesto un fuerte coste humano. El informe *The responsibility to protect* se fundamenta en que los Estados soberanos tienen la obligación jurídica y moral de proteger a los ciudadanos en caso de catástrofe, genocidio, limpieza étnica o hambruna. Si dicho Estado resulta incapaz o los gobernantes no están dispuestos a ofrecer dicha protección, la responsabilidad recae en la comunidad internacional. Soberanía estatal implica

responsabilidad de proteger a la población que emana del mismo Estado. Cuando la población sufre serio daño como consecuencia de una guerra interna, insurgencia, represión, y el Estado es incapaz o no quiere hacer frente a esas situaciones, el principio de no intervención se supedita, según los autores del informe, a la responsabilidad internacional de proteger.

De dicha responsabilidad se deriva la necesidad de garantizar seguridad a la población en caso de riesgo sobre sus vidas. El concepto de seguridad, al igual que el de soberanía, también se ha ampliado desde la aprobación de la Carta de la ONU. La seguridad humana conlleva seguridad física, económica, social, respeto a la dignidad y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Se trata de reconocer un nuevo concepto de seguridad que debe incluir tanto a Estados como a personas.

El informe se orienta hacia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en calidad de responsable del mantenimiento de la paz y seguridad internacional, es decir, como autoridad legítima para decidir la intervención. Sin embargo, el Consejo de Seguridad ha estado sujeto durante la Guerra Fría a presiones y a la toma de decisiones adoptando dobles raseros en sus decisiones debido al veto ejercido por algunos de sus cinco miembros permanentes y sus intereses geopolíticos.

En este sentido, el informe propone un "código de conducta" entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad para advertir o frenar las crisis humanitarias. Con ello se potencia la responsabilidad de proteger del Consejo de Seguridad como órgano universal dedicado a garantizar la paz y promover el

bienestar.

Power cuenta que el 11 de abril de 1994 se ordenó a las tropas de mantenimiento de la paz belgas abandonar Ruanda. Tras sus *jeeps* un grupo de ruandeses les siguieron al grito de "¡no nos abandonéis!". Cuando los efectivos europeos cruzaron el puente, llegó un grupo de milicias hutus y prácticamente la totalidad de las 2000 personas que allí se congregaron fueron asesinadas. No hubo marcha atrás.

Tras los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, la cuestión moral está experimentando cambios de gran magnitud en el ámbito de la política internacional. La acción multilateral para garantizar la protección de las víctimas, está cediendo a favor del unilateralismo y la clásica *raison d'État*. Los argumentos morales y jurídicos para justificar intervenciones con carácter humanitario se diluyen a pesar de la lectura crítica de la historia efectuada por Samantha Power, o la doble responsabilidad de proteger o prevenir que proponen los autores del informe. Las prioridades de los grandes Estados están lejos de asumir el principio de mínima corresponsabilidad que tiene toda la humanidad, más allá de las fronteras geográficas, de salvaguardar la dignidad del ser humano.

María José Salvador Rubert
Master Internacional en Estudios
para la Paz y el Desarrollo,
Cátedra UNESCO de Filosofía
para la paz, Universitat Jaume I
(Castellón)

**POLÍTICAS SOCIALES Y
ESTADO DE BIENESTAR
EN ESPAÑA: LAS
MIGRACIONES.
INFORME 2002**

Claudia Clavijo y Mariano Aguirre (Eds.)
Fundación Hogar del Empleado (FUHEM),
Madrid, 2002,
382 páginas.

**ESPAÑA ANTE EL
DESAFÍO
MULTICULTURAL**

Luis Seguí
Siglo Veintiuno de España,
Madrid, 2002,
172 páginas.

Cuando en España ya se plantean en las discusiones cotidianas de los ciudadanos comunes los problemas de la convivencia de culturas, y cuando estos problemas llegan a saltar a las páginas de sucesos de la prensa en forma de rebrotes violentos de xenofobia y racismo, dos libros como los aquí reseñados cobran excepcional interés. Con distintos planteamientos, ambos tratan, como señala Mariano Aguirre en la presentación del primero de ellos, de “la relación entre el Estado de bienestar y las migraciones en España”. Porque, al fin y al cabo, es bajo el paraguas de ese Estado —cada vez más atacado y vulnerable— donde se refugian, o intentan hacerlo, nativos e inmigrantes, autóctonos y foráneos, y donde chocan, en conflicto cruento o incruento, a la hora de proveer a sus más esenciales necesidades: trabajo, vivienda, sanidad y

protección de los más elementales derechos humanos, entre otras. Sobre la dinámica de este enfrentamiento versan ampliamente los dos libros. El editado por la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM) es un texto pluridisciplinar, en el que un variado cuadro de expertos, abordando la interesante articulación de las materias en que se fracciona el título principal, presenta al lector una amplia gama de sugerencias desde muy diversos puntos de vista sobre las complejas cuestiones que se plantean en cada capítulo. La obra posee méritos suficientes para convertirse en un libro de referencia imprescindible para cualquier persona que tenga que trabajar sobre la cuestión migratoria, no solo en España sino en cualquier otro ámbito geográfico. Un amplio apéndice estadístico es el colofón del libro. Es una lástima que un volumen tan completo y elaborado carezca de índice temático, lo que hubiera facilitado mucho su uso como el valioso manual de consulta que es. Por su parte, el libro de Luis Seguí es un atractivo y ágil opúsculo, que salta desenvueltamente sobre asuntos muy distintos, con estilo algo más periodístico que académico. A modo de un árbol de profusa ramificación, en él se tocan cuestiones no siempre claramente encadenadas y que podrían producir confusión en el lector que intenta comprender los elementos esenciales en los que se basa la línea de argumentación del autor. En un caso concreto, como sucede al juzgar la historia española de las migraciones, el uso casi exclusivo de una sola fuente —la concisa *Historia de España* de Pierre Vilar— limita algo las perspectivas del autor y

las hace discutibles. Hay que dejar que el lector, entresacando aquí y allá en los dos interesantes libros que se mencionan, vaya creando sus propias opiniones sobre un asunto de intensa actualidad y cuyo futuro se presenta, más que crítico, grave. Pero quien firma estas líneas se siente obligado, desde su personal punto de vista y responsabilidad intelectual, a alertarle frente a algunas interpretaciones peligrosas, o por lo menos profundamente discutibles, que apuntan en algunas colaboraciones del primero de los libros reseñados. Permita el lector que comience introduciendo un elemento puramente anecdótico. Hace ya algunos años, en un encuentro celebrado bajo el ámbito de una universidad española de verano, escuché a un prestigioso investigador académico y amigo personal, muy activo en los problemas de inserción de inmigrantes, un elaborado panegírico de la situación de la mujer en el mundo islámico. Basaba su argumentación, en último término, en un razonamiento que, en resumen, se construía así: "Mejor están las mujeres musulmanas, protegidas del vicio y el pecado en el seno del hogar y por las costumbres sociales, que las españolas o europeas, muchas de las cuales son arrastradas a la prostitución por falta de análoga protección". Mi sorpresa no tuvo límites y me costó encontrar argumentos para replicar con presteza a tan sorprendente sofisma, que no podía imaginar proveniente de alguien que se reclamaba adscrito al pensamiento progresista que lucha incansable por la paz y los derechos humanos. Ese modo de razonar, vinculado a la corriente de pensamiento que

podría llamarse "multiculturalista" y de la que Charles Taylor parece ser exponente destacado, tiende a considerar que todas las culturas están en pie de igualdad; que los valores que propugnan tienen idéntica legitimidad y que es equivalente su respeto por los derechos humanos. En el primero de los volúmenes comentados, uno de los colaboradores, en vez de referirse a la prostitución contra la que el Islam protege a la mujer —como hacía el investigador antes mencionado— recurre a la "violencia doméstica" y la "esclavitud" como ejemplo de lo mismo. ¿Cómo va a ser mejor nuestra cultura, en lo relativo a los derechos humanos de la mujer, si en ella hay violencia doméstica y esclavitud?, se pregunta el autor con análoga intención. Para huir de una posición etnocéntrica (la de la propia cultura del autor), y mostrar con ello su comprensión profunda de los demás, su empatía hacia "el otro", se pretende dejar sentado que las evidentes limitaciones que forzosamente impone a la mujer el código religioso islámico y la brutal coacción de su libertad personal —a causa de unas normas de origen supranatural que administra una teocracia básicamente masculina— son un beneficio para las mujeres. Y que deberían estar agradecidas por ello. Extremando el argumento, no se sabe por qué quienes así piensan no se convierten en apóstoles de la religión mahometana, si tantas ventajas presenta para la mitad femenina del género humano, frente al deterioro al que la libertad democrática la expone. No se debería ignorar, aun en aras de un deseable interculturalismo,

que hay culturas más refractarias que otras a la democracia. Seguí lo expone en su libro con meridiana claridad al advertir que es necesario considerar la indudable legitimidad de quienes exigen “el respeto de algunos de sus usos y costumbres por parte del Estado. De algunos, no de todos; no de aquellos que repugnan derechos humanos fundamentales, que son una conquista de la civilización occidental y de los que no se puede abdicar sin caer en la trampa del ‘falso dilema entre vigencia universal de los derechos humanos y etnocentrismo’” (segundas comillas de AP).

Tampoco convendría pasar por alto que existen culturas de esencia teocrática, impermeables a cualquier idea democrática y de respeto a los derechos humanos (tal como éstos han sido universalmente definidos y aceptados) y que entre ellas destaca con luz propia la cultura islámica. Hay que tener el valor de reconocerlo, y si ello supone una carga adicional y un nuevo obstáculo para los derechos legítimos de los inmigrantes de esa cultura, mejor es saberlo desde el principio y encontrar modos de compensar lo que es una carencia y un defecto desde la misma base de partida.

Esta idea se expresaría esquemáticamente así: un inmigrante musulmán que quiera conservar todos sus rasgos culturales de origen tendrá dificultades, graves y quizá insuperables, para integrarse en un país de acogida de otra cultura, sobre todo de naturaleza laica. Porque su cultura está regulada desde el más allá por un dios, y administrada por sus intérpretes en la tierra, quienes en unos textos pretendidamente sagrados

encuentran resueltos todos los problemas políticos, económicos y sociales. Una cultura, además, que intenta imponerse sobre las demás, que impide a cualquiera de sus miembros abandonar su religión, bajo severísimas penas, y que, como seña más distintiva, reduce a una condición humillante a esa mitad de la humanidad que son las mujeres. Esto último no es solo un problema de simple interpretación de unos textos religiosos, que algunos consideran muy benéficos, sino que forma parte inherente de esa cultura, de una manera que, al menos por ahora, parece inamovible.

En otra parte del libro citado se lee esto: “Mientras la violencia desplegada por los varones ibéricos contra sus mujeres se presenta como una anomalía o desviación, la violencia contra las mujeres dentro de las comunidades inmigrantes (principalmente musulmanas) se define como inherente a su sistema cultural”. Tampoco esta razón puede darse por válida. Es fruto de una confusión entre dos conceptos coincidentes parcialmente pero no idénticos: por un lado, un sistema cultural; por otro, una religión que lo domina de modo implacable. No hay separación entre ambos, sino simbiosis y refuerzo mutuo. Este hecho enturbia casi irremediamente toda capacidad crítica. ¿Quién puede criticar, en un ámbito político, las normas que emanan de una divinidad?

Y lo cierto es que, mientras en esta Iberia denostada en el párrafo citado las mujeres —y también muchos hombres— se organizan para acabar con tal anomalía, que no encuentra puntos de apoyo ni en la legislación civil ni en la religión, en el mundo islámico un poder ultraterrestre exige a la

mujer que mantenga su condición de infrapersona. No es correcto, pues, comparar ambas situaciones.

En resumen, el lector habría de considerar que hay culturas mejores y peores, al menos cuando se las contrasta con el universal patrón de su respeto por los derechos humanos. Esto no es una muestra de maniqueísmo, sino sencilla constatación de la realidad. Hay culturas que pueden ser democráticas, es decir, reguladas por el propio pueblo que las vive, y otras que son irremediablemente teocráticas, regidas por un ser irresponsable que ante nadie ni nada tiene la obligación de rendir cuentas. Hecha esta salvedad, el lector encontrará en los dos textos aquí comentados un amplio caudal de hechos, ideas, sugerencias y propuestas que indudablemente le enriquecerán personalmente. De la lectura de ambos libros parece confirmarse, también, la hipótesis de que, entre las diversas teorías con las que se afronta el problema de la convivencia de las culturas, la menos conflictiva es la que recurre a la acción del Estado de bienestar, a través de sus servicios sociales. De este modo, cabe encontrar el punto de equilibrio entre una integración que anula la cultura original del inmigrante (la corriente "integracionista" propugnada por Sartori, entre otros) y un multiculturalismo que se revela inviable, tanto por la imposibilidad de la convivencia básica de culturas distintas e incompatibles (en contra de la idea defendida por Taylor) como por una coexistencia aislada y segregada de culturas encerradas en sí mismas (el modelo de Huntington). Pero la amarga constatación de que la globalización acelerada y el culto

enloquecido a las leyes del mercado y del libre comercio actúan como cañonazos en plena línea de flotación del Estado de bienestar, abre unas perspectivas muy poco optimistas para la resolución del arduo problema planteado en ambos libros.

Alberto Piris

Colaborador del Centro de Investigación para la Paz (CIP)

**SEGURIDAD HUMANA,
PREVENCIÓN DE
CONFLICTOS Y PAZ**

Francisco Rojas Aravena y
Moufida Goucha (Eds.),
UNESCO, FLACSO Chile,
Santiago de Chile, 2002,
414 páginas.

Seguridad humana, prevención de conflictos y paz es el resultado del seminario internacional "Paz, Seguridad Humana y Prevención de Conflictos en América Latina y el Caribe", promovido y organizado por UNESCO y FLACSO Chile, y realizado en Santiago el 26 y 27 de noviembre de 2001. Este evento forma parte de una serie de iniciativas regionales realizadas por la red SECURIPAX de UNESCO para la promoción de la seguridad humana y la paz.

En él se presentaron diversas e enriquecedoras aportaciones sobre las nuevas perspectivas de la seguridad humana en América Latina y el Caribe, así como contribuciones conceptuales respecto a la seguridad común para la región, considerada a inicios del siglo XXI como un desafío esencial para las organizaciones intergubernamentales en general, y para cada uno de los Estados en particular. Para el profesor Francisco Rojas Aravena, "este es un importante cambio en las relaciones internacionales y en la primacía que poseen los diferentes actores en sus interacciones. El momento histórico ha dejado en evidencia la necesidad de resolver los problemas de millones de seres humanos, en el ámbito político, económico, social, sanitario, personal y cultural".

Las nuevas tecnologías, las comunicaciones inmediatas, las transacciones financieras, las inversiones y la movilidad humana (migraciones), han dejado de tener control estatal y, por tanto, se deben crear nuevos mecanismos de acción, entre otros el de la cooperación, como concepto principal de la seguridad, sin dejar a un lado la asociación y la negociación. Estos factores han conducido a una reformulación del concepto de seguridad, que no se limita a la defensa del territorio, ampliado a la protección de las comunidades y los individuos. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) basa su análisis de la seguridad humana en la libertad respecto del miedo y la libertad respecto a la necesidad. El libro recoge visiones globales sobre la seguridad humana. La primera, del profesor Jorge Nef, sitúa el centro de interés en tres áreas problemáticas: "la globalización, la transformación de la naturaleza del Estado contemporáneo y la crisis del desarrollo". Su objetivo es considerar una serie de planteamientos para tratar de explicar el origen y desarrollo del orden socioeconómico y político vigente, desde un enfoque que conjugue percepciones estructurales e históricas, micro y macro analíticas, sobre la base de casos concretos vistos en el plano interno y externo. La propuesta del profesor Nef gira sobre dos ejes: seguridad humana, es decir, la creación y mantenimiento de circunstancias que permitan la reducción de riesgos, incertidumbres y contingencias negativas, garantizando "la dignidad Humana" o "dignidad de las personas"; y, vulnerabilidad mutua, considerada como la

interconexión de disfunciones que han propiciado a nivel global desequilibrio y entropía. Durante la Guerra Fría la bipolaridad condujo a promover el concepto de seguridad nacional frente a la insurgencia, enemigo externo de la potencia dominante e interno de los países periféricos. Esta teoría, insuficiente para mantener el statu quo, y sin perder su esencia, fue paulatinamente reemplazada por nuevos conceptos que se han traducido en el capitalismo transnacional, sustentado por la “nueva” economía política internacional de corte neoliberal. Ahora, el conflicto se da entre un mundo aparentemente seguro, que en cualquier latitud accede a los beneficios de la modernidad y la globalización, y el mundo de la periferia. “En la práctica, la seguridad nacional en América Latina fue una doctrina justificatoria de los intereses hegemónicos (políticos y económicos) del centro y de los sectores locales que instrumentalizaban tal seguridad”, afirma el autor. La segunda visión, de Patricio Silva, señala la necesidad de ampliar el concepto de seguridad humana, avanzar en sus contenidos y alcances y romper el escepticismo y a veces abierto rechazo que aún produce este concepto. Desde el informe del PNUD, en 1994, este se ha dimensionado en el terreno del empleo, el ingreso, la salud, el medio ambiente, la seguridad frente al delito y la violencia común. Pareciera que el campo de acción y aplicación la hiciera inoperante por la amplitud del mismo; pero, debido al acuerdo sobre la importancia que tiene esta nueva visión, se han agregado siete libertades y las correspondientes

interpretaciones referidas al acceso a los elementos básicos para la vida, la protección del individuo del crimen y terrorismo, enfermedades sociales, corrupción política, migración masiva, desarrollo político, económico y democrático, sostenibilidad ambiental y esfuerzos para reducir la contaminación. Patricio Silva muestra su preocupación por los cambios introducidos en los últimos años, que se identifican más con el Consenso de Washington, estimulando la adopción de políticas librecambistas. La tercera visión, del profesor Hal Klepak, intenta mostrar cómo EEUU y Canadá han considerado el concepto de seguridad humana en términos de su impacto sobre la paz y prevención de conflictos en América Latina y el Caribe, visión que se ha visto afectada desde el 11 de septiembre. La percepción en cada uno de estos países sobre la seguridad humana es diferente, con abierto rechazo de EEUU en los primeros años; siendo un elemento importante en la política exterior y de defensa de Canadá, “muchos de los elementos originales del pensamiento canadiense acerca de la seguridad internacional saltaron a la palestra en los años cincuenta, sesenta, setenta y ochenta, en los campos del control de armas y desarme”. En los años ochenta, en Canadá se formula “La seguridad cooperativa”, que consiste en comprometer a los adversarios, incorporar a la seguridad elementos no militares, desarrollo gradual de instituciones multilaterales y valorar la seguridad regional, permitiendo el multilateralismo, esto es, la seguridad común o compartida. Los pensadores estadounidenses optaron por no creer que, el impulso de la seguridad humana

fuera lógico y aceptable. La seguridad humana era algo ilusorio como constructor para la acción internacional, consideraban que la comunidad internacional no estaba preparada para impulsar el programa de desarrollo internacional que dichas ideas requerían. Se sugirió, entonces, profundizar antes de adoptarlo. Con el tiempo, EEUU asumió la pertinencia de algunos de los principios de este enfoque. Después del 11 de septiembre, de la guerra en Afganistán y de las tensiones bélicas en Irak que pueden conducir a la guerra unilateral de EEUU y sus aliados más próximos, falta ver si el intercambio de ideas permite un acercamiento que dé nuevo rumbo al ejercicio de la seguridad humana.

La cuarta visión, de la investigadora Claudia F. Fuentes, relata el devenir de "la Red de seguridad humana", partiendo del acuerdo bilateral entre Canadá y Noruega, suscrito en la isla de Lysoen en 1998, cuyo objetivo era conformar una asociación de países con el propósito de promover un nuevo concepto de seguridad centrado en las personas.

Actualmente la Red está compuesta por trece países: Austria, Canadá, Chile, Grecia, Irlanda, Jordania, Malí, Países Bajos, Noruega, Eslovenia, Suráfrica, Suiza y Tailandia. A las reuniones de la Declaración de Lysoen realizadas han sido invitados a participar representantes de Naciones Unidas, académicos y ONG de distintos continentes, a fin de establecer un concepto y acciones conjuntas en torno a la seguridad humana. Así, se aspira a construir un pensamiento común, que sitúe a la persona humana y su protección como eje articulador

de la paz internacional. "Un mundo más humano donde las personas puedan vivir con seguridad y dignidad, libres del temor y la necesidad, y con igualdad de oportunidades para desarrollar sus capacidades humanas al máximo", afirma la autora.

Según el profesor Hugo Palma, el concepto clásico de seguridad de los Estados ha ido incluyendo al ser humano como centro de una misma seguridad, democrática, cooperativa. "Los estados más progresistas pasan a considerar la cooperación y la integración como elementos centrales de sus sistemas de seguridad", afirma. En América Latina los conceptos seguridad y defensa están poco desarrollados, lo que requiere de una mayor atención en la región, donde las fuerzas armadas aparecen como instituciones muy sólidas, que por su pasado deben ser reconducidas democráticamente. La democracia debe ser preservada y consolidada, por ser generadora de paz y seguridad, conceptos que, asumidos por las fuerzas armadas, le posibilitan el respeto y el respaldo de la sociedad. En el contexto interamericano, la paz externa, la ausencia de amenazas extra continentales y la generalización de gobiernos democráticos, ha llevado a considerar el significado de la seguridad sobre la base de la simetría existente, con excepción de EEUU que tiene intereses y compromisos estratégicos globales. En algunos círculos surgió una nueva visión al término de la Guerra Fría, incluyendo en la seguridad las necesidades y criterios que son objeto de preocupación para la mayoría de los Estados: la pobreza, los derechos civiles y económicos, los derechos humanos, el derecho

internacional humanitario, el desarrollo socioeconómico, etc. La Comisión de Seguridad Hemisférica, el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR), la Junta y el Colegio Interamericano de Defensa obedecieron a realidades que han sido superadas, siendo otras las prioridades y necesidades.

El escenario propicio para el efecto sería la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica, prevista para 2004, donde se analizarán medidas para crear o profundizar el fomento de la confianza y la seguridad.

“Un sistema de seguridad hemisférica democrática y cooperativa que aspire a consolidar la paz, debe centrarse en la cooperación y la integración sin amenazar la soberanía e independencia de ningún Estado. Incluirá medidas de confianza mutua, control y limitación de armamentos, desarme, institucionalidad de la seguridad hemisférica, adecuada participación de los EEUU y tratamiento consecuente en la OEA y en Naciones Unidas. Consecuentemente, no se trata de crear una alianza militar ni un sistema de defensa centrado en torno a la posibilidad del empleo de la fuerza militar, sino un sistema de seguridad basado en la cooperación”, confirma Palma. Luis Guillermo Solís, profesor de Historia y Ciencia Política en Costa Rica, señala que en Centroamérica las tres últimas décadas han estado marcadas por un profundo cambio, dando lugar a un nuevo orden regional construido en torno a la democracia, con la finalidad de alcanzar el desarrollo e impartir justicia para el mayor número de sus habitantes. Estima que los acuerdos de Esquipulas II permitieron el asentamiento de la

paz y hacen posible la imprescindible integración de la región sobre la base de la experiencia que constituyó el Mercado Común Centro Americano de los años sesenta. Solís reconoce que las nuevas democracias centroamericanas han sido incapaces de consolidar las instituciones democráticas para garantizar un efectivo Estado de Derecho, y de otro lado, la integración regional ha venido diluyéndose lentamente. Con preocupación, observa el resurgimiento de conflictos interestatales de carácter limítrofe.

En septiembre de 2001, los jefes de Estado y el representante del primer ministro de Belice, acordaron luchar contra el terrorismo mediante el reforzamiento de las fronteras y la mutua colaboración, dentro del ámbito del TIAR.

Pero la seguridad humana en la región centroamericana exige de los Gobiernos esfuerzos para contrarrestar la pobreza y la exclusión social, el abandono de las tendencias represivas para “resolver” las inquietudes sociales e impulsar políticas de cooperación y asociacionismo regional, robusteciendo el Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Arlene B. Tickner y Ann C. Mason reconocen en primera instancia el alto perfil internacional del conflicto colombiano, entrecruzado con la seguridad internacional y regional. Respecto a la seguridad humana, resaltan los pasos dados hacia la creación del Tribunal Penal Internacional como signo de reconocimiento internacional de los individuos y comunidades humanas.

Estiman que la dinámica de la seguridad en la región andina se

manifiesta de dos maneras: 1) por las características compartidas por los Estados y sociedades regionales que determinan las formas en que interactúan; 2) y, los procesos que se extienden por la región, con independencia de los límites fronterizos.

Las profesoras resumen los factores más relevantes de "la crisis" que afecta la región:

- La manifiesta debilidad de los gobiernos, pérdida de consolidación democrática, crisis y falta de credibilidad de las instituciones políticas y de los partidos tradicionales, lo que ha conducido al debilitamiento del Estado.
- La corrupción y las prácticas institucionalizadas tan extendidas en la contratación y adjudicación de bienes y servicios en lo público y en lo privado, que cuentan con la activa participación del capital nacional e internacional, legal e ilegal, que en ocasiones representa formas delincuenciales internacionales (tráfico).
- Recesión, crisis económica identifican la región, que con excepción de Perú, presentan tasas anuales de crecimiento por debajo de la media latinoamericana.
- Presencia de actores transnacionales de carácter humanitario ante la creciente violación del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, y la presencia de organismos de crédito internacional que imponen a la región ajustes estructurales (OMC, Banco Mundial y FMI), que reducen la autonomía de los Estados para hacer frente a los problemas internos.
- Fracaso de la política antidrogas de EEUU por hacer énfasis en la fumigación y erradicación de los cultivos con medidas de fuerza, los cultivos no han sido erradicados, simplemente han cambiado de ubicación. Ahora, los recursos utilizados para el efecto, en su mayoría donados a las Fuerzas Armadas, serán usados en la lucha contrainsurgente. Al tráfico de drogas se suma el tráfico de armas y el creciente y muy significativo tráfico de personas, que sin lugar a dudas, están sujetos al control del gran capital y a los vaivenes de la oferta y la demanda.

El concepto de seguridad para Centroamérica es el resultado de los esfuerzos realizados para la integración, reflejados en Esquipulas, como reconocimiento de la inoperancia de los marcos tradicionales de seguridad. El marco general se expresa en el anhelo por hacer de la región un espacio de *libertad, paz, democracia y desarrollo*. Surge así un nuevo modelo de seguridad, el de la seguridad democrática, fundado en el respeto, promoción y tutela de los derechos humanos, garantizando la seguridad de los Estados centroamericanos y de sus habitantes.

En el caso de Guatemala, se añade el respeto a la multiculturalidad. La finalidad es el establecimiento de un nuevo referente conceptual para la acción de la seguridad de Estados democráticos, sustentado en dos principios básicos: frente a la seguridad del Estado prima la seguridad de las personas; y, la seguridad no está limitada, o simplemente referida a las Fuerzas Armadas o policiales, implica la incorporación de la participación ciudadana en el

ámbito político, económico y social, es decir, la participación popular.

Para Juan Gabriel Tokatlian, “la región andina se ha convertido desde la década de 1990 en el mayor foco de inestabilidad del continente”. La inestabilidad está representada en lo político, con los convulsos cambios de presidentes y el carácter de sus gobiernos, unos claramente autoritarios, caso Fujimori, otros por su explosiva situación como la de Venezuela, Colombia o Bolivia. En lo militar marca la pauta el enfrentamiento limítrofe entre Ecuador y Perú y la grave tensión entre Colombia y Venezuela.

Colombia se dirige hacia el colapso por la quiebra de las instituciones políticas establecidas, la pérdida de legitimidad del Estado y las contradicciones dentro del aparato armado. Es decir, un Estado sin capacidad para proteger y dar seguridad a sus ciudadanos.

La enorme degradación medioambiental de la zona amazónica que comparte la región con Brasil y los altos índices de pobreza e inseguridad son reflejo del creciente desempleo y la marginalidad de amplias capas de la población en toda la región. El mundo es cada vez más dependiente de EEUU en lo material y político. Mientras cada vez se distancia más del Cono Sur en lo cultural y diplomático, su esfera de influencia se desplaza hacia el Caribe y se concentra con más fuerza en los Andes.

“El efecto combinado de las políticas de Washington hacia Bogotá y de la situación colombiana y andina sobre el sistema interamericano es notorio: un futuro con creciente guerra y abundantes drogas sólo ocasionará más violación de los

derechos humanos, más desplazados, más militarización, más degradación ambiental, más corrupción y más narcotráfico, así como menos inversión, menos estabilidad, menos gobernabilidad, menos seguridad y menos crecimiento en Sudamérica. “El país hoy merece y necesita el tipo de la solidaridad política hacia Centroamérica que prevaleció en Contadora y no la de la soberbia militar que desplegó la Organización del Tratado del Atlántico Norte en Kosovo ni de elucubraciones que lleven a invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR y mucho menos la probabilidad de que los sectores más recalcitrantes en Washington insten un escenario adicional de la “guerra contra el terrorismo” en América del Sur. Eso sólo augura más inseguridad humana en Colombia y menos seguridad regional en el área”, afirma Tokatlian.

El sociólogo Juan Ramón Quintana describe las condiciones de pobreza en las que vive Bolivia y los factores que impiden avanzar hacia una solución.

Constata que sin existir un pacto social que le dé legitimidad al Estado, éste carecerá de una política seria y realista para afrontar y resolver la extendida pobreza. La crisis en la seguridad ciudadana y la pérdida del Estado boliviano del monopolio legítimo de la fuerza pública, le incapacita para controlar y reprimir a la delincuencia.

Analiza tres factores para abordar las causas de la pobreza: 1) las condiciones geofísicas, 2) la organización social 3) y, las políticas económicas. El modelo de los años ochenta, agotado y en crisis por el insuficiente desarrollo económico y la desigual distribución en el ingreso y en las

oportunidades, tuvo su mejor expresión en la catastrófica administración del presidente Hugo Banzer (1997 - 2001) que frustró los planes de lucha contra la pobreza y se entró en un proceso caracterizado por la crisis de gobernabilidad, corrupción e ineptitud de la burocracia estatal. En 2001, el Gobierno presentó a la cooperación internacional una propuesta dirigida a reducir drásticamente el nivel y servicio de la deuda externa, en función de aminorar los índices de pobreza. Los acuerdos logrados permitirán invertir más de 1.500 millones de dólares en los próximos quince años y la generación de políticas dirigidas a obtener el equilibrio fiscal, la mejora de la producción y los mercados, luchar contra la corrupción y el fortalecimiento de los poderes públicos, en especial, el poder judicial. Gran parte de estos logros, se deben a las movilizaciones campesinas que han implementado nuevos códigos de lucha, desnudando la debilidad del Estado y rompiendo con la tradición de mediación y clientelismo político. Ahora los campesinos hablan directamente con los funcionarios y entes estatales que toman las decisiones, habiéndose introducido el signo de la mediación y el control social. La estrategia popular se mantiene y la resistencia a las tradicionales formas de hacer política se expresa en la toma y bloqueo de las carreteras, tratando de legitimar e impulsar el cambio con base en el diálogo y el consenso, generar confianzas y establecer nuevas bases para el establecimiento y construcción de la seguridad ciudadana. El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Raúl Benítez Manaut, se refiere al prolongado proceso

de crisis social y política en Chiapas. Desde la época de la colonia, la estructura social vigente en Chiapas ha sufrido pocos cambios. La fractura entre los bajos niveles de vida y de ingreso permitieron que lentamente se acumularan reivindicaciones culturales y la exigencia del respeto a la diferencia expresado en la aceptación del multiculturalismo y el reconocimiento constitucional de las comunidades indígenas, que rompa definitivamente con el régimen de dominación semifeudal imperante en la región. Las estadísticas describen el nivel de vida de la población de Chiapas, muy parecida al de Centroamérica en la década de 1970, cuando surgieron los movimientos armados. La crisis de Chiapas también corresponde a la desigual distribución de la riqueza, que corresponde a un modelo de dominación política, social y económica, en el que se rompieron las relaciones entre los sectores dominantes chiapanecos, apoyados por el Estado mexicano, y las comunidades indígenas, tradicionalmente excluidas. Esto condujo al surgimiento en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional -EZLN-. Para recuperar el tejido social, es indispensable la creación de nuevos mecanismos de cohesión social y política de las fuerzas en conflicto. Desde 1994, el Gobierno mexicano estableció tres medidas que constituyen el eje de su política contrainsurgente: 1) "Aproximación indirecta", basada en políticas sociales, tendientes a obtener el aislamiento. Hasta el momento tal pretensión no ha sido exitosa. 2) "Despliegue militar de saturación", con la finalidad de disuadir y hacer creer que es

inviabile la estrategia militar del Frente por la gran diferencia en la correlación de fuerzas. 3) “El diálogo con la insurgencia” buscando el desarme y la inserción en la vida política, estrategia que no ha sido exitosa. El diálogo y la negociación se encuentran empantanados en tanto la pretensión de lograr una reforma constitucional. El cambio en las relaciones de producción y sociopolíticas no ha sido posible y las posibilidades al respecto son escasas por falta de voluntad del Gobierno.

La ex ministra de Seguridad Pública de Costa Rica, Laura Chinchilla M. explica desde la óptica estadística - criminológica el incremento delincuencia contra los bienes, la integridad y la vida de los ciudadanos de Centroamérica, en particular de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

En la etapa postconflicto, dichos ataques han comportado movimientos semejantes a la época de la confrontación armada, ahora bajo formas criminales organizadas. La autora sólo resalta como causa la falta de escolaridad y la necesidad de actuar al respecto, dejando de lado factores (bajos niveles de vida, deterioro creciente de las condiciones socioeconómicas, exclusión social y política) que con un somero análisis nos retrotraerían a los años en que surgieron los movimientos insurgentes.

Una visión semejante es la de Alejandra V. Liriano en el contexto caribeño, quien reafirma que las condiciones de pobreza no son generadoras de levantamientos sociales, pero existe mayor probabilidad de propiciarse tal evento en la medida que crece la inequidad. Jorge Da Silva resalta que el

concepto de seguridad humana no puede estar basado en el poder militar y económico, vía fallida y promotora de violaciones globales inestimables, sino debe poner al ser humano, filosofía humanística, en el centro de las preocupaciones. Es este concepto de la seguridad humana el que debe aplicarse en la seguridad pública, para el mantenimiento del orden público, la lucha contra el crimen y la violencia urbana. “La seguridad pública en América Latina debe fundarse en los derechos humanos aplicados en lo local, donde lamentablemente aún se persigue el reconocimiento y cabal aplicación de los derechos humanos de primera generación. Se debe abandonar la idea del enemigo interno, que visualiza la ajeneidad del ser humano olvidando que es el centro por antonomasia”, afirma Da Silva. A manera de conclusión, Juan Anibal Barría manifiesta: “La ‘aldea global’, como se denomina a nuestro mundo, está marcada por fenómenos positivos como la internacionalización de las economías; la expansión de la democracia como parámetro de legitimación política, la mayor conciencia sobre el valor de los derechos y libertades fundamentales, el impacto de las nuevas tecnologías de la información, que acortan distancias y transforman las formas de comunicarnos, por mencionar tan sólo las “luces” más divulgadas y aplaudidas. Empero, la globalización acusa un “lado oscuro”, una faz sombría, expresada en, por ejemplo, extrema pobreza, terrorismo, epidemias, brecha digital, crimen transnacional organizado, crisis financiera o degradación ambiental. Estamos así frente a males que no reconocen fronteras y que afectan directamente a las

personas. Se perciben como “otras” causas de inseguridad. Los problemas más serios de nuestros días, del carácter que sean, no se ven ni se sienten como algo lejano. Los peligros de nuestra época, como advertimos, no están circunscritos a un área geográfica determinada, ya que sus secuelas se expanden fácil y rápidamente al resto del planeta”.

Hernando Perdomo Blanco
Colaborador del Centro de
Investigación para la Paz (CIP)

ÁFRICA SUBSAHARIANA ANTE EL NUEVO MILENIO

Mbuyi Kabunda (coord.)
Ediciones Pirámide,
Madrid, 2002,
247 páginas.

Las obras colectivas agrupan a menudo artículos desiguales, lo que en ocasiones merma su atractivo global. Pero desde luego no es éste el caso. Por el contrario, la disparidad de los escritos incluidos en este libro permite tanto el análisis individual de sus contenidos, que ilustran de manera singular las diferentes perspectivas desde las que se contempla África Subsahariana, como el de la estructura conjunta, también susceptible de interpretación.

La obra está dividida bajo tres grandes epígrafes —Aspectos internos y relaciones interafricanas, Crisis y conflictos en Africa, relaciones Europa (España-Canarias) y África— más un cuarto en el que se describe el Plan de Acción para Africa, así como el encuentro cuyas ponencias conforman África Subsahariana ante el nuevo milenio.

Y como si de una narración se tratase, los tres grandes capítulos parecen obedecer a la composición clásica de planteamiento, nudo y desenlace, aunque la tensión argumental no se mantiene. Así, a un planteamiento sumamente incitante sigue un nudo que, aunque empieza flojo, después remonta para sugerir el clímax; pero la gradación a partir de este punto es ya descendente, y podría decirse que el desenlace ‘no está

bien resuelto’.

De tal manera que la primera parte del libro, dedicada a los aspectos internos y a las relaciones interafricanas, recoge cuatro sólidas y sugerentes aportaciones. En “El Estado multinacional y la nueva gobernabilidad: el desafío del renacimiento africano en el siglo XXI”, Mwayila Tshiyembe aboga por la recuperación del “adecuado genio creador” africano que permita al continente elaborar un modelo de estado “multinacional y de democracia de proximidad que sea inteligible y capaz de liberar lo político, lo económico, lo social y lo cultural de la servidumbre de la incompetencia y de la irresponsabilidad”. Por su parte, Albert Kasanda reflexiona sobre “Democracia, gobernabilidad y construcción de un Estado de derecho en África Subsahariana” en un conciso, pero lúcido, repaso que nos presenta al Estado moderno africano como “una institución dividida entre las expectativas populares y las órdenes de las instituciones financieras”.

Boniface Abu-Bakar y Mbuyi Kabunda analizan las experiencias de integración regional en África, el primero resaltando los aspectos más destacables, el segundo a través de un estudio pormenorizado de los diversos mecanismos de que se ha dotado el continente para ese fin.

Además, el artículo de Kabunda, “Integración regional en África, perspectivas para el siglo XXI”, incluye un anexo que lista las principales organizaciones y los Estados que a ellas pertenecen. Ninguno de los autores escatima críticas, pero ambos coinciden en la necesidad de la integración regional, aunque el primero se inspira en el modelo europeo mientras el segundo aboga por

una integración cuyos cimientos sean la participación popular.

La segunda parte se centra en la crisis de África y sus conflictos. En ella, José Antonio Hernández presenta una somera descripción sobre el papel de la Iglesia (católica) en África, en tanto que Emilio de Miguel Calabia esboza de manera sucinta lo que denomina “crisis de adaptación” con la que designa la actual situación del continente.

En claro contraste, Kabunda expone en “La crisis africana: diagnóstico y lecturas” los síntomas que le llevan a hablar por un lado de la crisis africana como crisis del estado o del *serkali* (grupo de malvados que guardan secretos); y, por otro, como crisis del desarrollo. Seguidamente describe dos lecturas de dicha crisis, una interna —desde los pueblos de África, por un lado, y los gobiernos, por otro— y otra externa —desde fuera del continente, especialmente desde las instituciones financieras. Termina explicando cinco respuestas que estas lecturas generan, y que van desde la que exigiría drásticas transformaciones en los valores socioculturales africanos para adaptarse al mundo moderno hasta la que aboga por la recolonización de África para librarla de sus males, pasando por la que insta a la recuperación de lo africano como forma de incorporarse a la modernidad a partir de los valores propios. Edmundo Sepa Bonaka analiza los conflictos en el subcontinente, y lejos de los manidos argumentos, hace primero una distinción entre los conflictos “endógenos” y los conflictos “inducidos”, para detenerse después en las causas y los costes que suponen. Para superarlos, el

autor insiste en la importancia que tiene la voluntad de las partes para llegar a una resolución, y la inclusión de todas ellas en la búsqueda conjunta de soluciones. Entre sus propuestas Sepa Bonaka hace hincapié en “la necesidad de diferenciar claramente el compromiso de firma de un protocolo de reconciliación entre partes en conflicto y su aplicación” a la luz, por ejemplo, del comportamiento de Jonas Savimbi; así como en la “necesidad de diferenciar entre procesos electorales y democracia”, pues los primeros son tan sólo parte de la democracia.

El tercer capítulo contrasta notablemente con los anteriores. Si bien se inicia con dos ensayos de Gerardo González Calvo y Rafael Morales sobre la imagen de África que transmiten los medios de comunicación, ambos son descriptivos y, a juicio de quien suscribe, tristemente breves, porque a la postre la imagen de África determina la atención que se le presta al continente y el interés que por él se tiene. Los artículos siguientes de José Vicente Montes Gan, sobre las relaciones económicas entre España y África Subsahariana; de Gabriel Busquets, sobre la presidencia española de la Unión Europea en relación con el subcontinente; de Francesc Granell, sobre las relaciones entre la Unión Europea y África; y de Luis Padilla, sobre las relaciones económicas entre Canarias y África, resultan interesantes por los datos e información que aportan. El enfoque de estas descripciones es esencialmente económico, y en ellas no se profundiza en la paradoja que implica que en un continente rico en recursos naturales, sobre todo minerales y energéticos, que

además recibe ayuda exterior, la pobreza sea la característica de la mayor parte de su población. En este sentido, tal vez fuera precisa una nueva perspectiva que revele como síntomas adicionales a la pobreza lo que se presenta como causas de la misma.

En definitiva, los dos primeros capítulos ofrecen soberbias luces de reflexión sobre sombras enquistadas de planteamientos repetidos hasta la saciedad, en tanto que el tercero agrupa retratos de relaciones. La estructura de la obra revela claramente dos perspectivas: la de quienes reflexionan sobre las alternativas para el futuro de África, y la de quienes desde la perspectiva económica desean una mayor presencia en el continente. África Subsahariana en el umbral del siglo XXI es la compilación de las ponencias expuestas durante un encuentro homónimo, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, cuyos objetivos eran, como indica José María Otero de León, “tratar la situación en esa área, la posibilidad de incrementar nuestra presencia y comercio en la misma, con especial referencia al papel de Canarias, y dar a conocer el Plan de Acción de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), durante 2001-2002, en África Subsahariana”.

Tal vez porque las ponencias siempre se suelen preparar con antelación, en los trabajos del tercer capítulo se echan de menos las reflexiones ofrecidas en los dos primeros.

Lucía Alonso Ollacarizqueta
Investigadora de la Fundación
Seminario de Investigación para
la Paz

THE EMOTION AND THE TRUTH. STUDIES IN MASS COMMUNICATION AND CONFLICT

Mariano Aguirre, Francisco Ferrándiz (Eds.)

Network on Humanitarian Development Studies (HumanitarianNet)

Universidad de Deusto, Bilbao, 2002, 160 páginas.

MEDIOS PERIODÍSTICOS, COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA. ¿RELACIONES IMPOSIBLES?

Eloísa Nos Aldás (Ed.)

Icaria, Barcelona, 2002, 231 páginas.

Desde la primera Guerra del Golfo (1991) el rol de los medios de comunicación de masas en las situaciones de guerra ha adquirido una centralidad creciente. Tanto que, actualmente, la dimensión mediática y simbólica de un conflicto armado pesa casi tanto como la geoestratégica o económica. Como afirman John Arquilla y David Ronfeldt: "Ya no es aquel que tiene la bomba más grande quien ganará en los conflictos futuros, sino quien cuente la mejor historia". También a lo largo de los años noventa las "emergencias humanitarias" han ido cobrando un especial protagonismo en los medios periodísticos. De guerras,

medios de comunicación y acción humanitaria tratan estas dos obras, que recogen ponencias al respecto de dos encuentros. *The Emotion and the Truth* está compuesto de 12 textos del homónimo seminario que tuvo lugar en Amsterdam en abril de 2001. *Medios periodísticos, cooperación y acción humanitaria* lo componen 16 exposiciones que, bajo el mismo título, dieron contenido a un Congreso Internacional en Castellón en marzo de 2001.

Si se plantea el triángulo: Combatientes o militares - Medios de comunicación - Acción humanitaria, se observa entre los tres ángulos una intensa interrelación en todos los sentidos. Los combatientes han incluido el factor mediático en su estrategia bélica: desde la escenificación de una "guerra limpia" o "sin muertos", hasta el *War-Game* o la estética de videojuegos, pasando por el auge de los atentados como forma de propaganda violenta. La estrategia mediática militar ha llegado a asumir, por otro lado, los discursos y estéticas humanitarias para legitimar sus acciones, ya fuera en Somalia, en Ruanda o lanzando fardos de víveres entre las bombas en Kosovo o en Afganistán.

Los medios, por su parte, encuentran en las guerras un filón de noticias de gran espectacularidad y regularidad, y en las ONG, como en los militares, fuentes de información abundante, experta y a bajo coste. Las ONG también dependen fuertemente de los medios tanto para denunciar, sensibilizar y presionar como para obtener buena parte de la financiación de sus campañas.

Las interacciones, negociaciones, intercambios, imposiciones y

enfrentamientos que se producen entre los tres polos, con todas sus contradicciones, son el punto de partida de análisis y reflexión de la mayor parte de estos textos.

El primer libro gravita principalmente en torno a los ángulos de combatientes y medios, y a la representación mediática de las guerras, con sus límites y derivas entre "la emoción y la verdad", como sugiere el título de las jornadas. Destacan, entre otros, el sistemático y práctico análisis del uso de las "Fuentes de información" planteado por Magnus Öberg y Margareta Sollenberg, así como las reflexiones de Stephen Ryan en torno al concepto de "víctima" y su representación mediática. La compilación aporta además información interesante sobre algunos conflictos "silenciosos", o mediáticamente "olvidados", como Angola, Colombia, el Líbano o Irlanda, así como informaciones y reflexiones novedosas sobre los conflictos "portada" más famosos (Ruanda, Yugoslavia, 11-S, Afganistán). El segundo libro, que se centra más en los ángulos de medios periodísticos y cooperación y acción humanitaria, tiene un sugerente subtítulo que orienta el debate: "¿Relaciones imposibles?" Los textos quedan ordenados en respuesta a las siguientes cuestiones: "Periodismo y cooperación para el desarrollo", "Periodismo, Estado y acción humanitaria", "Periodismo y globalización de la economía y la comunicación", "Acción humanitaria y cooperación al desarrollo en los medios de comunicación", "Información: ¿espectáculo o función social?" y "Periodismo y derechos humanos: ¿compromiso o neutralidad?"

Una cuestión que asoma a lo largo de los textos es la siempre complicada y ambigua relación medios/ONG, proponiendo, con mayor o menor fortuna, orientaciones y soluciones al respecto. Las limitaciones inevitables de espacio que impone una ponencia dificulta a veces una mayor profundización en ciertos aspectos y temas.

Se echan en falta también más testimonios o presentaciones de experiencias prácticas de "otras formas" de informarse o informar. Por otro lado, la mayor parte de las intervenciones corresponden a profesionales de la cooperación y a académicos, y las aportaciones y perspectivas de los periodistas escasean; las de militares o responsables de comunicación de ejércitos, simplemente, no existen.

A pesar de ello, la aparición casi simultánea de estas dos obras apunta hacia un creciente, y ya imprescindible, interés del sector humanitario por los medios y su papel en las guerras. Interés que ya se empieza a traducir en análisis, investigaciones e iniciativas cada vez más numerosos y pertinentes.

Eric Jaláin

Colaborador del Centro de Investigación para la Paz (CIP)

Bibliografía

Responsabilidad Social Corporativa	177
---	------------

SUSANA FERNÁNDEZ HERRERO

Responsabilidad Social Corporativa¹

Se entiende por Responsabilidad Social Corporativa la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales (inversión en capital humano, mejora de las condiciones de sus trabajadores, implantación de políticas no discriminatorias, promoción de la salud y la seguridad); y del respeto al medio ambiente (disminución de emisiones contaminantes, eliminación de residuos, reducción del gasto energético, etc.). Dentro de las prácticas de gestión responsable cabría destacar entre otras: la transparencia, la inversión socialmente responsable, el marketing social corporativo, el ahorro ético, el balance social, y los fondos éticos y solidarios.

LIBROS:

- Amat, Oriol y John Blake, *Contabilidad creativa*, Gestión 2000, Barcelona 2002.
- Ballesteros García, Carlos, *Marketing con causa, Marketing sin efecto: el Marketing y la Educación para el Desarrollo*, Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2001.
- Blair, Alasdair y David Hitchcock, *Environment and Business*, Routledge, Londres, 2001.
- Christie, Ian y Diane Warburton, *From here to Sustainability, The Real World Coalition*, Earthscan, Londres, 2001.
- Cortina, Adela, *Por una ética del consumo: la ciudadanía del consumidor en un mundo global*, Taurus, Madrid, 2002.
- Economistas sin Fronteras, *La responsabilidad Social Corporativa: una aplicación a España*, UNED, 2002.
- Elkington, John, *Cannibals with Forks*, Capstone, Mankato (EEUU), 1999.
- Fernández López, Javier, *Gestionar la confianza: un modelo integrador de las políticas de marketing y gestión para alcanzar la excelencia*, Pearson Educación, Madrid, 2002.

¹ La autora agradece a la Fundación Ecología y Desarrollo la aportación de material documental y referencias para la elaboración de esta sección.

Susana Fernández Herrero es licenciada en Historia y responsable del Centro de Documentación del Centro de Investigación para la Paz (CIP) de la Fundación Hogar del Empleado (FUHEM)

- Fontanella, Lygia, *Sostenibilidad de las Organizaciones sin Fines de Lucro. La Responsabilidad Social de la Empresa*, Synergos Institute, Nueva York, 2000.
- Lozano, Josep María, *Ética y empresa*, Trotta, Madrid, 1999.
- McIntosh, Malcom, *Corporate Citizenship: Successful Strategies to Responsibility Companies*, Prentice Hall, New Jersey, 1998.
- Montraveta, Isabel, Eva Sánchez y Ricard Valls, *Directorio 2000 del patrocinio y mecenazgo en España: la responsabilidad social de la empresa*, Projecció Mecenazgo Social, Barcelona, 2000.
- Muirhead, Sophia A. y otros, *Corporate Citizenship in the New Century: Accountability, Transparency and Global Stakeholder Engagement*, The Conference Board, Nueva York, 2002.
- Mulder Duclós, Enrique de y José María Ortiz Ibarz, *Ética para seguir creciendo: cuando la globalización se ha instalado en la empresa*, Pearson Educación, Madrid, 2001.
- Nieto Pereira, Luis (Coord.), *Ética del Marketing*, Unión Editorial, Madrid, 1999.
- Pearce, David y Edward B. Barbier, *Blueprint for a Sustainable Economy*, Earthscan, Londres, 2000.
- Roa, Francisco J. (Coord.), *Ética del Marketing*, Unión Editorial, Madrid, 1999.
- Sandra, Piergiorgio M., *Dinero ético: la economía alternativa y solidaria*, Intermón Oxfam, Plaza y Janés, Barcelona, 2002.
- Schwartz, Meter y Blair Gibb, *When Good Companies Do Bad Things: Responsibility and risk in an age of globalisation*, John Wiley & Sons Inc, Indianapolis, 1999.
- Sichard, Gonzalo (Coord.), *La empresa socialmente responsable: ética y empresa*, Cideal, 2003.
- Starkey, Richard y Richard Welford (Eds.), *Business and Sustainable Development*, Earthscan, Londres, 2001.
- Viñuales, Víctor y Ramón Pueyo (Coords.), *Inversión socialmente responsable*, Fundación Ecología y Desarrollo, Zaragoza, 2002.

ARTÍCULOS:

- Antonio Argandeña y Domingo Sarsa, "Los fondos éticos y la promoción de la ética inversora", *Papeles de Ética, Economía y Dirección*, 2000, Nº 5.
- Laura Gismera Tierno y M^a Esther Vaquero Lafuente, "La Responsabilidad Social de la Empresa en España: la acción social", *Papeles de Ética, Economía y Dirección*, 2000, Nº 5.
- Didier Ruilhe, "Mafia y crimen organizado transnacional", *Papeles de Cuestiones Internacionales*, Nº 81, primavera 2003, pp 81-90.
- Doménech Melé, "Políticas de ética empresarial: posibilidades y limitaciones", *Papeles de Ética, Economía y Dirección*, 2000, Nº 5.
- Sergio Sanmartín, "Instrumentos financieros éticos y socialmente responsables, metodología de evaluación del comportamiento de las empresas españolas", *Papeles de Ética, Economía y Dirección*, 2001, Nº 6.

- Marta de la Cuesta y Nuria del Río “Dinero más ético y solidario para una sociedad más humana y responsable”, *Noticias de Economía Pública, Social y Cooperativa*, julio de 2001, N° 33, pp. 46-52.
- “Good Business: Profits & Social Responsibility”, *Understanding Global Issues*, diciembre de 2001, N° 103.
- Víctor G. Villarroel, “Humanizar el Mercado: la acción social de las empresas en el mundo de hoy”, *Entorno Social*, noviembre-diciembre de 2001, N° 42, pp. 19-21.
- Adela Cortina, “El Global Compact”, *El País*, 25 de mayo de 2002.
- Nuria del Viso, “Reputación corporativa, elemento clave para competir en mercados inciertos”, *Nueva Empresa*, junio de 2002, Año XXIV, N° 471, pp. 7-16.
- Javier Fernández López, “Gestionar la confianza: un nuevo modelo para conseguir algo más que la lealtad de clientes, empleados e inversores”, *Management Digest*, septiembre-octubre de 2002, N° 7, pp. 27-31.
- Susana de Pablos, “Valores para crear valor”, *Management Digest*, septiembre-octubre de 2002, N° 7, pp. 19-25.
- Céline Ovadia, “Las amistades peligrosas: la ética al servicio de las empresas y del beneficio”, *Le Monde Diplomatique*, noviembre de 2002, Año VI, N° 85, pp. 6-7
- Hugo Williamson, “Making a commitment to corporate citizenship”, *Financial Times*, 12 de febrero de 2003.
- P.M.F., “Escándalos contables: ¿libros de contabilidad o libros de cuentos?”, *Escritura Pública*, enero-febrero de 2003, N° 19, pp. 30-32.
- Saul Landau, “Las maquilas de Juárez: un nueva revolución industrial”, *Papeles de Cuestiones Internacionales*, N° 81, primavera 2003, pp. 143-150.

DOCUMENTOS:

- Aaronson, Susan Ariel y James Reeves, *The European Response to Public Demands for Global Corporate Responsibility*, National Policy Association, 5 de febrero de 2002, http://www.bitc.org.uk/docs/NPA_Global_CSR_survey.pdf
- Bar Cendón, Antonio, *El Libro Blanco la gobernanza europea y la reforma de la Unión*, Madrid 2002, http://europa.eu.int/comm/governance/contrib_cendon_es.pdf
- Coles, David y Duncan Green, *Do UK Pensions Funds Invest Responsibility? A Survey of Current Practice on Socially Responsible Investment*, JustPension, julio de 2002, <http://www.justpensions.org/ukpf2002-justpens.pdf>
- Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas, 18.7.2001, COM(2001) 366 final, *Libro Verde: fomentar un marco europeo para la responsabilidad de las empresas*, http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/femm/20020521/r%C3%A9f6_es.pdf
- Comisión de las Comunidades Europeas, Bruselas 2.7.2002 COM(2002) 347 final, *Comunicado de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible*, http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2002/com2002_0347es01.pdf
- Comisión Especial para el estudio de un Código Ético de los Consejos de Administración de las Sociedades (Comisión Olivencia), *El gobierno de las sociedades cotizadas*, 26 de febrero de 1998, <http://www.cnmv.es/delfos/tendencias/govsocot.pdf>

- *Dow Jones Sustainable Indexes*, <http://www.sustainability-index.com/faq.html>
- Forum for the Future, *Government's Business: Enabling corporate sustainability*, noviembre de 2002, <http://www.theforumelab.org.uk/uploadstore/governmentsbusiness.pdf>
- García Marzá, Domingo, "Del balance social al balance ético. Claves para una auditoría ética", *Red Europea de Investigación y desarrollo de la Responsabilidad Social de la Empresa*, enero de 2002, <http://www.redcer.org/textos%20pdf/balanceetico.pdf>
- Global Reporting Initiative, *Sustainability Reporting Guidelines*, 2002 http://www.globalreporting.org/GRIGuidelines/2002/gri_2002_guidelines.pdf
- Goodell, Edward (ed.), *Standards of Corporate Social Responsibility*, Social Venture Network, 1999, http://www.svn.org/initiatives/PDF_standards.pdf
- *Human Rights Principles for Companies*, Amnistía Internacional, enero de 1998, [http://web.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/index/ACT700011998ENGLISH/\\$File/ACT7000198.pdf](http://web.amnesty.org/aidoc/aidoc_pdf.nsf/index/ACT700011998ENGLISH/$File/ACT7000198.pdf)
- *Informe de la Comisión Especial para el Fomento de la Transparencia y Seguridad en los Mercados y en las Sociedades Cotizadas* (Informe Aldama), 8 de enero de 2003, <http://www.cnmv.es/publicaciones/informefinal.pdf>
- Jones, Audra, *Hacia una mejor comprensión de la Responsabilidad Social Corporativa*, Inter-American Foundation, <http://www.iaf.gov/grants/downloads/csrspn.pdf.pdf>
- Organización Internacional del Trabajo, *Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo*, Ginebra, junio de 1998, <http://www.ilo.org/public/spanish/standards/decl/declaration/text/index.htm>
- Organización Internacional del Trabajo, *Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social*, noviembre de 1997, <http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/sources/mne.htm>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), *The OECD Guidelines for Multinational Enterprises*, 2000, <http://www.oecd.org/pdf/M000015000/M00015419.pdf>
- Perdiguero, Tomás G. "Hacia una nueva visión de la Responsabilidad Social de la Empresa", *Red Europea de Investigación y Desarrollo de la Responsabilidad Social de la Empresa*, marzo de 2002, <http://www.redcer.org/textos%20pdf/nuevavision.pdf>
- SIRI Group, *Green, Social and Ethical Funds in Europe 2001*, enero de 2002, <http://www.sirigroup.com/pdf/SRI-Funds-Report2001.pdf>
- Swift, Tracy y Simon Zadek, *Corporate Responsibility and the Competitive Advantage of Nations*, The Copenhagen Centre, Accountability, julio de 2002, http://www.accountability.org.uk/uploadstore/cms/docs/TCC_Brochure.pdf

DIRECCIONES DE INTERNET:

- Acción Empresarial - <http://www.accionempresarial.cl>
- Accountability. Institute of Social and Ethical Accountability - <http://www.accountability.org.uk/news>

- Alliance for Global Sustainability (AGS) - <http://globalsustainability.org>
- The Aspen Institute - <http://aspeninstitute.org/isib>
- Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - http://www.iadb.org/exr/ESPAÑOL/index_espanol.htm
- Business Action for Sustainable Development - <http://www.basd-action.net>
- Business Ethics - <http://www.business-ethics.com/web-ethi.htm>
- Business for Social Responsibility (BSR) - <http://www.bsr.org/BSRServices/Conferences.cfm>
- Business in the Community (BITC) - http://www.bitc.org.uk/about_bitc/index.html
- Centre for Innovation in Corporate Responsibility (CICR) - <http://www.cicr.net>
- Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) - <http://www.cemefi.org/>
- Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) - <http://www.ceres.org>
- The Conference Board - <http://www.conference-board.org>
- Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES) - <http://www.cecodes.org.co>
- The Copenhagen Centre (TCC) - <http://www.copenhagencentre.org/main>
- Corporate Responsibility (CORE) - <http://www.corporate-responsibility.org>
- Corporate Social Responsibility (CSR):
<http://www.csrcampaign.org>
<http://www.csreurope.org>
- Dow Jones Sustainability (DJSI) - <http://www.sustainability-index.com>
- Eco-Label - <http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel>
- Ethical Corporation Magazine - <http://www.ethicalcorp.com>
- Ethical Investment Research Services (EIRIS) - <http://www.eiris.org>
- Foro para la Evaluación de la Gestión Ética (Forética) - <http://www.foretica.es>
- Foro Empresa y Desarrollo Sostenible - <http://www.foroempresasostenible.org>
- Fundación Entorno - <http://www.fundacion-entorno.org>
- Fundación para la Ética de los Negocios y las Organizaciones (ETNOR) - <http://www.etnor.org>
- Fundación Esquel - <http://www.responsabilidadsocial-esquel.org.ec>
- Fundación Ecología y Desarrollo - <http://www.ecodes.org>
- Fundación Empresa y Sociedad - <http://www.empresaysociedad.org/index.cfm>
- Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMÁS) <http://www.fundemas.org/paginas/index.htm>
- The Global Compact - <http://www.unglobalcompact.org/Portal>
- Global Reporting Initiative (GRI) - <http://www.globalreporting.org>
- Guíame: Información para la Empresa - <http://www.guiame.net/respons.html>
- International Institute for Environment and Development. Corporate Responsibility for Environment and Development (CRED) <http://www.iiied.org/cred/index.html>
- Institute of Business Ethics (IBE) - <http://www.ibe.org.uk/code.htm>
- Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR) - <http://www.iccr.org>
- International Association of Business and Society (IABS) - <http://www.iabs.net>
- Perú 2021 - <http://www.peru2021.org>
- Red Europea de Investigación y Desarrollo de la Responsabilidad Social de la Empresa (Red CER) - <http://www.redcer.org>

- Research Methods Unit (MORI) - <http://www.mori.com/rmu/index.shtml>
- Responsabilidad Social Empresarial en las Américas - <http://www.empresa.org>
- Social Accountability Internacional (SAI) - <http://www.sa-intl.org>
- Social Accountability 8000 (SA8000) - <http://www.cepaa.org/SA8000/SA8000.htm>
- Social Investment Forum (SIF) - <http://www.socialinvest.org>
- SRI World Group - <http://www.sriworld.com>
- SustainAbility - <http://www.sustainability.com>
- Sustainable Investment Research International (SiRi) Group - <http://www.siri-group.org>
- Transparency International (TI) - <http://www.transparency.org>
- UN Development Program (UNDP) - <http://www.undp.org/governance/index.htm>
- UN Global Compact - <http://www.unglobalcompact.org/Portal/>
- TRUST - <http://www.proyectotrust.net/trust2001/trust/conoce.html>
- World Business Council for Sustainability Development (WBCSD) - <http://www.wbcsd.org>
- World Resources Institute - <http://www.worldcsr.com/pages>

REVISTA INTERNACIONAL

DE FILOSOFÍA POLÍTICA



UNED - Madrid



UAM - México

- N.º 1 PENSAR LA POLÍTICA, HOY N.º 2 IDENTIDAD CULTURAL / PLURALIDAD POLÍTICA
N.º 3 NACIONALISMO Y POLÍTICA N.º 4 DESAFÍOS PARA LA DEMOCRACIA
N.º 5 EL FUTURO DE EUROPA N.º 6 ECONOMÍA Y POLÍTICA: RESTRICCIONES
ESTRUCTURALES N.º 7 DIMENSIONES POLÍTICAS DEL MULTICULTURALISMO
N.º 8 LA POLÍTICA Y EL OTRO N.º 9 HACIA UNA DEFINICIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
INTERNACIONAL N.º 10 REPENSAR EL UNIVERSALISMO N.º 11 ¿QUÉ CIUDADANÍA?
(EL RETO DE LAS MINORÍAS) N.º 12 ECONOMÍA Y DEMOCRACIA N.º 13 LA ECOLOGÍA
Y LOS LÍMITES DEL LIBERALISMO N.º 14 POLÍTICA Y MEMORIA N.º 15 IDEALES
POLÍTICOS DE LA HUMANIDAD N.º 16 LOS AVATARES DEL LIBERALISMO EN
AMÉRICA LATINA N.º 17 REFUNDACIÓN DE LA DEMOCRACIA
N.º 18 EL LENGUAJE DE LOS DERECHOS N.º 19 LA RENTA BÁSICA

ISSN: 1132-9432 Formato: 16,5 x 23 cm / Periodicidad: semestral

Suscripción individual 2002: España (con IVA) 18,03 euros

(n.ºs 19 y 20)

Extranjero: *Vía ordinaria*..... 22,68 euros

Avión: Europa..... 29,54 euros

América, África, Asia

y Oceanía..... 41,64 euros

Para otras ofertas y modos de suscripción, dirigirse a la dirección abajo indicada



ORDEN DE SUSCRIPCIÓN A REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA POLÍTICA

Nombre.....

Dirección.....

Población.....

Tel.....

PRECIO POR EJEMPLAR

	sin IVA	con IVA
N.ºs 1 al 12	10,38	10,80
N.ºs 13 al 18	11,54	12,00

Deseo suscribirme a la REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA POLÍTICA para 2002 (n.ºs 19 y 20).

Y solicito los números anteriores, que indico con una X:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18

cuyo importe abonaré:

Contra reembolso Visa Diners

4B Mastercard

N.º Tarjeta:.....

Validez: del..... al.....

Fecha: a..... de..... de.....

Remitir a:

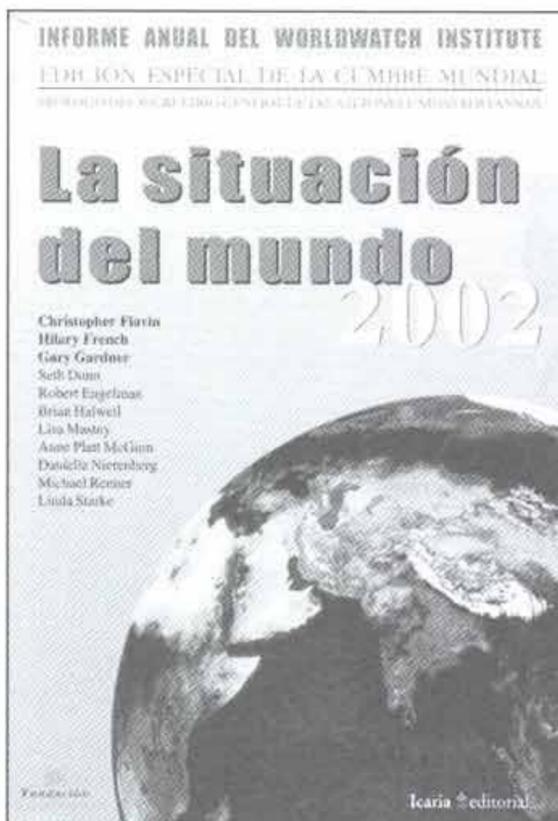
Anthropos Editorial. Nariño, S.L.

Apartado 224. 08191 Rubí (Barcelona)

Tel. y fax: 93 697 22 96

Firma obligatoria

La situación del mundo 2002



La situación del mundo 2002 analiza la relación del ser humano con su entorno, el cambio climático, las desigualdades entre ricos y pobres, la agricultura, la proliferación de sustancias químicas tóxicas, las consecuencias del turismo internacional, la relación entre recursos y conflictos, las políticas de población y la necesidad de un gobierno global para el medio ambiente

Editan: Fundación Hogar del Empleado y Editorial Icaria.
Barcelona 2002. 432 páginas.

¿Lo sabías?

- En los países pobres, el agua suministrada por camiones cisterna cuesta de 10 a 100 veces más que el agua, de igual o mayor calidad, que sale de los grifos de un país industrializado.
- Más de mil millones de personas carecen de agua potable fiable en el mundo.
- Las concentraciones de CO₂ actuales son las más altas de los últimos 420.000 años.
- De los 1.200 millones de personas que ganan 1 dólar o menos al día, el 75% trabaja y vive en zonas rurales.
- En el 2000, casi el 90% de los medicamentos comercializados globalmente se vendió en las naciones industrializadas.

BOLETIN DE PEDIDO

- Deseo recibir *La situación del mundo 2002*, P.V.P. 21€. 432 páginas
- Deseo ser socio-suscriptor de *La situación del mundo*.
- | | |
|--|---------|
| - España | 16,20 € |
| - Europa (incluyendo gastos de envío): | |
| <input type="checkbox"/> por superficie (16,20 + 3,85 €) | 20,05 € |
| <input type="checkbox"/> por avión (16,20 + 6,10 €) | 22,30 € |
| - Resto del mundo (incluyendo gastos de envío): | |
| <input type="checkbox"/> por superficie (16,20 + 3,85 €) | 20,05 € |
| <input type="checkbox"/> por avión (16,20 + 12,15 €) | 28,35 € |

FORMA DE PAGO

- Talón bancario a nombre de Fundación Hogar del Empleado
- Giro postal a nombre de Fundación Hogar del Empleado
- Contra reembolso
- Transferencia bancaria a:
Banco Popular. C/ O' Donnell, 22. 28009 Madrid.
Nº Cuenta: 0075 0251 11 0600005047

DATOS PERSONALES

Nombre:.....

Apellidos:.....

Dirección:.....

Localidad:.....

Provincia:.....

CP: Teléfono:.....

Los datos que usted nos facilita pasarán a los archivos de la Fundación Hogar del Empleado y su grupo de empresas, y serán tratados como exige la ley de Protección de Datos en vigor. Usted tiene derecho a acceder a su información, así como cancelarla o rectificarla.

Igualmente, puede solicitar su pedido e información sobre nuestras publicaciones a:



**Fundación
HOGAR DEL EMPLEADO**

Duque de Sesto, 40 - 28009 MADRID
Tel.: 91 431 04 06 - Fax: 91 576 32 71 - Web: cip.fuhem.es - E-mail: cip@fuhem.es

Anuario del Centro de investigación para la paz 2002

DE Nueva York A Kabul

ANUARIO CIP 2002

Hacia una nueva configuración mundial
La política exterior estadounidense
El impacto del 11 de
septiembre en los países árabes
El papel de Europa
Religión y conflictos armados

Icaria editorial

cip
Fundación
para la Paz

Fundación
HOGAR DEL EMPLEADO

Editan: Fundación Hogar del
Empleado y Editorial Icaria.
Barcelona 2002. 215 páginas.

**Hacia una nueva configuración mundial •
El Derecho Internacional como alternativa a la
fuerza armada • Antes y después: política exterior
estadounidense en 2001 • Europa, ¿aliada o
ayudante de campo? • El rostro religioso de los
conflictos armados • Extranjeros bajo sospecha**

A partir de los atentados en Nueva York y Washington en sep-
tiembre de 2001, el uso de la fuerza ha relegado la justicia y
la cooperación a un segundo plano.

Los avances logrados en ciertos problemas transnacionales
relacionados con el medio ambiente, los derechos humanos, el
comercio internacional y la democratización han sido despla-
zados. El sistema internacional vive una tensión entre las polí-
ticas cooperativas y la guerra.

BOLETIN DE PEDIDO

- Deseo recibir **Anuario CIP 2002**
P.V.P. 12€. 215 páginas
- Deseo ser socio-suscriptor de **Anuario CIP 2002.**
- | | |
|---|---------|
| - España | 10 € |
| - Europa (incluyendo gastos de envío): | |
| <input type="checkbox"/> por superficie (10 + 2,30 €) | 12,30 € |
| <input type="checkbox"/> por avión (10 + 3,70 €) | 13,70 € |
| - Resto del mundo (incluyendo gastos de envío): | |
| <input type="checkbox"/> por superficie (10 + 2,30 €) | 12,30 € |
| <input type="checkbox"/> por avión (10 + 6,20 €) | 16,20 € |

FORMA DE PAGO

- Talón bancario a nombre de Fundación Hogar del Empleado
- Giro postal a nombre de Fundación Hogar del Empleado
- Contra reembolso
- Transferencia bancaria a:
Banco Popular. C/ O'Donnell, 22. 28009 Madrid.
Nº Cuenta: 0075 0251 11 0600005047

DATOS PERSONALES

Nombre:.....

Apellidos:.....

Dirección:.....

Localidad:.....

Provincia:.....

CP: Teléfono:.....

Los datos que usted nos facilita pasarán a los archivos de la Fundación Hogar del Empleado y su grupo de empresas, y serán tratados como exige la ley de Protección de Datos en vigor. Usted tiene derecho a acceder a su información, así como cancelarla o rectificarla.

Igualmente, puede solicitar su pedido
e información sobre nuestras publicaciones a:


Fundación
HOGAR DEL EMPLEADO


Centro de
Investigación
para la Paz

Duque de Sesto, 40 - 28009 MADRID
Tel.: 91 431 04 06 - Fax: 91 576 32 71 - Web: cip.fuhem.es - E-mail: cip@fuhem.es

Tempo exterior

Manuel Fraga Iribarne

Xosé Manuel Beiras Torrado

Emilio Pérez Touriño

M^a Teresa Ponte Iglesias

João Casqueira Cardoso

Sylvia Gómez Saborido

Luis Manuel García Mañá

Joan Vallvé i Ribera

Joaquim Llimona i Balcells

José María Muñoa Ganuza

Klaus Dirscherl

Alexis B. Romanov

Roberto Montoya

Portugal na acción exterior de Galicia

A normalización das relacións entre Galiza e Portugal

Eurorexión Galicia-Norte de Portugal, unha oportunidade e un reto

A Comunidade de Traballo como instrumento dinamizador da integración

Reflexións sobre a proxección exterior da eurorexión Galicia-Norte de Portugal

Unha Eurorexión de seu: a proxección exterior de Galicia-Norte de Portugal

Couto Mixto, unha república esquecida

A cooperación transfronteiriza, unha base da construción europea

A cooperación transfronteiriza na zona pirenaica: longo camiño cara a súa consolidación

A cooperación transfronteiriza en Euskadi

A paradiplomacia de Bavaria

Dez anos de independencia en Ucraína

Despois do 11 de Setembro: ¿A fin do unilateralismo americano?

nº 3

SEGUNDA ÉPOCA

INSTITUTO
GALEGO
DE ANÁLISE
E DOCUMENTACIÓN
INTERNACIONAL



IGADI

www.igadi.org

**Para suscripciones,
dirigirse a:**

IGADI

(Instituto Galego de Análise e
Documentación Internacional)

Avenida Joselín, 7. Portal 3-4ºB.

36300-Baiona (Pontevedra).

Galicia (España).

Tel/Fax: 986 35 72 38.

e-mail: info@igadi.org



Revista de análise e estudos internacionais



La actualidad del mundo en gallego

Revista Española de DESARROLLO Y COOPERACIÓN

El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid (IUDC-UCM) presenta la **Revista Española de Desarrollo y Cooperación** como un espacio abierto y plural a quienes desean contribuir desde el rigor y la calidad científica al enriquecimiento del debate y la elaboración de propuestas innovadoras sobre el desarrollo y la cooperación internacional

La Revista dedica sus páginas al estudio y análisis de:

- Políticas española y europea de cooperación y ayuda al desarrollo
- Nuevos enfoques de instituciones e instrumentos de cooperación y ayuda al desarrollo
- Estudios de casos y presentación de experiencias
- Relaciones de Europa con América Latina y el Magreb
- Cooperación descentralizada y ONGD
- Metodologías de formulación y evaluación
- Últimos números:
 - *Financiación de la cooperación para el desarrollo* (REDC 7)
 - *Relaciones de género y desarrollo* (REDC 6)
 - *Evaluación de la ayuda al desarrollo* (REDC 4)



BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Suscripción anual a la *Revista Española de Desarrollo y Cooperación* (2 números anuales)

Cuotas anuales

- | | | | |
|--|---------------|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> España (suscripción normal) | 3.000 pesetas | <input type="checkbox"/> Europa | 20 euros |
| <input type="checkbox"/> España (suscripción de apoyo) | 5.000 pesetas | <input type="checkbox"/> Resto del mundo | 25 dólares USA |

Datos personales

Nombre y apellidos _____

Dirección _____

Código postal _____ Ciudad _____

Provincia _____ País _____ E-mail _____

La modalidad elegida para abonar el importe de la suscripción será:

- Cheque adjunto a nombre de: Desarrollo y Cooperación
- Domiciliación bancaria

Nombre del Banco/Caja _____

Dirección de la Agencia _____

Código Postal _____ Ciudad _____ Provincia _____

Código entidad	Código sucursal	Dígito control	Número de cuenta
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

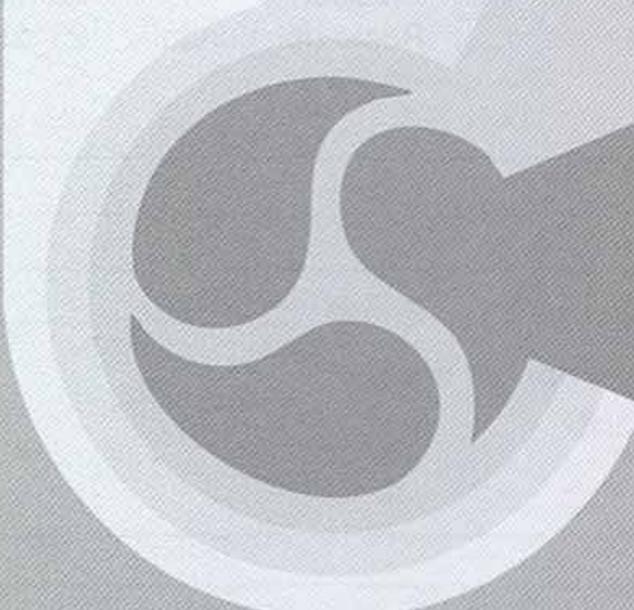
Fecha _____

Firma _____

Enviar a:

IUDC-UCM. Donoso Cortés, 65. 6ª planta. 28015 MADRID. ESPAÑA
Tel.: 91 394 64 09, fax: 91 394 64 14, iudcucm@eucmax.sim.ucm.es
<http://www.ucm.es/info/IUDC>

Las Organizaciones No Lucrativas
se comprometen con la sociedad, **Sector3** con las **ONL**



Información

Ofertas de empleo, cursos, libros, noticias, entrevistas y artículos.

Aula3

Diseñamos e implementamos proyectos de formación on-line y presenciales.

Web3

Comunicación electrónica, website, marketing on-line y desarrollo de aplicaciones a medida.

Responsabilidad social corporativa

Asesoramiento a empresas en sus proyectos con valor social.

www.sector3.net

tlf:91 562 94 50

GUERRA Y PAZ

EN EL SIGLO XXI

Manuel Castells y Narcís Serra, eds.

Guerra y paz en el siglo XXI

UNA PERSPECTIVA EUROPEA

TUSQUETS
EDITORES

Análisis del nuevo sistema internacional desde una perspectiva europea: la seguridad y sus recetas, el terrorismo y sus causas, la estabilidad y sus problemas, posibilidades y perspectivas de Europa en el turbulento contexto actual
Ponencias del seminario Guerra y Paz en el siglo XXI. Una perspectiva europea organizado por la Fundació CIDOB y el Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Manuel Castells (Profesor del Insituto Interdisciplinario de Internet de la Universitat Oberta de Catalunya) y Narcís Serra (Presidente de la Fundació CIDOB)
Contraste de opiniones entre académicos como Alain Touraine, Ulrich Beck, Mary Kaldor, expertos como Andrés Ortega, Carlos Alonso Zaldivar y políticos como Javier Solana o Erkki Tuomioja

TUSQUETS EDITORES, COL. KRITERIOS, 2003

ISBN: 84-8310-850-X

PP. 208

DE VENTA EN LIBRERÍAS

PRECIO: 14 EUROS

Revista CRÍTICA

NOVENTA AÑOS AL SERVICIO DE LA INFORMACIÓN

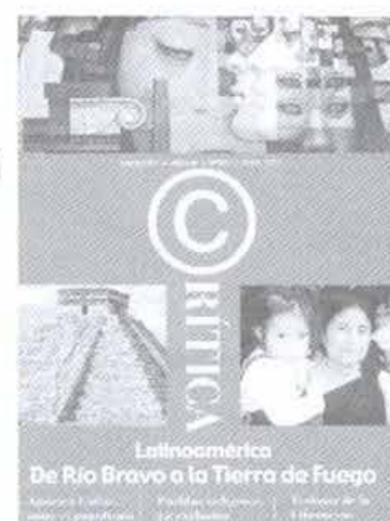
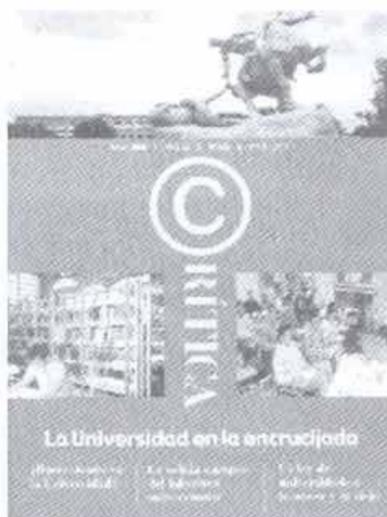
Cada mes un tema en profundidad

análisis,
opinión,
experiencias,
protagonistas

y, además

libros, cine,
teatro, T.V.,
arte, música.
ciencia...

CRÍTICA



¡Crítica cumple 90 años!

Últimos títulos publicados, 2002-2003

896	LA UNIVERSIDAD EN LA ENCRUCIJADA	Junio
897	EL VALOR DE LA SALUD	Julio-Agosto
898	HACIA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD	Sep-Octubre
899	LA ACTUALIDAD DE LA DIMENSIÓN ESTÉTICA	Noviembre
900	CRISTIANISMO	Diciembre
901	LATINOAMÉRICA. DE RÍO BRAVO A TIERRA DEL FUEGO	Enero

Suscripción (1 año
10 números):
24 € (4.000 pts).
Extranjero: 30€

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Enviar a: Critica, c/ Vizconde de Matamala 3. 28028 Madrid
Tel. 91 725 92 00. Fax. 91 725 92 09. e-mail: critica@revista-critica.com

Nombre y apellidos

Dirección

Tfno.

C.P. Ciudad

Provincia

Profesión

Modo de pago

- Transferencia Giro
 Cheque Domic. Bancaria

Remite y abona esta suscripción

Dirección

Población

C.P. Provincia

DOMICILIACIÓN BANCARIA

Titular cuenta

Nombre del Banco o Caja

Dirección del Banco

Nº C.P. Población del Banco

Mire su talonario o libreta y cumplimente los datos de su cuenta en su totalidad

Código cuenta cliente

Muy Srs. míos: ruego a Uds. se sirvan abonar, hasta nueva orden y con cargo a mi cuenta arriba indicada, los recibos que les presente Critica

Firma

Fecha de de 2003

PAPELES

DE CUESTIONES INTERNACIONALES

BOLETIN DE SUSCRIPCION

(envíe este cupón a la dirección indicada a pie de página)

Nombre:
Dirección:
Población: C.P. Provincia:
País: Teléfono:

SUSCRIPCION POR CUATRO NUMEROS

- España** (IVA incluido)..... 24 €
- Europa** (incluyendo gastos de envío)
- por superficie: (24 + 10,70) 34,70 €
- por avión: (24 + 24,40) 48,40 €
- Resto del mundo** (incluyendo gastos de envío)
- por superficie: (24 + 10,70) 34,70 €
- por avión: (24 + 48,60) 72,60 €

FORMA DE PAGO

- Contra reembolso
- Giro postal o Talón nominativo a Fundación Hogar del Empleado
- Domiciliación bancaria

CARTA AL BANCO

Sr. Director:
Banco/Caja Suc./Agencia
Dirección
Población C.P. Provincia

Le ruego que cargue a mi Cuenta Corriente/Libreta de Ahorros, y hasta nuevo aviso, los recibos que le sean presentados por la Fundación Hogar del Empleado en concepto de suscripción a la revista Papeles.

Titular D./Dña.
Cuenta/Libreta nº N.I.F.
FIRMA (Titular) Fecha:



Fundación
HOGAR DEL EMPLEADO

Duque de Sesto, 40 - 28009 Madrid - Tel.: 91 431 03 46 - Fax: 91 576 32 71
Web: cip.fuhem.es - E-mail: cip@fuhem.es

Centro de
investigación
para la Paz

INTRODUCCIÓN

TEORÍA

El desarrollo no sólo es crecimiento del PIB

Joseph Stiglitz

Prevención de conflictos en el marco euro-mediterráneo

Roberto Aliboni

ACTUALIDAD

Los peligros de un ataque nuclear

Edward M. Kennedy

El fin de una ilusión

José Luis Gómez del Prado

Brasil: las perspectivas de Lula

Kenneth Maxwell

Costa de Marfil: el fin de la excepción

César Docampo

Demasiado sofisticada para la guerra

Thalia Griffiths

Retos y oportunidades para la paz en Sri Lanka

Raquel Rico Bernabé

Argelia: inmovilismo político, dependencia económica y tensiones sociales

Laurence Thieux

Mafia y crimen organizado transnacional

Didier Ruilhe

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS

Honduras: violencia, pobreza y corrupción

Carolina María Rudas Gómez

IDENTIDADES

Justicia kichwa como práctica de identidad étnica

Fernando García

DERECHOS HUMANOS

La política estadounidense y el desafío del terrorismo

Human Rights Watch

TESTIMONIO

Crónica de una Palestina ocupada

Alejandro Pozo

Las maquilas de Juárez: una nueva revolución industrial

Saul Landau

RESEÑAS DE LIBROS

BIBLIOGRAFÍA



Duque de Sesto, 40 - 28009 Madrid

